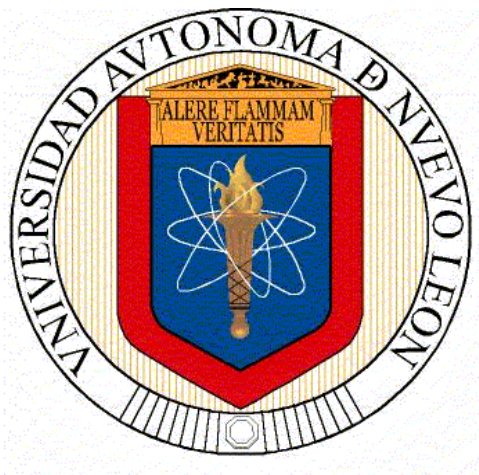


**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES**



TESIS DOCTORAL

**REPRESENTACIONES Y PRÁCTICAS SOCIALES SOBRE
CIUDADANÍA EN MONTERREY. ESTUDIO DE LOS VALORES
SUBYACENTES Y SU RELACIÓN CON LA DEMOCRACIA VERDE**

**PRESENTA
BEATRIZ LILIANA DE ITA RUBIO**

**PARA OBTENER EL GRADO DE DOCTOR EN CIENCIAS
SOCIALES CON ORIENTACIÓN EN DESARROLLO SUSTENTABLE**

JUNIO 2013

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES



DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES CON ORIENTACIÓN EN DESARROLLO
SUSTENTABLE.

TESIS DOCTORAL

REPRESENTACIONES Y PRÁCTICAS SOCIALES SOBRE CIUDADANÍA EN
MONTERREY. ESTUDIO DE LOS VALORES SUBYACENTES Y SU RELACIÓN CON LA
DEMOCRACIA VERDE

PRESENTA

MTRA. BEATRIZ LILIANA DE ITA RUBIO.

COMITÉ TUTORAL

DIRECTOR: DR. JOSÉ MARÍA INFANTE BONFIGLIO

CODIRECTOR: DR. RAFAEL ENRIQUE AGUILERA PORTALES

Tesis para obtener el grado de Doctor en Ciencias Sociales con Orientación en Desarrollo
Sustentable.

JUNIO 2013

Representaciones y prácticas sociales sobre ciudadanía en Monterrey. Estudio de los valores subyacentes y su relación con la democracia verde

ÍNDICE	PÁGINA
I Introducción	5
1.1 Planteamiento del problema	6
1.1.1 Tema de investigación	7
1.1.2 Objeto de estudio	7
1.1.3 Objetivo general	12
1.1.4 Objetivos específicos „,.....	12
1.1.5 Preguntas de investigación	13
1.1.6 Antecedentes conceptuales y empíricos.....	13
1.1.7 Justificación	25
1.1.8 Hipótesis	29
1.1.9 Esbozo metodológico	29
II. Ciudadanía y democracia. Aproximaciones a su conceptualización, a su historia y sus modelos.	33
2.1. Conceptos y fundamentos de la ciudadanía	33
2.1.1 ¿Qué es ciudadanía?	33
2.1.2 Ciudadanía e identidad	36
2.1.2.1 Identidad y representaciones sociales	43
2.2 Historia de la ciudadanía. Antecedentes y transformaciones.....	49
2.2.1 Algunos significados históricos del concepto de ciudadanía y sus atributos esenciales.....	49
2.2.2. Derechos ciudadanos y democracia	79
2.2.2.1. Derechos civiles, políticos y sociales.....	83
2.3 Concepciones contemporáneas acerca de la ciudadanía.....	88
2.3.1 Federalismo	90
2.3.2 La ciudadanía europea	92
2.3.3 Ciudadanía mundial	93

2.4 Modelos de democracia	97
2.4.1. Ateniense (Democracia clásica)	99
2.4.2 Republicano (Romano)	107
2.4.3 Liberal o representativa	121
2.4 .4. Directa	124
2.4.5 Contemporáneos	125
2.4.6. Democracia Participativa	126
2.4.7 Democracia Deliberativa	127
2.4.8. Democracia radical. Sociedad civil fuertemente democrática.	128
2.4.8.1. Democracia Verde	139
2.5 Gobernabilidad democrática. Cultura cívica democrática	158
2.5.1 Indicadores de gobernabilidad democrática. Modelos de sociedad civil	161
2.6 Democracia y ciudadanía en México.	174
2.6.1 Hechos históricos relevantes para la vida democrática de México.....	175
2.6.1.1 Antecedentes. Construcción del Estado Nacional.... ..	175
2.6.1.2 La Guerra de Independencia	178
2.6.1.3 Revolución de Ayutla	183
2.6.1.4 La Guerra de Reforma	187
2.6.1.5 La Revolución Mexicana	188
2.6.1.6 La revolución institucionalizada. Los regímenes posteriores	192
2.6.1.7. La transición hacia la democratización	198
2.7.1 Breve consideración crítica sobre los antecedentes históricos	213
2.7.2. La situación actual.....	218
2.7.3. Reflexiones finales.	229
2.8 Teoría de las Representaciones Sociales.....	252
2.8.1. Antecedentes y surgimiento de la teoría	252
2.8.2. Hacia una conceptualización de la noción de representación social.....	254

2.8.3. Origen y funcionamiento de las representaciones sociales.....	260
2.8.4. Dinámica de las representaciones sociales	265
2.8.5. Funciones de las representaciones sociales	266
2.8.6. Lo simbólico en la construcción de representaciones sociales	266
2.8.7. El otro (<i>Alter</i>) en la construcción de las representaciones sociales	270
2.8.8 Derivaciones metodológicas de la teoría de las representaciones sociales.....	271
III Metodología	273
3.1. Preguntas de investigación	273
3.2. Hipótesis	273
3.3. Propuesta metodológica	273
3.4. Estrategia	275
3.5 Determinación de la población y la muestra.....	276
3.6. Diseño y aplicación de instrumentos para recabar información.....	277
3.7. Métodos y técnicas para el análisis de información	283
3.8. Presentación de resultados. Representaciones sociales del ciudadano y la ciudadanía en Monterrey, N.L.	286
3.8.1. Ejercicio de articulación analítica. Tablas de resultados.....	286
3.9. Representaciones y prácticas sociales sobre ciudadanía en Monterrey, N.L. Discusión de los resultados obtenidos.....	298
3.10 Discusión general. Comentarios finales y conclusiones.....	419
IV Referencias bibliográficas.....	442

Representaciones y prácticas sociales sobre ciudadanía en Monterrey. Estudio de los valores subyacentes y su relación con la democracia verde

I Introducción

En el presente documento se exponen los resultados de una investigación realizada con la finalidad de obtener el título de doctorado, en el programa de Ciencias Sociales con Orientación en Desarrollo Sustentable, que opera el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

El informe de la investigación se presenta en tres capítulos. El primer capítulo es el que ahora se expone y constituye la introducción a la presentación de resultados; en este primer capítulo, se exponen los factores que motivaron la investigación, los objetivos que pretende lograr, se justifica su importancia y se presentan en forma resumida algunos conceptos que son esenciales para este trabajo. Se incluye un esbozo de la metodología empleada y una breve síntesis de algunos de los resultados obtenidos con la investigación.

El segundo capítulo está conformado por el marco teórico desarrollado para dar fundamento al proceso de investigación y a sus resultados. El marco teórico está estructurado por ocho apartados: el primero referente a los conceptos y fundamentos de la ciudadanía, el segundo que aborda la historia de la ciudadanía, sus antecedentes y transformaciones; el tercer apartado examina las concepciones contemporáneas acerca de la ciudadanía, el cuarto, los modelos de democracia; el quinto analiza los elementos de la gobernabilidad democrática; el sexto el proceso de construcción de la democracia y la ciudadanía en México y el séptimo, constituye un análisis crítico de la democracia en México y el octavo un breve marco de referencia acerca de la Teoría de las Representaciones Sociales.

El tercer capítulo presenta en forma amplia, la metodología empleada desde el planteamiento de preguntas de investigación, hasta la presentación de los resultados, mediante la construcción de representaciones sociales y la discusión de los resultados obtenidos.

El cuarto apartado corresponde a las conclusiones. Se presenta también un apartado con anexos en los que es posible tener acceso a los instrumentos diseñados y aplicados, así como a la matriz de distribución de frecuencias y a los ejercicios de análisis de la información en sus diversos niveles de aproximación.

1.1 Planteamiento del problema

Elegí abordar el tema de las representaciones sociales sobre la ciudadanía, debido a que en el año 2007 participé en una investigación financiada y coordinada por la Dirección de Cultura del Municipio de Monterrey, Nuevo León, denominada: *Prospectiva Monterrey 2026*, perteneciente a un proyecto macro denominado: *“Monterrey ciudad del trabajo y del conocimiento, origen y destino”*. Al trabajar la prospectiva, los escenarios tendenciales que se construyeron para la ciudad, la mostraban sujeta a graves problemas e imposibilitada para el logro de los escenarios deseables, en caso de no transformar muchas de las circunstancias que en ese momento se señalaban como amenazas, algunas de las cuales se manifestaban incluso ya como problemas. En la problemática detectada, se evidenciaron una importante dimensión ética, además de serios problemas que afectan al medio ambiente, vinculados con los aspectos políticos y sociales, así como la ineficiencia y desinterés por parte de las autoridades en su resolución en muchos de los casos, por lo que llegué a tomar conciencia de que la participación ciudadana era un factor determinante para aportar a su solución.

Estas ideas me llevaron, a su vez, a reflexionar en el tipo de ciudadanía que tenemos en México y particularmente en Monterrey, Nuevo León y a cuestionarme respecto a si ella se encuentra en condiciones de participar en la toma de decisiones y en las acciones orientadas al cambio que demandan las circunstancias nacionales y de nuestra ciudad y estado, concretamente. Para responder a esta pregunta, entre otras, con la intención de promover una formación cívica y ética posterior que movilice a la participación ciudadana, planteo el diseño de la investigación cuyos resultados ahora presento.

La construcción del proyecto dio inicio en septiembre de 2008 y concluyó con el informe de investigación, en octubre del 2012.

1.1.1 Tema de investigación

El tema del cual se ocupa la investigación es el de las relaciones entre la ciudadanía, los valores cívicos y la democracia verde. Se trabajó recolectando las representaciones y prácticas sociales sobre ciudadanía en Monterrey, N.L.

1.1.2 Objeto de estudio

Caracterizar el tipo de sociedad civil que se presenta entre los habitantes adultos de Monterrey, N.L., desde una perspectiva axiológica¹ a través del estudio de las representaciones sociales y las prácticas vigentes en materia de ciudadanía y valorar su contribución al logro de una democracia verde.

¹ Axiología (Griego): estudio o tratado de los valores positivos y negativos. Teoría crítica de los valores Analiza los principios que permiten considerar que algo es o no valioso y los fundamentos para emitir tal juicio. Se aplica al campo de la ética y la estética.

Se estudiaron los discursos sobre ciudadanía y las formas de participación ciudadana actuales, considerando también su ausencia. Se realizó una caracterización de la ciudadanía a partir de los valores que se proponen a través de las representaciones y las prácticas sociales. Finalmente fueron contrastadas con concepciones teóricas e indicadores de democracia, primordialmente los relacionados a la participación ciudadana, así como los de sustentabilidad, propuestos por diversos modelos de ciudadanía democrática.

Como parte del marco teórico se abordaron con profundidad los diversos conceptos que son fundamentales para la investigación que ahora se presenta; sin embargo, es importante especificar en este momento, algunos de ellos como punto de partida. Existen diversas concepciones acerca de la ciudadanía, ya que esta noción se ha ido transformando en las distintas sociedades, con el transcurso del tiempo y de las reivindicaciones que se han ido conquistando en las diversas formas de gobierno. Para los fines de la presente investigación, considero que gozan de la condición de ciudadanos, las personas libres e iguales, que tienen derechos y obligaciones, es decir un reconocimiento jurídico-político formal y cooperan o participan voluntariamente con la comunidad a la que pertenecen, hacia la cual desarrollan vínculos afectivos.

El modelo de democracia que puse en el horizonte como referente hacia el que podríamos aspirar como sociedad, es el de la *democracia verde* que es entendida, de acuerdo con Manuel Arias Maldonado, como:

“...el modelo democrático que consigue plasmar esos dos principios de la teoría política ecologista, su compromiso con la naturaleza y con una existencia sustentable y su voluntad de desarrollar la democracia, en un único modelo normativo. Consecución de la sustentabilidad y democratización de la democracia constituirían por igual los elementos sustanciales de ese modelo democrático.” (1999: 12)

La Democracia Verde se interesa por convertir la naturaleza en una realidad políticamente relevante y moralmente significativa. El concepto de sustentabilidad representa una visión holística de las interacciones entre los seres humanos y para con el medio ambiente, como proceso político amplio y complejo que incorpora también las dimensiones económica, ecológica y social. Además, la sustentabilidad no puede ser entendida como un principio puramente técnico sino como un concepto ético–normativo ya que cada momento del desarrollo económico exige una decisión moral (Riechmann, J. 1995: 16)

Debido a que la democracia verde es un modelo radical, podemos anticipar que nuestra incipiente democracia está muy lejos de cubrir los rasgos que lo caracterizan y con ello de poderlo hacer efectivo en la práctica. Sin embargo, considero que al trabajar en favor de la sustentabilidad en sentido amplio, al combinar la democracia con los problemas del medioambiente, con aspectos socioculturales y éticos, integra todas las esferas fundamentales para la vida humana. En el caso de México, el modelo de la democracia verde permitiría incorporar la totalidad de las dimensiones en que se manifiestan nuestros graves problemas con miras a su solución.

La presente investigación se interesa por analizar los problemas socioeconómicos y políticos relacionados con la democracia y la sustentabilidad desde la perspectiva de la ética y por ello resulta necesario indagar sobre el imaginario y las prácticas que compartimos como sociedad en torno a la democracia, la participación ciudadana, a nuestra relación con el medio ambiente y a los valores cívicos y éticos que manifestamos.

Para ello, se interesa por los valores cívicos que caracterizan a las representaciones y prácticas sociales sobre ciudadanía y la importancia que se asigna a esos valores con la intención de comprender la jerarquía que se les asigna. Entiendo por valores cívicos a los principios

jerárquicos y modos de comportamiento que la sociedad considera importantes y espera que todos los ciudadanos practiquen y respeten.

A partir de esta mínima definición de los conceptos sustantivos me interesa resaltar que la democracia es imprescindible para el logro de la sustentabilidad, ya que tal como lo plantea el modelo de la democracia verde, son dos aspectos que no pueden separarse. Asimismo, la democracia verde, además de equidad, justicia y actitud ética, requiere de una ciudadanía participativa, comprometida con su entorno y con los demás seres humanos, particularmente.

Nuestro país atraviesa una grave crisis económica que ha frenado su crecimiento económico.² Hoy en día, después de las elecciones de julio del 2012, afrontamos un grave retroceso en el proceso hacia la democratización del país, debido a que el partido que instauró el régimen autoritario y que frenó la democracia, impidiendo la alternancia política durante un período de más de setenta años, volverá al poder, me refiero evidentemente al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Es de esperar que las viejas fórmulas antidemocráticas, represivas y corruptas, acompañadas de impunidad, vuelvan a acompañar las formas de gobierno del ancestral partido político, ya que le han sido de gran utilidad para sus fines políticos e intereses económicos particulares.³

La construcción de una ciudadanía participativa es un tema prioritario para impulsar y fortalecer los procesos de democratización del país, que tantos obstáculos han afrontado, con la

² De acuerdo con el informe del año 2011 del Índice de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), México ha perdido su liderazgo a nivel latinoamericano y se ubica en el quinto lugar en desarrollo humano en la región, que incluye los siguientes indicadores: una vida larga y saludable, acceso a la educación y nivel de vida digno.

³ Otros indicadores, como el que analiza las democracias en América Latina en el año 2009, muestran también, entre otros datos importantes, la existencia en nuestro país de un gran autoritarismo y una percepción antidemocrática, mucho más elevados que en el resto de los países de la región.

intención de retomar la transición hacia la democracia que ahora parece en riesgo de quedar inconclusa. Es posible apreciar la urgencia de mantener el rumbo que el país había comenzado a emprender, estimularlo y consolidarlo, ante estas nuevas circunstancias políticas y sociales. De no lograrse una participación ciudadana en el ámbito político, entendido éste como el espacio público de las decisiones que competen a los miembros de la sociedad, el desarrollo humano y económico, así como la justicia y la paz social, se aprecian cada vez más lejanos.

El costo socioeconómico y político de las formas de gobierno autoritarias y antidemocráticas ha sido muy elevado y ha generado además de graves crisis económicas a lo largo de la historia nacional, serios impedimentos al logro de un bienestar social y una vida digna. Dos de nuestros principales problemas sociales son la corrupción y la impunidad y participan en la generación de todos los demás, como la pobreza, el desempleo, la violencia e inseguridad, por citar tan sólo algunos ejemplos. Por todos estos motivos, la democracia es un tema prioritario para el logro de una sustentabilidad en sentido amplio.

En Monterrey, Nuevo León, concretamente, existe una gran cantidad de problemas, cuya esencia puede considerarse de moralidad pública, los cuales dificultan el logro de la democracia verde. Asimismo, la ausencia de los elementos que caracterizan una ciudadanía participativa, su distancia respecto del gobierno, la falta de atención a los problemas del ambiente, muestran lejana la posibilidad de construir el modelo de democracia que proponemos.

El desarrollo de la investigación se llevó a cabo en un contexto nacional y sobre todo, estatal y local de gran inseguridad y violencia, que han traído como repercusiones en materia de investigación, serias dificultades para recabar información ya que existe una gran desconfianza generalizada que impide la aproximación a la población en general, para la aplicación de los instrumentos para recabar información, sobre todo cuando ésta involucra temas políticos. De esta

manera, el planteamiento original de la investigación que pretendía trabajar con información proveniente de la población en general, hubo de ser modificado.

1.1.3 Objetivo general

La presente investigación se propone:

Caracterizar los diferentes tipos de ciudadanía que se presentan entre los habitantes adultos de la ciudad de Monterrey, N.L., desde una perspectiva axiológica⁴ a través del estudio de las representaciones y las prácticas sociales vigentes en materia de ciudadanía, para proponer los rasgos generales de las estrategias pedagógicas orientadas a fortalecer la gobernabilidad y la democracia verde.

1.1.4 Objetivos específicos

- Identificar y caracterizar las representaciones y las prácticas sociales sobre ciudadanía más generalizadas entre la población adulta de Monterrey, Nuevo León y analizar su núcleo axiológico.
- Contrastar las virtudes cívicas identificadas en las representaciones y prácticas sociales, con aquellas constitutivas de la democracia verde
- Proponer, de acuerdo con los patrones socioculturales locales, los rasgos generales de las estrategias pedagógicas orientadas a fortalecer la gobernabilidad y la democracia verde.

⁴ Axiología del Griego: estudio o tratado de los valores positivos y negativos. Teoría crítica de los valores Analiza los principios que permiten considerar que algo es o no valioso y los fundamentos para emitir tal juicio. Se aplica al campo de la ética y la estética.

1.1.5 Preguntas de investigación

La presente investigación parte de algunos cuestionamientos que se interesa en dilucidar:

1. ¿Los valores subyacentes a las representaciones sociales y a las prácticas vigentes sobre ciudadanía en Monterrey son los que se requieren para el logro de una democracia verde?
2. ¿Se ha constituido en Monterrey Nuevo León, un tipo de ciudadanía que aporte al logro de una democracia verde?

1.1.6 Antecedentes conceptuales y empíricos

El logro de una democracia verde se vislumbra lejano, ya que en nuestro país, según datos del Informe de Desarrollo Humano 2006 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), persisten grandes desigualdades. Arroja dicho informe que México se encuentra entre las doce sociedades más inequitativas del mundo, en donde la diferencia entre el 10% de la población más rica con respecto al resto es muy amplia. Plantea asimismo que se crea un círculo de desigualdad debido a que la diferencia en el ingreso origina disparidad en el acceso a servicios educativos, de salud y oportunidades laborales. Tales desigualdades son atribuidas a las diferencias formativas, en capacidades básicas y a la discriminación hacia ciertos grupos como las mujeres, las personas con discapacidad, en condición de pobreza y los indígenas.⁵

Al mismo tiempo, se observa un acelerado proceso de urbanización que concentra en las ciudades y lo hará cada vez más, a la mayoría de la población en busca de empleo, lo que muestra

⁵ El citado diagnóstico retomado por (SEDESOL), arroja que al año 2006, 44.7 millones de mexicanos vivían en situación de pobreza patrimonial y 14.4 millones en pobreza alimentaria, ya que no contaban con un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades esenciales. Según los datos anteriores, el 59% de la población mexicana se encuentra en situación de pobreza. Se presentan además dificultades regionales, así como desigualdades al interior de las ciudades y entre éstas y las zonas rurales.

la urgencia de estrategias y programas para promover el empleo, así como en materia de desarrollo social y urbano eficientes que permitan un crecimiento ordenado. Resalta también el mencionado informe que en las ciudades la falta de planeación propicia pobreza, inseguridad, desorden, altos costos en la provisión de servicios que encarecen la vida urbana, por lo que se requieren programas y acciones orientados a regular el uso del suelo, que favorezcan el acceso al suelo urbano y a la vivienda para toda la población, incluyendo a la más pobre.

Postula el citado diagnóstico social que se requieren políticas públicas que apunten a la solución de los principales problemas: la pobreza, la vulnerabilidad y las desigualdades territoriales que impiden el desarrollo adecuado de las capacidades de la población. Las desigualdades parten desde el nivel de individuos hasta el de ciudades y regiones e impiden que la sociedad se reconozca como unidad y actúe en forma solidaria, lo que agudiza los problemas políticos e impide el desarrollo económico y en consecuencia el desarrollo sustentable integral. El diagnóstico oficial sobre desarrollo social en nuestro país, esboza graves problemas que han sido analizados en profundidad en diversos estudios, los cuales impiden alcanzar la sustentabilidad, pues como se ha dicho se crea un círculo de desigualdad que atrapa a individuos, grupos y sociedades en su totalidad.

Después de seis años, las condiciones no mejoran para la mayoría de la población de nuestro país; el Índice de Desarrollo Humano del año 2011⁶, ubica a nuestro país en el lugar número 57 y muestra un gran rezago con relación a otros países que tienen mayor desarrollo. Para alcanzar el desarrollo que tenía el país en el año 2010, se requieren 39 años, mientras que para obtener el desarrollo humano que tienen los Estados Unidos y Noruega, serán necesarios 70 y 85 años

⁶ Dado a conocer en octubre de 2012.

respectivamente. Con relación a los países de América Latina, México ocupa el quinto lugar, antecedido por Chile, Argentina, Uruguay y Cuba.

También se hace evidente una gran desigualdad en el desarrollo entre las distintas entidades federativas, ya que en muchas de ellas no se alcanza ni siquiera la media nacional. Entre el Distrito Federal que tiene el mayor índice de desarrollo en nuestro país y Chiapas, que tiene el más bajo, hay una distancia de 52 años, ya que tiene, al igual que muchas otras comunidades en el ámbito nacional, un ritmo de crecimiento muy lento.

Estos datos muestran que las decisiones y las acciones que se han llevado a cabo en nuestro país han sido inadecuadas e insuficientes para potenciar el desarrollo nacional y para lograrlo con equidad entre las distintas entidades federativas. La solución no se ve cercana y de seguir estas tendencias, algunas de las entidades federativas, continuarán empobrecidas y con los graves problemas de inequidad, desigualdad socioeconómica, etc., como el caso de Hidalgo, que quizá esté alcanzando el promedio nacional actual en el año 2040 y el del Distrito Federal en el 2143.

La importancia de lograr la sustentabilidad, en sentido amplio, para todos los países del mundo, pero principalmente para México, es explícita en el Informe sobre Desarrollo Humano 2011, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

El informe del 2011 propone que:

“Además de lograr el crecimiento económico, es necesario distribuir sus beneficios de manera equitativa, regenerar el medio ambiente en lugar de destruirlo, darles voz y capacidad de decisión a las personas en lugar de marginarlas, ampliar sus elecciones y oportunidades, y permitir la participación de las personas en las decisiones que afectan sus vidas. El desarrollo humano sustentable se dirige a la promoción de la dignidad humana y

la realización de los derechos humanos, económicos, sociales, culturales, civiles y políticos.” (PNUD/IDH 2012: 13)

En el caso concreto de la ciudad de Monterrey y su área metropolitana, en materia de estrategias para la solución de los problemas referidos, entre muchos otros más, considero que pese a la existencia de diversas asociaciones y organizaciones no gubernamentales, la participación de la ciudadanía es aún muy limitada y carece de la coordinación necesaria que permita trabajar en forma conjunta para alcanzar objetivos comunes. Asimismo los valores que se ponen en práctica distan mucho de los valores cívicos ideales que caracterizan a una sociedad civil democrática, participativa, autónoma.

Así, las posibilidades de una democracia verde se ven entorpecidas por la insuficiente participación coordinada de la ciudadanía, entre otros muchos factores. Lo anterior ha dado lugar a diversos problemas que obstaculizan el desarrollo económico y social de la urbe, así como una democracia verde, generando entre otras trascendentes consecuencias: la existencia de desigualdades socioeconómicas cada vez más polarizadas en las que resalta el incremento de la población en situación de pobreza, la fragmentación entre los sectores sociales, la discriminación, la marginación e incluso la exclusión de ciertos individuos y grupos, una explotación irresponsable y corrupta de los recursos naturales que comprometen el desarrollo presente y futuro.

Existe un importante antecedente teórico en el abordaje del concepto de desarrollo, el cual ha tenido diversas acepciones, no obstante, ha sido pensado en términos generales, como una metáfora de la evolución natural y sinónimo de crecimiento, promotor del progreso, la racionalización, la modernidad y el cambio. Ha primado, entonces, una visión economicista del desarrollo que lo asocia al incremento en la productividad, a la expansión del consumo y al

aumento de la riqueza. Dicha concepción economicista del desarrollo traslucía una valoración positiva e incluso una sobrevaloración del desarrollo que lo consideraba siempre asociado al progreso, en evolución en línea ascendente.

Actualmente la globalización económica, en tanto que es una fase avanzada del capitalismo, ha puesto nuevamente en boga la discusión acerca del concepto desarrollo, de su sentido, de sus factores propiciatorios así como de la referida noción que lo asocia con un progreso en línea ascendente. Las contradicciones internas al capitalismo se han acendrado, lo que genera graves consecuencias humanas ya que no han permitido que el citado desarrollo sea equitativo y sustentable, pues han llevado a diversos problemas socioeconómicos y ecológicos, generados por la competitividad, la inobservancia de los derechos sociales, civiles, políticos, económicos y culturales y la sobreexplotación voraz e irresponsable de los recursos naturales, así como la contaminación ambiental, entre otros. Podemos afirmar que la dimensión ética cobra relevancia en relación con el problema de la sustentabilidad y la democracia, pues la gran mayoría, si no es que en la totalidad, de los problemas que las obstaculizan son ocasionados por formas de relación en las que priva entre otros problemas el egoísmo, la competitividad, la voracidad, la corrupción, la irreflexión e irresponsabilidad, que impiden el entendimiento y el común acuerdo, por citar tan sólo algunos de ellos.

La globalización presenta en forma magnificada, las disparidades, los desequilibrios y las inequidades inherentes al sistema de producción capitalista, entre las que es posible señalar la gran polarización entre pobres y ricos, el considerable incremento de población en situación de pobreza, así como en los niveles de la misma, una gran competitividad entre los seres humanos, la intolerancia y la discriminación hacia diversos grupos socioculturales, entre otros problemas, de tal forma que las críticas que se hicieron a la tradición desarrollista desde la perspectiva

marxista se encuentran hoy en día plenamente vigentes. (Cfr., Bambirra, Vania 1978; Sunkel y Paz, 1981)

Durante prolongados periodos, en nuestro país, así como en América Latina y el Caribe en general, las propuestas de desarrollo centradas estrictamente en el economicismo provinieron fundamentalmente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y se centraban en las formas de desarrollo que se ensayaban en el extranjero, más no en las necesidades y posibilidades de nuestro país. En el momento actual, la propia CEPAL ha emitido un informe sobre las influencias no económicas de la globalización y sobre sus consecuencias humanas (CEPAL. 2002)

Al mismo tiempo, la preocupación de diversos sectores en el ámbito internacional ante las graves consecuencias que ha generado la práctica de la concepción economicista del desarrollo, ha llevado a la búsqueda de un nuevo paradigma para un desarrollo integral y se ha propuesto el concepto de desarrollo sustentable y posteriormente el de sustentabilidad. La Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo, establecida por la Organización de las Naciones Unidas en 1983, definió el concepto de desarrollo sustentable como: “El desarrollo que satisface las necesidades del presente, sin comprometer las capacidades que tienen las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades.” Dicho concepto se dio a conocer en 1987 a partir del informe Brundtland “denominado *Nuestro futuro común*”.

La noción del desarrollo sustentable coloca el énfasis en los seres humanos, ya que son su fin último y por ello confiere especial importancia a la persona. Debido a ello, el desarrollo sustentable implica la posibilidad y la necesidad de realizar todas las potencialidades de los seres humanos, lo que a su vez exige la atención a todas las dimensiones humanas, por lo que incluye, además del ámbito económico, el político, el sociocultural y el ecológico, ya que plantea la

18

imposibilidad de su logro en forma parcial, por lo que se busca el equilibrio y la complementariedad entre dichos ámbitos. El aspecto ecológico es de gran importancia pues el desarrollo sustentable se refiere también a las relaciones de los seres humanos con el medio ambiente que les da sustento, por lo que es necesario que garanticen una explotación racional de él y la preservación de los recursos naturales, de manera que puedan vivir en un entorno que les brinde la posibilidad de realizar todas sus potencialidades sin comprometer el futuro. (PNUD)

No obstante en la actualidad se requiere ampliar aún más la noción de desarrollo sustentable de manera que incluya además de las dimensiones citadas, aspectos éticos y culturales que garanticen una convivencia armónica y equilibrada con los demás y con la naturaleza, que se lleve a cabo con responsabilidad, justicia y equidad, con respeto a la dignidad humana, a los derechos humanos, sociales, civiles, económicos, políticos y culturales y al medio ambiente. Por ello implica pasar de una concepción del desarrollo en términos cuantitativos, de crecimiento económico exclusivamente, a una visión cualitativa que incluye el avance en forma simultánea en todas las dimensiones antes señaladas.

El desarrollo sustentable requiere de la responsabilidad y el compromiso compartido de todos los seres humanos en el contexto mundial, si recordamos el origen etimológico de la palabra griega *ethos*, que hace alusión a la morada en que vivimos, al espacio de la naturaleza que se reserva, se organiza y se cuida para convertirlo en nuestro hábitat, "...la raíz de donde proceden todos los actos del hombre" (Sanabria, 1980: 19), podemos apreciar la urgencia de una ética para promover el desarrollo sustentable. La relación con la naturaleza supone el respeto y el cuidado en su explotación, la preservación de los recursos, el control de la contaminación y la generación de nuevas fuentes de energía, entre otros, y dicha explotación debe llevarse a cabo de tal forma que las generaciones futuras tengan acceso a las mismas capacidades para realizar sus

potencialidades. Por ello, la reflexión ética, además de llevarse al ámbito de las interacciones humanas, requiere ser aplicada de manera urgente también, a la relación que como ciudadanos establecemos con la naturaleza que nos circunda y nos brinda sustento.

En términos de las relaciones entre los seres humanos, una sociedad que se organiza y se desarrolla supone formas de interacción en las que a partir de la libertad individual está presente el respeto a los demás (dignidad humana) y a la diversidad cultural (pluralismo), la armonía, la equidad, la responsabilidad y la solidaridad, además de otros muchos valores cívicos. Como parte de la noción de un sujeto activo que impulse el desarrollo es sumamente importante propiciar la participación política ciudadana en la atención de los asuntos de su comunidad, en la toma de decisiones que permitan la solución de diversos problemas que les atañen, mediante el diseño, la promoción y la evaluación de políticas públicas, el impulso de iniciativas legislativas, la exigencia de rendición de cuentas a los gobernantes y, en términos generales, a través de nuevas formas de participación política ciudadana apegada a los valores cívicos antes mencionados.

En la actualidad las reflexiones y acciones políticas incorporan a la naturaleza dentro de los temas que abordan y que se refieren al ámbito público. Las interacciones entre los seres humanos y con la naturaleza se analizan como parte de los problemas sociales y políticos y la crisis ecológica es considerada también crisis de la civilización. En los términos en los que Manuel Arias plantea dicha relación, las crisis ecológicas y el movimiento verde han incorporado al debate acerca de las democracias liberales una nueva dimensión que relaciona la democracia con dichas crisis y de ahí con la política verde y con el principio de sustentabilidad. (Arias, M., 1999: 2)

Sobre esta relación entre democracia, naturaleza y sustentabilidad, el enfoque del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) plantea la relación que se establece entre

20

desarrollo y libertad ya que concibe que el desarrollo de las personas es condición para que puedan elegir entre diversas formas de vida y por otra parte el ejercicio de tal libertad requiere que en la persona se hayan desarrollado determinadas capacidades entre las que resaltan la salud, la educación y las oportunidades de obtener un ingreso, factores que permitan alcanzar una vida plena en que puedan realizar totalmente sus capacidades. Entre otras libertades que se promueven se encuentran las económicas, políticas, civiles, sociales, de creatividad y productividad, de respeto por sí mismo y por los demás, la equidad de género, la garantía de los derechos humanos, la participación y la sustentabilidad del medio ambiente.

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, el desarrollo humano sustentable es el *“proceso permanente de ampliación de capacidades y libertades que permita a todos los mexicanos tener una vida digna sin comprometer el patrimonio de las generaciones futuras”* (SEDESOL 2007-2012)

En la concepción del desarrollo sustentable y de las políticas sociales, así como de un sujeto que participa activamente en su diseño y ejecución, se ha pasado de un enfoque estrictamente cuantitativo y paternalista o asistencialista a otro de corte cualitativo que toma en consideración a los actores sociales a través de sus propias opiniones y acciones efectivas. Lo anterior teniendo presente que mientras mayor sea la capacidad de acción de los seres humanos, mejores resultados se obtendrán del ejercicio de su libertad. No obstante, reitero, dicha libertad requiere ejercerse en forma responsable, informada, reflexiva y justa.

Estudios recientes como los realizados por Bernardo Kliksberg (2004) ponen de manifiesto que en términos de potencial productivo y tecnológico el momento actual es más propicio al logro de las metas de desarrollo económico y social y de hacerse en forma racional, permitiría beneficiar a grandes sectores de la población en el ámbito internacional sin comprometer el

desarrollo de las generaciones futuras, sin embargo, de manera contradictoria, se muestra un incremento alarmante en la inequidad en el desarrollo social y económico entre diversos sectores sociales, países y regiones. Dichos desequilibrios ponen de manifiesto que muchas de las causas de la desigualdad socioeconómica y de los problemas ecológicos tienen su origen en la corrupción, la competitividad voraz, el afán de lucro, la explotación de algunos seres humanos a manos de otros así como el abuso de los recursos naturales y la irresponsabilidad, entre otros. Lo anterior ha sido motivo para que distintos expertos en economía en el momento actual, señalen la urgencia de incluir variables éticas y culturales en las propuestas de desarrollo económico y social si se pretende un desarrollo sustentable.

Existen distintas corrientes teóricas y metodologías para el estudio de los valores cívicos, la participación ciudadana, las relaciones entre la ética y la sustentabilidad, entre los que se cuentan los estudios del capital social que serán considerados en la presente investigación, entre otros. Diversos investigadores en trabajos recientes han estudiado y establecido las relaciones existentes entre el capital social y el desarrollo sustentable y han afirmado la necesidad de incluir la perspectiva ética en el diseño y operación de políticas económicas y sociales, así como en la asignación de recursos. Podemos citar entre algunos de los principales representantes de esta nueva tendencia a Pierre Bourdieu (1980), James Coleman (1990), Robert Putnam (1994), James Wolfensohn, presidente del Banco Mundial (1995), Amartya Sen, Premio Nobel de Economía (1997), Enrique V. Iglesias (1997), Lourdes Arizpe (1998), Joseph Stiglitz (2003), Bernardo Kliksberg (2004), entre muchos otros, e instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de las Naciones Unidas.

Putnam y otros estudiosos del capital social, en sus investigaciones constatan que las variables que constituyen el capital social, las cuales son de índole ética y cultural, inciden en los

desempeños económicos y políticos. La participación de la sociedad civil es fundamental para la democracia pues tal como lo afirma Benjamin Barber: “La sociedad civil no supone una alternativa al gobierno democrático sino que, por el contrario, condiciona tanto al libre espacio en el que se cultivan las disposiciones democráticas como al comportamiento democrático.” (2000: 13)

La participación política organizada y autónoma de la sociedad civil es un factor fundamental para alcanzar el desarrollo sustentable, pues implica el ejercicio de las libertades y de las capacidades humanas, disminuye la probabilidad de que se presenten conflictos, ya que se funda en el entendimiento y el trabajo conjunto, asimismo disminuye la corrupción en tanto los ciudadanos participan en el diseño, la operación, evaluación y supervisión de programas y políticas públicas, así como en las decisiones que les atañen.

Otra definición de capital social propuesta por Putnam, señala algunas variantes: “...aspectos de las organizaciones sociales, como las redes, las normas y la confianza facilitan la acción y la cooperación para beneficio mutuo”. Robert Putnam. (1993)

Entre algunos de los factores en que se expresa el capital social hay que mencionar por ejemplo las estructuras sociales más horizontales, el número de asociaciones culturales, los índices de participación ciudadana y los de lectura de diarios, por citar tan sólo algunos de ellos.

Para James Coleman otro de los precursores de estos estudios, el capital social se presenta en el plano individual y en el colectivo. En el plano individual tiene que ver con “...el grado de integración social de un individuo, su red de contactos sociales; implica relaciones, expectativas de reciprocidad, comportamientos confiables, mejora la efectividad privada. Pero también es un bien colectivo.” (Coleman, J., vid en Kliksberg, B., 2004: 34)

Pierre Bourdieu definió el capital social como: “La suma de recursos reales y virtuales, que acumula un individuo en un grupo debido a la posesión de relaciones menos institucionalizadas o una red permanente de conocimiento y reconocimientos mutuos.” (Bourdieu, P., 1980)

Stephen Baas propone que el capital social tiene que ver con “cohesión social, con identificación con las formas de gobierno, con expresiones culturales y comportamientos sociales que hacen a la sociedad más cohesiva y más que una suma de individuos.” Considera Baas, que “...los arreglos institucionales horizontales tienen un impacto positivo en la generación de redes de confianza, buen gobierno y equidad social. El capital social juega un papel importante en estimular la solidaridad y en superar las fallas del mercado a través de acciones colectivas y el uso comunitario de recursos.” (Vid en Kliksberg, B., 2004: 35)

James Joseph, plantea que es “un vasto conjunto de ideas, ideales, instituciones y arreglos sociales, mediante los cuales las personas encuentran su voz y movilizan sus energías particulares para causas públicas.” (Vid en Kliksberg, B., 2004: 35)

Por otra parte, de acuerdo con Douglas Lummis, se entiende por sociedad civil: “...ese ámbito de la sociedad que se organiza de modo autónomo, en contraposición con el ámbito que es establecido y/o controlado directamente por el Estado...A diferencia de la sociedad de masas, la sociedad civil no es una manada, sino una multiplicidad de grupos y organizaciones, formales e informales, de personas que actúan juntas para propósitos diversos: algunos políticos, algunos culturales, algunos económicos.” (2002: 46-47)

Michael Walzer incluye aspectos fundamentales de la sociedad civil a la que define como: “El espacio de asociación humana no coercitiva...y el entramado de redes basadas en la relación, que ocupan ese espacio.” (Walzer, Michael, vid en Barber, B., 2000: 12) En el caso de la presente

investigación se considera fundamental el análisis de las redes de relaciones que se establecen en las interacciones entre individuos y grupos sociales diversos al participar en actividades de interés colectivo.

Existen también otro tipo de antecedentes conceptuales y empíricos para abordar el objeto de estudio que nos interesa, entre los cuáles se estudiarán además las propuestas de la ya citada democracia verde que relaciona aspectos políticos, sociales, económicos y culturales, las aportaciones de los estudios acerca de la sustentabilidad, la teoría de las representaciones sociales como forma de aproximación a los valores que subyacen a las representaciones y prácticas sociales sobre ciudadanía, entre otros.

1.1.7 Justificación

Se abren diversas vías de trabajo para el logro de los objetivos de desarrollo establecidos en contextos mundiales, nacionales y estatales que involucran a todos los niveles de gobierno y a la totalidad de las dimensiones humanas. El desarrollo en las dimensiones social, política, ética y cultural, es prioritario también y por ello se espera que la propuesta de análisis de los valores cívicos que se ostentan en las representaciones y prácticas sociales concretas sobre ciudadanía en el área metropolitana de Monterrey, constituya a través de la reflexión crítica, una aportación a la comprensión del estado en que se encuentra la constitución de la ciudadanía, así como a la construcción y promoción, desde los propios sujetos, de un modelo de ciudadanía participativo, dialógico y responsable que sea propicio para la construcción de una democracia verde. Así se perfila la necesidad de promover una ciudadanía social, democrática en que los sujetos respeten su entorno y a sus conciudadanos y que participen activamente en la solución de los problemas que el medioambiente les plantea, que reflexionen en torno a sus decisiones y al impacto que

tienen, con la intención de optimizar el bien común y minimizar los conflictos sociales, ya que obstaculizan la posibilidad de alcanzar mayores niveles en la calidad de vida.

En tal sentido es importante reflexionar acerca de los valores cívicos de convivencia y participación ciudadana que subyacen a nuestra sociedad actual y considerar cuáles son los que se demandan y se desean hacia el futuro. Resulta entonces fundamental para alcanzar el desarrollo deseable, la construcción de nuevas formas de participación ciudadana y convivencia armónica, en las que la corrupción sea erradicada, que prive el reconocimiento del otro y el respeto a la dignidad humana, a la justicia y a la diversidad, que propicien la equidad y el diálogo entre grupos socioculturales, así como la organización y la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones y en el impulso a políticas públicas orientadas a la solución de los problemas que les conciernen, así como la construcción de vías institucionales para la participación ciudadana. Es por ello que los programas, estrategias y políticas de desarrollo relacionados con la construcción de un entorno sustentable, requieren involucrar también la perspectiva ética.

En el transcurso de la investigación se trabajará en el análisis de algunos conceptos fundamentales para el estudio que se propone, los cuales se encuentran aún en discusión, tales como los de ciudadanía, participación ciudadana, democracia, sustentabilidad, ciudadanía compleja, es decir sus dimensiones: social, política, filosófica, antropológica y jurídica, entre otros. Para fines de la comprensión del objeto de estudio, algunos de dichos conceptos, ahora se plantean en una primera aproximación.

A partir del análisis que se propone en la presente investigación será posible abordar también en investigaciones futuras, otras temáticas diversas y más específicas, relacionadas con los tipos de ciudadanía que se viven efectivamente, tales como aquellas representaciones y prácticas particulares sobre ciudadanía que se promueven desde las diversas asociaciones y

denominaciones religiosas, los roles de las mujeres en la sociedad civil, las propuestas con enfoque de género, la participación de los niños, de las personas de la tercera edad, de los discapacitados y de los indígenas, por ejemplo. Al respecto, se capta en las nuevas políticas públicas un esfuerzo por identificar las zonas de riesgo social en la medida en que se presentan problemas más importantes y un interés por buscar el equilibrio en la participación de diversos sectores sociales para solucionar asuntos específicos. En el ejemplo concreto de políticas sociales, la participación de las mujeres y los programas específicos para ellas está presente en mayor o menor grado en el discurso y en la práctica ha sido posible que ocupen ciertos puestos de decisión, de autoridad.

Por otra parte, el estudio que ahora se presenta posibilitará contrastar las relaciones existentes entre los modelos teóricos de ciudadanía que han sido propuestos, con las necesidades y posibilidades reales de participación y organización de las personas y los grupos sociales, de acuerdo con sus circunstancias concretas y las de su contexto, además de los valores que les subyacen. A partir de las relaciones que se capten es posible afinar las estrategias orientadas a promover la participación de la sociedad civil y diseñar políticas públicas más cercanas a las necesidades e intereses de los diversos actores sociales y culturales o grupos poblacionales.

Analizaré los modelos teóricos acerca de ciudadanía más importantes, como el de ciudadanía social propuesto por T. H. Marshall, que puede aportar al desarrollo sustentable, pues es un modelo integral y equilibrado ya que coloca los derechos sociales en el mismo nivel que los derechos civiles y políticos, e implica el paso de una ciudadanía individual a una ciudadanía social que toma en consideración todas las exigencias y necesidades de la persona en su contexto, como miembro de la colectividad, para desarrollar sus potencialidades. Los nuevos modelos de ciudadanía que se promueven se gestan en un contexto multicultural, de respeto, que transita

hacia la democracia y hacia la equidad. El tránsito hacia un modelo de ciudadanía social no se vislumbra muy cercano y por ello es parte de su construcción, el llevar a cabo estudios sobre modelos teóricos de ciudadanía, desde diferentes perspectivas y con un enfoque eminentemente ético, así como también, acerca de las representaciones y prácticas sociales.

Por lo antes expuesto, aunque de manera sucinta, considero que este tipo de estudio sobre modelos de ciudadanía es muy importante en el proceso de construcción de la gobernabilidad que vive nuestro país y de una democracia verde, que demandan atención a los problemas locales, al mismo tiempo que se enfrentan procesos de globalización económica, homogeneización cultural y nuevas formas de construcción de la ciudadanía en un contexto global.

La investigación permitirá por una parte tener la visión general acerca de los problemas de la sustentabilidad y de las formas de participación ciudadana, a través del análisis del discurso. Por otra parte, hará posible reflexionar en torno a las manifestaciones concretas de dichos problemas en el estado de Nuevo León y más específicamente en Monterrey y su área metropolitana.

Finalmente, reiterar que la versión generalizada del desarrollo ha pasado a la incorporación junto a lo global o universal, de lo local, del trabajo con grupos, actores sociales y problemas concretos generados por circunstancias específicas. Es decir que se reconoce el hecho de que algunos problemas requieren un enfoque global y otros un enfoque local y que la mayoría de las veces la combinación de ambos. En lo relativo a los problemas locales, cabe señalar que las reformas al artículo 115 constitucional han permitido a los municipios una mayor responsabilidad y posibilidades de intervención en el desarrollo de sus comunidades, no obstante, las políticas sociales continúan estando a cargo del gobierno federal primordialmente y del estatal en otra medida.

Así, un estudio sobre las representaciones y prácticas sociales sobre ciudadanía y el análisis de los derechos y valores que se les atribuyen en Monterrey y su área metropolitana, nos permitirá evaluar las posibilidades efectivas de alcanzar una democracia verde para la región y para nuestro país. A partir de la investigación se podrán planear, diseñar e instrumentar estrategias más puntuales para promover la participación ciudadana en favor de la gobernabilidad democrática y la sustentabilidad. La investigación permitirá inferir hacia qué modelo de ciudadanía se dirige la ciudad de Monterrey en el contexto capitalista, neoliberal y posmoderno que vive en la actualidad, con grandes problemas que la caracterizan.

1.1.8 Hipótesis

- La formación de valores cívicos contribuye a la constitución de una democracia verde.
- Los valores subyacentes a las representaciones sociales y prácticas vigentes sobre ciudadanía en Monterrey distan mucho de los requeridos para la construcción de una democracia verde.
- En Monterrey, Nuevo León, no se ha constituido una ciudadanía que tienda hacia una democracia verde.

1.1.9 Esbozo metodológico⁷

La construcción de las representaciones sociales sobre ciudadanía y democracia, así como los temas relacionados, se trabajó fundamentalmente, con la metodología de recolección de las representaciones sociales, propuesta por Jean-Claude Abric (2001) desde su enfoque estructural y dinámico de la Representaciones Sociales. Se aplicó también el método de análisis cualitativo

⁷ La información amplia sobre la metodología empleada y los resultados obtenidos se encuentra en el capítulo III.

que propone Sandra Araya (2002), según la Grounded Theory (Anselm, L. Strauss, Juliet Corbin y Barney Glaser). A partir del diseño y aplicación de los instrumentos para recabar información, así como de su análisis, se recolectaron las representaciones y prácticas sociales y se identificó y caracterizó la axiología implícita en las mismas.

Se empleó una metodología mixta o combinada. El enfoque de investigación prioritario es el cualitativo, atendiendo al objeto de estudio que se interesa por los valores subyacentes a las representaciones sociales, a través del cual se construyeron las categorías. Se trabajó también un nivel de análisis estadístico de la información, ya que la metodología de construcción de representaciones sociales lo requiere.

La investigación se realizó en Monterrey, sin embargo algunos de los informantes residen en otros municipios del área metropolitana, considerando que el ámbito de interacción de los ciudadanos de la metrópoli se extiende a los municipios conurbados, entre los cuáles cotidianamente se establecen intercambios laborales, culturales, comerciales, financieros, políticos, educativos, etc. Las personas pueden residir en un municipio, laborar, estudiar y divertirse en otros, simplemente mencionemos que diversifican sus actividades.

La investigación se llevó a cabo en tres momentos que responden a diversos objetivos, enfoques metodológicos y niveles analíticos:

El primer momento propone un trabajo teórico, que a partir de la revisión de fuentes bibliográficas y documentales permita establecer los principales modelos teóricos acerca de la ciudadanía que se han construido a lo largo de la historia del pensamiento político- filosófico y de las experiencias a través de diversas prácticas y caracterizar sus atributos representativos en el

nivel conceptual. Se analizaron también las tipologías de los derechos que conforman los modelos de ciudadanía y los ideales democráticos y cívicos que se establecen en ellas.

El segundo momento se interesó por recolectar las representaciones sociales de la ciudadanía en el Monterrey actual, explorar la construcción social del imaginario colectivo acerca de los modelos de ciudadanía, así como de los valores que se le atribuyen. Se realizó trabajo de investigación de corte cualitativo, recabando información de los actores sociales representativos del momento presente. El tercer momento se interesó por analizar las prácticas ciudadanas concretas y contrastarlas con los modelos teóricos y con las representaciones sociales. Para tal fin se analizaron algunos indicadores de participación ciudadana.

Para recabar información sobre las representaciones y prácticas sociales sobre ciudadanía y de acuerdo con la metodología propuesta por Jean-Claude Abric (2001) para captar las representaciones sociales, se aplicaron cuestionarios a la población adulta de la ciudad de Monterrey, hombres y mujeres, de los distintos estratos socioeconómicos y culturales. Esta metodología propone trabajar a partir de asociación libre, relacionada con determinados conceptos, así como también a través de ejercicios de jerarquización (“tris jerarquizados”) que permiten encontrar el núcleo central de las representaciones sociales.

Se buscó un análisis que a través de una “descripción densa”, permita caracterizar a la sociedad civil en lo relativo a sus representaciones sociales, formas de organización y participación política ciudadana y evaluar los valores y la jerarquía que hoy en día se ponen de manifiesto en sus prácticas concretas. En términos generales, se pretende captar información acerca de la participación ciudadana y valorarla. Lo anterior, para estimar de qué manera la participación de los diversos actores sociales está en posibilidades de apoyar al logro de una

sustentabilidad de la región, así como su posible promoción del desarrollo nacional e internacional.

La investigación a través de la comprensión de los modos de organización y operación, así como de los resultados de la participación de la sociedad civil, puede aportar al fomento de nuevas formas, comprometidas con la convivencia armónica, respetuosa y corresponsable entre los seres humanos y para con el entorno, fundamentadas en valores éticos, en el bien común y en el respeto de los derechos sociales, civiles, políticos y medioambientales. Al mismo tiempo, como resultado del presente estudio es posible aportar información sobre experiencias exitosas en el diseño y operación de programas para el desarrollo social y económico, así como políticas públicas.

Se tomaron como punto de contrastación de los resultados obtenidos, algunos modelos de ciudadanía que evidencien indicadores de participación ciudadana.

Entre los principales resultados y conclusiones de la investigación, las representaciones y prácticas sociales sobre ciudadanía recolectadas muestran que el modelo de sociedad civil que se presenta actualmente en Monterrey, es un modelo primordialmente comunitarista⁸, que conserva algunos rasgos de la perspectiva libertaria. Asimismo, evidencian una ciudadanía muy inmadura políticamente pues tiene un conocimiento limitado de sus derechos y por la misma razón no los ejerce ni puede exigir su observancia, por encima de los derechos prioriza el cumplimiento de sus obligaciones y el respeto a las leyes. Se manifestó también una gran falta de participación en actividades políticas, que se concibe básicamente como ejercicio del sufragio, pues su concepción de la democracia es también limitada a este ejercicio electoral.

⁸ El Comunitarismo es una filosofía, una ideología y un sistema político. Como filosofía política se opone a algunos aspectos del liberalismo, principalmente al individualismo. Destaca la importancia de las comunidades en la definición y formación de los individuos. Enfatiza el derecho de las mayorías de tomar decisiones que afecten a las minorías.

Los hallazgos se presentan en la sección correspondiente del capítulo tercero que se ocupa de la metodología empleada y los resultados obtenidos.

II. Ciudadanía y democracia. Aproximaciones a su conceptualización, a su historia y sus modelos.

2.1. Conceptos y fundamentos de la ciudadanía

2.5.1 ¿Qué es ciudadanía?

En el presente apartado me interesa reflexionar en torno al concepto de ciudadanía, que como podremos examinar con mayor detenimiento, es una noción compleja. Comprender la complejidad de la noción de ciudadanía, resulta fundamental, a fin de estar en condiciones de caracterizar los tipos de ciudadanía que se presentan en las representaciones y en las prácticas sociales de Monterrey y su área metropolitana y valorar su factible contribución al logro de una democracia verde.

La ciudadanía es un tema que tiene una larga historia en los debates teóricos de filósofos y politólogos y que ha resurgido con gran fuerza en la actualidad al examinar las distintas formaciones políticas que se han experimentado históricamente y al analizar los elementos imprescindibles para la construcción de sociedades e instituciones democráticas. La ciudadanía hace referencia a las diversas formas de vida y relación de los seres humanos en sociedad y a sus posibilidades de participación en los asuntos de interés para el desarrollo de su vida cotidiana, tanto individual como colectiva.

Presentar con claridad y precisión el concepto de ciudadanía es difícil; si se le considera en sentido amplio, resulta complejo, ya que tiene fundamentos filosóficos, jurídicos, sociológicos y antropológicos, e involucra diversas dimensiones. Afirma Heater que la ciudadanía es más que

una mera cuestión de Derecho constitucional, ya que atañe también a los sentimientos de los ciudadanos respecto a sus compromisos cívicos (Heater, 2007: 184).

“La ciudadanía es una construcción histórica, política, social y cultural que ha tenido un desarrollo progresivo en determinados momentos históricos.” (Silva, J.C. 2009: 1)

Según Thomas Marshall, “La ciudadanía es aquel estatus que se concede a los miembros de pleno derecho de una comunidad. Sus beneficiarios son iguales en cuanto a los derechos y obligaciones que implica.” (Marshall, Th., 1996: 6)

En los actuales Estados-nación, la ciudadanía es un estatus legal que se concibe como sinónimo de nacionalidad, pues los residentes de un país son ciudadanos o extranjeros. La ciudadanía efectiva implica el reconocimiento de los derechos civiles, políticos y sociales, que la teoría liberal ha propuesto. La ciudadanía es un título de identidad jurídico-política.

Es posible afirmar, que debido a que el ejercicio de la ciudadanía implica las interacciones entre los seres humanos y para con el medio ambiente en su totalidad, dicha experiencia entraña el establecimiento de relaciones entre la ética y la política. Todo ser humano requiere tomar decisiones que competen a su individualidad, así como a la colectividad, ya que la organización social se orienta a la búsqueda del bien común, la justicia y la equidad y requiere velar también por la garantía a los derechos y libertades individuales. Así, con relación a los diversos alcances que involucra, es fundamental al concepto de ciudadanía, la dimensión ético-política, ya que se interesa por reflexionar en torno al sujeto moral y sus relaciones con el sujeto político.

Actualmente, al reflexionar acerca de la ciudadanía, es imprescindible repensar la esfera pública en que se entrelazan en forma indisoluble, los ámbitos jurídico, político y ético. Acerca de esta relación, sostiene Rafael Aguilera que la política es el ámbito decisivo y privilegiado que

determina nuestra existencia comunitaria y personal y la práctica de la ciudadanía está íntimamente ligada a la existencia de una esfera pública en la que los miembros de la sociedad civil pueden convivir como ciudadanos y actuar colectivamente para resolver democráticamente los asuntos relativos a su vida en comunidad (Aguilera, R., 2006: 7-8).

Al respecto, plantea Carlos Cullen que existe siempre una relación entre las dimensiones ética y política, por lo que considera que la madurez moral y la buena ciudadanía son categorías con algún tipo de correspondencia. Señala también que la ciudadanía ha estado históricamente vinculada en la memoria, con la posibilidad de reducir el malestar generado por la convivencia humana, mediante la búsqueda del bien común, a través de la deliberación de la razón. De esta manera, la ciudadanía se concibe como condición de posibilidad del bienestar, ya que regula la convivencia humana a través de normas y leyes que enseñan en qué consiste el bien común, defienden la paz interior y exterior y garantizan los derechos que posee todo ser humano por el hecho de ser naturalezas racionales e individuos libres e iguales. (Cullen, C. 2007: 11-18)

Según Jorge Alonso y Enrique Valencia (2008: 2), la ciudadanía está constituida por derechos humanos (civiles, políticos, sociales y culturales/ambientales) reconocidos internacionalmente, instituciones sólidas que los promuevan y defiendan e instrumentos idóneos de exigibilidad y justicia en manos de los ciudadanos. Asimismo, son complementarios a la constitución de la ciudadanía, el estatus o reconocimiento estatal y el sentimiento de pertenencia a una comunidad política, la conciencia de los derechos y responsabilidades correspondientes a dicha comunidad y la realización de las prácticas consiguientes, así como la existencia de instituciones políticas que protegen los derechos y regulan las responsabilidades ciudadanas.

2.1.2. Ciudadanía e identidad

Parto del planteamiento de Derek Heater acerca de que la ciudadanía es una forma de identidad sociopolítica, que se ha presentado de diversas maneras a lo largo de la historia de las organizaciones sociales y formaciones políticas, producto siempre de una relación básica que implica que los individuos ostentan un estatus determinado, sentimientos particulares hacia dichos vínculos, así como un comportamiento adecuado a tal relación y expresan su disposición por luchar en defensa del sistema. (Heater, D. 2007: 11-12)

Aquiles Chihú define a la identidad como: “...un proceso de construcción simbólica de identificación-diferenciación que se realiza sobre un marco de referencia: territorio, clase, etnia, cultura, sexo, edad.” (Chihú, A. 2002: 5) A partir de esta conceptualización es posible afirmar que la identidad está relacionada con la pertenencia. En relación a la ciudadanía como identidad, Aguilera (2006: *) afirma que su sentido y su alcance nos remiten a una identidad política, jurídica y social compleja y plural; por lo anterior es posible afirmar que se trata de una construcción simbólica que permite la identificación y la diferenciación de los individuos, a partir de aspectos políticos, jurídicos y sociales.

Para Carlos Thiebaut, lo que nos hace ciudadanos es la pertenencia a una “...colectividad de individuos, organizada de acuerdo con determinadas creencias, normas y procedimientos que coordinan la acción común y las acciones individuales para afrontar problemas y solventar conflictos: lo que hemos venido denominando espacio o esfera pública.” (Thiebaut, C., 1998: 24)

De esta manera, lo que determina la ciudadanía es el pertenecer a y mantener aunque sea de manera crítica e incluso transformadora, una comunidad epistémica⁹, normativa y procedimental, lo que implica que la pertenencia no es pasiva, sino al contrario, el ciudadano se

⁹ Comunidad epistémica en el sentido que le asigna el filósofo Luis Villoro en su texto Creer, saber, conocer. Una comunidad de científicos que comparten un paradigma.

hace, haciendo su ciudad, es fuente de las acciones en las que participa y que lo constituyen como sujeto libre, igual y solidario. “...La propia identidad política (<<ser ciudadano>>) es resultado no tanto de lo que tenemos (cómo tenemos asignado un sistema de libertades, cómo estamos insertos en las estructuras de la riqueza y de poder, cómo coordinamos nuestras acciones) cuanto de lo que hacemos: del ejercicio que es nuestra participación en aquello que hacemos, la ciudad.” (Thiebaut, C., 1998: 25) De ahí que el continuo debate entre filosofía moral y política se presenta al analizar las formas y los motivos de las acciones a través de las cuales nos hacemos ciudadanos como parte del hacer político.

Sostiene Carlos Cullen, por su parte, que la naturaleza de las categorías ético-políticas determina que se pongan en juego al mismo tiempo la pretensión de universalidad, una fuerte dependencia respecto a las tradiciones y contextos socioeducativos particulares y una toma de posición personal. En tanto la ética y la política son disciplinas históricas, los significados acerca de la buena ciudadanía y la madurez moral, también lo son. La ciudadanía es, entonces, una construcción histórica que responde a luchas y reivindicaciones muy concretas en contextos específicos diferentes.

Plantea Rafael Aguilera que las principales características del concepto de ciudadanía son la participación, la titularidad y el ejercicio de los derechos y la pertenencia. Un ciudadano participa e interviene en mayor o menor medida en la vida pública, también es un sujeto titular de ciertos derechos y deberes correspondientes que ejerce en la esfera citada, y por último, es alguien que pertenece a una comunidad (no es un extranjero, ni mero residente). La ciudadanía implica la lucha por la pertenencia a una comunidad y participación en la misma, su análisis abarca el examen de los modos en que los diferentes grupos pugnaron por conquistar grados de

autonomía y control sobre sus vidas en oposición a las distintas formas de jerarquía, estratificación y opresión política.” (Aguilera, R., 2006: 8)

La primera referencia a la ciudadanía en nuestra memoria histórica es “la pertenencia a un espacio determinado, la polis, que por ser ése y no otro, nos hace universales, en tanto realiza la racionalidad política misma...el centro del poder universal reside en la determinación particular de ser el poder de una ciudad determinada como <<la ciudad>>” (Cullen, C., 2007: 19) En esta concepción, la pertenencia a un contexto define la ciudadanía.

El origen del concepto de ciudadanía se remonta según Pérez Ledezma (2000) a Grecia clásica. Las nociones de ciudadanía, hemos dicho, están determinadas por el contexto, así en la Grecia antigua, el ciudadano era el que participaba en la vida pública, dicho título se asignaba a la clase de los patricios y los distinguía como aquellos que podían gestionar los asuntos del Estado en relación con los plebeyos quienes únicamente podían obedecerlo y con los esclavos que no tenían derechos civiles.

En la Roma republicana e imperial, ciudadanía hacía referencia a una condición legal. Tradicionalmente la noción de ciudadanía estaba asociada con el habitante de la ciudad: *civis Romanus*. Sin embargo definir a la ciudadanía como un grupo de ciudadanos que disfrutaban derechos limitados dentro del contexto de una ciudad determinada, es simplista (Torres, C., 2001: 131) El análisis histórico permite captar diversas concepciones acerca de la formación de la ciudadanía que tienen en consideración si fue el resultado de estrategias de la clase dominante o de las luchas de clases sociales, es decir si fue una formación desde arriba o desde abajo.

Carlos Cullen, en su texto: *El malestar en la ciudadanía* (2007) presenta un análisis de distintas concepciones acerca de la ciudadanía, que a continuación expongo en forma resumida.

Menciona que las formaciones y concepciones acerca de ciudadanía difieren de acuerdo a tradiciones legales, así como a sistemas políticos distintos. Las formas de ciudadanía son jerarquizadas de acuerdo con la mayor o menor cercanía que tengan las funciones sociales respecto a la idea de bien.

Desde Platón y Aristóteles la posibilidad de vivir bien es posible gracias a la polis que permite a los seres humanos satisfacer sus necesidades vitales. La politeia es la organización social que hace libres a sus miembros mediante el ejercicio de la ciudadanía, ya que la participación es considerada como el bien universal. Asimismo, la condición de la ciudadanía se funda en la posibilidad que tienen los seres humanos mediante la razón y la palabra para acostumbrarse a deliberar a fin de elegir el bien o justo medio, de esta manera los ciudadanos son agentes virtuosos que eligen entre los distintos modos de vida buena y se alejan de la condición animal.

En este mismo análisis, señala el citado autor que esta concepción del ciudadano en relación con la pertenencia a un contexto, como actor social, se transformó como consecuencia de la crisis del helenismo. La identidad social dejó de definirse por pertenecer a una polis, a un grupo de amigos reducido o en el otro extremo a la total amplitud del cosmos, como consecuencia las virtudes ciudadanas perdieron importancia y en su lugar la individualidad y la interioridad ética se colocaron en primer plano, así la felicidad como valor quedó por encima de la justicia. Cullen considera que en la actualidad la forma de concebir la ciudadanía ha cambiado nuevamente, pues ya no se determina por la pertenencia a la polis sino que se define desde el círculo reducido de los amigos o desde el hiperciudadano cosmopolita.

A partir del análisis histórico acerca de las formaciones políticas, sostiene Derek Heater (2007 **), que es posible distinguir cinco formas principales de identidad sociopolítica o

ciudadanía que los seres humanos podemos experimentar, las cuales están en relación con los sistemas monárquico, feudal, tiránico, nacional y ciudadano y pueden coexistir en forma armónica o bajo el dominio de alguna de ellas sobre las otras. A continuación presento las principales características que Heater establece para dichas formas de ciudadanía.

En el feudalismo la relación era jerárquica y los vínculos se daban entre el señor y el vasallo, éste último ocupaba la base de la pirámide y su función era de servicio, mientras que el primero se colocaba por encima y cumplía la función de protección; la función que el individuo realizaba estaba de acuerdo con la clase social. En un sistema monárquico el único dirigente era el monarca que se distinguía de todos los demás habitantes de la sociedad, de quienes se esperaba únicamente obediencia pasiva y lealtad al sistema y a quien lo personifica, convirtiéndose en súbditos.

La tiranía es entendida como cualquier clase de sistema autoritario, incluyendo las dictaduras y los totalitarismos modernos, es una concepción distorsionada del poder de una sola persona que degrada la posición de los individuos quienes tienen que demostrar amor activo hacia la figura del tirano a fin de apoyar su régimen. A los habitantes de la sociedad únicamente se les solicita el apoyo pleno al tirano.

La identificación de los individuos a la nación implica que se reconocen como miembros de un grupo cultural y a éste sentimiento se asocia el amor al país y a sus tradiciones de las cuales están conscientes. A los individuos se les exige ser fieles a lo que ha convertido a la patria en “algo grande”. Las relaciones se establecen entre grupos.

En la ciudadanía la relación se da entre el individuo y el Estado, de acuerdo a la idea que se tenga del segundo. La identidad cívica es consagrada en los derechos que el Estado concede a los

ciudadanos individuales y en los deberes que éstos, como personas autónomas en igualdad, deben cumplir. Los buenos ciudadanos deben mostrar lealtad al estado y responsabilidad al atender sus obligaciones, por lo cual requieren una formación para dicha participación cívica. “...los conceptos de autonomía, igualdad de clase y participación ciudadana en los asuntos del pueblo, distinguen en teoría, a la ciudadanía de otras formas de identidad sociopolítica...” (Heater, D., 2007:13)

Las bases para el desarrollo y consolidación de una ciudadanía constitucional, son los derechos humanos: civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, aunados al concepto de democracia. Así un enfoque integral de la ciudadanía debe partir de un sistema de derechos políticos, sociales y económicos, constitucionalmente garantizados y efectivos para todos los miembros de una comunidad política. “Los derechos fundamentales, tanto los que garantizan libertades individuales como los de participación política, fundamentan ese estatuto de ciudadano...que se ha vuelto autorreferencial, en la medida en que habilita a los ciudadanos unidos democráticamente a conformar su propio estatus mediante la auto legislación.” (Aguilera, R., 2006: 9)

Asociados con los modelos de democracia y de sociedad civil, existen tres modelos primordiales de ciudadanía: republicano, liberal y comunitarista.¹⁰ Las características del ciudadano en cada uno de ellos son las siguientes:

El ciudadano republicano

1. Participa activamente en la democracia representativa y/o directa (asume funciones políticas)

¹⁰ La información sobre estos tres modelos fue obtenida del Foro de discusión sobre la ciudadanía llevado a cabo por el ITESM, agosto de 2004

2. Conoce y respeta los fundamentos constitucionales de su comunidad
3. Rechaza el consumismo y la privatización de la vida pública
4. Participa en debates sobre el bien común
5. Sabe manejar el conflicto de visiones e interpretaciones
6. Antepone el bien público sobre el bien privado, la comunidad política a la social
7. Antepone las relaciones de igualdad cívica a las del clientelismo y paternalismo
8. Busca solucionar el problema de la desigualdad social

El ciudadano liberal:

1. Se reconoce como persona moral, racional y razonable.
2. Reconoce la inconmensurabilidad de las concepciones del bien (tolerancia).
3. Reconoce que la libertad de cada una de las personas es fuente de reivindicaciones políticas.
4. Reconoce la coexistencia de la identidad privada (racionalidad) y la pública (razonabilidad), sin jerarquizar.
5. Utiliza la razón pública en sus reivindicaciones políticas.
6. Hace demandas responsables sobre los bienes primarios.
7. Reconoce que los recursos del Estado no pueden ser usados para promover una concepción particular del bien.
8. Es libre de no participar en la vida pública si vive en una sociedad bien ordenada.

El ciudadano comunitarista:

1. Reconoce la prioridad de los deberes frente a la comunidad sobre los derechos individuales.

2. Asume responsabilidad sobre la conservación (evolución) de la comunidad histórica.
3. Es patriota.
4. Reconoce la existencia de deberes especiales para con la comunidad inmediata.
5. Promueve relaciones de amistad, amor, cuidado y buena vecindad.
6. Participa en labores del voluntariado y proyectos vecinales.
7. Es miembro activo de las asociaciones, clubes e iglesias.

2.1.2.1 Identidad y representaciones sociales

En tanto construcción social e histórica, la ciudadanía es también una construcción simbólica. Diversos autores señalan este aspecto en el que participan los aspectos imaginarios, las representaciones colectivas, además de la posición y circunstancias propias del individuo. Los diversos conceptos acerca de la ciudadanía son construcciones simbólicas colectivas, como afirma Augusto Romano: “Allí debería dejarse ver la categoría de ciudadano...Intrincado en la imagen está el lenguaje.” (Romano, A., 2007: 127)

Los intentos por explicar la ciudadanía como forma de identidad, han generado diversos modelos simbólicos atendiendo a su historia y a la esencia que se le atribuye. La ciudadanía es: “...un imaginario socio-jurídico producto de una paulatina y progresiva conquista de derechos fundamentales.” La noción de imaginario social propuesta por Cornelius Castoriadis, refiere al conjunto de significaciones imaginarias sociales que instituye un grupo de individuos de una colectividad, que generan una subjetividad social compleja (Castoriadis, C., vid en, Aguilera, R., 2006: 8)

Al analizar la construcción de la noción de ciudadanía en la historia de la filosofía, Augusto Romano critica que se ha dado primacía a la razón pura como rasgo constitutivo de la

misma. Exaltar la razón ha generado que se desvincule al cuerpo de dicha construcción y ha conducido además a la individualización, concepto que describe el encerramiento sobre sí mismo de una subjetividad escindida por lo otro, en soledad. Considera que la filosofía requiere hacer pensar sobre los múltiples sentidos que se encuentran detrás de las construcciones conceptuales, imágenes, representaciones, una provocación a los sentimientos humanos. (Romano, A., 2007: 122)

Plantea Romano que la noción de ciudadanía se constituye en un primer momento, individualmente e implica partir de la vinculación del cuerpo en un espacio y tiempo concretos, en los que se posiciona. La realidad se estructura mediante posiciones y el pasaje al espacio común donde hay acción y ubicaciones, que se habita, se siente, el cual es compartido por los otros, implica hablar de ética y cuando se extiende a lo más común se hablará de política.

El mismo Romano (2007: 130) plantea que la construcción de tipos, formas o modelos de ciudadanía y ciudadano, es una historia de la conciencia, la experiencia del camino hacia la autoconciencia. Es un proceso dialéctico de afirmaciones, negaciones y superaciones en el que se desenvuelven todas las cosas, dicho proceso abarca la totalidad de lo real, lo que implica el cuerpo, de ahí las figuras con sentido, en otros términos, las representaciones. El ciudadano es un sujeto histórico que como parte de su proceso histórico se va apropiando de sí, se va autorizando.

La construcción de los modelos de ciudadanía es un proceso psicosocial que opera y se expresa principalmente a través del lenguaje, afirma Romano, que a partir de la representación inconsciente se lleva a cabo la construcción de mitos, novelas, teorías, de todo aquello que intenta explicar lo que al comienzo parece inexplicable. Esta construcción se realiza en el plano individual con "...lo propio de cada sujeto, pero en lo social, pareciera que,... hay imágenes de lo ciudadano que se repiten en las frases, esas no parecen ser tampoco recortes de imágenes

cualquiera, sino aquellas que entran a los sujetos.” (Romano, A., 2007: 137) Se habla con un lenguaje heredado, somos sujetos de lenguaje, a través de él se realiza una identificación simbólica, toda realidad es un montaje de lo simbólico e imaginario en una construcción histórica en la que, reitero, también participan la experiencia y los factores personales.

“El cogito es evanescente. Si bien se puede decir que cada uno construye su fantasma, también se puede decir que necesariamente están los otros para ubicarse simbólicamente, con lo cual se empieza a quebrar lo puro individual, porque se trata de ubicaciones en escenas donde hay otros. Esto ocurre desde temprano en la vida de los hombres; diríamos que es mítico.” (Romano, A., 2007: 129) En muchas ocasiones tales significados se confunden con un discurso vacío, formal, ideológicamente cerrado y dogmático.

“Referido a la ciudadanía, diríamos que se puede abrir por muchísimos lados, si uno se toma la licencia de ir traduciendo algunas de estas cosas en clave social. Aparecería lo ciudadano a partir de una cohesión identificatoria simbólica e imaginaria, pero que se construye a partir de enigmas y que responde al lenguaje heredado (que no se opone a crear). Esas construcciones pueden ser soporte de muchas vivencias históricas: deseos, ideales, pérdidas, duelos, identidades, diferencias, miedos, culpas, etc., y entre las cuales se encuentra la posibilidad de estar respondiendo a otro, que puede ser un amo o no” (Romano, A., 2007: 139)

Presentación narrativa del problema de la ciudadanía, *urbi et orbi*, *orbi et urbi*, globalizada y excluyente, Carlos Cullen propone rescatar los siguientes temas para profundizar en ellos:

- a) La ciudadanía como concepto. Es decir como función de unidad, metafísica, trascendental, histórica. El tema es la representación, y su relación con el nombre propio,

con el “yo pienso”, con el juego que busca necesariamente al concepto, con la tensión, con el símbolo, con la diferencia.

- b) La ciudadanía como personaje. Es decir como cumplimiento de un rol que aparece y desaparece con los escenarios y los particulares textos escénicos escritos: votar, trabajar, viajar, estudiar, comerciar, litigar, etc. El tema es también la representación, pero en relación con el ejercicio de derechos, o las garantías de defensa o la legitimidad de reclamos.
- c) La ciudadanía como fantasma. Es decir como tránsito de lo singular a lo social, de lo real a lo simbólico. El tema es el deseo del otro, como genitivo, objetivo y subjetivo, y que coloca la cuestión de la ciudadanía dentro del “malestar en la cultura” y dentro de la estrategia de “la lógica de lo sensible” en la relación con el mundo y los otros.
- d) La ciudadanía como disciplina. Es decir como “sistemas en la dispersión” de las múltiples formas específicas de relacionar el saber con el poder. El problema es, justamente, el poder, que en las formaciones ideológicas discursivas excluye o incluye, permite y prohíbe, premia y castiga.
- e) La ciudadanía como derecho, es decir, como autonomía de la libertad, que se enfrenta – simplemente por estar- con toda otra ley, natural o social, que es planteada como diferente de la ley racional. El tema es el de la dignidad, en tanto exige ser reconocida como atributo de igualdad simple o compleja.
- f) La ciudadanía como pertenencia, es decir, inclusión cultural, que se enfrenta, simplemente por estar, con toda otra forma de inclusión cultural que no sea la propia. Es el problema de

la identidad, que implica la contextualización y la vinculación con una tradición, un lenguaje, un territorio.

- g) La ciudadanía como resistencia, es decir, lucha por la hegemonía, tanto en la representación como en el deseo, como en el poder, como en la dignidad. Es el problema del reconocimiento, que implica la denuncia de la falacia cívica, que consiste en pretender deducir las formas de la convivencia de un pensamiento único, etnocéntrico, represor, violador y excluyente.
- h) La ciudadanía como vulnerabilidad, es decir como responsabilidad ante la interpelación del otro en cuanto otro, no el otro del deseo, ni el otro ilusorio del poder. Se trata del problema de la justicia, que implica la fragilidad de todo intento de totalización, porque siempre hay una exterioridad interpelante que genera un lazo social atravesado por un tercero, que hace que la relación sea absoluta, es decir, absuelta de la relación misma, pero en el plano experiencial del contacto, la palabra, el cuerpo, la sensibilidad y la misma inteligencia, impidiendo reducir las posibilidades de la convivencia a meras intenciones trascendentales para significar el mundo de la vida.

La ciudadanía es una categoría densa, porque es histórica, porque es compleja y, sobre todo, no puede reducirse ni a un concepto, ni a un personaje, ni a una fantasía, ni a un derecho, ni a una pertenencia, ni a una resistencia. Se trata de resignificar esos tópicos presentes en la densidad de la ciudadanía, desde la vulnerabilidad que la define, ya que nos convierte en responsables y rehenes de los otros. (Lévinas, E. en Cullen, C., 2007: 42)

2.6 Historia de la ciudadanía. Antecedentes y transformaciones.

2.6.1 Algunos significados históricos del concepto de ciudadanía y sus atributos esenciales.

Se ha señalado que la ciudadanía es tanto una construcción simbólica como histórica. En el capítulo anterior se analizaron sus aspectos simbólicos y en este apartado se presenta un breve recorrido histórico alrededor de las principales concepciones acerca de la ciudadanía con la intención de mostrar cuáles han sido sus transformaciones, los diversos valores asociados, los derechos que se han ido conquistando y las obligaciones correspondientes. El análisis histórico permite captar diversas concepciones acerca de la formación de la ciudadanía que tienen en consideración si fue el resultado de estrategias de la clase dominante o de las luchas de clases sociales, es decir si fue una formación desde arriba o desde abajo.

Se presentan a continuación, algunos de los significados más importantes y representativos que ha adquirido el concepto de ciudadanía a lo largo de la historia. Sin embargo, es necesario trascender las consideraciones meramente históricas y legales en el análisis de la concepción de la ciudadanía. Asimismo, no debemos limitar la noción de la ciudadanía a la de un estatuto personal, combinación de derechos y obligaciones que detentan todos los miembros legales de un Estado-nación. (Torres, C., 2001: 132)

El origen del concepto de ciudadanía se remonta, según Pérez Ledezma (2000) a la Grecia clásica. Las nociones de ciudadanía, hemos dicho, están determinadas por el contexto, así en la Grecia antigua, el ciudadano era el que participaba en la vida pública, dicho título se asignaba a la clase de los patricios y los distinguía como aquellos que podían gestionar los asuntos del Estado en relación con los plebeyos quienes únicamente podían obedecer y con los esclavos que no tenían derechos civiles.

Se considera que Esparta creó la noción de ciudadanía que en la actualidad asociamos con derechos liberales y debate político (Heather, D. 2007). Un sector de sus habitantes alcanzó el estatus de la ciudadanía: la élite militar: *espartiatas*, que convirtió prácticamente en esclavos

(hilotas) a los mesenios y a los habitantes de otros pueblos, apropiándose de sus tierras, los ciudadanos llevaban una vida austera y estaban dispuestos a sacrificarse por el bien de la ciudad. Los espartanos realizaron diversas reformas constitucionales, sociales y económicas que permitieron formalizar dicha clase de ciudadanos privilegiados y conscientes de sus deberes.

Se establecieron diversos atributos esenciales para ser considerado un ciudadano de acuerdo al modo o estilo espartano de ciudadanía: el principio de igualdad (*Homoioi* o iguales), la posesión de una fracción de terreno público, la dependencia del trabajo de los esclavos (hilotas), el ser sometidos a un estricto régimen de educación y entrenamiento, practicar la celebración de banquetes comunes, realizar el servicio militar, ejercer la virtud cívica mediante el cumplimiento de la ley y participar en el gobierno del estado (Asamblea).

Este modelo de ciudadanía ha sido criticado por las siguientes razones:

El estilo de ciudadanía espartano concedía muchos privilegios y estaba sustentado en la explotación de la clase marginada de los hilotas. El hecho de brindar tanta importancia al entrenamiento y la condición militar para mantener a los ciudadanos en condiciones físicas adecuadas para ejercer el control, determinaba que se primara como virtud a la fortaleza y se distorsionaba de esta manera la esencia de la condición cívica. Existían además inequidades entre los propios espartiatas pobres y ricos que impedían el logro de la igualdad.

La primera referencia a la ciudadanía en nuestra memoria histórica es “la pertenencia a un espacio determinado, la polis, que por ser ese y no otro, nos hace universales, en tanto realiza la racionalidad política misma...el centro del poder universal reside en la determinación particular de ser el poder de una ciudad determinada como <<la ciudad>>” (Cullen, C., 2007: 19) En esta

concepción, desarrollada por primera vez en Atenas, la pertenencia a un contexto define la ciudadanía.

Platón (428-347a.C.) estaba en contra de la brutalidad impuesta por el modelo espartano pero elogiaba la estabilidad, el sentido del orden, la austeridad y la entrega del estilo de vida espartano y estaba de acuerdo también con la división del trabajo. En *La república*, proponía un estado ideal en que la ciudadanía estaba dividida en tres clases: la de los gobernantes o dirigentes, los soldados o defensores y los productores o profesionales, hombres de negocios y trabajadores. Los productores constituían una ciudadanía de segunda clase, pasiva, de la que no se esperaba en principio, participación en los asuntos públicos.

En *Las leyes*, plantea otro modelo en el que los ciudadanos están exentos del trabajo que genera dinero, los negocios y oficios están en manos de extranjeros que carecen de la condición de ciudadanos, los siervos trabajan la tierra. La ciudadanía es una condición que se hereda y existen cuatro clases de ciudadanos de acuerdo con su riqueza. Establece un sistema de representantes que no es homogéneo sino proporcional a la riqueza de cada clase social.

Asimismo, otras propuestas antidemocráticas consisten en confiscar las riquezas a quienes no tienen derecho al voto y la existencia de cargos públicos a los que sólo pueden acceder las clases superiores, por todo ello, los más pobres tienen pocos incentivos y posibilidades de participar en la vida política. Las virtudes ciudadanas son el respeto al sistema sociopolítico y a las leyes y el ejercicio del autocontrol, en general las que buscaban la armonía civil. Platón buscaba diseñar un estado ideal.

Aristóteles (384-322 a.C.) tampoco está de acuerdo con el militarismo espartano y considera además que en la práctica de la vida cívica de Esparta se daba una gran polarización

entre ciudadanos ricos y pobres. Se interesaba por analizar cómo estaba constituida realmente la ciudadanía y qué principios le subyacían. Postula la naturalidad de la vida cívica, asimismo que hay un mínimo común denominador de ciudadanía válido para todos los Estados y reflexiones sobre la virtud cívica.

A partir de lo anterior, pretendía encontrar una definición de la ciudadanía aceptada universalmente y para ello requiere explicar algunas categorías periféricas que incluyen ciudadanos extranjeros residentes con acceso a los tribunales del estado; ciudadanos sin derecho a voto; jóvenes o ciudadanos sin desarrollar y ancianos o inhabilitados. La forma en que se constituye el estado determina a quiénes se considera ciudadanos. A medida que el individuo se desarrolla tiene mayor potencial para participar en los asuntos de la polis.

Ciudadano es, según Aristóteles, el que puede mandar y ser mandado, el que puede compartir el poder deliberativo y judicial. Así, Aristóteles entiende la ciudadanía como involucramiento total por parte de los individuos, la determinación de quienes son ciudadanos y la forma del mandato dependen de la forma en que se constituya el Estado. Una buena constitución garantizaría que la función ciudadana operara en beneficio de todos.

Aristóteles propone dos formas de participación: la política y la judicial. El ciudadano por medio del debate participa en la elaboración de políticas y leyes; lleva a cabo juicios para que las mismas sean operativas. La participación directa requiere un Estado pequeño y un reducido número de ciudadanos que permita que se conozcan entre sí y que trabajen en concordia.

Concibe a la virtud cívica compuesta por cuatro elementos: templanza o autocontrol, justicia; valor, el cual contiene el patriotismo y la sabiduría o prudencia; virtudes que a su vez implican la capacidad de juzgar. Plantea que todas estas virtudes deben desarrollarse por medio

de la educación. A finales del siglo VI con las reformas realizadas por Clístenes, se inicia la vida democrática en Atenas.

En resumen, las formaciones y concepciones acerca de ciudadanía difieren de acuerdo a tradiciones legales, así como a sistemas políticos distintos. Desde Platón y Aristóteles la posibilidad de vivir bien es posible gracias a la polis que permite a los seres humanos satisfacer sus necesidades vitales. “La buena vida” desde Platón y Aristóteles, supone ser un buen ciudadano, así la ciudadanía es la marca de una organización social que hace libres a sus miembros: la politeia es la organización social bajo la determinación del bien universal, el bien puede pensarse como estricta participación en lo uno o como referencia proporcional al uno. (Cullen, C., 2007: 11)

Así, plantea Aristóteles en La Política que: “La comunidad perfecta es la polis..., surgió para satisfacer las necesidades vitales del hombre, pero su finalidad es permitirle vivir bien...El hombre que, naturalmente y no por azar, no viva en la polis es infrahumano o sobrehumano.” (Política)

En esta concepción de la ciudadanía, la relación entre ética y política está dada, ya que las formas de ciudadanía son jerarquizadas de acuerdo con la mayor o menor cercanía que tengan las funciones sociales respecto a la idea de bien. En relación a lo anterior, plantea Cullen que la condición de la ciudadanía se funda en la posibilidad que tienen los seres humanos mediante la razón y la palabra para acostumbrarse a deliberar a fin de elegir el bien o justo medio, así los ciudadanos son agentes virtuosos. Al concebir a la ciudadanía ligada a la pertenencia se marcan dos distinciones: por una parte los grados en que los seres humanos se tornan agentes en relación con la distancia que tienen respecto a la naturalidad animal y por otra parte los distintos modos de vida buena que pueden elegirse y la argumentación acerca de cuál es el mejor.

En Roma, en los primeros años de la República, la lucha de los plebeyos que exigían los mismos derechos que disfrutaban los patricios, tuvo éxito y logró el reconocimiento de los esclavos y de los habitantes más remotos del imperio. En consecuencia se determinaron diversos grados de ciudadanía. Los rasgos que definen la ciudadanía en Roma son muy diferentes a los que la caracterizaban en Grecia.

La ciudadanía en las etapas republicana e imperial hacía referencia a una condición legal, permitía a la persona vivir bajo la orientación y protección del derecho romano, tanto en la vida pública como en la privada. La ciudadanía implicaba una serie de obligaciones y derechos, entre las primeras se encontraban primordialmente, el pago de impuestos y la realización del servicio militar. Dichas obligaciones estaban fundamentadas en el ideal de virtud cívica.

En relación con los derechos que conllevaba la ciudadanía en Roma, es necesario distinguir las esferas pública y privada. En el ámbito privado, algunos de los derechos eran el matrimonio con un miembro de una familia ciudadana, el poder comerciar con otro ciudadano, la posibilidad de pagar menos impuestos que aquellos a quienes no se les reconocía dicho estatus y la protección contra autoridades provinciales.

En la esfera pública y política, la ciudadanía asignaba el derecho a votar a los miembros de las Asambleas y candidatos a cargos políticos, tener un escaño en la Asamblea y convertirse en magistrado. En comparación con la participación ciudadana en la Asamblea ateniense, los romanos no tenían tanto poder, el que estaba en manos del Senado o los cónsules y en manos del emperador durante la época imperial.

Tradicionalmente la noción de ciudadanía estaba asociada con el habitante de la ciudad, Roma: *civis Romanus o citoyen*; sin embargo definir a la ciudadanía como un grupo de

ciudadanos que disfrutaban derechos limitados dentro del contexto de una ciudad determinada, es simplista (Torres, C., 2001: 131) Con motivo de luchas internas y afanes de conquista, la ciudadanía se hizo extensiva a los habitantes de otros poblados, que a cambio no tenían que renunciar a su forma de gobierno, posteriormente se ofreció una semiciudadanía sin voto que implicaba la carencia de derechos públicos y el reconocimiento de los derechos privados, sin embargo con el tiempo podían adquirir la ciudadanía plena. Debido a lo anterior, la ciudadanía romana adquirió características de una ciudadanía nacional, ya no ligada exclusivamente a la ciudad de Roma, sino que se concedía a todos los habitantes libres del Imperio y de acuerdo con testimonios de la época, perdió su distinción.

Cicerón, entre otros pensadores, señaló las contradicciones inherentes a la exigencia de lealtad al lugar de origen y a Roma.

Zenón originó una escuela filosófica de gran importancia: el estoicismo, de la cual se retomarán los aspectos más relevantes, relacionados con el tema que nos ocupa. Postulaba que el individuo, en tanto ser político virtuoso, debía lealtad a su Estado, así como a la ley natural universal, ya que pertenece a la *polis*: -ciudad, Estado constitucional legalmente establecido-, tanto como a la *cosmopolis*: “<<ciudad del mundo>>, una comunidad teórica, moral y universal de carácter metafórico”. (Heater, D. 2007: 75) La conciliación entre ambas lealtades, obligaciones e intereses planteaba problemas.

El estoicismo hacía gran énfasis en el cumplimiento de las obligaciones cívicas que mostrara un compromiso sin queja hacia ellas. Otra de las características del estoicismo era la concepción de la ciudadanía mundial basada en la homogeneidad de todos los hombres con fundamento en su capacidad para razonar. Para referirse a esta ciudadanía mundial se empleaba el

término *kosmopolites*, ciudadano del cosmos, del universo y empleaban la palabra ciudadano por ser la más cercana, sin pretender con ello un significado literal.

Marco Aurelio planteaba que el hecho de compartir la razón, que prescribe lo que se debe hacer, hacía posible también compartir la ley, de ahí que proponía una constitución política común a todos los hombres. Aquí reside una de las principales críticas al estoicismo, se señala una contradicción interna a esta doble ciudadanía con su exigencia de una doble lealtad a la *polis* y a la *cosmopolis*. Se revive el cuestionamiento a la posibilidad de una doble ciudadanía que Cicerón había expresado años antes.

Séneca hizo patente su comprensión de dicha dicotomía y afirmó la existencia de dos repúblicas: “una grande y verdaderamente pública en la que caben los dioses y los hombres... La otra república es aquella a que quedamos adscritos por nuestro nacimiento.” (Séneca, vid en Heater, D., 2007: 81) Sin embargo para el citado filósofo no implicaba una contradicción seria pues a la república mayor puede servírsele en la contemplación.

La forma de concebir al ciudadano en relación con la pertenencia a un contexto, como un actor social, se transformó como consecuencia de la crisis del helenismo. El epicureísmo y el estoicismo debatieron la noción de ciudadanía como ideal de vida activa deliberando en el ágora, el círculo de amigos alejados de lo público y el cosmopolitismo. La identidad social no se define por pertenecer a una polis, a un grupo de amigos reducido o en el otro extremo a la total amplitud del cosmos, como consecuencia las virtudes ciudadanas perdieron importancia y en su lugar la individualidad y la interioridad ética se colocaron en primer plano, así la felicidad por encima de la justicia. (Cullen, C., 2007: 21)

En la época medieval, en Europa, la ciudadanía tenía una importancia secundaria a diferencia de la gran trascendencia que tenía en el mundo grecorromano para el que era un modo de vida y una forma de gobierno. Únicamente en las ciudades-estado de Italia, se le asignaba importancia mayor.

Analizar la concepción de la ciudadanía y la forma en que se desempeñaba dicha función durante la Edad Media implica relacionarla con la presencia incuestionable del cristianismo en todos los ámbitos. Se vuelve a recobrar el interés despertado por Aristóteles. En la práctica suponía un privilegio en una ciudad o población, pero no en un Estado, con la salvedad de las ciudades italianas que serán analizadas en otro apartado, considerando además que su examen nos conduce al Renacimiento.

En el siglo V de nuestra era había caído el Imperio Romano de Occidente y los reinos “bárbaros” se asentaban sobre sus ruinas, por tal razón desaparecía la ciudadanía romana, al mismo tiempo que se propagaba el cristianismo y su estructura diocesana. De la misma manera, el concepto de Estado que habían desarrollado los griegos y los romanos, desapareció también, aunque de manera temporal. El Estado grecorromano era una entidad jurídica abstracta que respondía al tipo de mentalidad de los griegos y los romanos, pero no se adaptaba a las formas concretas que el pensamiento medieval prefería emplear para hacer alusión a las relaciones sociopolíticas, como es el caso de las conexiones personales.

En el Medioevo el príncipe gobernaba, los súbditos obedecían y los señores feudales dominaban a sus vasallos. En este contexto la noción y la práctica de la ciudadanía lograron perdurar aunque en forma débil, debido a la iglesia cristiana y a cierto grado de libertad urbana ajena a caciques, barones, obispos o monarcas. En la Alta Edad Media, es necesario hacer una distinción entre la teoría y la práctica de la ciudadanía.

En un principio el cristianismo no era compatible con la ciudadanía romana, ya que los cristianos no podían aceptar la religión cívica romana que por lo menos en apariencia, todo ciudadano debía profesar, cabe recordar aquí, la persecución a los devotos. Al paso del tiempo se alcanzó una mayor tolerancia y la iglesia cristiana comenzó a extenderse y consolidarse. En el año 391, Teodosio I declaró al cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, en cuya estructura piramidal uno de los estratos lo ocupaban los *civitates* o ciudadanos, recordemos que *civitas* es la palabra latina para ciudad.

Heater señala que la traducción del latín *Civitas*, por ciudad, puede ser engañosa ya que originalmente una *civitas* era un núcleo urbano rodeado por tierras de cultivo, así como de ciudades y pueblos satélites en una extensión de terreno aproximada a la de un condado inglés.

El desarrollo de la organización administrativa de la iglesia cristiana concedió a los obispos gran autoridad. Fue muy importante el hecho de que los obispos se instalaran en las ciudades romanas que ellos denominaban diócesis, lo que hizo coincidir las administraciones civil y eclesiástica. Cuando el Imperio se derrumbó, los obispos se encontraban en una posición privilegiada para ejercer el liderazgo político, además del pastoral ya que reunían a los campesinos y a los habitantes de la ciudad en una comunidad cívica que tenía una clara identidad, parecida a la *polis* griega.

“Aunque con tintes locales, el sentido de ciudadanía volvió a revivir. Más adelante, a medida que las ciudades crecían y prosperaban económicamente, la ciudadanía comenzó a distanciarse de la autoridad eclesiástica y creó sus propias instituciones cívicas laicas.”

(Heater, D., 2007: 84-85)

El cristianismo no es muy compatible con el concepto de ciudadanía, ya que se preocupa por los asuntos que no son de este mundo. Su visión de la vida difería de las creencias antiguas acerca de la ciudadanía que consideraban que la vida virtuosa se vivía en comunidad con los conciudadanos, mientras que el cristianismo planteaba, debido a la corrupción del mundo temporal, que la verdadera vida era la del Reino de los Cielos y que la vida mundana era preparación para ella, por lo que los deberes ciudadanos quedaron relegados. En la antigüedad la ciudadanía evolucionó con la creencia de que los dioses protegían a las ciudades-estado.

Tommaso D'Aquino (conocido como Santo Tomás de Aquino) considera que la vida cotidiana permite la expresión del objetivo de Dios y relaciona el cristianismo con la ciudadanía, idea que se puede aplicar al ámbito político. Retoma algunas de las argumentaciones de Aristóteles, con quien coincide en la tesis acerca de que se puede ser buen ciudadano y carecer de la virtud según la cual se es hombre bueno. Volvió a reactivar la idea del Estado y los habitantes del mismo dejaron de ser concebidos como súbditos para ser considerados ciudadanos que participan activamente en los asuntos de su Estado.

El resurgimiento de la ciudadanía municipal en la edad media, fue posible gracias a que dejó de ser relacionada con el cristianismo que obstaculizaba su práctica, ya que ésta implica que los individuos tomen la dirección de sus propias vidas. Apoyó tal resurgimiento, también, el fortalecimiento del derecho romano que concedía reconocimiento oficial al estatus de ciudadano. El logro de una libertad cívica real, debido a la emancipación del control eclesiástico y/o secular por parte de un noble en las ciudades y pueblos, fue otro factor que permitió a la ciudadanía recuperar su importancia.¹¹

¹¹ Según Derek Heater, estas tres condiciones se hicieron manifiestas con mayor fuerza en el norte de Italia durante la Edad Media y el Renacimiento.

Tomás de Aquino mantuvo, sin embargo, un compromiso en su interpretación, con respecto a la doctrina cristiana, por lo que no propuso una separación entre ciudadanía y cristianismo.

Derek Heater afirma que Marsilio de Padua (c. 1290) fue la figura medieval clave en la secularización y modernización del concepto aristotélico de ciudadanía, el cual recupera. (Heater, D., 2007: 90) Por lo anterior, devolvió a la ciudadanía el sentido secular, ya que la consideraba desligada de la relación con Dios, postulaba además, que para que se dé la estabilidad del Estado a partir de la aceptación de las leyes, éstas deben provenir de la voluntad de la totalidad de los ciudadanos o de su representación, dado que la participación directa se dificultaba cuando eran numerosos. Debido a las diferencias entre los estados europeos del siglo XIV y la *polis* griega, Marsilio se desvinculó de Aristóteles.

Bartolo da Sassoferrato (1313-1357) fue un importante jurista, tratadista y comentarista del derecho romano, el que impulsó como fundamento de la ciudadanía. Consideraba que el conjunto del pueblo debía ejercer el poder soberano en un Estado, porque es la única manera en que puede ser libre. Proponía también un sistema representativo.

Estableció los requisitos para ser ciudadano y distinguió la ciudadanía por nacimiento, de la que se concedía legalmente. A diferencia de Aristóteles, sí consideraba a las mujeres como ciudadanas, aunque con menores privilegios que los varones y sostenía que al casarse una mujer extranjera debía adquirir la nacionalidad del Estado de su marido.

El desarrollo de la ciudadanía alcanzó su mayor expresión en Italia, aunque existió también en otras ciudades y pueblos de Europa occidental. En el siglo XI la ciudadanía empezó

resurgir en algunas ciudades italianas que se oponían al control de la iglesia, primordialmente impulsada por los comerciantes que querían mayor libertad de comercio.

En los siglos XII y XIII en Europa existía una vida urbana que presentaba un sentido de comunidad (comuna) y de libertad. Tenían unos pocos miles de habitantes, lo que permitía que al igual que en la Grecia antigua, el conjunto de la ciudadanía fuera citado para consultas e informar noticias, a los que se convocaba al ayuntamiento. Dicha participación ciudadana era posible debido a que se contaba con cierto grado de libertad respecto a las autoridades eclesiásticas, a los barones y al propio rey.

Las ciudades adquirieron por medios jurídicos, las funciones que antes correspondían a los barones: poseer territorios propios y jurisdicción que ejercían a través de los tribunales, podían gravar impuestos, su propia administración formada por funcionarios y magistrados que el pueblo elegía y autodisciplina, ya que contaban con sus propios tribunales. Variaban en el concepto de ciudadanía plena, es decir el derecho de participar en la elección de cargos públicos y de presentarse como candidato y en la vinculación entre la administración civil y la gestión económica a través de los gremios en las ciudades. De manera paralela al crecimiento y consolidación de la libertad urbana y la administración civil, se desarrollaron el sentido de identidad y el orgullo cívicos constitutivos de la ciudadanía.

Las experiencias acerca del estatus de la ciudadanía en las distintas ciudades fueron diferentes. En Inglaterra la búsqueda de la autonomía de las poblaciones y por consiguiente de la ciudadanía era moderada, mientras que en Francia las ciudades se autoproclamaron como comunas autónomas, con sus propios medios de defensa, ya que contaban con ejércitos privados. Algunas poblaciones de Francia, a fines del siglo XVII tenían una forma de gobierno similar al de

la polis griega, con una Asamblea General democráticamente elegida, en la que podían participar los ciudadanos varones adultos, a la que Luis XIV puso fin.

En Inglaterra, a fines del siglo XVII y principios del XVIII, el estatus de ciudadanía sólo se conseguía en ciudades que obtenían el fuero proporcionado por el rey o por algún noble. Los fueros variaban en relación a los derechos que concedían y a las disposiciones que incluían, el beneficio de esta condición era para la comunidad y para algunas personas en lo individual, quienes disfrutaban de los derechos y obligaciones y eran denominados como ciudadanos si vivían en una ciudad o burgueses si residían en un municipio o burgo. La ciudadanía municipal implicaba responsabilidades, pero al mismo tiempo garantizaba ciertas libertades.

A mediados del siglo XII, las ciudades-estado italianas, liberadas del emperador y de los señores locales, se convirtieron en comunas con autoridad política y judicial propias y el poder ejecutivo lo ejercía el cónsul. En materia constitucional y legal las ciudades se fueron transformando, aparentaban gozar de una democracia directa como la que se tenía en Atenas en la época de Pericles. Se fundó una asamblea, el *parlamentum*, al que se le asignaron algunos poderes.

Al inicio, las asambleas eran soberanas y con el tiempo fueron perdiendo algunas de sus funciones que pasaron a manos de los ayuntamientos, ello también debido al crecimiento de las ciudades que dificultaba la posibilidad de convocar a todos los ciudadanos. En ciudades cuyos ayuntamientos contaban con una gran cantidad de habitantes y con la intención de permitir la participación que se demandaba, se ampliaron los consejos, así se contaba con diversas instituciones de participación y representación.

La determinación de la ciudadanía variaba en las distintas ciudades-estado que establecían cada una sus propios requisitos para conceder la ciudadanía, así como los derechos y obligaciones que le asignaban, además de las exigencias que estipulaban para ejercer un cargo público. Había claras diferencias entre los ámbitos rural y urbano. La ciudad constituía el núcleo del estado, rodeada de tierras de cultivo y de pueblos pequeños.

La zona rural se denominaba campo (el *contadino*) y sus habitantes eran considerados pueblerinos, mientras que los residentes de las ciudades se conocieron como ciudadanos (*cittadini*) un término que era sinónimo de *civilità* o conducta civil o civilizada. La condición indispensable para obtener la ciudadanía era poseer una propiedad en la ciudad y pagar el impuesto correspondiente, sin importar que el habitante procediera del campo o fuera extranjero. El requisito es que habitara la vivienda un tiempo determinado del año o durante un período prolongado en la ciudad para obtener la ciudadanía en forma definitiva.

Las obligaciones de los ciudadanos eran: la observancia de las leyes, asistir a las reuniones, pagar impuestos y realizar el servicio militar. Los ciudadanos elegían entre ellos a los miembros de las asambleas y consejos que regían el Estado, mediante elecciones directas, indirectas y sorteos. Para ocupar algunos cargos públicos no era necesario ser considerado ciudadano.

Un ejemplo interesante de ciudad-estado italiana que logró independizarse de los caciques fue Florencia, en el siglo XII creó un gobierno independiente, después contó con un gobierno oligárquico compuesto por 12 cónsules que representaban la máxima autoridad política que ejercían a través de una asamblea (*parlamentum*), eran los representantes de la ciudadanía, por lo que era una república que tenía ciertos rasgos democráticos. Florencia es considerada, después de la antigua Grecia, el mayor exponente de la ciudadanía en una ciudad-estado.

Es importante señalar que no toda la población florentina gozaba del estatus de ciudadano, lo que se reservaba únicamente para los miembros de los gremios y estaban excluidos los habitantes del campo y los plebeyos que vivían en las ciudades; asimismo, los derechos que se les atribuían se mantuvieron en proceso de cambio a través de los siglos. Existían gremios mayores y menores, los primeros gozaban de mayor poder y privilegios en el control del gobierno mediante los nombramientos de funcionarios gubernamentales, denominados priores. Se creó el Gran Consejo constituido por los ciudadanos que tenían 29 años en adelante y tenían un ancestro que hubiera ocupado un alto cargo público o hubiera sido propuesto para hacerlo.

A partir del año 1293, el magistrado con mayor edad tenía la función de registrar a los nuevos ciudadanos, que podían ser extranjeros o residentes del campo, con la condición de que contribuyeran económicamente para reducir la deuda de la ciudad y quien se negara perdía su condición de ciudadano. Se inculcaba el sentido de pertenencia, la lealtad y el patriotismo cívico, formación a la que la Iglesia contribuyó considerablemente. Las instituciones republicanas se veían amenazadas en el siglo XV y se buscaron los modelos de ciudadanía cuyas experiencias pudieran servir para ser imitadas, tales como las de Roma republicana, Esparta y Atenas.

Fueron dos grandes escritores renacentistas los que abordaron el tema de la ciudadanía y mostraron gran interés en la antigüedad clásica; la experiencia de Grecia tuvo gran influencia en los escritos de Leonardo Bruni y la de Roma en los de Niccolò di Bernardo del Machiavelli. Ambos manifestaron estar orgullosos de que su ciudad natal, Florencia, hubiera alcanzado un gobierno ciudadano y libre. Su estilo de pensamiento fue denominado “humanismo cívico” ya que estaban convencidos de que la participación ciudadana es esencial, de la misma manera que retomaron de los escritores de la Antigüedad clásica un modelo de virtud política que se conoce también como “cívico republicano.” (Heater, D. 2007: 105-106)

Para Bruni (1369-1444), la ciudadanía no consistía únicamente en un tema académico, sino en un estilo de vida cívica, participativo, activo, que permitía mejoras de tipo político. La *Oración fúnebre*, escrita en 1428 es su obra más conocida en la que elogia a Florencia principalmente por su constitución y aborda el tema de la ciudadanía. Consideraba que la constitución popular era la única legítima, que garantizaba una real libertad e igualdad para todos los ciudadanos, la cual permitía florecer a la búsqueda de la virtud.

Bruni resaltaba la importancia de la virtud como parte de la vida cívica. Por ello, afirmaba también que los ciudadanos se elevaban y perfeccionaban estimulados por la posibilidad de ocupar un cargo público.

A pesar de que la moral de Machiavelli es cuestionada por las afirmaciones que realizó en sus escritos, él dio gran importancia a la virtud por motivos políticos. Afirma Heater la necesidad de contextualizar las circunstancias marcadas por gran violencia y corrupción en las que expresó dichas ideas. En su libro *Discursos sobre la primera década de Tito Livio*, trata el tema de la ciudadanía al poner de relieve las cualidades de la antigua Roma.

El concepto de virtud para Machiavelli incluye cualidades como la lealtad, el valor, la voluntad y la capacidad para actuar en beneficio de la ciudad en el ámbito civil y en el militar, pero fue en este último en el que puso mayor énfasis. En la obra de Machiavelli se manifiesta gran influencia de los principios militares de la ciudadanía espartana que garantizaron en mucho la estabilidad política de esa ciudad. Para lograr que la ciudadanía desarrollara las citadas virtudes, así como el sentido de responsabilidad, proponía la disciplina militar y regirse por los principios de una religión cívica que fortaleciera a los hombres en cuerpo y ánimo.

De la misma manera sostenía que un Estado basado en la libertad, es decir una república, requería la participación activa de la ciudadanía y ésta a su vez no podía lograrse en otra forma de gobierno que no fuera la república. Consideraba que el fundamento de los Estados es un buen ejército, que posibilita también la existencia de buenas leyes.

Al iniciar el siglo XVI, las naciones-estado se generalizaban como formaciones políticas en Europa, aunque tenían poca homogeneidad lingüística y étnica. Las grandes potencias políticas eran Inglaterra, Francia, España, Suecia y Polonia, que eran Estados soberanos. La autoridad recaía en un monarca, soberano, en ocasiones en forma absoluta, ya que no concedía poder a ninguna otra institución o grupo y el Estado estaba constituido por el rey¹² y ya no era el conjunto de ciudadanos y magistrados como sucedía en la Grecia antigua y en la Roma republicana.

La presencia de las monarquías ponía en cuestión la posibilidad de su coexistencia con la ciudadanía. Los gobiernos monárquicos de los siglos XV al XVII no tenían gran estabilidad política, por lo que se valoraba la incorporación de cierto tipo de ciudadanía adaptado a las nuevas condiciones para garantizar más eficacia al modelo de gobierno monárquico. Al mismo tiempo, en otros contextos como las colonias inglesas en Norteamérica, surgía un nuevo tipo de ciudadanía que presentó algunos cambios, entre los que cabe resaltar el hecho de que el concepto de ciudadanía de ciudad fue identificado con el de ciudadanía de nación-estado. (Heater, D. 2007: 111)

Esta transformación en la concepción de la ciudadanía generó diversos problemas; el primero de nivel, ya que existían diferencias entre las ciudades y entre éstas y los Estados, este

¹² Según la propia afirmación de Luis XIV: *L'état, c'est moi* (el Estado soy yo)

último nivel exigiría transformar los derechos, las obligaciones y la lealtad de los ciudadanos. En relación al problema de la lealtad, surgió el cuestionamiento acerca de si la idea de ciudadanía de Estado podía colaborar a la estabilidad, ya que muchas formaciones no eran tan sólidas para ser consideradas como Estados. Un tercer problema era el relativo a si los súbditos podían constituirse como ciudadanos y en caso afirmativo, si podrían apoyar la estabilidad del reino.

Diversos teóricos hicieron propuestas con la intención de responder a tales problemas. Un tipo de propuestas, -que no pudieron llevarse a la práctica-, establecía una correlación entre la condición de súbdito y la de ciudadano, de forma que en un estado monárquico la ciudadanía viniera impuesta. Sus principales representantes son Jean Bodin en Francia y Thomas Hobbes en Inglaterra, que desarrollaron sus propuestas en contextos de guerras.

Jean Bodin publicó *Los seis libros de la República* en los que proponía un gobierno fuerte que integrara al país. Fue el primero en definir el concepto de soberanía como: “el poder absoluto y perpetuo conferido a una nación.” (Heater, D. 2007: 113) Dicho poder era ejercido directamente por el monarca.

Bodin definió a los ciudadanos como súbditos libres dependientes de la soberanía de otro al que debe obediencia. El ciudadano no se constituía por los privilegios, sino por la mutua obligación que se establece entre el soberano y el súbdito. Bodin aclara que a diferencia de la propuesta aristotélica, los privilegios no determinan la ciudadanía, sino que el súbdito debe obediencia al soberano y éste debe ofrecerle justicia, consuelo, consejo, ayuda y protección.

Afirmaba Bodin que aunque los ciudadanos difieran en leyes, lenguas, costumbres, religión y raza, la unión de varios ciudadanos constituye una república.

“Tenemos aquí, por tanto, una fórmula para Europa en la temprana Edad Moderna. La ciudadanía sostiene a la monarquía en la equiparación de los ciudadanos y los súbditos, pero también al Estado, al invalidar las fuerzas menores más débiles.” (Heater, D. 2007: 115)

Thomas Hobbes publicó en 1646, *De Cive* (Tratado sobre el ciudadano) en el que insistía en recuperar el principio de soberanía, ya que consideraba que sin un gobierno absoluto bien afianzado, de preferencia un rey, sobrevendría la anarquía y los seres humanos volverían al estado de naturaleza en el que según describe en su *Leviatán*, la vida de los seres humanos se llevaba a cabo en las condiciones más deleznable. Enfatizaba las obligaciones que el ciudadano debía obedecer.

Tales deberes se establecían, según Hobbes, en tres dimensiones: en cuanto hombre, en cuanto ciudadano y como cristiano. Afirma Hobbes que el pacto social se fundamenta en la libertad, ya que cada ciudadano somete su voluntad a quien tiene el mando. A partir de tal concepción, la ciudadanía implica la pertenencia a una forma de poder: “Cada ciudadano... se llama súbdito del que tiene el poder supremo” (Hobbes, Th., 2000:119)

El segundo tipo de propuestas entendía a la ciudadanía como un estatus al que definían como un conjunto de obligaciones sin hablar de derechos, entre sus principales representantes está el abogado alemán Samuel von Pufendorf quien publicó los *Deberes del hombre y del ciudadano* (1682). Dos son las aportaciones más importantes de Pufendorf: el hecho de que incluye las obligaciones de los ciudadanos hacia sus conciudadanos, no únicamente hacia el Estado y la definición de las obligaciones específicas de los ciudadanos en situaciones específicas.

En ese sentido, Samuel von Pufendorf planteaba que existían deberes generales hacia el Estado que derivaban de la obligación común de estar sometidos a la autoridad civil, los cuales eran permanentes e iguales para todos los miembros de la comunidad y consistían en el respeto, la lealtad, la obediencia a los gobernantes, la defensa de la seguridad, el esfuerzo por aumentar la prosperidad del Estado y el deber de vivir en paz y amistad con sus conciudadanos. Por otra parte los deberes especiales, vinculados a las tareas y funciones particulares que la autoridad puede imponer al individuo, los cuáles eran temporales. (Pufendorf, S. vid en Pérez Ledezma, 2000:10)

A cambio de su obediencia una persona podía esperar “justicia, consejo, ayuda y protección para el desarrollo de sus actividades privadas y su vida familiar” (Pérez Ledezma, 2000:11). Hacia sus conciudadanos, los deberes consistían en vivir en forma pacífica y amigable, cortés según la acepción del propio Pufendorf, en concordia de acuerdo con Aristóteles. De un ciudadano, se esperaba una conducta educada y civil.

La tercera forma de responder al problema, la cual se llevó a la práctica, fue la de contar con instituciones que reflejaran los intereses del pueblo y limitaran el poder arbitrario del rey. Ejemplos de dichas instituciones representativas que se fueron gestando en los siglos XVI y XVII, son la ciudadanía política y la ciudadanía civil que se presentaron en los Países Bajos, Gran Bretaña y en las colonias inglesas de Norteamérica.

En Inglaterra se generó un debate sobre el principio básico de la ciudadanía política, específicamente sobre el derecho al voto. Existía una ciudadanía política de Estado a través del sistema parlamentario, aunque en la práctica era muy restrictiva. En lo relativo a la ciudadanía civil, se fueron conquistando también algunos derechos, algunos mediante resoluciones legales, otros a partir de los sistemas de autogobierno que desarrollaron y ejecutaron las trece colonias,

siempre bajo la autoridad constitucional de la Corona británica, el cual era menos rígido que el que ejercían España y Francia en sus colonias.

En las colonias británicas la participación cívica se ejercía de manera limitada en forma de servicio comunitario en el ámbito del condado o municipio. Heater (2007) afirma que durante el siglo XVIII las trece colonias establecieron los sólidos cimientos de la ciudadanía del siglo XIX, el concepto de ciudadanía adquirió un interés intelectual, reafirmandose los derechos y ejerciéndose responsablemente las obligaciones, durante la Revolución de los Estados Unidos. A partir de lo anterior, el concepto de ciudadano comenzó a concebirse en inglés con el sentido de pertenencia a un Estado, no a una ciudad.

En el siglo XVII en Inglaterra y en sus colonias norteamericanas la concepción de la ciudadanía adquiere un nuevo sentido. Anteriormente, Machiavelli y otros teóricos habían señalado los deberes como característica primordial definitoria de la ciudadanía. A partir del siglo XVII y principalmente durante el XVIII y finales del XX, se presentan dos tendencias opuestas en la concepción de ciudadanía: la cívica republicana y la liberal.

John Locke fue el primero en plantear la noción de derechos en el ámbito político, en 1690 en su Segundo Tratado sobre el gobierno civil, plantea que: “todo hombre tiene derecho a proteger...su vida, su libertad y sus bienes” (Locke, J., 2003: 102) La afirmación de Locke fue adaptada en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos redactada por Thomas Jefferson en 1776, que plantea el derecho a “la vida, la libertad y a la búsqueda de la felicidad”. Asimismo en la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, se retoma y adapta, postulando los siguientes derechos: “libertad, propiedad, seguridad y resistencia a la opresión.”

Podemos captar la relación que se ha establecido a lo largo de la historia entre ciudadanía y propiedad. En Grecia, según afirmaba Aristóteles, una de las condiciones para ser considerado ciudadano consistía en ser propietario, ya que ello implicaba la disposición de tiempo libre para dedicarlo a los asuntos públicos, además de garantizar la incorruptibilidad. A mediados del siglo XVII, la propiedad se convirtió en un asunto muy importante en Inglaterra y se difundió a otros países.

Se presentaron durante esta época dos posiciones acerca de la ciudadanía, la primera como continuación de la concepción de la Grecia clásica que destacaba el valor político de poseer tierras en contraposición a la riqueza obtenida a partir del comercio y la segunda, como una ampliación del derecho al voto.

En el siglo XVIII en Inglaterra funcionaba bastante bien el sistema de gobierno parlamentario, aunque requería de un perfeccionamiento. El derecho al voto que poseía todo ciudadano, tenía una organización caótica y a partir de 1760 se solicitaba su reforma. Surge en 1780 la Sociedad para la Información Constitucional que empleaba el término “ciudadanos” en su acepción moderna.

Durante el siglo XVIII el concepto liberal de los derechos del ciudadano cobraba importancia, no obstante el ideal cívico republicano volvía a adquirir relieve. Afirma Heater (2007) que las revoluciones americana y francesa eran una combinación de ambas tradiciones. Antes de estas revoluciones se llevaron a cabo debates sobre la virtud cívica influenciados por el republicanismo cívico.

Charles Louis de Secondant, Barón de Montesquieu, influido por Maquiavelo y admirador de la constitución de Inglaterra, definía la virtud cívica como “el amor a las leyes y a la patria”. A

mediados del siglo XVIII comenzó a surgir la tesis de que el Estado está compuesto de ciudadanos, todos los cuales deben disfrutar de una igualdad básica. Entre los principales representantes de esta idea de igualdad constitutiva de la ciudadanía resalta por su gran trascendencia Jean-Jacques Rousseau.

Rousseau propuso que la ciudadanía se constituía a partir de tres valores fundamentales: la libertad, la igualdad y la fraternidad, los cuales fueron retomados como lema por la Revolución francesa; los dos primeros se establecieron posteriormente como derechos. Propugnaba por un modelo de sociedad que garantizara la libertad civil que había desarrollado la tradición cívica republicana de la ciudadanía para conseguir los intereses individuales y no la liberal. La libertad se ejerce y se conserva al cumplir los conciudadanos con las obligaciones.

La ciudad-Estado en que podría ejercerse el modelo de ciudadanía que planteaba Rousseau, podía lograrse a través de la concepción que tenía acerca de la voluntad general como un cuerpo moral y colectivo, una persona pública. Un pueblo soberano que libremente y en conjunto puede juzgar lo que es mejor para la comunidad. Constituyen al pueblo los ciudadanos en virtud de la voluntad general y los súbditos en la medida en que acatan las consecuencias que son producto de sus decisiones; ambas capacidades son libres e independientes de cualquier autoridad arbitraria (Heater, D. 2007: 130)

“Encontrar una forma de asociación que defienda y proteja con la fuerza común la persona y los bienes de cada asociado, y por la cual cada uno, uniéndose a todos, no obedezca sino a sí mismo y permanezca tan libre como antes.” (Rousseau, J.J. 1971: 9)

A fin de garantizar la igualdad de la participación entre los ciudadanos, Rousseau propone el contrato social:

“Cada uno pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general, y cada miembro considerado como parte indivisible del todo.”
(Rousseau, 1971: 9)

Para Rousseau, la fraternidad pública sería la fuerza que posibilitaría la igualdad entre los individuos, la cual sería factible en una comunidad pequeña y cohesionada. Proponía una república en la que los ciudadanos sancionaran las leyes, eligieran entre sus conciudadanos a quienes administrarían la justicia y gobernarán el Estado, tomaran decisiones acerca de los asuntos públicos y establecieran tribunales respetables. Se afirma que defendía un nacionalismo incipiente en la que la ciudadanía se transformaba en nación.

La concepción de la virtud cívica republicana incluye el patriotismo y para este filósofo era también fundamental, de manera que proponía la importancia de la educación cívica vitalicia que debería estar a cargo de una religión civil que transmitiera un código de conducta y obligaciones. Se ha señalado que estas ideas de Rousseau inspiraron a Robespierre, quién intentó llevarlas a la práctica durante la Revolución francesa.

En 1789 las trece colonias americanas, al vencer a Inglaterra y ratificar su Constitución, se transformaron en los Estados Unidos de América y al añadirse diez enmiendas que establecían los derechos de los estadounidenses, aquellos que antes eran súbditos británicos se convirtieron en ciudadanos. “La forma de ciudadanía surgida de la experiencia y de la oportunidad brindadas por la Revolución combinaba la continuidad de las prácticas de la era colonial con el nuevo experimento de una constitución federal, esta última una auténtica novedad para una nación del tamaño de los Estados Unidos.” (Heater, D. 2007: 135)

De esta manera las trece colonias tenían sus propias leyes e instituciones, tradiciones compartidas, así como el ideal de libertad que las impulsaba. La lealtad a Inglaterra fue sustituida por el ideal de libertad y por la defensa del derecho a una forma propia de gobierno, cuestionaron también la soberanía parlamentaria ante la cual propusieron la soberanía del pueblo. A partir de estas nuevas reivindicaciones, la ciudadanía se convirtió en un tema prioritario.

Algunas colonias se regían de una manera autónoma como las ciudades-estado de Grecia o de la Edad Media, a través de un grupo de funcionarios elegidos por quienes tenían derecho a votar, que además aprobaban las leyes parroquiales y fijaban los impuestos, otras colonias se administraban a través del condado. Cada colonia contaba con una asamblea que podía otorgar el voto y elegir a los miembros que la constituían. La ciudadanía se practicaba a través del voto, del servicio público y de formar parte de un jurado.

La conciencia política se fortaleció en las colonias influenciada por la Revolución francesa y se expresaba a través de periódicos y panfletos y mediante la elaboración y ratificación de derechos y constituciones estatales y nacionales. Las ideas revolucionarias recibieron también influencia del republicanismo cívico así como del liberalismo, de los filósofos clásicos y renacentistas, propugnaban por un pueblo soberano y por el establecimiento de un contrato social. Tales ideas permitieron la formación de un Estado, el establecimiento y aprobación de declaraciones de derechos y constituciones nacionales que fueron refrenadas por los habitantes varones adultos a través del voto. (Heater, D. 2007: 138)

Entre los años 1776 a 1787 además de la Declaración de Independencia y las constituciones estatales, las trece colonias norteamericanas aprobaron sus declaraciones de derechos. Todos estos documentos enfatizan los derechos ya que son el sustento de la ciudadanía política, como puede captarse en el siguiente texto de la Declaración de Independencia:

“Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad...” (*National Archives Gov.* 2009: 1)

Un rasgo fundamental para la ciudadanía política, el derecho al voto, no quedó establecido en la Constitución de los Estados Unidos; antes de su sanción, las trece colonias contaban en sus constituciones con disposiciones correspondientes, que lo vinculaban en todos los casos a la propiedad privada. Otro aspecto que forma parte de la ciudadanía política que si quedó establecido fueron los requisitos para ocupar un cargo público, entre las que sobresale el poseer la ciudadanía.

La ciudadanía política estaba restringida y la ciudadanía civil o legal estaba al alcance de todos. Los años subsecuentes a la independencia estuvieron marcados en las colonias por la elaboración de sus propias leyes y por la determinación de los requisitos para el reconocimiento de la ciudadanía.

Las ideas de la Revolución de Independencia estadounidense reafirmaron ideas que la población francesa ya debatía. El concepto de ciudadanía nacional, ya se había difundido antes de 1789 y para este año constituyó el elemento más importante de la Revolución y comenzaba a generalizarse entre los habitantes, incluso del campo. En este año se aprobó la Declaración de los

Derechos del Hombre y del Ciudadano, -que fue el prefacio de la Constitución-, definió los derechos personales y colectivos como universales, en la que se consagraban derechos civiles fundamentales como la igualdad ante la ley y la libertad de expresión, entre otros. ((Heater, D. 2007: 148-149)

Los derechos civiles determinaban quiénes eran considerados ciudadanos, cómo podían conseguir la ciudadanía los extranjeros y cómo ésta podía perderse. El texto fundamental de la Constitución, establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos, que la soberanía reside en la nación y que la ley es expresión de la voluntad general, pues todos los ciudadanos tienen derecho a contribuir a su elaboración, ya sea de manera directa o a través de sus representantes. Causó cierta divergencia el caso de quiénes no podían gozar del estatus de ciudadano, ya que la propia declaración afirmaba que no se aceptaban distinciones, pues eran incompatibles con los principios fundamentales.

Respecto a los derechos políticos, en Francia se analizó la posibilidad de que algunos sectores como las mujeres, los esclavos y algunos grupos étnicos y religiosos minoritarios, los recibieran. Para la determinación de derechos políticos se discutía acerca de si era factible establecer como condición para gozar de ellos, tener propiedades o dinero. Destacan en esta controversia, con posiciones encontradas, dos teóricos políticos: Abbé Sieyès a favor de establecer algunas condiciones y Maximilien Robespierre en contra.

Sieyès publicó en 1789 algunas reflexiones sobre los derechos del hombre y del ciudadano en las que establece una distinción entre derechos naturales y civiles, por una parte y derechos políticos. Los derechos naturales y civiles los denominó derechos pasivos ya que todos los habitantes de un país pueden disfrutar de ellos, tales como la integridad física, la protección de sus bienes y libertades, etc. Los derechos activos hacen referencia a que no todos los

habitantes son ciudadanos activos, pues no contribuyen al sostenimiento de las instituciones públicas por lo que no tienen derecho a formar parte activa en la constitución de los poderes públicos, ni a ejercer influencia activa en el bien público (Heater, D. 2007: 152)

Las mujeres fueron ubicadas por Sieyès –a su pesar, según se afirma,- en la categoría pasiva ya que hubo una gran oposición pública a que se les reconociera el derecho a voto. En la práctica, la clasificación de la ciudadanía de Sieyès fue aplicada. Sin embargo, se incorporaron ciertas condiciones para el reconocimiento de los derechos políticos, las cuales eran de índole económica principalmente por lo que eran discriminatorias.

Así, por ejemplo, para tener el estatus de ciudadanía activa, se exigía además de ser mayor a los veinticinco años, el pago de impuestos correspondiente a tres días de trabajo no especializado. El sistema de elecciones indirectas que establecía que los electores eran aquellos que pudieran pagar en impuestos directos lo equivalente a diez días de trabajo, elegidos a su vez por ciudadanos activos. Para ser diputado, se exigía el pago de impuestos equivalente a cincuenta días de trabajo.

Desde el comienzo de la Revolución Robespierre criticó la discriminación que ejercían las autoridades hacia los pobres, después de la Revolución destacó entre algunos diputados que cuestionaron la igualdad democrática. Hizo suyo el lema: “Libertad, igualdad y fraternidad” y se comprometió con las ideas de Rousseau sobre la voluntad general y la virtud cívica. Cuestionó la distinción entre ciudadanía activa y pasiva, que eran contradictorias a la igualdad que promulgaba la Declaración de Derechos y en tal sentido afirmaba que no eran los impuestos los que determinaban la ciudadanía, asimismo proponía democratizar el sistema de votación (Heater, D. 2007: 154)

Después del triunfo de la Revolución se comenzaron a impulsar transformaciones en los sistemas administrativos municipales a fin de democratizarlos, incluso por medio de la violencia. Se formaron nuevos ayuntamientos de acuerdo con el modelo cívico republicano que gozaban de nueva identidad, autonomía cívica y sus propias milicias. Los ciudadanos organizados se encargaban de sus propios asuntos públicos, manifestando sus opiniones y participando en diversas ceremonias cívicas organizadas para fortalecer el sentimiento ciudadano.

A principios de 1790 en Francia se llevaba a cabo un proceso democratizador, por lo cual era fundamental para el asunto de la ciudadanía que se terminara la distinción entre ciudadanía activa y pasiva, considerando que todos los ciudadanos franceses formaban el pueblo soberano. Era necesario conducir a los ciudadanos a la virtud cívica, aunque fuera por la fuerza (Heater, D. 2007:161)

Afirma Derek Heater (2007: 163) que antes del siglo XVIII no existía relación entre los conceptos de ciudadanía y de nación pues cada uno de ellos ligaba dos entidades sociopolíticas diferentes. Para ello propone los siguientes ejemplos, en la polis griega la ciudadanía se definía por la pertenencia a determinada ciudad a la que tenían fuertes vínculos, lo que no impedía que se sintieran parte de una misma cultura griega, identificados con sus tradiciones y costumbres. Los ciudadanos romanos no se vieron en la necesidad de despojarse de sus culturas particulares vinculadas a las etnias para ser considerados ciudadanos romanos y durante la Edad Media la ciudadanía se suscribía al municipio y no a países o regiones con identidades étnicas.

Después del siglo XVIII, tanto el concepto de ciudadanía como el de nación se relacionaron con el sentido de Estado, aunque no tenían significados idénticos. Nación se manejaba como sinónimo de país o patria y se usaba para designar a sus habitantes; quedaba

pendiente definir si la nación debía definirse por criterios políticos o culturales. Por su parte la palabra ciudadano dejaba atrás su connotación municipal y se acercaba al estado.

La definición de la nación por criterios políticos en un Estado democrático, planteaba los dos términos casi como sinónimos, como fue el caso de la Revolución francesa a partir de la definición de nación de Sieyès. Por su parte la Declaración de Derechos establece una distinción entre nación y ciudadanía y la constitución de 1791 consideraba que los extranjeros podían convertirse en ciudadanos, de ahí que el estatus cívico no se determinara por la nacionalidad en ninguno de sus sentidos, ni étnico, ni cultural. En algunos países como Francia y Gran Bretaña surgió una expectativa de lealtad nacional que sustituyó la antigua virtud cívica del patriotismo.

Los Estados Unidos de América, al recibir a una gran cantidad de inmigrantes que llegaron a ser veinte millones entre 1870 y 1920, se convirtieron en el modelo de ciudadanía nacional. La adquisición de la ciudadanía implicaba conocer la Constitución (examen político-cívico) y la alfabetización que garantizaba una base lingüística. Al respecto John Stuart Mill afirmaba que:

“Es prácticamente imposible que existan instituciones libres en un país integrado por varias nacionalidades. En un pueblo donde no haya un sentimiento de compañerismo, especialmente si se hablan lenguas diferentes, no puede existir esa opinión pública unificada que es necesaria para que funcione el Gobierno representativo.” (Mill, J.S., 2001: 311)

Francia, Italia y Alemania consideraban indispensable para la unificación nacional, la unificación de la lengua. Sin embargo, en Alemania los conceptos de ciudadanía y nación se fusionaron.

2.2.2. Derechos ciudadanos y democracia

Estados Unidos, Europa Occidental, Australia y Nueva Zelanda (dominios británicos), así como la India fueron los primeros en introducir y consolidar entre los siglos XVIII y XX los derechos de la ciudadanía y las instituciones democráticas. Hacia finales del siglo XX, los antiguos estados comunistas de la Unión Soviética, Europa Central y algunos países de América Latina establecieron instituciones democráticas liberales. No obstante, ningún Estado puede afirmar que garantiza plenamente los derechos de sus ciudadanos. Sin embargo, día con día aumentan las personas que exigen sus derechos y los Estados los conceden paulatinamente.

En relación con la ciudadanía y con los derechos asociados, resulta difícil que éstos se implanten en la cultura sociopolítica de un Estado en un tiempo corto; se requieren prolongados períodos para alcanzar altos niveles de vida cívica y la valoración de la ciudadanía. Para que se desarrolle plenamente la ciudadanía participativa en el ámbito estatal, se requiere una experiencia previa en actividades similares en niveles más próximos, como el pueblo, la parroquia, el sindicato, etc., según proponían los teóricos políticos liberales: Alexis de Tocqueville y John Stuart Mill. Lo anterior implica que la ciudadanía debe construirse desde la base y una trascendente aportación es la que realizan las mujeres y las escuelas.

En cuanto a la situación de las mujeres con relación a su estatus como ciudadanas, es necesario señalar que desde los orígenes de la ciudadanía han estado marginadas pues, no se consideran ciudadanas, han carecido de propiedades, que, como hemos visto es condición de ciudadanía en la mayoría de los casos, estaba confinada a la esfera privada. En la época clásica las mujeres carecían de derechos, la casa era su espacio y su tarea, ocuparse de los hijos; no era bien vista la participación en los debates ni otras actividades públicas. En términos generales, eran valoradas como parte inferior de la raza humana, carente de cualidades físicas y mentales.

Así lo afirma Heater:

“Los orígenes de la ciudadanía se remontan a casi tres milenios atrás, pero, salvo contadísimas excepciones, las mujeres tan sólo han podido disfrutar de su parte correspondiente de derechos cívicos desde hace escasamente un siglo, y siempre en los estados más liberales. Esta contradicción yuxtapuesta se ha explicado en ocasiones alegando que la ciudadanía, particularmente en su modelo cívico-republicano, es una condición inventada por hombres en su propio beneficio. La *aretê aristotélica*, la virtud de Cicerón o la *virtù* de Maquiavelo son todas esencialmente masculinas, a la par que cualidades de la ciudadanía.” (Heater, D. 2007: 218)

Pericles, Sófocles y Aristóteles dejan constancia de la negación a las mujeres, del mismo estatus que a los hombres. Platón manifestó una opinión contraria a la que se sostenía en la época y reivindicaba para las mujeres la igualdad de derechos.

En Europa medieval también se llevó a cabo la discriminación de las mujeres, a inicios de la Edad Media, algunas mujeres destacaban en el comercio o como artesanas, pero posteriormente los oficios fueron controlados por los gremios y estos, a su vez, por los hombres. Dado que la ciudadanía era municipal y se encontraba vinculada con la pertenencia a un gremio, las mujeres estaban excluidas de la ciudadanía. Posteriormente se debatió acerca del derecho femenino a votar, sin embargo tal derecho era vago pues estaba supeditado a la propiedad y dado que las mujeres casadas carecían de propiedad, muy pocas mujeres podían ejercerlo y años después en 1644 fue revocado.

El debate volvió a cobrar relevancia debido a la Guerra Civil inglesa; en 1649, un grupo de mujeres inglesas reclamaban al gobierno de Cromwell, entre otras cosas, su derecho a recibir

su parte proporcional de la libertad de la República. Sin embargo las peticiones de las mujeres inglesas eran muy tenues en comparación con la posterior participación de las mujeres de los Estados Unidos y de Francia a favor de las revoluciones respectivas. Después de la Revolución francesa y de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se despertó en las mujeres una gran conciencia política. Las mujeres francesas iniciaron su campaña por sus derechos y en 1791, Olympe de Gouge elaboró la *Declaración de los derechos de la mujer*, que proponía un trato igual al que reciben los hombres, sin recibir el apoyo de los hombres.

Años después de la publicación del panfleto de Olympe de Gouge, en Inglaterra, Mary Wollstonecraft publicó *Vindicación de los derechos de la mujer*, considerada la primera publicación feminista de importancia en la que definía un papel cívico factible para las mujeres. Las reivindicaciones políticas de las mujeres tuvieron que esperar más de cien años para convertirse en realidad, tal es el caso del derecho al voto. El logro de los derechos cívicos ha sido un largo y difícil proceso que aún no llega a su término, el derecho al voto considerado un indicador fundamental de ciudadanía, fue concedido por primera vez a las mujeres de Nueva Zelanda en 1893 y antes de la Primera Guerra Mundial, Australia, Finlandia, Noruega y algunos de los estados de los Estados Unidos de América.

En el siglo XIX en los Estados Unidos y Gran Bretaña los movimientos a favor de los derechos femeninos de ciudadanía iniciaron su actividad. Las mujeres estadounidenses llevaron a cabo su activismo público en un proceso con diversas etapas: la Revolución, movimientos contra la industrialización entre 1800-1830, la campaña a favor de la abolición de la esclavitud en 1840 y a partir de 1890, las movilizaciones nacionales que solicitaban el sufragio femenino (Heater, 2007: 227) El estado de Nueva York aprobó la Ley Patrimonial de Mujeres Casadas y otros

estados siguieron su ejemplo; tanto las reformas constitucionales como el derecho al voto femenino se realizaron en forma poco sistemática.

En la Constitución de 1920 de los Estados Unidos de América se incorporó el sufragio femenino. En Inglaterra las mujeres lucharon por sus derechos sociales, civiles y políticos y fue hasta mediados del siglo XIX cuando sus esfuerzos se vieron recompensados. En 1860 el sufragio femenino era un tema importante y se incluyó la petición del voto femenino, cuando una comisión de liberales solicitó una reforma al respecto, apoyada por John Stuart Mill, en ese momento parlamentario.

Mill publicó en 1869: *El sometimiento de las mujeres*, que constituyó un alegato altamente comprometido con la defensa de las mujeres, en el que afirmaba: "...la subordinación legal de un sexo al otro...es errónea en sí misma, y en la actualidad constituye uno de los mayores obstáculos para la evolución humana." (Mill, 2005: 10) En 1870 y 1880, en Inglaterra, las mujeres participaban activamente en los asuntos locales, antes de conseguir el derecho al voto en todo el país, en los consejos escolares, las parroquias, etc. Las mujeres continuaron luchando para lograr el derecho al voto formando diversas organizaciones, entre los años 1906 a 1914, las sufragistas lograron despertar el interés nacional hacia su causa, que fue concedido para mujeres mayores de treinta años en 1918 y para las mayores de 21 en 1928.

A pesar de haber obtenido el derecho al voto, en Inglaterra las mujeres seguían sometidas a la discriminación y a una incapacidad jurídica y en todo el mundo se exigía justicia para las mujeres y una ciudadanía igualitaria. Algunos Estados europeos obtuvieron el derecho al voto femenino, de manera tardía, en Francia en 1946 y en Suiza en 1971. Aunque el derecho al voto es fundamental, el logro de la ciudadanía plena exige representatividad en asambleas legislativas y

gobiernos, que garanticen la igualdad de oportunidades laborales, así como protección respecto a la opresión masculina.

Persisten grandes desigualdades entre los derechos de las mujeres en diversos países. El auge del pensamiento feminista a partir de la década de 1960 impulsó una serie de nuevas demandas a favor de mejorar la situación de las mujeres en lo relativo a su identidad y su papel dentro de la ciudadanía. Surge una tercera posición, diferente a la Aristotélica y complementaria a la de Mill, la “maternidad republicana” que propone a la mujer como la encargada de establecer los vínculos entre el ámbito público y el privado a través de la creación de un ambiente doméstico que propicie el desarrollo de la virtud cívica y su mantenimiento. (Heater, D. 2007: 233)

Se han presentado diversos argumentos feministas en pro de la participación de las mujeres en diversos ámbitos, desde la vía liberal que propugna por la igualdad civil y política de las mujeres. La vía socialista que reivindica la igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo y ayudas del Estado a las familias. Una tercera vía propone que la noción de ciudadanía debería transformarse para que las aportaciones femeninas de cuidado familiar, de la comunidad y el medio ambiente, constituyan rasgos integrales de identidad y estatus.

Desafortunadamente la autonomía ciudadana se encuentra muy lejana para un gran número de mujeres en diversos países.

2.2.2.1. Derechos civiles, políticos y sociales.

Después de dos siglos de la publicación del Contrato Social de Rousseau, el sociólogo británico, Thomas Marshall en su escrito: “Ciudadanía y clase social”, publicado en 1949, analiza el desarrollo de la ciudadanía en Inglaterra a lo largo de 250 años. Clasifica a la ciudadanía en derechos civiles, derechos políticos y sociales. Plantea que los derechos del ciudadano fueron

conquistados a lo largo de la historia, iniciando con los derechos civiles, posteriormente los políticos y finalmente los sociales.

Considera que el Estado de bienestar liberal es condición para el ejercicio de la ciudadanía en sociedades capitalistas. Propone que:

“Existe una igualdad humana básica asociada al concepto de la pertenencia plena a una comunidad –yo diría, a la ciudadanía- que no entra en contradicción con las desigualdades que distinguen los diversos niveles económicos de la sociedad. En otras palabras, la desigualdad del sistema de clases sería aceptable siempre que se reconociera la igualdad de la ciudadanía.” (Marshall y Bottomore, 1996: 6)

Marshall considera, entonces, que la igualdad de la ciudadanía es compatible con la desigualdad de clase, incluso afirmaba que la ciudadanía había generado una desigualdad social legitimada (Heater, D., 2007: 207)

Thomas Marshall hacía alusión a los derechos y a la igualdad con el resto de los miembros de la sociedad, en su concepción de la ciudadanía a la cual definió: “La ciudadanía es aquel estatus que se concede a los miembros de pleno derecho de una comunidad. Sus beneficiarios son iguales en cuanto a los derechos y obligaciones que implica.” Marshall, Th., vid en Pérez Ledezma, 2000: 9)

Marshall no identificaba su concepción de ciudadanía con la vida de un caballero, pues ello supondría que todos los hombres tendrían derechos legales exigibles. Ello pondría la responsabilidad de garantizar tales derechos en los hombros del Estado y llevado, paso a paso, hacia actos de interferencia estatal que él hubiera deplorado. Cuando mencionó la ciudadanía, mencionó sólo los deberes y no los derechos.” (Marshall y Bottomore, 1996: 6-7)

Consideraba la ciudadanía como una forma de crecimiento de vida dentro del hombre, no presentado desde el exterior. Reconocía tan sólo un único derecho definitivo, el derecho de los niños a ser educados y en este único caso, aprobó el uso de la coerción por parte del Estado para alcanzar su objetivo.

Según su análisis, los derechos civiles fueron obtenidos por la sociedad civil occidental en el siglo XVIII, los derechos políticos en el siglo XIX y los derechos sociales en el siglo XX. Respecto a estos tres elementos, que constituyen la ciudadanía, afirma Marshall:

“El elemento civil se compone de los derechos necesarios para la libertad individual: libertad de la persona, de expresión, de pensamiento y religión, derecho a la propiedad y a establecer contratos válidos y derecho a la justicia...Por elemento político entiendo el derecho a participar en el ejercicio del poder político como miembro de un cuerpo investido de autoridad política, o como elector de sus miembros...El elemento social abarca todo el espectro, desde el derecho a la seguridad y a un mínimo bienestar económico al de compartir plenamente la herencia social y vivir la vida de un ser civilizado conforme a los estándares predominantes en la sociedad.” (Marshall y Bottomore, 1996: 8)

Los derechos civiles incluyen aquéllos que se requieren para la libertad individual, los políticos son todos los que rodean el proceso electoral y los sociales, incluyen además del mínimo de bienestar económico y de seguridad, lo que es necesario para que los individuos vivan una vida plena. (Torres, C., 2001:138) De manera aproximada puede afirmarse que en Inglaterra los derechos civiles se desarrollaron en el siglo XVIII, los derechos políticos en el siglo XIX y los derechos sociales en el siglo XX. Sin embargo hay flexibilidad en el establecimiento de esta cronología de estadios.

Entre los derechos civiles que se introdujeron están el hábeas corpus, las Leyes de Tolerancia, la Ley de la Emancipación Católica y a inicios del siglo XX, la abolición de la Ley de Asociaciones que consideraba ilegales a los sindicatos. Los derechos sociales se introdujeron en 1795 como parte del sistema de beneficencia, para combatir la pobreza, las Leyes de Fábrica cuyo objeto era la protección a los trabajadores por parte del Estado y garantizarles un nivel de escolarización mínimo.

Marshall considera que los derechos sociales son esenciales en una sociedad que sigue siendo jerárquica pero que gracias a ellos han disminuido las desigualdades y suavizado las tensiones que se originan en el sistema de clases. Para Marshall los derechos sociales son de distinta naturaleza que los civiles y políticos, ya que estos últimos pueden definirse y reconocerse con cierta precisión y pueden o no existir en derecho y en la práctica, mientras que los derechos sociales atañen a la calidad de vida. Afirmar además que los derechos sociales son básicos para que efectivamente se disfrute de los derechos civiles y políticos, de ahí que son componentes esenciales de la ciudadanía.

La condición de ciudadano como la concibió Marshall implica ser miembro de una sociedad en situación de igualdad e incluye diversos derechos y se ha desarrollado mucho más lejos de lo que él previó. Este sociólogo, se interesaba por analizar si la ciudadanía moderna modifica la clase social de manera suficiente Aunque el modelo de Marshall reconoce que el logro de la ciudadanía siempre ha sido un proceso de lucha, cabe el cuestionamiento acerca de si todavía es verdad que la igualdad básica, cuando ha sido enriquecida en substancia y encarnada en los derechos formales de la ciudadanía, es consistente con las inequidades de la clase social y posibilita establecer una tregua en el conflicto social.

En las sociedades actuales se asume que clase social e igualdad son compatibles. Al respecto cabe también preguntarse si la igualdad básica puede ser creada y preservada sin invadir la libertad del mercado competitivo. Obviamente esto resulta prácticamente imposible ya que el mercado aún funciona con límites insuficientes.

Otro tema que requiere análisis en las sociedades actuales es el relativo al efecto que tendrá el cambio del énfasis en las obligaciones a los deberes? (Marshall y Bottomore, 1996: 7)

La ciudadanía es un estatus legal que se maneja como sinónimo de nacionalidad en el moderno Estado-nación, quienes residen en un país son, -en términos generales-, ciudadanos o extranjeros. La ciudadanía implica el reconocimiento de los tres tipos de derechos que la teoría liberal, a partir de Marshall, ha aceptado como constitutivos de la ciudadanía. Actualmente se propugnan derechos de cuarta generación.

Algunos Estados a través de sus gobiernos, han negado a sus ciudadanos algún tipo de derechos, principalmente los civiles y los políticos, en consecuencia, la ciudadanía se convierte en un mero título o identidad jurídico-política sin significado auténtico. Tales regímenes garantizan legal y constitucionalmente los derechos, pero no los hacen efectivos en la práctica. Esta situación se ha manifestado en el siglo XX en los regímenes autocráticos, también los regímenes con ideologías racistas o comunistas.

Heater cita el caso de la Unión Soviética que durante la época de la Revolución abolió todos los títulos y los sustituyó por el de ciudadano. Posteriormente, en la Constitución de 1924 Lenin sustituyó dicho término por otros que designaran clase, tales como proletarios, campesinos y soldados. (Heater, D. 2007: 211)

La observancia a la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 ha sido el parámetro para evaluar la medida en que los regímenes respetan los derechos de los ciudadanos. Aunque tal declaración proclama la importancia de los derechos humanos, éstos están intrínsecamente relacionados con los derechos del ciudadano.

2.7 Concepciones contemporáneas acerca de la ciudadanía.

Durante el siglo XX la doctrina nazi fue adoptada en Alemania para fundamentar la Ley de Ciudadanía del Reich (en 1935) que determinaba que solamente era ciudadano el sujeto que tuviera sangre alemana o afín y que demuestra lealtad al pueblo y al Reich. En Suráfrica se negó también la nacionalidad a los negros por motivos de raza, debido al régimen del *apartheid* y los estados del Sur de Estados Unidos también les negaron la ciudadanía e incluso eran esclavos hasta la década de 1860 y aunque en la Enmienda Catorce se les reconocían derechos civiles, en la práctica no se hacían efectivos todavía un siglo después. En Estados Unidos la población negra evidenció su conciencia cívica en las luchas contra la discriminación y exigieron sus derechos civiles como justicia imparcial, su derecho político al voto y derechos sociales en contra de la discriminación y por gozar del nivel laboral y económico al mismo nivel al que tenía acceso la población blanca.

Fue hasta el año 1996 que Suráfrica promulgó una nueva Constitución que reconocía que todos los ciudadanos gozaban de la misma ciudadanía, los mismos derechos, privilegios y beneficios, así como responsabilidades y obligaciones respecto a la ciudadanía. Los últimos años del siglo XX se caracterizaron por una conciencia étnica creciente, por la reclamación de derechos y por institucionalizar identidades culturales distintas, que generaron conflictos en muchas naciones-estado. Causas de dichos conflictos fueron en ocasiones el Estado que pretendía

homogeneizar a los distintos grupos y en otras los distintos pueblos que no lograban una convivencia pacífica.

“Todos estos aspectos relativos a la ciudadanía cobran gran relevancia: el objetivo prioritario de la ciudadanía es el de crear vínculos entre todos los individuos con el estado; la prioridad de la identidad étnica es la de crear vínculos entre los individuos con su comunidad cultural, la cual viene generalmente definida por su lengua y/o religión.”
(Heater, D. 2007: 172)

En el siglo XIX se afirmaba que los ciudadanos, miembros de una nación encarnaban las dos identidades, pero esta tesis ha sido cuestionada.

La ciudadanía moderna en su relación con el multiculturalismo manifiesta tres tipos de categorías de minorías cuyos intereses es necesario tener en consideración para el bien del Estado y de la ciudadanía. La primera categoría es la de los aborígenes o *primeros pueblos*, la segunda, de los inmigrantes y la tercera de los pueblos que conforman bloques geográficos que convierten a sus países en Estados multinacionales. Los Estados que han logrado conciliar los intereses encontrados entre ciudadanía e identidad étnica han incorporado en su Constitución o en el sistema político derechos para las minorías sin afectar al Estado.

El conciliar el concepto, el estatus y el ideal de ciudadanía-nacionalidad –ésta última entendida como identificación política con el estado-, es difícil ante la complejidad teórico-práctica de la noción de ciudadanía actual, ante la expansión de modelos escalonados de ciudadanía sostenidos por las constituciones federales de diversos Estados.

2.3.1 Federalismo

El concepto de ciudadanía ha sido analizado como estatus que ostenta un individuo en relación con una unidad individual con cohesión política y administrativa, como puede ser una ciudad-estado, un municipio, una nación-estado. Sin embargo, existen otras estructuras constitucionales que tienen otros sistemas de gobierno de dos niveles. Así puede presentarse el caso de la ciudadanía “estratificada” que es producto de constituciones escalonadas.

Se puede gozar del estatus de ciudadano en el nivel estatal como provincial y puede tener tres capas cuando existe una ciudadanía local, municipal y/o rural activa. Las constituciones escalonadas son el federalismo, la Unión Europea y la disposición llamada transferencia de competencias. En estos sistemas el poder puede repartirse entre los estratos superiores y los inferiores, permiten combinar autoridad y toma de decisiones desde un poder central, con una identidad comunitaria de los estados y provincias.

En estos sistemas, la noción de ciudadanía requiere compaginar identidad, participación y fidelidad en todos los niveles. El federalismo admite la posibilidad de dos identidades cívicas que requieren reconocimiento por parte del sistema político y lealtad del ciudadano hacia los dos estratos. El sistema de democracia directa de Suiza manifiesta la fuerza de la ciudadanía y dos características casi exclusivas: el referéndum y la iniciativa popular (Heater, D. 2007: 181)

La determinación de la ciudadanía en un Estado federal se vuelve compleja, en Estados Unidos, por ejemplo, la definición de la ciudadanía muestra todavía algunos temas de desacuerdo ya que es necesario precisarla en relación al gobierno federal por una parte y a los gobiernos estatales, por la otra. Las trece colonias independientes requerían coordinación y se intentaba formar un gobierno central. El tema de la ciudadanía apareció en el artículo IV de la Confederación en la “cláusula de la reciprocidad” que tenía el objetivo de formar un sentimiento comunitario entre los estados.

Sin embargo, la ciudadanía estratificada que proponía esta cláusula de reciprocidad, empleaba términos confusos, ya que empleaba como sinónimos de ciudadanos los conceptos “pueblos” y “habitantes”. James Madison cuestionaba las ambigüedades y errores de interpretación a que conducía dicha confusión pues implicaba que todo habitante de un Estado, aún sin ser ciudadano, tenía los mismos correspondientes derechos y privilegios que los ciudadanos libres. Como se ha mencionado, la ciudadanía no es tan sólo un tema constitucional, sino que alude a los compromisos que los ciudadanos contraen.

En relación con tales compromisos cívicos, en una ciudadanía estratificada de doble nivel, como en los Estados Unidos, se presentaron diversas opiniones importantes entre las que resaltan las realizadas por James Madison y por Alexis de Tocqueville. Madison consideraba que el compromiso hacia el gobierno estatal sería más fuerte debido a que la relación era más inmediata y los ciudadanos participarían en la administración de los asuntos de interés doméstico y personales del pueblo. De la misma manera, Tocqueville planteaba en *La democracia en América* que los gobiernos de los estados están más cercanos y pendientes de las necesidades de sus gobernados, por lo que los ciudadanos se interesan en los proyectos del gobierno.

Los problemas de la ciudadanía estratificada se presentan cuando hay conflicto entre la prioridad federal y la estatal, como en el caso de la esclavitud y los derechos civiles de los negros. Los estados del norte prohibían la esclavitud en 1820, mientras que en los del sur se mantenía de acuerdo con la Quinta Enmienda que salvaguarda la propiedad, ya que los esclavos se consideraban propiedades. La propia Constitución excluía de la ciudadanía a la raza africana.

Se dieron luchas por los derechos civiles de los negros (abolir la segregación racial) que en la segunda mitad de la década de los 50's, obtuvieron logros debido a que eran tutelados a nivel federal, mientras que los derechos sociales o derechos de ciudadanía social, como la

educación, tradicionalmente eran responsabilidad de los estados, no de la federación, hasta 1960. La negociación entre ciudadanía estatal y federal continúa hasta nuestros días.

El sistema federal de los Estados Unidos era admirado en Europa y en el siglo XIX se gestaba un movimiento en pro de la creación de Estados Unidos de Europa.

2.3.2 La ciudadanía europea

La unión de estados europeos no supone necesariamente la creación de una categoría jurídica de ciudadanía europea. Las instituciones conjuntas que propusieron diversos pensadores políticos como el Consejo de Europa (1949), la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA, 1952) y la Comunidad Económica Europea (CEE, 1957), no hacen referencia en sus documentos fundacionales a la ciudadanía europea, noción que aparece hasta el año 1961.

Sin embargo se gestaba a través del Consejo de Europa y de la Comunidad Europea (CE) una forma de ciudadanía europea.

Según Heater, la ciudadanía europea se desarrolló mediante la inclusión de los derechos europeos del hombre por el Consejo de Europa, la formación que realizó la CE de un parlamento europeo, la experiencia de la Comunidad Europea y de la Unión Europea y la constitución en 1993 de una ciudadanía formal de la Unión Europea mediante el Tratado de Maastricht (Heater, D. 2007: 189)

Los 50 años que siguieron a la creación del Consejo de Europa en 1949, permitieron que se incorporaran más Estados miembros, hasta llegar a ser cuarenta y siete en la actualidad. Así, los habitantes de esos países estaban legalmente auspiciados por la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y el incumplimiento podía ser juzgado a través de la Comisión de Derechos Humanos, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Se promovían

los derechos civiles de los ciudadanos europeos. La plena ciudadanía europea se obtiene si el propio Estado reconoce a la Comisión.

A través de diversas instituciones, se han determinado los derechos sociales y económicos de los ciudadanos y de los trabajadores de la Unión Europea. El estatus de la ciudadanía de la Unión Europea quedó establecido formalmente en 1993 en el Tratado de Maastricht. Este estatus se impulsó con la intención de lograr un mayor compromiso del pueblo hacia la comunidad y promover la democracia (Heater, D. 2007: 191)

El artículo 8 del Tratado de Maastricht establece los derechos políticos de los ciudadanos de la Unión Europea como los derechos de libre tránsito y residencia en el territorio de los Estados miembros; a la protección diplomática por parte de Estados miembros en territorio de países no representados en la Unión; derecho de petición ante el Parlamento y de acudir al Defensor del Pueblo; derecho a participar como elector o candidato en las elecciones municipales y al Parlamento, del Estado miembro en el que resida, aunque no sea nacional del mismo. Se tomaron otras medidas con la intención de promover una Europa del pueblo, -en francés *Europe des Citoyens*-, como la emisión de pasaportes comunitarios.

Sin embargo, al finalizar el siglo XX la ciudadanía europea no tenía tanta relevancia como la ciudadanía nacional y apenas un poco mayor que la ciudadanía mundial.

2.3.3 Ciudadanía mundial

Los estoicos concibieron la ciudadanía mundial, aunque no le asignaban estatus jurídico ni político, no concebían un Estado mundial formalizado. Desde finales del siglo XV hasta mediados del XVI, se tradujeron y publicaron textos griegos y latinos, entre ellos, los de los

estoicos que fueron captados por los filósofos y escritores. Fue, sin embargo, en el periodo de la Ilustración cuando la noción de ciudadanía mundial comienza a extenderse.

El ideal cosmopolita influyó a diversos filósofos políticos importantes entre los que resaltan, John Locke, Immanuel Kant, Voltaire, Schiller, Thomas Paine y Robespierre, entre otros. Locke hace referencia a un sentido de ciudadanía política del mundo, el hombre y la humanidad entera son parte de una comunidad, se separan en asociaciones pequeñas debido a la maldad y corrupción de algunos hombres degenerados. Voltaire y Schiller afirmaban ser ciudadanos del mundo, partícipes de una cultura y relaciones transnacionales.

Thomas Paine consideraba que la Revolución americana marcaba el inicio de una nueva era en la que se evolucionaría hacia una ciudadanía mundial. De la misma manera, los revolucionarios franceses, consideraban que su movimiento podría conducir a la misma situación. Robespierre, como representante del movimiento, intento incluir un artículo, -sin lograrlo-, en la Declaración de Derechos jacobina de 1793, que planteaba la hermandad entre los hombres de todos los países y ayuda entre los pueblos, como si formaran un mismo Estado, en la que se manifiesta influencia de Plutarco.

Anacharsis Cloots, en sus *Bases Constitucionales de la República del Género Humano* (1793), proponía la creación de un Estado universal, una república mundial poblada por ciudadanos del mundo, lo que, en su opinión, garantizaría la paz mundial; la propuesta de Cloots no generó mucho interés en la Convención. En 1795, Kant presentó un proyecto de ciudadanía mundial más meditado, en *Sobre la paz perpetua*. Planteaba tres tipos de leyes para su incorporación a la Constitución, entre las cuáles la tercera era la ley cosmopolita o derecho cosmopolita. La propuesta de la ley cosmopolita para su incorporación era la siguiente: “Una constitución según el derecho cosmopolita (lo es) en cuanto hay que considera a hombres y

Estados en sus relaciones, como ciudadanos de un estado universal de la humanidad (*ius cosmopoliticum*)” (Kant, I. 1998: 37)

Kant consideraba que los seres humanos aumentan cada vez más su movilidad y tienen el derecho de ser bien acogidos en cualquier país en el que se encuentren. Asimismo, consideraba que al lograrse una comunidad casi universal, la violación de un derecho en algún lugar de la tierra repercute en los demás, por lo que los ciudadanos deben estar atentos y vigilar el respeto a los derechos en todo el planeta. Estas ideas se encuentran vigentes en nuestra época.

El ideal cosmopolita prácticamente desapareció ante la fuerza ideológica del nacionalismo, que se manifestó primordialmente a través de las dos guerras mundiales. Posteriormente, se crearon instituciones internacionales, se buscaba una asamblea mundial democrática, sin embargo no lograron promover la ciudadanía mundial. A las Naciones Unidas se les cuestiona que carecen de una naturaleza democrática pues están controladas por las grandes potencias, asimismo debido a su incapacidad para transformar las esperanzas de los ciudadanos en derechos y obligaciones, en parte debido al principio de soberanía de Estado y a la inexistencia de un código de derecho mundial.

Los años de la posguerra hicieron que el tema de la ciudadanía mundial se convirtiera en un asunto de gran urgencia, debido a la Guerra Fría y a la amenaza de una guerra nuclear y surgieron diversos movimientos, principalmente en Estados Unidos y Francia, que promovían un gobierno mundial federal, entre los que cabe destacar la propuesta de Mortimer J. Adler quién publicó en 1944: *Cómo pensar la guerra y la paz*. Se presentó también el proyecto de Garry Davis quién propuso el Registro de Ciudadanos del Mundo con la intención de crear un gobierno federal mundial con un parlamento elegido democráticamente, en el que se captan influencias desde finales del siglo XVIII.

En 1948 en Montreux, Suiza, se celebró un encuentro que tenía la intención de fundar el Movimiento Mundial por un Gobierno Federal Mundial, que tenía el propósito de preparar una asamblea constituyente mundial cuya tarea sería diseñar una constitución para una federación del mundo. Las Naciones Unidas cuentan desde 1948, en sus Estatutos, con una Declaración Universal de Derechos Humanos cuya preservación esperan los ciudadanos del mundo; no obstante, la realidad ha puesto de manifiesto la constante violación de tales derechos y en términos generales, de la Declaración. En 1998, a través del Estatuto de Roma, se decreta la creación de un Tribunal Criminal Internacional que reconocía la ciudadanía mundial mediante la vinculación a partir de un derecho mundial incipiente, el Tribunal fue creado en el año 2003.

Los federalistas en su mayoría esperan que una reforma radical de las Naciones Unidas permita la creación de una ciudadanía mundial, idea que retomó fuerza a fines del siglo XX. Afirma Derek Heater (2007: 291) que para que tales ideas volvieran a cobrar relevancia, influyeron dos acontecimientos, principalmente. Por una parte, la concientización acerca de los problemas del medio ambiente que representan un grave peligro en el ámbito mundial. El segundo acontecimiento fue el debilitamiento del comunismo que hizo posible esperar un régimen mundial basado en la colaboración.

Las interpretaciones del concepto de ciudadanía mundial han sido muy variables y vagas a lo largo de la historia, considerado desde un código moral universal, hasta el planteamiento de la necesidad de un Estado mundial.

Algunos estudiosos del ámbito político, entre los que destaca David Held, han propuesto una “democracia cosmopolita” como forma de institucionalización alternativa ante la globalización económica, cultural y de las comunicaciones. Para el logro de tal democracia, se requiere una ciudadanía cosmopolita. David Held en su obra: *La democracia y el orden global*, analiza los

principios democráticos en los sistemas políticos y jurídicos en el ámbito mundial y plantea que si los Estados adoptaran procedimientos democráticos y una ley global aprobada democráticamente:

“podrían coincidir los derechos y las responsabilidades del pueblo *qua* ciudadanos nacionales con los del pueblo *qua* súbditos del derecho cosmopolita, y la ciudadanía democrática podría adquirir, en principio, un *status* genuinamente universal.” (Held, D. 1997:278)

Afirma Derek Heater, que resulta complejo elaborar una democracia cosmopolita, ya que hay que considerar la gama de actividades de la ciudadanía y su alcance geográfico e institucional. Los ciudadanos cosmopolitas, deben tener la oportunidad de participar en la vida política, un sistema jurídico justo y exigir responsabilidades en materia de economía. Es necesario garantizar a los ciudadanos su posibilidad de operar en diversas escalas: local, regional, nacional y global y a participar en asuntos de la sociedad civil a través de diversas organizaciones y asociaciones.

Estas dos dimensiones de la ciudadanía cosmopolita: instituciones y participación, aunadas a los valores e ideales de los estoicos son necesarias para hacer realidad la democracia cosmopolita.

2.8 Modelos de democracia

Según Norberto Bobbio,:

“...la democracia es un conjunto de reglas primarias o fundamentales que establece quién está autorizado para tomar decisiones colectivas, bajo qué procedimientos y en qué condiciones. Es necesario también que aquellos que están llamados a decidir o a elegir a

quienes deberían decidir, se planteen alternativas reales y estén en condiciones de seleccionar entre una u otra.”(Bobbio, N. 1986:13)

De acuerdo con la definición de Bobbio, las condiciones *mínimas* que se deben de cumplir para considerar democrático a un gobierno, son:

- El procedimiento para la toma de decisiones se rige por el principio de mayoría, ya que la mayoría de la población adulta, se involucra.
- Están garantizadas un conjunto de libertades básicas que permiten a los sujetos que se involucran en la toma de decisiones, presentar y elegir entre diversas opciones sin coacción.
- Los gobiernos elegidos requieren entonces cumplir con tres factores, para ser considerados democráticos y para garantizar un alto nivel de gobernabilidad. Dichos factores, son: legitimidad, eficacia y estabilidad. La legitimidad de un gobierno democrático se logra a partir del respeto de las libertades, la igualdad, la justicia y la tolerancia entre individuos y grupos; la eficiencia consiste en coordinar y encauzar en un marco democrático, las diversas iniciativas de la sociedad, cada vez más plural, diferenciada y compleja, gracias a la participación de los diversos grupos implicados, en la toma de decisiones; la democracia garantiza la estabilidad, en la medida en que los diversos actores sociales y políticos han participado en la toma de decisiones, eliminando considerablemente las presiones sociales que se generan cuando las decisiones son unilaterales y arbitrarias.

El mismo Bobbio señala que aunque se presenten los citados factores, no hay una garantía absoluta de que las tensiones sociopolíticas serán eliminadas, ya que el propio ejercicio de toma

de decisiones entre individuos y grupos tan diversos, difícilmente anula las fricciones; además, debido a factores externos que también afectan la gobernabilidad.

Una forma de valorar la gobernabilidad es, según Bobbio, comparar la concepción ideal de la democracia, con las condiciones reales de su funcionamiento en determinada sociedad. De esta forma, plantea Bobbio la existencia de una democracia ideal y de una democracia real.

La democracia, según afirmó Winston Churchill, es el mejor de los gobiernos posibles, aunque pueda tener sus deficiencias; sin embargo, existen diferentes concepciones y modelos, tanto históricas, como actuales y cada país ha alcanzado su propio nivel de avance en su consecución. Asimismo, entre ciudadanía, la participación ciudadana y el sistema político democrático, se presenta una relación dialéctica. Con la intención de poder analizar las características del modelo de ciudadanía que se construye a través de las representaciones y prácticas sociales y valorar la distancia y relación que guarda con el sistema democrático, resulta imprescindible un breve recorrido histórico acerca de los modelos que se han presentado.

2.4.1. Ateniense (Democracia clásica)

En el siglo V a.C., Atenas surgía como la polis o ciudad-estado dominante, formada por diversas pequeñas comunidades relacionadas entre sí y gobernadas por monarcas locales, las cuales posteriormente, debido a conflictos violentos, fueron gobernadas por jerarquías tribales. El desarrollo de dichas ciudades fue estimulado por el impulso del comercio terrestre y marítimo y aparecieron tiranías gobernadas por autócratas que representaban los intereses de los comerciantes y terratenientes, pero desatendían los del resto de los pobladores, lo que generó diversas confrontaciones sociales. Para restablecer el poder se hicieron concesiones a los

agricultores y campesinos, constituyendo comunidades de pequeños propietarios y defensores de la comunidad, aspecto que influyó en la estructura política de las ciudades-estado.

Debido a la economía sustentada en la esclavitud que se había expandido, el creciente sector de los ciudadanos independientes logró aumentar sus actividades y con ello la civilización urbana floreció en Grecia. “Las comunidades urbanas adquirieron un sentimiento creciente de identidad y solidaridad. Se establecieron líneas claras de demarcación entre «los de dentro» (ciudadanos) y «los de fuera» (esclavos y otras categorías que incluían a todos aquellos, sin importar su condición, procedentes de otras comunidades). Esta identidad se reforzó con la extensión de la alfabetización, que también benefició a la administración, y ayudó al control de la población y de los recursos materiales (a pesar de que la cultura de la antigua Grecia siguió siendo predominantemente oral)” (Held, David, 2001:30-31)

Estos cambios generaron también modificaciones en las constituciones de las ciudades-estado y se transformaron los códigos legales, tanto los escritos como aquéllos transmitidos de generación en generación. La nueva cultura política gestada en Atenas a lo largo de un prolongado proceso, se difundió a toda la civilización griega y los ciudadanos libres disfrutaron de nuevos derechos. David Held considera que el surgimiento de la democracia fue propiciado por diversos factores, entre los que resaltan el surgimiento de una ciudadanía independiente militar y económicamente, que se dio en comunidades pequeñas y compactas cuyos habitantes tenían estrechas relaciones de convivencia en un centro urbano.

Entre otros factores que contribuyeron al surgimiento de la democracia, según el citado autor, cabe señalar el hecho de que la comunicación era muy fácil, lo que permitía que cualquier medida económica y social tuviera un impacto inmediato, de la misma manera, las responsabilidades políticas eran ineludibles y la participación política resultaba más viable.

“Estos factores –tamaño, complejidad y grado de heterogeneidad política- son de gran importancia en la teoría de la democracia, a pesar de que,...la desaparición definitiva de la democracia clásica griega no representa la pérdida de la única oportunidad histórica de una extensa y plena participación en los asuntos públicos” (Held, David, 2001:-31-32)

El pensamiento político moderno en occidente ha sido inspirado y modelado por la democracia ateniense y sus ideales políticos de igualdad entre ciudadanos, libertad respecto a la ley y la justicia. Sin embargo, algunas de las ideas centrales de la democracia moderna, como la noción liberal del ser humano como individuo con derechos, no provienen de Atenas. Diversos filósofos como Platón y Aristóteles hicieron fuertes críticas a la teoría y práctica democráticas en Atenas y según afirma Held, no existe ningún teórico de la democracia en la antigua Grecia, cuyas ideas permitan justificar la democracia clásica en la polis.

Entre las referencias a las ideas acerca de la democracia, cabe señalar que treinta años después de su pronunciamiento, Tucídides, presentó¹³ la oración fúnebre de Pericles, quien fuera ciudadano, político y general ateniense, en la cual expone los ideales y objetivos de la democracia. Pericles plantea que la democracia es el modelo de régimen político y que recibe tal nombre debido a que se gobierna por la mayoría. Pericles expone que en ese régimen político todos los ciudadanos tienen el derecho e incluso la obligación de participar en la creación y el mantenimiento de la vida en común sin que se los impidiera el rango ni el estatus económico. Incluso, aquellos que no participaran en las actividades públicas, eran considerados inútiles.

Respecto a tales conceptos, afirma Held: “El *demos* es el poder soberano, es decir, la autoridad suprema que se ocupa de las funciones legislativa y judicial. El concepto ateniense de

¹³ Tucídides. Historia de la Guerra del Peloponeso.

«ciudadano» implicaba tomar parte en estas funciones, participando *directamente* en los asuntos del Estado.” (Held, David, 2001: 33) Sostiene que una de las características importantes de la democracia en Atenas es el compromiso generalizado con la *virtud cívica* que se manifestaba a través de la dedicación a la ciudad-estado republicana y el subordinar la vida privada a los asuntos públicos y al bien común.

En Atenas, la virtud individual y la ciudadana eran la misma; de tal manera, la realización de los hombres y su posibilidad de una vida honorable como ciudadanos sólo era posible en la *polis* y a través de ella pues la ética y la política estaban unidas en la vida de la comunidad política, en la cual se valoraba también la tolerancia: “La «vida buena» sólo era posible en la polis.” (Held, David, 2001: 34) Los derechos y las obligaciones de los individuos se generaban por el hecho de ser ciudadanos, en tal sentido eran públicos y no estaban en relación con atributos ni fines privados. La ciudadanía significaba la participación en los asuntos públicos.

En la ciudad-estado no existía la distinción entre ciudadanos y gobernantes, pues constituía una comunidad con una ciudadanía activa que se autogobernaba mediante el principio de la participación directa. Dicha participación estaba garantizada por dos derechos que disfrutaban todos los ciudadanos por igual: a participar en la toma de decisiones, es decir a la igualdad jurídica (*isonomía*) y a tomar la palabra en la asamblea (*isegoría*). Las premisas de la *isonomía* y la *isegoría*, garantizaban que las decisiones y las leyes estuvieran sustentadas en el mejor argumento y al ser emitidas por los propios ciudadanos en el marco de la vida en común, su legítima procedencia aseguraba su observancia.

La vida en la democracia exaltaba y promovía la libertad, la felicidad, el desarrollo de las potencialidades humanas y los objetivos del bien común, a través de la independencia, la educación, el arte, la religión y la participación en la vida común. La justicia consistía

102

precisamente en garantizar y lograr el papel y el lugar del ciudadano en la ciudad-estado. En la *Política*, Aristóteles analiza las características de la democracia, sus fundamentos éticos y los fines que persigue.

Aristóteles afirma que la libertad es el fin que busca la democracia y son criterios de la libertad el ser gobernado y gobernar por turno, y el vivir como se quiere. Para el primer criterio se requiere la igualdad numérica o reparto equitativo de la práctica del gobierno, la cual es posible cuando dicha participación política es remunerada y por ello no perjudica a los individuos, también debido al hecho de que todos los votos tienen el mismo peso y al hecho de que en principio todos tienen las mismas posibilidades de acceder a un cargo público. La igualdad es el fundamento práctico y moral de la libertad.

Afirma Held que este profundo compromiso con la igualdad puede entrar en conflicto con la libertad de acuerdo con su segunda acepción (vivir como se quiere) y por ello los demócratas consideran que deben existir ciertos límites a la elección personal de manera que la libertad de un ciudadano no interfiera con la de otro de manera injusta. Al respecto, Aristóteles manifestó sus reservas hacia la democracia, aunque definía a los seres humanos como animales políticos que sólo podían alcanzar su pleno desarrollo en la *polis*. (Held, David, 2001: 37)

Se afirma que la democracia clásica era radical, ya que su estructura institucional¹⁴ estaba compuesta por el conjunto de los ciudadanos -atenienses varones, mayores de veinte años-, que constituía a la asamblea, órgano soberano fundamental de Atenas que se reunía más de cuarenta veces al año y requería un quórum de 6000 ciudadanos para validar las actas con los asuntos legales. Los asuntos importantes en materia financiera, política y legal, orientados a mantener el

¹⁴ Basado en la Constitución de Clístenes, algunas de cuyas reformas fueron adoptadas en 507 a.C., vid en Held David 2001, p. 37-39.

orden público, eran debatidos y discutidos en la asamblea y se buscaba la unanimidad, pero si no se lograba, se aceptaba su aprobación por la mayoría mediante la votación formal. La votación formal permitía explicitar las diferencias de opiniones y legitimar las resoluciones tomadas.

Dado que la asamblea era un órgano muy grande, el “Consejo de los Quinientos” compuesto por los varones mayores de treinta años, funcionaba como Comité ejecutivo y de gobierno de la asamblea, recibía las iniciativas y propuestas políticas, redactaba los borradores de la legislación, así como, organizaba y proponía las decisiones públicas, con apoyo del “Comité de 50” que cambiaba cada mes, con un presidente diferente cada día. Los tribunales estaban organizados a partir de criterios similares a los de la asamblea, los ”magistrados” desempeñaban las funciones ejecutivas de la ciudad, a través de un consejo de diez personas, la mayoría de los funcionarios elegidos, ejercían sus cargos durante un año. Se crearon diversos métodos para elegir a los funcionarios que pretendían disminuir los riesgos de la política autocrática o de clientela que están relacionadas con las elecciones directas, entre los cuales estaban la rotación de puestos, el sorteo, el sorteo por grupos y la elección directa. (Held, David. 2001: 39)

Held sostiene que las grandes innovaciones de la democracia ateniense se fundamentan en su carácter exclusivista, ya que la ciudadanía era sumamente restrictiva, pues incluía a una pequeña proporción de la población: los atenienses varones, mayores de veinte años, por ello afirma que era una democracia de patriarcas en que las mujeres no tenían derechos políticos, sus derechos civiles estaban muy limitados y sus logros se referían estrictamente al trabajo y al servicio doméstico no reconocido políticamente. La *polis* clásica se caracterizaba también por su unidad, solidaridad y participación. La vida de los ciudadanos estaba muy relacionada con el Estado, ya que realizaban actividades de administración, servicio militar, legislación, justicia,

ceremonias religiosas, festividades, juegos y el control de la gran cantidad de personas que no podían tener un papel en el Estado.

De la misma manera, una gran cantidad de los residentes atenienses tampoco tenía derecho a participar en los procedimientos formales, entre ellos los niños, los inmigrantes y los esclavos –que eran empleados en la agricultura, minería e industria, así como en las actividades domésticas. La democracia ateniense era inseparable de la esclavitud; se calcula que en la época de Pericles había tres esclavos por cada dos ciudadanos. La igualdad política según la concepción clásica, no significaba entonces, la igualdad de poder para todos los adultos, sino igualdad para aquellos que tenían el mismo estatus (adultos varones atenienses de nacimiento), entre los cuales, incluso, había diferentes oportunidades de influencia política.

A partir de esta concepción de la igualdad política, se afirma que la democracia ateniense estaba fundamentada en una base que no era democrática, en una “tiranía de los ciudadanos.” (Held, David. 2001: 40) No obstante, afirma Held que es necesario, además de señalar las limitaciones de tal democracia, reconocer sus logros, respecto a los cuales resalta el haber elegido el “gobierno de muchos” por encima del “gobierno de unos pocos” y la lucha que aquellos sostuvieron en defensa de sus derechos. (Finley, vid en Held. 40) Entre las principales características de esta democracia ateniense, resalta la gran responsabilidad que tenían los funcionarios y los ciudadanos ante la asamblea, el gran control que el pueblo ejercía sobre sus gobernantes, el gran debate popular que se presentaba, la toma de decisiones que se llevaba a cabo en reuniones masivas.

Un aspecto relevante de la democracia ateniense consiste en la participación ciudadana, la cual era promovida a través de diversos medios. Dicha participación podía realizarse plenamente con fundamento en las habilidades personales de oratoria, asimismo era potenciada por los

105

diversos enfrentamientos entre grupos cuyos líderes eran rivales, por la existencia de redes de información informales que generaban comunicación e intrigas. Sin embargo, el enfrentamiento entre facciones opuestas ejercía presión para que se tomaran decisiones en forma rápida y concluyente.

De esta manera, las fragilidades que presentaba este sistema democrático consistían en la vulnerabilidad a la que era sometida la asamblea ante la excitación y presión durante la toma de decisiones, la debilidad de algunos fundamentos de las decisiones populares y la ausencia de sistemas que permitieran controlar conductas impulsivas, lo que representaba un potencial factor de inestabilidad política. Held señala que la democracia ateniense incorporó posteriormente algunos aspectos constitucionales a fin de que compensaran la soberanía e impidieran las decisiones precipitadas e irreversibles y dieran protección a las leyes y procedimientos que se promulgaban. Dado que la asamblea y el consejo eran dominadas por ciudadanos de clase social alta, estos tendían a seguir sus propios intereses y las contiendas políticas adquirirían un tono personal.

Los críticos de la democracia ateniense cuestionan la igualdad de derechos de que gozaban todos los ciudadanos para participar en la asamblea, a ser escuchados por ella y acceder a un cargo público, lo cual conducía a la injusticia debido a las presiones sobre las decisiones impulsadas por intereses de grupos particulares, sentimientos, prejuicios, así como por la ignorancia, antes mencionados. Por lo anterior, Platón cuestionó a la democracia como forma de gobierno y propuso que el control político debía estar en manos de una minoría que contara con la experiencia, el juicio político, los conocimientos y las habilidades necesarias. Según Platón, la democracia conduce a los líderes a actuar consecuentemente para conservar su propia

popularidad y posición, de ahí que la estrategia política se fundamenta en aquello que puede ser vendido.

Aún más, según afirma Platón en la República, las demandas de libertad e igualdad política características de la democracia clásica son incompatibles con el mantenimiento de la autoridad, el orden y la estabilidad, ya que tales derechos al ser independientes de las capacidades y contribuciones de los ciudadanos conducen a la satisfacción del deseo y a la permisividad que a su vez generan la pérdida del respeto a las autoridades políticas y morales. Las consecuencias que acarrea esta situación son la ruptura en la cohesión social, la fragmentación de la vida política y conflictos de intereses entre diversos sectores, con lo cual es imposible un compromiso compartido a favor del bien común y la justicia.

La democracia clásica se eclipsó debido a factores internos como la vulnerabilidad de la economía que dependía de la esclavitud, por la ausencia de un centro burocrático, falta de coordinación entre algunas divisiones institucionales que dificultan la administración de la economía, del sistema comercial y territorial, así como del sistema militar. Todo ello propició que Atenas, al igual que otras ciudades griegas, perdiera su estatus independiente y fuera absorbida por otros imperios y poderes rivales.

2.4.2 Republicano (Romano)

Al igual que Atenas, la Roma republicana era una sociedad con una cultura oral, los asuntos de gobierno se llevaban a cabo mediante la participación popular y tenían poco control burocrático centralizado, fomentaban un profundo sentido del deber público, una tradición de virtud cívica o responsabilidad hacia la república. En ambas formas de gobierno, las demandas del estado tenían prioridad sobre las individuales; sin embargo, mientras Atenas era una

democracia, Roma era esencialmente una oligarquía. Aunque se incluyó en la comunidad política a los campesinos nacidos ciudadanos y a los esclavos emancipados, los aspectos políticos fueron ampliamente dominados por las elites.

“Las democracias antiguas constituyen regímenes bastante atípicos en la historia política.

La idea de que los seres humanos pueden ser ciudadanos activos del orden político – ciudadanos de su estado-, y no meros súbditos sumisos de un soberano, tuvo pocos abogados desde las primeras asociaciones humanas hasta principios del Renacimiento y la caída del absolutismo.” (Held, David, 2001: 55)

Held sostiene que el hecho de que en Occidente desapareciera el ideal de ciudadano activo que afirma su existencia en y a través de la acción política, no resulta sencillo de explicar. Uno de los factores importantes para entender tal situación radica en el desarrollo del cristianismo, que sustituyó la valoración del ciudadano dotado de un juicio activo por el fiel creyente y trasladó la fuente de autoridad y sabiduría que estaban centradas en el ciudadano (o en el rey filósofo) a otros representantes mundanos, de esta manera el poder eclesiástico se colocó por encima del secular. La lógica de la acción política de la polis fue modificada en un sistema teológico y la concepción de los seres humanos como ciudadanos se sustituyó por la preocupación por su vida en comunión con Dios.

Es necesario señalar que el cristianismo se constituyó como una religión mundial debido a que detentaba valores y aspiraciones estimables por su aportación a los asuntos humanos; asimismo, dado que mantuvo algunos de los ideales del mundo antiguo, como el de la igualdad y el de las reglas que rigen una vida productiva. Durante la Edad Media se abandonó la reflexión acerca de la naturaleza de la comunidad política y sobre la democracia. La influencia en el pensamiento político de la obra de Tomás de Aquino en el siglo XIII, de los Padres de la Iglesia y

de San Agustín, fue causa de su estancamiento, ya que concebían la sociedad como un orden en la jerarquía divina, incompatible con la idea de un orden político secular, en la que el papa y el emperador del Sacro Imperio Romano ocupaban el lugar privilegiado.

El republicanismo se revitalizó a fines del siglo XI debido a que algunas comunidades del norte de Italia establecieron sus propios cónsules o administradores para gestionar sus asuntos judiciales, con lo que desafiaban los derechos del papa y del emperador por el control legal. Para fines del siglo XII, dicho sistema consular fue sustituido por consejos de gobierno dirigidos por funcionarios que gozaban de poder supremo en materia ejecutiva y judicial y eran electos para un tiempo determinado. Las ciudades en las que fungían estos Consejos se convirtieron en ciudades-estado o ciudades-república independientes.

Los funcionarios que formaban parte de los consejos de gobierno eran ciudadanos: grupo exclusivo constituido por hombres con propiedades que pagaban impuestos, nacidos o residentes habituales en la ciudad y elegidos por sorteo. La ciudad se dividía en distritos electorales de los que se extraían los miembros del Gran Consejo de Gobierno, que nombraba a sus propios jefes. Las ciudades-república desconocían el término democracia hasta después del siglo XIII en que adquirió una connotación peyorativa, asociada con la política de la plebe, con el gobierno en beneficio de los pobres más que en el interés público y con una forma de gobierno en que el pueblo se convierte en tiránico y logra abolir las distinciones sociales y los privilegios adquiridos.

Held afirma que algunas formas de republicanismo renacentista son formas de republicanismo aristocrático o nobiliario, más que un tipo de política democrática, alejadas de la defensa del sufragio universal y del derecho de los adultos a oponerse a su gobierno. Sin embargo, estas repúblicas contribuyeron a la teoría y a la práctica democráticas por sus innovaciones institucionales, las que mostraron que el autogobierno era viable.

Las ciudades-república, con su organización, representaron un desafío a la idea de que el gobierno era una forma divina de autoridad y a los gobernantes tiránicos y absolutistas que defendían su derecho legítimo de decisión en asuntos de estado. Los argumentos a favor de la autodeterminación y la soberanía popular, que desarrollaron dichas ciudades, ejercieron gran influencia en el pensamiento político posclásico, en los siglos XVII y XVIII en Europa y América. El principal argumento de la república renacentista era que la libertad de una comunidad política se fundamentaba en el hecho de que la única autoridad a la que debía dar cuenta era a la propia comunidad y en el derecho de los ciudadanos a participar en el gobierno de sus asuntos comunes, de acuerdo con un marco constitucional que define distintos papeles para las fuerzas sociales dominantes.

Se expresaba de la siguiente manera:

“...la libertad de los ciudadanos consiste en la plena consecución de los fines que ellos mismos han elegido, y el más alto ideal político es la libertad cívica de un pueblo autogobernado e independiente. La comunidad en su conjunto «debe conservar en última instancia la autoridad soberana», asignando a sus diversos gobernantes o magistrados «un rango no superior al de funcionarios electos»...” (Held, David 2001: 62)

Los magistrados y gobernantes son agentes o administradores de justicia y tienen el deber de asegurar que se cumplan las leyes promulgadas por la comunidad para su propio beneficio. Las nuevas ideas sobre el poder político, la soberanía popular y los asuntos cívicos en Italia, algunas con influencias de la antigua Grecia y otras con el interés por distinguirse de ellas por considerar que las democracias que gestaron tenían tendencia a la inestabilidad, conflictos civiles e inestabilidad interna; de ahí que en Roma el modelo de gobierno propuesto, vinculaba la libertad con la virtud, con la gloria cívica y el poder militar.

“Virtud significaba patriotismo y espíritu público, una heroica disposición a buscar el bien común por encima de los intereses de uno mismo o de la propia familia.” (Canovan, vid en Held, David. 2001: 62-63) Los republicanos renacentistas fundamentaban sus argumentaciones en escritos clásicos como los de Cicerón (106-43 a.C.), Salustio (86-35 a.C.) y Tito Livio (59 a.C.-17 d.C.), en sus elogiosas descripciones de la República romana. Así en *De Re Publica*, Cicerón plantea la forma en que el gobierno puede estructurarse para que responda al interés común de los ciudadanos:

“La cosa pública [res publica] es asunto del pueblo [populi res]; y el pueblo no es cada grupo de hombres, asociados de cualquier manera, sino un amplio conjunto de hombres unidos por un acuerdo común acerca de la ley y los derechos y por el deseo de participar de mutuas ventajas.” (Cicerón, vid en Held, David. 2001: 63)

Salustio consideraba que el ascenso de Roma se debía a que había conseguido la libertad y, al igual que Tito Livio, consideraba que la virtud cívica favorecía la expansión del poder republicano, cuando predominaba sobre intereses de las facciones, cuando los intereses comunes de los ciudadanos estaban por encima de la tendencia a las prácticas políticas corruptas que buscan el interés privado en los asuntos públicos. Además de la virtud de los ciudadanos fundada en el respeto a la autoridad religiosa y secular, así como con la modestia, la justicia y nobleza del pensamiento, algunos autores consideraban que la grandeza de Roma se debía al equilibrio de las instituciones, principalmente de la constitución mixta que prevenía la creación de facciones al otorgar aunque fuera un papel limitado, a todas las principales fuerzas sociales que actuaban en el dominio público.

Sin embargo, en las ciudades-república, debido a la ciudadanía restringida y al hecho de que los consejeros se elegían entre la nobleza, los grupos excluidos se movilizaban para formar

111

sus propios consejos e instituciones, lo que generó inestabilidad civil y política, propiciando enfrentamientos violentos. Los hechos descritos causaron que las ciudades-república fueran reemplazadas por nuevos sistemas de poder hereditario. Afirma David Held, que la tradición republicana del pensamiento político del renacimiento no fue unitaria y podían distinguirse dos corrientes de republicanismo que se han denominado “republicanismo humanista cívico” y “republicanismo clásico cívico”.(2001: 64)

Held califica dichas tradiciones como republicanismo “desarrollista” y “protector”. Dicha denominación es empleada a fin de estar en condiciones de explicar las distintas maneras en que se articulan la libertad y la participación políticas en el republicanismo y en el liberalismo y de señalar las diferencias entre las dos tradiciones. En lo que respecta a la participación política, el republicanismo desarrollista o humanista cívico, resalta su importancia intrínseca para el desarrollo de los ciudadanos como seres humanos y los teóricos del republicanismo protector o clásico cívico señalan su importancia instrumental para proteger los objetivos de los ciudadanos.

La teoría republicana desarrollista se basa en elementos de la democracia clásica y en los filósofos de la polis griega que planteaban la importancia de la participación política y de la polis como medios de autorrealización y aspecto imprescindible para la vida virtuosa. La teoría republicana protectora se fundamenta en los pensadores de la Roma republicana que plantean la fragilidad de la virtud cívica y su vulnerabilidad ante la corrupción si se basa sólo en la participación política de un grupo importante, de ahí que señalan la importancia de que todos los ciudadanos participen si desean salvaguardar su libertad personal. Los teóricos que articularon las citadas tradiciones son Marsilio de Padua y Jean-Jacques Rousseau para el republicanismo humanista cívico y Maquiavelo, Montesquieu y Madison para el republicanismo clásico o cívico.

Marsilio de Padua (1275-1280-1342) *El defensor de la paz*, hizo una defensa de los gobiernos por elección en su obra, de la soberanía popular, de la elaboración de las leyes por parte de todo el pueblo o de la mayoría del mismo, cuya voluntad se articula en la asamblea general. Asimismo señaló los límites al poder del clero y de la realeza, abogando por una política secular controlada por un gobierno electivo. Las comunidades cívicas permitirían alcanzar una vida sin necesidades, regulada por las funciones del gobierno que actúan en beneficio común y no en función de intereses particulares o de facciones.

Entre tales tareas, una de gran importancia consiste necesariamente en el ejercicio de la autoridad coercitiva unitaria que logre la paz en la comunidad y garantice la supervivencia de las asociaciones civiles. Para Marsilio el buen gobierno surge de gobernantes electos que velan por el interés público con respaldo de un poder coercitivo, más que de una comunidad dedicada a la virtud. La voluntad popular es garantía más efectiva de un gobierno justo, que vela por el beneficio común, que el gobierno de una sola persona o un grupo, así propone que el pueblo es el legislador: “la autoridad para legislar pertenece a «el conjunto de los ciudadanos»; sólo ellos tienen autoridad para promulgar las leyes.” (Marsilio de Padua, vid en Held, David. 2001: 67)

De acuerdo con la democracia clásica y con la concepción de Aristóteles acerca de la política consideraba que el ciudadano era alguien que formaba parte de la comunidad civil, sea en el gobierno o en la función judicial de la política. “La ciudadanía es el medio de implicación en una empresa colectiva orientada hacia la consecución del bien común; y la participación política es el vehículo necesario para el logro de ese bien.” (Marsilio de Padua, vid en Held, David. 2001: 68) Según Marsilio, eran ciudadanos los varones con propiedades sujetas a impuestos, nacidos o residentes habituales en su ciudad; así las mujeres, los niños, los esclavos y los extranjeros estaban excluidos de la ciudadanía.

Según Held, la concepción de la ciudadanía de Marsilio que influyó a los pensadores renacentistas, implicaba una idea de la participación política que podía adaptarse únicamente a comunidades pequeñas: el autogobierno de las ciudades-república. Hasta Montesquieu, pocos pensadores republicanos se preocuparon por proyectar este tipo de gobierno a grandes territorios. Los republicanos renacentistas consideraron el gobierno popular como una forma de autogobierno para quienes eran considerados ciudadanos, únicos capaces de disfrutar y desarrollar la serie de relaciones y derechos públicos que dicho gobierno generaba.

En la doctrina de la soberanía popular de Marsilio también se encuentran tesis absolutistas, pues proponía que la voluntad popular, que es ilimitada y sin contrapesos, puede someter cualquier valor, grupo o institución. Bajo esta influencia, los republicanos de las ciudades-estado y sus seguidores confiaron absolutamente en el juicio de hombres de honor y en la teoría y la práctica del autogobierno. Para tales republicanos:

“el autogobierno era una forma de democracia directa entre leales «miembros de un club»; todavía no tenían una visión de la naturaleza del gobierno popular propia de una época más escéptica que dudaba de la bondad y la prudencia de todos, gobernantes y gobernados.” (Held, David, 2001: 69-70)

Hemos señalado que en Italia en las ciudades-república comenzaron a presentarse problemas internos tales como luchas entre facciones que hicieron que los gobiernos electivos declinaran y dieran paso nuevamente a gobiernos autoritarios. La defensa de los ideales republicanos en el contexto antes señalado, resultaba difícil y se requerían importantes argumentos, que fueron proporcionados por Niccolò Machiavelli (1469-1527) que vinculó la defensa de formas de gobierno electivo y una política participativa con la perspectiva del bienestar y la gloria cívicos. Machiavelli, con influencia de la teoría política del mundo antiguo y

del nuevo orden emergente en Europa, consideraba que la participación cívica sentaba las condiciones para la independencia, el autogobierno y la búsqueda de gloria.

Machiavelli ha sido considerado el primer teórico del estado moderno, en dos de sus obras más importantes, *El príncipe* y los *Discursos*, exploraba las posibilidades de equilibrio entre los poderes del estado y los del ciudadano. Machiavelli afirmaba que el estudio de la historia clásica permite captar que las tres principales formas de gobierno constitucional, monarquía, aristocracia y democracia son inherentemente inestables y tienden a crear un ciclo de degeneración y corrupción, ya que el mundo político es un mundo de caos potencial. Consideraba que la tarea del gobierno era articular un sistema de organización y ordenamiento de la vida política y a su vez la política era una lucha para obtener, utilizar y contener el poder por lo que era el principal elemento constitutivo de la sociedad.

Concebía a los seres humanos en su mayoría como vagos, egoístas e incapaces de hacer el bien sin estar constreñidos por la necesidad, de ahí que se preguntaba acerca de cuál era la forma de inculcar en ellos la virtud cívica. Como respuesta a dicha interrogante, propuso que la aplicación de la ley y la defensa del culto religioso eran los dos mecanismos institucionales fundamentales. La ley brinda a las personas las bases para poner los intereses de la comunidad por encima de los propios.

Asimismo, Machiavelli, a partir de su tesis acerca de la inestabilidad de los regímenes constitucionales, consideraba que sólo la combinación de los tres sistemas constitucionales puede fomentar el tipo de cultura del que depende la virtud, ya que tiene más posibilidades de equilibrar los intereses de los distintos grupos sociales mediante la promulgación de leyes que logren el acuerdo entre los grupos. A partir de esta idea, para Machiavelli la existencia de facciones en disenso era la condición para que se promulgaran leyes buenas. La conclusión a la que llegaba

115

este politólogo era que: “la base de la libertad no sólo estaba en un régimen de autogobierno y una disposición a participar en la política, sino también en el conflicto y el desacuerdo, a través de los cuales los ciudadanos podían promover y defender sus intereses.” (Hel, David, 2001: 72)

Las comunidades que han prosperado económica y políticamente lo han logrado debido a la libertad; sin embargo, la libertad está permanentemente amenazada por los intereses opuestos de las diversas facciones y por la competencia entre los estados. Una constitución mixta permite contener la amenaza de los intereses en oposición, mientras que la competencia entre los estados se controla conteniéndolos. Este pensador situaba los fines del estado ,por encima de los individuales y las razones estatales tenían prioridad sobre los derechos individuales.

El arte de gobernar y la búsqueda del poder tenían prioridad sobre los intereses individuales y sobre la moralidad privada. Consideraba que en ocasiones la tiranía podía ser necesaria para garantizar la libertad y estabilidad política. Estableció una distinción entre el tipo de política que se requería para instaurar un estado o para liberarlo de la corrupción, en cuyo caso los elementos democráticos eran inadecuados y por otra parte la política necesaria, de carácter democrático, para el mantenimiento de un estado instaurado.

No obstante, consideraba que un gobierno libre era imposible de mantener, por las condiciones políticas reales de Europa, lo que se requería un déspota ingenioso que impusiera su visión del estado y de la sociedad y creara la posibilidad del orden y la armonía. Un estado libre dependería de un estado expansionista fuerte que asegurara las condiciones de su existencia y un buen estado es aquel que es seguro y estable. En estas tesis se captan incipientes elementos democráticos en el pensamiento de Machiavelli, que para su época era considerado un demócrata, pues consideraba que la participación política no debía restringirse a los ricos o nobles, sino que debía incluir a artesanos y pequeños comerciantes.

Machiavelli consideraba que el pueblo o la ciudadanía estaban constituidos por quienes tenían medios independientes, de los que se espera un interés en los asuntos públicos, que por ello excluía a los extranjeros, campesinos, sirvientes y a los dependientes: mujeres y niños. De esta manera, eran hombres con intereses en el país, descendientes de habitantes locales. La concepción de la política de Machiavelli, que vinculaba la autodeterminación con la autoprotección, fue trascendente para la historia del pensamiento político, aunque no incorporaba los derechos democráticos individuales, ni el gobierno mayoritario que serán fundamentales en el liberalismo moderno.

En el siglo XVIII, Rousseau, en coincidencia con muchos de sus predecesores, planteaba la importancia de la participación como miembro pleno de la *polis*, ideas que oponía a las demandas absolutistas de los reyes y a las críticas de los liberales. Proponía una “política asamblearia” en la que cada ciudadano pudiera reunirse sin problemas y conocer a los demás y estaba conciente de que este planteamiento democrático era viable para estados pequeños y no podría adaptarse a los estados venideros por el tamaño y la complejidad de los estados, su complejo desarrollo industrial y de comunicaciones. Sin embargo, Held considera que su interpretación del republicanismo es una de las más radicales o quizá la más radical y está vinculada a una nueva concepción de los derechos y deberes de los ciudadanos. (Held, David. 2001: 76)

Esta interpretación rousseauiana acerca del republicanismo es muy importante, ya que influenció las principales ideas dominantes durante la Revolución francesa, así como a la tradición marxista que es una de las principales opositoras de la tradición liberal. Afirmaba que su sistema de gobierno preferido era el republicano y sostenía la importancia central que tenían las obligaciones y deberes para con el ámbito público, como ejemplo de tal sistema proponía a

Roma republicana. En *El Contrato Social* criticaba la noción de democracia a la que asociaba con la Atenas clásica que en su opinión no podía mantenerse como ideal político debido a que no logró establecer una clara división entre las funciones legislativa y ejecutiva y se volvió un régimen inestable, sensible a las luchas internas y a la indecisión en momentos de crisis.

Rousseau concebía la república como la forma de asociación creada a partir del contrato social, la cual cobijaba por igual a todos los individuos bajo un marco legal común, que les daba seguridad; en sus propios términos: “Llamo república a todo Estado regido por leyes, bajo cualquier tipo de administración que pueda hallarse; en este caso es el interés público el que gobierna y la cosa pública es algo. Todo gobierno legítimo es republicano.” (Rousseau, Jean-Jacques. 2004: 87) Rousseau se preocupaba por aclarar que el concepto de república no se aplica únicamente a la aristocracia ni a la democracia, sino a todo gobierno guiado por la voluntad general que es la ley. Que para ser legítimo no necesita confundirse con el soberano, sino ser su ministro; en tal sentido, consideraba que la monarquía misma es república.

El contrato social permitiría a los individuos sumar fuerzas y actuar de común acuerdo, en cooperación y respetando la libertad individual. Al respecto afirma Rousseau:

“Encontrar una forma de asociación que defienda y proteja de toda fuerza común a la persona y a los bienes de cada asociado y mediante la cual cada uno, uniéndose a todos los demás, no obedezca sino a sí mismo y quede tan libre como antes.” (Rousseau, Jean-Jacques. 2004: 55)

Para Rousseau, el pueblo es el legislador, por ello defendía la idea de una ciudadanía activa y participativa, los ciudadanos reunidos decidían lo que era más conveniente a la comunidad y promulgaban las leyes. El autogobierno es planteado como un fin en sí mismo, pero

tal orden político no debe ser simplemente un estado sino que requiere la formación de un tipo de sociedad que permita la integración de los asuntos de estado con los de los ciudadanos. El papel de ciudadano es el más elevado que puede alcanzar un individuo, la única defensa legítima de la libertad radica en que los ciudadanos ejerzan un poder meditado.

El ciudadano es creador de la concepción públicamente generada del bien común, que a su vez lo limita. Rousseau consideraba que las opiniones acerca del bien público podían diferir por lo que aceptaba una disposición para el gobierno de la mayoría. Distinguía entre la voluntad general y la voluntad de todos.

La obligación de obedecer las leyes es aceptada libremente por el conjunto de los ciudadanos. La libertad se distingue de la independencia, ya que ésta última es motivada por la búsqueda del interés personal, mientras que la libertad se logra al participar en la generación y desarrollo de la voluntad general que establece la igualdad entre los ciudadanos que pueden disfrutar de los mismos derechos. El garantizar las condiciones económicas para todos los ciudadanos evita diferencias de interés y por tanto disputas.

Rousseau proponía un sistema político que delimitara a las funciones legislativa, -que pertenece al pueblo-, y ejecutiva, que pertenece al gobierno. Consideraba que el gobierno es legítimo cuando resulta de un acuerdo entre ciudadanos y cumple las instrucciones de la voluntad general. La concepción rousseauiana del gobierno republicano representa la máxima defensa de la relación entre la libertad y la participación.

Held sostiene que la citada concepción del autogobierno en interés colectivo, al que vincula con el gobierno legítimo, supuso un desafío para los regímenes de su época, los del pasado y para los posteriores estados democráticos. El republicanismo rousseauiano a partir de

su tesis de que la democracia es el nombre de un tipo de estado que responde ante el ciudadano ocasionalmente, cuestiona en esencia algunos supuestos clave de la democracia liberal, además de las desigualdades que el progreso generó al apartarse el hombre del estado de naturaleza y desarrollar comportamientos competitivos e interesados. Aunque comprendió algunos de los problemas que se generarían en una sociedad compleja y densamente poblada, no profundizó en su análisis, ni constituyó un sistema completamente coherente, tampoco tenía esperanza en un avance hacia una vida mejor.

“Las desigualdades que trajo aparejadas el «progreso» fueron seguidas habitualmente de corrupción e injusticia social. Rousseau parece haber mantenido que una comunidad política democrática basada en la ética tendría que superar dichas desigualdades para poder consolidarse, y que esa perspectiva era bastante improbable.” (Held, David. 2001: 80)

Rousseau consideraba que la educación cívica debía salvar la distancia entre la voluntad individual y el bien común y que las creencias comunes serían respetadas a través de una “religión civil”.

Una de las más grandes aportaciones de este filósofo político, es la tesis acerca de que los ciudadanos no deben depositar su confianza en los príncipes y, si quieren asegurarse de que los gobernantes actúan de acuerdo con los intereses del pueblo, deben asegurarse de que el pueblo es el verdadero gobernante, la que es aún retomada por diversos politólogos.

Pese a que Rousseau propugnaba por la naturaleza democrática de un gobierno de la comunidad, él mismo estableció restricciones a esa política al excluir a las mujeres y a los pobres

de su concepción de la ciudadanía, la cual determinaba en dependencia de la posesión de una propiedad, así como de la independencia con respecto a los otros.

El hecho de que durante el Renacimiento se recuperara en Italia el interés por el “autogobierno”, tuvo una importante influencia en otros países como Gran Bretaña, Norteamérica y Francia, durante los siglos XVII y XVIII. Los estudiosos de la política afrontaron el problema de cómo construir la vida cívica y cómo sustentar la vida pública.

2.4.3 Liberal o representativa

Se le denomina también democracia moderna o indirecta ya que: “...el pueblo no gobierna pero elige representantes que lo gobiernan.” (Sartori, G. 1988: 150)

La democracia liberal es un sistema de gobierno que consiste en una democracia representativa, en el que los representantes electos fundamentan su capacidad para tomar decisiones políticas en el estado de derecho; dicha capacidad está normada por una Constitución que regula la protección de los derechos y libertades individuales y colectivas.

Los representantes toman las decisiones que afectan al conjunto de una ciudadanía cada vez más amplia, las toman en nombre de ésta y siguiendo sus intereses. Se caracteriza por las elecciones periódicas y la existencia de partidos políticos. Además por una menor participación activa por parte de los ciudadanos, limitado a elegir a los gobernantes mediante el voto.

Las críticas a este modelo de democracia se refieren al hecho de que los representantes no velan por los intereses del pueblo, sino personales o de ciertos grupos. Sin embargo, sus defensores comentan que en sociedades muy amplias y complejas la democracia directa no es posible y la democracia representativa sustituye a la democracia directa en países de gran extensión y que las instituciones representan a las personas, no a sus intereses; además de que

permiten un equilibrio y garantía para el bien común, pues anulan a las diversas facciones que pueden entrar en conflicto, al concentrarlo en un foro único.

La democracia liberal surgió en los inicios de la sociedad moderna, consiste en la vinculación de la tradición democrática y la liberal. Aunque se reconoce la importancia de estas dos tradiciones en el mundo anglosajón, algunos autores cuestionan el hecho de que en América Latina no se han instaurado como realidades en nuestra cultura política, producto de la herencia. De acuerdo con tales autores, podemos debatir acerca de estos modelos, aunque en nuestra realidad no se hayan concretado.

El problema que une a las tradiciones antes citadas es el de proponer la posibilidad de establecer un mundo común a partir de la libertad subjetiva. Dicho problema generó la búsqueda de la universalidad. La tradición liberal propone que es la relación del individuo con la naturaleza mediante el trabajo y la propiedad, la que puede alcanzarle la universalidad, mientras que la tradición democrática considera que la fuente de la universalidad es la comunidad política que forma una voluntad común.

Las consecuencias son, según Carlos Peña, que al cifrar la tradición liberal en el trabajo y la propiedad la génesis del universalismo, el mercado es el paradigma de toda sociabilidad, ya que en él se intercambia el producto del trabajo. A su vez, la tradición democrática considera como paradigma de toda sociabilidad, al diálogo. Para el liberalismo el momento político está previamente constituido de derechos naturales y preferencias que hay que delegar, a los que el sujeto comparece; en el caso de la tradición democrática, el sujeto se constituye en medio de la comunidad política sin que prexistan sus derechos ni sus preferencias. (Peña, C. 2008: 3)

La democracia liberal reconoce los derechos fundamentales de libertad que hacen posible la participación política con autonomía total de cada ciudadano.

De acuerdo con el propio Peña, la economía es de importancia fundamental en el pensamiento liberal, mientras que la política, -que no necesariamente lo político-, y el diálogo son los objetos de la reflexión de la tradición democrática. A los liberales les interesa el mejoramiento de las condiciones para que se lleve a cabo el intercambio y la agregación de preferencias entre individuos, hasta lograr el *mercado perfecto*. A los demócratas les preocupa indagar sobre las características y posibilidades del ámbito de lo público que no es visto como el ámbito de convergencia de individualidades previamente constituidas, sino como ámbito básico de nuestra propia individualidad.

Según Carlos Peña, estamos ante serias inconsistencias y contradicciones que se originan en la mezcla de las dos tradiciones:

“Esas dos tradiciones poseen claras distinciones conceptuales, en la realidad política (que es donde importan) se han mezclado de una manera algo promiscua hasta casi efectivamente confundirse en la cultura política contemporánea. Hoy día, por ejemplo, creemos en la soberanía popular, que es un ideal democrático, pero al mismo tiempo en los derechos individuales, que es un ideal propio del liberalismo. Creemos en las comunidades políticas, particularmente en la nación, por las que aboga desde siempre (por el *demos*) la tradición democrática, pero a la vez reivindicamos la universalidad. Protegemos nuestra identidad cultural, pero a la vez creemos en un mundo cosmopolita.”
(Peña, C. 2008: 3)

2.4 .4. Directa

Es el modelo democrático característico del mundo clásico, particularmente de Atenas, es una forma de gobierno en la cual el pueblo participa de manera continua en el ejercicio directo del poder; se trata de una democracia basada en el autogobierno. (Sartori, 1988:41) El pueblo decide sobre los asuntos públicos reunido en la asamblea.

Este tipo de democracia puede realizarse en comunidades en las que las interacciones sean personalizadas, que cuentan con una tradición de deliberación oral, que tengan un alto sentido del deber cívico y que estén poco burocratizadas.

Uno de los principales defensores de este modelo de democracia fue Jean Jacques Rousseau, quien consideraba que la soberanía del pueblo radica en que sólo puede ser representado por sí mismo, ya que si delega dicha representación pierde el poder y la propia soberanía. Para conservar su libertad el pueblo no puede delegar el ejercicio de su soberanía a ninguna asamblea legislativa. El pueblo mediante su participación, unido en la asamblea, ratifica las leyes que el mismo aprobó por unanimidad.

Los cuestionamientos a este modelo son, como he mencionado ya, que sólo puede aplicarse a comunidades pequeñas y que es excluyente. Otras deficiencias que se señalan son la posibilidad de manipulación en la asamblea, mediante la demagogia y en el referéndum al diseñar la agenda de las decisiones que se tomarán.

Sartori propone dos tipos de democracia directa:

- a) Directa observable, que es el modelo antes descrito y
- b) De referéndum, que permite superar las limitaciones de la democracia directa observable, sin necesidad de acudir a la representación política, ya que los ciudadanos pueden ser consultados en forma permanente sobre los asuntos públicos. Actualmente las

tecnologías informáticas, como el internet, hacen más posible esta tarea de consulta y participación de la ciudadanía.

2.4.5 Contemporáneos

En la actualidad, el concepto democracia se ha vuelto “una palabra universalmente honorable” y aunque es una aspiración de todas las personas, al ser un término multi abarcador resulta confuso. Sin embargo, afirma Enrique González Pedrero, que sigue siendo esencialmente un término político vinculado al Estado en su totalidad, concebido como la máxima expresión de una sociedad políticamente organizada. Con la intención de aclarar el concepto, Giovanni Sartori plantea que la oposición entre democracia real y democracia ideal, es decir, entre hechos y valores, no tiene por qué darse, ya que ambas son necesarias, complementarias e insustituibles. (Sartori, G.vid en Gonzalez, E. 2006: 156)

La democracia “se concibe como un proyecto [...] de un ingenio humano en marcha, que gira en torno a un conjunto de ideas e ideales que la construyen, la mantienen en sus hechos y, si se la comprende mal o se la dirige mal, también la destruirán.” (Sartori, G. vid en González, E. 2006:158)

2.4.6. Democracia Participativa

Resurge en los años setenta como respuesta a los cuestionamientos que se realizaron al modelo de democracia representativa. El énfasis de este modelo es la participación ciudadana en el centro de los espacios de decisión del Estado. Aceptan mecanismos de representación y combinan procedimientos representativos y participativos, por ello se considera una modalidad suplementaria de la democracia representativa.

Le es inherente la participación activa de los ciudadanos, no tan sólo para el sufragio, sino en la toma de decisiones, participar activamente en las tareas del Estado y por lo tanto requiere estar mejor informado y atento a las acciones de los gobernantes.

Consideran fundamental la participación en las acciones de gobernar y ser gobernado y proponen la creación de espacios públicos que propicien el encuentro entre gobernantes y gobernados.

David Held propone como principales características de este modelo la participación directa de los ciudadanos en las instituciones del sistema político, ámbitos laborales y en la comunidad local; reorganización del sistema de partidos para hacer responsables a los dirigentes frente a sus afiliados; el funcionamiento de “partidos participativos” en el parlamento o en el congreso; apertura del sistema institucional para mantenerlo abierto a la experimentación con nuevas formas políticas. (Held, D. 2001: 305)

Además, que a los grupos sociales organizados se les cedan mayores recursos; reducir a la clase burocrática; mantener un sistema permanente de información para el ciudadano, a fin de que tome decisiones informadas; posibilitar la participación de grupos tradicionalmente excluidos, creando las condiciones para que puedan hacerlo.

2.4.7 Democracia Deliberativa

Zaida Osto (2010:209) propone que es una concepción que surge a partir de las propuestas de Jürgen Habermas, que plantea que los procesos de toma de decisión se alcanzan mediante la discusión entre ciudadanos libres e iguales. Quienes participan están comprometidos con los valores de racionalidad e imparcialidad. Este modelo pretende garantizar iguales condiciones para la libre participación en el debate y el ejercicio del poder público, se autoriza mediante el

ejercicio del razonamiento público y el establecimiento de la responsabilidad social, a través de procesos electorarios periódicos y competitivos, supervisión a los legisladores y garantizar el acceso a la información y publicidad, a todos por igual.

2.4.8. Democracia radical. Sociedad civil fuertemente democrática.

Diversos filósofos y teóricos políticos contemporáneos han propuesto la radicalización de la democracia. Observan el desgaste del concepto de democracia a partir del análisis de diversas formaciones políticas y regímenes que se han presentado históricamente, postulándose como sistemas democráticos, y que no cumplen con sus principios fundamentales. La mayoría de los planteamientos a favor de la radicalización de la democracia, coinciden en la intención de intensificar su sentido, considerando que ha perdido su esencia.

Los teóricos de la democracia plantean que ésta requiere consenso, compromiso u obligación común, por ello no significa una convergencia accidental de intereses entre personas que de otra manera están exentos de compromisos morales. “La lógica democrática es algo creado mediante el discurso moral, la elección y la acción.” (Lummis, D., 2002: 34)

Douglas Lummis propone que la democracia es una situación que puede o no producirse, dependiendo de las instituciones políticas y económicas. Antes que un método, la democracia es un proyecto histórico, un ideal. Asimismo, el propio Lummis considera que el concepto democracia ha sido desgastado y malinterpretado, razón por la que considera importante emplear el calificativo radical para intensificar el sentido del concepto. La palabra radical ayuda a esclarecer la esencia de la democracia que es políticamente radical. “Democracia radical significa democracia en su forma esencial, democracia en su raíz y, con bastante precisión, la cosa misma.” (Lummis, D., 2002: 38)

Plantea el mismo Lummis que afirmar la radicalización de la democracia implica que la democracia es de izquierda, atendiendo a la metáfora política proveniente del lado en que se sentaban los representantes del pueblo en la Asamblea Nacional francesa de 1789, por lo que según este politólogo, significa en el lado del pueblo” y por ende es una crítica a cualquier tipo de poder centralizado, que por definición es su antítesis.

Barber propugna una interpretación fuerte, progresiva y democrática de la sociedad civil. Su definición es positiva ya que considera a la misma como un espacio de relación, esfera de la hospitalidad, del recibimiento y el refugio. En ese sentido afirma: “La sociedad civil es un dominio del diálogo, del diálogo civil.” (Barber, B., 2000:119)

Un aspecto muy interesante e importante en la concepción que tiene Barber acerca de la sociedad civil es su forma de pensarla como espacio de encuentro y realización individual y colectiva, de reconocimiento y respeto: “Un lugar en el que tenga cabida la completa manifestación del «tú» y el «yo», el «nosotros» de la comunidad, un lugar donde ese «nosotros» abstracto nos muestre el camino que nos conduzca de nuevo a ti y a mí. (Barber, B., 2000: 11) Así, para Barber la sociedad civil constituye “*un lugar para todos*”, espacio en el que se resuelven las diferencias o se vive con ellas sin enfrentamientos, ámbito de la interdependencia. En palabras de Cornel West, la interdependencia se trata más que de enlistar lo que nos une y nos separa, de: “...identificar lugares y acciones”. (West, C., vid en Zanzucchi, M., 2008:2)

Esta concepción de la sociedad civil como espacio mediador que propicia y posibilita el diálogo y las interacciones, significa para Barber que es ámbito de la mutua responsabilidad, de ahí la radicalidad de su propuesta. La sociedad civil es un espacio común, plural, en el que al

mismo tiempo que las personas mantienen su individualidad, forman parte de una comunidad, sin disolverse en ella. Dominio del tú y del yo reunidos en un activo nosotros.

En la propuesta de la democracia fuerte de Benjamin Barber, la sociedad civil implica acción común en nombre de la libertad. En el mismo sentido, considera Douglas Lummis que la democracia radical constituye la filosofía de liberación y afirma: “La democracia radical describe la aventura de los seres humanos al crear, con sus propias manos, las condiciones para su libertad.” (Lummis, D., 2002: 31)

Ernesto Laclau y Chantal Mouffe proponen, a su vez, que la democracia radicalizada constituye la emergencia de un nuevo imaginario político radicalmente libertario con objetivos más ambiciosos que los de la izquierda clásica. Dicho imaginario político emerge en el terreno histórico de la “revolución democrática”. (Laclau E. y Mouffe, Ch. 1987:170) La democracia radicalizada acepta la pluralidad e indeterminación de lo social y rechaza los puntos en que tradicionalmente las luchas políticas convergían o se distanciaban.

La revolución democrática es antiesencialista ya que propone, de acuerdo con los autores, que los conflictos no se concentran en agentes privilegiados a priori, como las clases sociales, ni surgen de principios antropológicos que permitan además, unificar diversas posiciones de sujeto. Asimismo, es inevitable la resistencia en contra de las diversas formas de subordinación, las cuales pueden ser muy variadas y no tienen un carácter natural. Por lo anterior plantean la necesidad de explicar, en cada caso, las razones de la emergencia de las distintas luchas contra el poder.

La noción de revolución democrática propuesta por Alexis de Tocqueville es recuperada por Laclau y Mouffe. Designa el fin de una sociedad jerárquica y desigual, regida por una lógica

teórico-política en la que el orden social se fundamentaba en la voluntad divina y el cuerpo social era concebido como un todo en el que los individuos aparecían fijados a posiciones diferenciales. En dicho tipo de institución “totalista” de lo social, la política era únicamente la repetición de relaciones jerárquicas que reproducían el mismo tipo de sujeto subordinado.

Consideran que la revolución democrática se originó durante la Revolución francesa, ya que con la afirmación del poder absoluto del pueblo, surgió algo verdaderamente nuevo a nivel del imaginario social. Se da una ruptura con el antiguo régimen y surge el discurso democrático que señala a las diversas formas de desigualdad como ilegítimas y antinaturales y las considera formas de opresión.

El discurso democrático¹⁵ se caracteriza por su fuerza subversiva, que permite desplazar la libertad y la igualdad hacia nuevos dominios y sustenta diversas formas de lucha contra la subordinación. (Laclau, E., y Mouffe, Ch., 1987: 174) En los discursos socialistas, la crítica de la desigualdad política se desplazó a la crítica de la diferencia económica y ésta a su vez al cuestionamiento de otras formas de subordinación y a la reivindicación de nuevos derechos.

De acuerdo con Alexis de Tocqueville:

“Es imposible concebir que la igualdad no concluya por penetrar tanto en el mundo político como en otros dominios. No es posible concebir a los hombres como eternamente desiguales entre sí en un punto e iguales en otros; en cierto momento, llegarán a ser iguales en todos los puntos.” (Tocqueville, A. de, 1980: 115)

¹⁵ El símbolo de la ruptura con el antiguo régimen y de la instauración de un nuevo discurso democrático es la Declaración de los Derechos del Hombre.

La radicalización de la democracia es un tipo de acción de resistencia que tiene como objetivo transformar una relación social que construye a un sujeto en relación de subordinación. Constituye una acción colectiva que se orienta a luchar contra las desigualdades y un discurso exterior que cuestiona las relaciones de subordinación en las que se presentan los antagonismos. Dichas resistencias son de carácter político, ya que se ocupan de la institución de lo social, es decir de la creación, reproducción y transformación de las relaciones sociales.

Los *nuevos movimientos sociales* agrupan una gran diversidad de luchas y articulan el conflicto social que se amplía a relaciones cada vez más numerosas, por lo que se consideran como extensión de la revolución democrática. La mercantilización de la vida social y la burocratización de las prácticas del Estado, destruyen anteriores formas de relación que se transforman en relaciones mercantiles a través de las cuales la lógica de la acumulación capitalista comprende esferas cada vez más numerosas. Por ello, hay una gran cantidad de relaciones sociales que pueden originar antagonismos y luchas contra las desigualdades y la reivindicación de nuevos derechos: hábitat, consumo, cultura, educación, salud, tiempo libre, entre otras.

Relaciones sociales que tradicionalmente formaban parte del ámbito privado, han pasado a formar parte del dominio público. Los límites entre lo público y lo privado se movieron. Con la aparición del Estado social, se transformó el propio concepto de ciudadanía ya que se atribuyen al ciudadano, “derechos sociales”.

“Como consecuencia las categorías de «justicia», «libertad», «equidad» e «igualdad» han sido redefinidas, y el discurso liberal-democrático ha sido profundamente modificado por esta ampliación de la esfera de los derechos.” (Laclau, E., y Mouffe, Ch., 1987: 183)

La emergencia de estos nuevos sujetos políticos, se debe también a la reformulación de la ideología liberal-democrática como resultado de la expansión de las luchas por la igualdad. Influye también la expansión de los medios masivos de comunicación que generan una cultura de masas que transforma las identidades tradicionales. Por lo anterior, Laclau y Mouffe proponen que la multiplicación de los antagonismos y el cuestionamiento de las relaciones de subordinación constituyen un momento de profundización de la revolución democrática.

Asimismo, plantean que el surgimiento de nuevas luchas y la radicalización de luchas antiguas debe comprenderse a partir de la transformación de las relaciones sociales que analizábamos, producto del imaginario democrático y al desplazamiento del imaginario igualitario propuesto por el discurso liberal-democrático, hacia reivindicaciones en favor de las diferencias y de la creación de nuevas identidades culturales. La libertad se convierte en la categoría central en las demandas de autonomía y en los particularismos; se construye una nueva identidad social a partir de estos nuevos valores. El sujeto como entidad unitaria da paso a diferentes posiciones de sujeto y a los antagonismos y con ello a la posibilidad de profundizar en una concepción pluralista y democrática.

El pluralismo es considerado por Laclau y Mouffe como radical:

“El pluralismo es *radical* solamente en la medida en que cada uno de los términos de esa pluralidad de identidades encuentra en sí mismo el principio de su propia validez. Sin que ésta deba ser buscada en un fundamento positivo trascendente –o subyacente– que establecería la jerarquía o el sentido de todos ellos y que sería la fuente y garantía de su legitimidad. Y este pluralismo radical es *democrático*, en la medida en que la autoconstitutividad de cada uno de sus términos es la resultante de desplazamientos del imaginario igualitario. El proyecto de una democracia radical y plural, por consiguiente,

en un primer sentido, no es otra cosa que la lucha por una máxima autonomización de esferas, sobre la base de la generalización de la lógica equivalencial-igualitaria.” (Laclau, E., y Mouffe, Ch., 1987: 188)

Plantean Laclau y Mouffe que la democracia radical no significa la ruptura con la ideología liberal-democrática, sino el profundizar el aspecto democrático de la misma para romper la vinculación del liberalismo con el individualismo posesivo. “La tarea de la izquierda no puede por tanto consistir en renegar del la ideología liberal-democrática sino al contrario, en profundizarla y expandirla en la dirección de una democracia radicalizada y plural.” (Laclau, E., y Mouffe, Ch., 1987: 199)

La democracia radical, como estrategia hegemónica de la izquierda, implica la extensión de las luchas democráticas a la sociedad civil en su conjunto y al Estado. Lo anterior exige radicales transformaciones en el imaginario político de la izquierda para que su práctica política se instale en el campo de la revolución democrática y realice las articulaciones indispensables. El principal obstáculo para esta tarea es el apriorismo esencialista que lleva a considerar que lo social tiene una unión previa que permite fijar el sentido de todo evento sin consideración de las prácticas concretas, de las relaciones específicas, lo que limita la capacidad de acción y análisis político.

Una democracia radicalizada requiere pluralidad y apertura, la transformación democrática de la sociedad exige multiplicar los espacios políticos para que el poder no se concentre en un sólo punto (incompatible con la concentración de poder que exigen el jacobinismo clásico y sus versiones socialistas. Afirman Laclau y Mouffe que todo proyecto de democracia radicalizada supone una dimensión socialista pues implica dar fin a las relaciones capitalistas de producción que están en la base de muchas de las relaciones de subordinación, por

133

ello plantean que el socialismo es uno de los componentes necesarios para una democracia radicalizada, no a la inversa. Por lo anterior, no es posible la determinación *a priori* de los sujetos políticos o agentes de cambio, ni de los espacios de ruptura y de encuentro en el que se llevan a cabo las luchas entre los mismos, ya que ello implicaría la existencia de un núcleo común. (Laclau, E., y Mouffe, Ch., 1987: 200-201)

El proyecto de una democracia radical se vincula a la concepción de una pluralidad de lo social, a una diversidad de agentes sociales y discursos que los constituyen como sujetos y a la posibilidad de desplazamiento de las lógicas sociales de unas esferas a otras:

“Las formas originarias del pensamiento democrático estuvieron ligadas a una concepción *positiva y unificada* de la naturaleza humana, y, en tal medida, tendieron a constituir un espacio único en el que dicha naturaleza había de manifestar los efectos de su radical libertad e igualdad: fue así que se constituyó un espacio público ligado a la idea de ciudadanía. La distinción público-privado constituyó la separación entre un espacio en el que las diferencias se borraban a través de la equivalencia universal de los ciudadanos, y una pluralidad de espacios privados en los que se mantenía la plena vigencia de las mismas.” (Laclau, E., y Mouffe, Ch., 1987: 204)

El espacio público era el espacio de la ciudadanía en él se expresaban la igualdad y la unidad entre los ciudadanos y desaparecían las diferencias, que se mantenían vigentes en el espacio privado. La revolución democrática propugna y genera la desaparición de los límites entre lo público y lo privado y con ello proliferan espacios políticos nuevos y diferentes. Surgen también nuevos sujetos plurales que no se definen ya por su esencia unificada. (Laclau, E., y Mouffe, Ch., 1987: 204-205)

Se ha planteado la necesidad de profundizar la separación entre el estado y la sociedad civil, considerando que en el estado encarnan todas las formas de dominación. Sin embargo, en el estado pueden llevarse a cabo diversos antagonismos democráticos ya que se enfrentan distintas funciones y ramificaciones del mismo. Por otra parte, la sociedad civil también es sede de relaciones de opresión, antagonismos y luchas democráticas.

La idea de un espacio único en el que se constituye lo político ha sido abandonada, al mismo tiempo, la democracia radicalizada requiere determinar y articular los espacios en que se presentan los antagonismos, lo que constituye un problema. Surge una diversidad de nuevos espacios políticos que tiende a terminar con la separación entre lo público y lo privado, por lo que constituye una politización más radical.

El cuestionamiento es si pueden conciliarse la proliferación de espacios políticos que caracteriza a una democracia radicalizada y la construcción de identidades colectivas. Los autores consideran que se requiere para una concepción radical de la política, renunciar a dominar, tanto intelectualmente como políticamente-, todo fundamento último de lo social, para dar paso a lógicas sociales que participan en la constitución de la identidad social y limitan sus efectos. (Laclau, E., y Mouffe, Ch., 1987: 206) Dicha transformación permite precisar el sentido y los límites del “principio de equivalencia democrática”.

El principio de igualdad, consideran los autores, no es suficiente para producir una transformación en la identidad de los grupos sobre los que opera, ya que sus demandas son diferentes e incluso pueden ser incompatibles, lo que impide la equivalencia real entre las diversas reivindicaciones democráticas: “Para que haya una «equivalencia democrática» es necesario algo distinto, la construcción de un nuevo «sentido común» que cambie la identidad de

los diversos grupos, de modo tal que las demandas de cada grupo se articulen equivalencialmente con las de otros...” [sic] (Laclau, E., y Mouffe, Ch., 1987: 206-207)

Para Laclau y Mouffe la equivalencia es siempre hegemónica ya que no establece simplemente una alianza entre intereses dados, sino que modifica la identidad de las fuerzas que intervienen en ella. La equivalencia democrática constituye una condición para que las luchas contra el poder lleguen a ser realmente democráticas y que la reivindicación de derechos no sea individualista, sino fundada en el respeto de los derechos a la igualdad de los otros grupos subordinados. (Laclau, E., y Mouffe, Ch., 1987: 207) No obstante, estos politólogos afirman que el principio de equivalencia democrática está limitado, ya que existen desniveles en lo social y por ello se requiere el complemento de la lógica de la autonomía: “Es por eso que la demanda de *igualdad* no es suficiente; sino que debe ser balanceada por la demanda de *libertad*, lo que nos conduce a hablar de democracia radicalizada y plural.” (Laclau, E., y Mouffe, Ch., 1987: 207)

El concepto de democracia radicalizada y plural supone el reconocimiento de la pluralidad de espacios de igualdad en el que reside el pluralismo, que es la base de la demanda de libertad y que permite los vínculos entre el proyecto de una democracia plural con la lógica del liberalismo. Plantean que no es el liberalismo lo que requiere ser cuestionado, pues es un principio ético que defiende la libertad del individuo para realizar sus capacidades humanas y se encuentra por ello vigente, lo que se debe evitar es la defensa del individualismo burgués, posesivo.

Si tan sólo se reconoce el principio de igualdad sin reconocer la separación de espacios estaríamos ante una democracia radicalizada, más no plural. Se requiere construir otro tipo de individuo, abandonando la idea de los “derechos naturales” y plantear de una manera distinta el problema de los derechos, ya que no es posible esgrimir derechos individuales que se definen en forma aislada, pues en tanto que se dan en contextos de relaciones sociales, que involucran a

otros sujetos. Laclau y Mouffe proponen modificar la noción de derechos individuales por la de “derechos democráticos” que sólo pueden ejercerse colectivamente y suponen la existencia de derechos iguales para los otros. (Laclau, E., y Mouffe, Ch., 1987: 208)

Las diversas relaciones y espacios sociales pueden variar, ya que existen distintas relaciones: de producción, de ciudadanía, de pareja, etc., por lo anterior, las formas de democracia deben ser plurales. La democracia directa, según los autores, no puede ser la única forma de organización, ya que se adapta únicamente a espacios sociales reducidos. Proponen ampliar el dominio en el que se ejercen los derechos democráticos más allá del restringido campo de la ciudadanía que es el dominio político clásico, al de la economía.

Tradicionalmente se consideraba que los derechos naturales se expresaban en el ámbito de la economía que se consideraba un dominio privado; actualmente esta consideración no tiene sentido, no es posible establecer una distinción entre sociedad civil y sociedad política, entre el ámbito público y el privado, ya que existen diversas formas de articulación hegemónica que determinan que los límites entre ambos se modifiquen.

La revolución democrática supone una nueva forma de instituir lo social en la que hay instancias diferenciadas, implica tanto el reconocimiento de la multiplicidad de las lógicas sociales, así como de la necesidad de su articulación, la cual requiere mantenerse en constante recreación.

Una unidad entre el lugar del poder, del saber y de la ley.

El concepto de hegemonía que proponen Laclau y Mouffe supone una concepción de la política potencialmente más democrática, ya que la coexistencia en una misma coyuntura histórica de tareas y reivindicaciones que hubieran pertenecido a etapas diferentes, conduce a

aceptar la validez política presente de una pluralidad de antagonismos y puntos de ruptura y evita concentrar la legitimidad revolucionaria en una sola clase: la obrera. (Laclau E. y Mouffe Ch. 1987: 63)

La hegemonía transforma la propia identidad de las clases, supone la construcción de la propia identidad de los agentes sociales y no la coincidencia racionalista entre agentes preconstituídos. El concepto de hegemonía supone un campo teórico dominado por la categoría de articulación, la cual supone la posibilidad de especificar separadamente la identidad de los elementos articulados. Asimismo, la articulación consiste en toda práctica que establece una relación entre elementos en la que la identidad de los mismos resulta modificada en un nuevo discurso. (Laclau, E. y Mouffe Ch. 1987: 119)

Esta posibilidad de que los actores sociales construyan una identidad compartida, a partir incluso del antagonismo y de sus identidades particulares que se modifican, a través de su articulación, permite pensar un modelo en el que todos los sectores sociales participen en la construcción de una democracia con un sentido auténtico. La democracia radical, entendida de la manera en que se ha analizado a lo largo de este apartado, es una aspiración política por la cual los ciudadanos y ciudadanas requerimos trabajar y que para nuestro país se aprecia aun distante, no obstante, establece un referente que puede guiar el proceso democratizador.

2.4.8.2. Democracia Verde¹⁶

¹⁶ El presente apartado ha sido trabajado fundamentalmente con la información de tres autores: Andrew Dobson, su discípulo Ángel Valencia Sáiz y Manuel Arias Maldonado.

La denominada *democracia verde* es un modelo radical, considerando que requiere un auténtico compromiso entre los ciudadanos hacia la democracia en sentido pleno, para con la naturaleza y nuestros congéneres, es decir con implicaciones éticas reconocidas. Supone una forma radical de relaciones con el medio ambiente, comprendiendo éste las relaciones entre los seres humanos y hacia su entorno social, natural, cultural, político, etc. Ángel Valencia (1998) plantea que la crisis ecológica es la fuente de renovación del pensamiento radical.

Plantear un modelo de democracia verde, parece ubicarnos próximos a la noción de utopía por las siguientes consideraciones. En principio, porque implica la posibilidad de la existencia de la democracia como forma de gobierno, en general. En segunda instancia, ya que supone la posibilidad de la democracia en México bajo las circunstancias actuales y finalmente, dado que proyecta en una prospectiva de mediano o largo plazo, el ideal de una democracia verde para nuestro país.

Pese a constituir una meta que se vislumbra lejana, considero que la búsqueda de una democracia verde en nuestro país es un modelo adecuado para promover la organización y participación de la ciudadanía, a fin de generar la construcción de instituciones que la propicien, así como, con la finalidad de orientar la gobernabilidad democrática. Además el cuidado del medio ambiente y la preservación de nuestros recursos naturales, son imprescindibles, ya que la riqueza y variedad características de nuestro país, se encuentran en un punto crítico, de la misma manera que sucede en el ámbito global.

Conceptualización de democracia verde y sus principios fundamentales.

Entre los seres humanos y la naturaleza existe una relación inherente, ya que los seres humanos somos seres naturales, por ello, se ha llegado a considerar en el momento presente que

la crisis ecológica no es sólo crisis del medio ambiente, sino que afecta y cuestiona a nuestra civilización en todas sus dimensiones y nos interpela como seres humanos. Como consecuencia, han surgido como paradigmas orientados a establecer una adecuada relación entre los aspectos naturales y los sociales, la teoría política verde y la teoría del ecologismo político. (Arias, M., 1999: 176) Ambas son los antecedentes teóricos de la democracia verde.

Es necesario señalar que los dos enfoques citados son recientes y requieren mayor elaboración teórica, tal como lo reconocen sus propios promotores.

La concepción de la naturaleza es la que determina su noción de la sociedad y de la democracia. Teniendo en consideración que además de corrientes teóricas encarnan movimientos sociales y propuestas políticas, estos paradigmas determinan un modelo de sociedad sustentable y un tipo de democracia participativa, por lo que las propuestas para su instrumentación mediante experiencias concretas y formas particulares de gobierno requieren la reinención de la sociedad desde sus bases. (Valencia, A.1998:30)

El ecologismo es totalmente naturalista y concibe incluso a los seres humanos como criaturas naturales. Esta concepción implica que las aspiraciones humanas tienen un límite natural y que el mundo humano es construido tomando al mundo natural como modelo. Asimismo, para esta concepción la interdependencia es más importante que la competitividad y la igualdad lo es más que la jerarquía.

A partir de esta manera de comprender a la naturaleza, el ecologismo político propone una particular forma de organización social y política. Afirma Ángel Valencia que esta relación entre naturaleza y forma de organización social y política da lugar a diversas tensiones, debido a que sus valores no son totalmente compatibles. Uno de los problemas que se presentan es que

cuestiona el tipo de igualdad y democracia que pueden derivar de la naturaleza por la oposición entre tradición e igualdad.

La política ecologista se caracteriza por las pérdidas, pero también por la recuperación y es aquí donde plantea Valencia la necesidad de devolver la moral a nuestras vidas al aceptar la *incertidumbre fabricada*. (Giddens, A. vid en Valencia, A. 1998:78)

“Lo que une a las corrientes del pensamiento ecologista...es su postulación de un nuevo modelo de sociedad alrededor de unos nuevos valores que establezcan una relación armónica entre el ser humano y la naturaleza, y por tanto, diferente a la establecida por una evolución perversa de la modernidad que es responsable de la crisis ecológica que padecemos hoy. Esto exige un cambio ético y político profundo en las sociedades actuales, por lo que la política ecologista se basa no sólo en un modelo de sociedad en el que esa nueva relación del hombre con la naturaleza sea compatible con la igualdad –y por tanto anticapitalista- sino también en la reivindicación de otros valores como la autonomía, la solidaridad o la búsqueda de la felicidad. Ésta es la causa de su vigencia y atractivo para el pensamiento radical contemporáneo, pero también de su dificultad de integración con los proyectos políticos de izquierda y de su distancia con la praxis política de los partidos y movimientos ecologistas dentro de las democracias contemporáneas.”
(Valencia, Á. 1998: 79)

La modernidad trajo consigo diversos problemas en lo que respecta a la relación con la naturaleza; la ciencia, la tecnología y la industria generaron graves consecuencias en los ecosistemas mundiales. La mayoría de los problemas que sufren los ecosistemas tienen un origen humano: el calentamiento global, el agujero en la capa de ozono, la contaminación a gran escala y la desertificación, son producto de actividades humanas, lo que Anthony Giddens denomina *la*

incertidumbre fabricada. Valencia plantea que lo que ha sido relevante políticamente de la problemática relación entre el hombre y la naturaleza es la aparición de la toma de conciencia de que la naturaleza está amenazada por el ser humano y enfrentada a sus propios límites como consecuencia de la modernidad.

El concepto de democracia verde hace alusión a un sistema político que propone un modelo avanzado que vincula la democracia con la sustentabilidad, en el que la naturaleza se concibe como una realidad políticamente relevante y moralmente significativa. “...un modelo democrático capaz de responder a las exigencias planteadas por la crisis ecológica global.” (Arias, M., 1999: 177-179)

El ecologismo político es la ideología que fundamenta a la política verde, de la cual surge, a su vez, la democracia verde. Existen diversos enfoques de ecologismo político; sin embargo, Arias Maldonado afirma que existen dos aspectos comunes entre todos ellos: el primero es el hecho de convertir a la naturaleza en un asunto políticamente relevante, -el ambientalismo se limita a considerar la naturaleza en términos administrativos- y el segundo elemento esencial es el significado moral que se asigna a la naturaleza.

A partir de sus fundamentos, la concepción que sostiene Arias Maldonado de la democracia verde es la de un modelo que permite plasmar dos principios de la teoría política ecologista que serían sus elementos sustanciales: su compromiso con la naturaleza y con una existencia sustentable y la voluntad de desarrollar la democracia en un único modelo normativo, democratizándola. Dicho modelo en la medida en que trata al mismo tiempo de ser coherente con la política verde, se opone a la democracia liberal a la cual critica. (Arias, M., 1999: 180)

Bajo esta concepción, la Democracia Verde es una democracia radical y avanzada. De acuerdo con ello, Andrew Dobson (vid en Arias, M., 1999: 178) concibe al ecologismo como una teoría política radical y afirma que la teoría política verde se enfrenta con los paradigmas dominantes. Los objetivos y aspiraciones de la política verde no pueden satisfacerse mediante el modelo de la democracia liberal, que representa intereses particulares.

Una democracia radical implica recuperar el significado esencial del concepto de democracia, lo que supone la intensificación de su sentido crítico y hace alusión a la necesidad de la participación de la sociedad civil en los asuntos públicos que son de su interés. La democracia radical se opone al individualismo tanto como a los totalitarismos y en su lugar promueve el pluralismo, el diálogo y la participación coordinada de la sociedad civil, lo que hace necesaria la recuperación del espacio público que es el espacio político.

Anthony Giddens (vid en Valencia, Á. 1998: 80) plantea que es necesaria una democracia dialogante, que según su opinión es un modo de crear un terreno público en el que se pueden resolver o, por lo menos, abordar cuestiones controvertidas a través del diálogo y no mediante relaciones de poder preestablecidas. Esta concepción da lugar a los movimientos sociales y al movimiento ecologista en el impulso de la democracia, debido a que abren espacios para el diálogo público en los temas de los que se ocupan y permiten introducir en el terreno del debate problemas que antes se resolvían con apoyo de las prácticas tradicionales.

Hemos afirmado que el pensamiento político verde postula un modelo democrático radical que trasciende el modelo de la democracia liberal. El modelo radical caracteriza al mundo natural basado en valores que generan tensiones e incompatibilidades y determinan que haya vaguedad entre democracia y ecología. Se manifiesta una contradicción entre la defensa de la diversidad

que postula el liberalismo y la rigidez en sus normas y criterios que puede caracterizar a una sociedad sustentable a pequeña escala.

Ante la crisis que experimenta el medioambiente, los movimientos ecologistas tradicionales adoptaron soluciones autoritarias; sin embargo, en sus expresiones modernas, el movimiento político verde las ha abandonado. Asimismo, otra de las situaciones contradictorias radica en que el ecologismo sostiene que defiende la democracia y la participación social; sin embargo, la realización de sus fines no exige un sistema político democrático. Se manifiesta aquí una ambigüedad debido a que plantea una democracia participativa o radical y al mismo tiempo admite su realización en cualquier sistema político sin importar sus relaciones de autoridad, lo cual se debe a que a pesar de los intentos de parte de la teoría verde de considerar a la democracia como parte de una lista de valores, esta relación se concibe contingente.

Valencia explica que esa relación se concibe como contingente debido a que defender la democracia implica defender procedimientos y defender el medioambiente supone defender resultados reales. A partir de esta oposición, se presenta la tendencia a abandonar los procedimientos democráticos y dar paso al autoritarismo en pro de la defensa medioambiental, pues se reconoce la urgencia de solucionar la crisis que atraviesa debido a la importancia que representa el medioambiente. (Dobson, A., vid en Valencia, Á.1998:84)

En la teoría política ecologista más reciente, se unen la democracia participativa y la sociedad sustentable. Desde posiciones ecocéntricas, dentro de la teoría política verde se propone la misma importancia para el procedimiento y para los resultados, pues al ser una política radical es emancipadora y tiene como fin último aumentar la autonomía de los seres humanos y de los demás seres de la naturaleza. A partir de estos argumentos, se fortalece la relación entre ecologismo y democracia y se excluye al autoritarismo.

“La visión del mundo natural como un sistema entrelazado de objetos interdependientes (tanto sensibles como no sensibles) genera un sentido de igualdad, por cuanto cada ser es considerado necesario para la viabilidad de los demás. Según esta visión, ninguna parte del mundo natural es independiente, y, por tanto, ninguna puede reclamar su superioridad.” (Dobson, A. vid en Valencia, Á. 1998: 85)

La defensa de la igualdad como principio ecológico coincide con uno de los valores democráticos fundamentales y evita la búsqueda de soluciones autoritarias.

Al respecto, los principios del ecologismo político exigen una profunda transformación política y social que resulta difícil de articular en el modelo de la democracia liberal. La teoría política verde reciente en sus intentos por fundamentar a la democracia “verde”, cuestiona la posibilidad de su relación con la democracia liberal y atañe a los derechos de protección del medio ambiente, así como a la noción de ciudadanía.

La teoría de la democracia verde se enfrenta a la problemática de zanjar el dilema de conseguir sus fines políticos dentro de un marco democrático. La teoría de la democracia liberal no se plantea las cuestiones de las que se ocupa el ecologismo y argumenta que a través de la elección de sus representantes, la ciudadanía define el significado del “bien público” y por lo tanto las instituciones democráticas sólo son un procedimiento neutral que garantiza la diversidad de opiniones. (Valencia, Á. 1998:86)

Cuando se analiza este argumento, aplicado a la política ecológica, se pueden recibir tres críticas: la teoría y la práctica de la democracia liberal no se han cumplido, ni son neutrales y es posible distinguir entre valores o fines políticos y procedimientos, por lo que es posible discutir estos últimos según determinadas materias.

La democracia verde requiere construir un modelo democrático fuerte, participativo, que sea alternativo a la democracia liberal; no obstante, necesita emplear las instituciones y los principios de la democracia liberal representativa. Para paliar las deficiencias de la democracia liberal, resulta indispensable el cambio en sus principios.

Es necesario un cambio en la relación entre naturaleza y sociedad, asimismo en el concepto de ciudadanía, para transformarlo en una “ciudadanía ecológica” (Christoff, Peter, vid en Valencia, Á. 1998: 87) La ciudadanía en el modelo liberal no está motivada a preocuparse de los temas medioambientales, ya que las comunidades políticas la representan básicamente en términos territoriales y por otra parte la concepción de ciudadanía en términos de representación política impide que quienes no son ciudadanos defiendan sus intereses en materia medioambiental. La ciudadanía ecológica considera que todos los ciudadanos son afectados por los problemas del medioambiente y por ello aunque no puedan participar en los sufragios, pueden hacerlo con deliberaciones relativas al medioambiente.

A partir del reconocimiento de que todos somos afectados por estos problemas, aunque no seamos ciudadanos, se genera una nueva “circunscripción medioambiental”. En el modelo liberal los derechos ecológicos de la ciudadanía no están bien representados ya que la protección del medioambiente se propone tan sólo como una campaña política.

En lo que respecta a las grandes concentraciones urbanas, se hace patente la urgencia de promover formas de participación ciudadana y de interacción social y hacia el medio ambiente que no pongan en riesgo la subsistencia presente ni futura del planeta y su biodiversidad, incluyendo, por supuesto, a la especie humana. Todas las actividades que se realizan en la ciudad y con relación a la misma: la planeación y la gestión urbanas, la vida cotidiana, el trabajo, en general, la toma de decisiones, el diseño y seguimiento de políticas públicas, las diversas

interacciones y negociaciones, se ven atravesadas por un componente ético que involucra los ámbitos político, económico y sociocultural.

Es por ello importante analizar las formas de participación ciudadana a fin de poder caracterizar el tipo de ciudadanía que ejercemos en la vida cotidiana, y compararla con los atributos propios de una ciudadanía democrática, participativa y sustentable. Se estudia el caso de la ciudad de Monterrey, Nuevo León y en ella se realiza el ejercicio de análisis y reflexión para la caracterización de los tipos de ciudadanía vigentes. A partir de dicha caracterización podemos contar con mayor información puntal y específica para el diseño de estrategias de participación política, la promoción, operación y supervisión de políticas públicas y propuestas educativas, entre otras acciones fundamentales para construir una esfera pública armónica que permita también el desenvolvimiento de todas las potencialidades de los seres humanos y de la comunidad.

La constitución del campo de la democracia verde enfrenta diversas dificultades que estriban en el hecho de que democracia y sustentabilidad tienen por esencia distintos principios que pueden llegar a ser difíciles de compatibilizar, tales como la necesaria igualdad que implica la primera y el respeto y cuidado de la diversidad que requiere la segunda, por citar un tema a manera de ejemplo. Por otra parte, en los modelos clásicos de democracia, las actividades que pertenecen a la conservación de la vida pertenecían a la esfera privada y la política a la esfera pública. En el paradigma de la democracia verde ambas actividades son políticas y se desarrollan en la esfera pública lo que modifica las vías para la institucionalización de la misma.

Además, el cuidado al medioambiente involucra también a la esfera privada, de ahí que resulte fundamental la participación de la sociedad civil.

Los principios de la democracia liberal están enfrentados a los de la democracia verde, las relaciones entre democracia y ecología no son unívocas. Los principios liberales de tolerancia de lo particular y de la diversidad de opiniones, en una sociedad sustentable, se contraponen con los principios de estabilidad y diversidad que son valores de la naturaleza. Una sociedad sustentable puede ser potencialmente rígida en sus normas y criterios.

El ecologismo político experimenta el problema que ha afrontado la tradición liberal en la que se inspira: cómo lograr el respeto a la diversidad de comportamientos y opiniones y garantizar al mismo tiempo la sociedad buena que requiere determinados comportamientos de las personas. Otro de los problemas entre ambas corrientes es que el vínculo entre el ecologismo y la democracia es contingente y no necesario. Valencia señala que entre las críticas que se hacen a los fundamentos teóricos de la democracia verde,- el ecologismo político y la teoría política verde-, se encuentran el hecho de que han planteado soluciones autoritarias para lograr el control de la crisis medioambiental y en tal sentido, que ha priorizado los fines y no los medios, es decir que para lograr una sociedad sustentable, no consideraban indispensable contar con una estructura de poder democrática.

Andrew Dobson plantea que el movimiento verde, en su forma moderna, ha abandonado las soluciones autoritarias a la crisis medioambiental que caracterizaron al ecologismo político; en su lugar, los partidarios de este tipo de modelo están a favor de una sociedad radicalmente participativa que dé cabida a la discusión y en el que se solicite y se logre el acuerdo explícito en la mayoría posible de las decisiones políticas y sociales. Este cambio en las soluciones parece deberse a la visión del mundo natural como constituido por seres interdependientes que son iguales. La política verde radical se concibe entonces como emancipadora, su fin prioritario es

aumentar al máximo la autonomía de los seres humanos y de todos los seres que forman parte de la naturaleza y con ello la relación entre democracia y sustentabilidad deja de ser débil.

La noción de igualdad entre los seres humanos y los demás seres de la naturaleza, permite la convergencia con la democracia, ya que la igualdad es uno de sus valores primordiales y elimina la posibilidad de llevar a la práctica, soluciones autoritarias. Algunos teóricos, como Eckersley R. (en Valencia, Á. 1998:87), consideran que los principios de la democracia liberal deben de cambiar a la par que el cambio en la relación entre sociedad y naturaleza, lo que se logrará si se toma como modelo una institución prototípica de la democracia: los derechos de protección del medio ambiente, particularmente los que afectan a los seres humanos. Este cambio se debe a que la defensa de este tipo de derechos vinculan democracia y ecología, así como principios liberales y democracia.

Asimismo, Valencia y otros teóricos de la democracia verde consideran que la noción liberal de la ciudadanía no está adecuadamente representada en temas ecológicos por dos razones principales: por una parte, ya que la representación territorial de la ciudadanía de acuerdo a la relación con una comunidad política no apoya la preocupación por los temas medioambientales. Por otra parte, porque el concepto de representación política afecta los intereses de quienes no son ciudadanos, pero si son afectados por los problemas medioambientales y pueden preocuparse por ellos y deberían tener derecho a tomar decisiones políticas al respecto.

Por lo anterior se sugiere modificar nuestros criterios para la participación política que están relacionados con la territorialidad asociados al concepto de Estado-nación. Los conceptos de participación y representación política resultan obsoletos en relación con la ecología y con los problemas actuales del medio ambiente. La democracia verde promueve una democracia fuerte y algunos de sus representantes proponen para tal fin a la democracia deliberativa, que busca

formar a la ciudadanía en el diálogo y promover su participación en el debate que transforma su opinión, así como la descentralización en la toma de decisiones.

La democracia deliberativa presenta diversos problemas, el de la coordinación entre diversas comunidades deliberativas para llegar a acuerdos es uno de ellos; falta aclarar los términos en que establece su relación con la democracia liberal. Respecto a la relación entre ecología y democracia, Eckersley propone que el vínculo entre ambas es necesario, no contingente, para lo cual considera necesario dar un tratamiento a los valores verdes como defensores de la autonomía, tanto de los seres humanos como de otras especies, “libertad de los seres humanos y de otras especies de desplegar sus propias formas de vida de acuerdo con la vida de su «especie», unida a una crítica de la dominación -tanto de los seres humanos como de otras especies-.” (Eckersley, R. vid en Valencia Á. 1998:88)

Eckersley propone también que la democracia requiere una serie de precondiciones ambientales, de donde se concluye que la racionalidad ecológica y la racionalidad democrática son compatibles. Asimismo, otra importante propuesta de Eckersley es que los derechos medioambientales se postulen como previos a los derechos políticos. Propone el mismo autor que los derechos políticos, sociales, ecológicos y políticos están estrechamente relacionados y deben ser vistos como parte de los derechos de la ciudadanía.

Valencia afirma que el concepto de ciudadanía presenta problemas para establecer la relación entre la democracia y los valores verdes y que para lograrla es necesario defender los derechos ecológicos que permiten el vínculo con las nociones de autonomía y justicia que establecen la relación con el modelo liberal. Asimismo, plantea que debido a que la globalización determina que la trascendencia de los problemas ecológicos rebase los límites territoriales sobre los que se fincan el Estado-nación y el tradicional concepto de ciudadanía, la toma de decisiones

150

políticas hace necesario un cambio fundamental en los conceptos de representación y participación.

Esta nueva ciudadanía determina también un cambio en la organización de las estructuras políticas para que posibiliten la participación de personas que no han nacido en el territorio. Valencia afirma que los problemas del medioambiente, por su impacto regional y global, “expanden los límites convencionales de la toma de decisiones políticas” y se requieren nuevos enfoques que garanticen los derechos de protección al medioambiente. Sin embargo, también señala uno de los principales problemas para la construcción de la teoría de la democracia verde, que consiste en que la teoría democrática no puede dejar de lado una definición territorial del estado ni del estado-nación que son sus puntos de referencia (Valencia, Á. 1998:90).

La globalización está determinando que los conceptos tradicionales de ciudadanía, sujetos de la participación, representación democrática y estado-nación sean insuficientes. Fundamentalmente, el hecho de que la ciudadanía no pueda mantenerse en el ámbito del estado-nación, lleva al cuestionamiento de los demás conceptos. No obstante, el reconocimiento de la ciudadanía ecológica requiere más que una reforma de los sistemas democráticos.

Aparentemente, la posibilidad de tomar las decisiones que los problemas demandan consiste en que los ciudadanos se percaten de la trascendencia de los problemas ambientales y participen en su solución y de que el estado se encuentre mejor organizado.

Cuando nos ubicamos en el contexto internacional, los problemas de la ciudadanía y la democracia se tornan más complejos; por lo anterior, algunos teóricos de la democracia verde, como Valencia, plantean la necesidad de realizar reformas institucionales en favor de la democracia deliberativa, para lo cual sugieren diversas alternativas para que los ciudadanos

puedan debatir e intervenir en el proceso de toma de decisiones sin estar sujetos a las decisiones de una burocracia lejana a sus necesidades e intereses. Entre las medidas o reformas que se proponen para trabajar los temas ecológicos, se encuentran los plebiscitos o referéndums y otras más radicales como fundamentar el proceso de toma de decisiones en la democracia directa en la que el electorado esté compuesto por una población flexible y móvil, de acuerdo con el problema del que se trate, para que todos los afectados tengan derecho al voto.

“...para resolver estas cuestiones es necesario concebir la ciudadanía más desde una perspectiva basada en la responsabilidad moral y en la esfera pública, que en una definición formal-legal del Estado, entre otras cosas, porque cuando se habla de problemas medioambientales hay que considerarlos, tanto en relación a otras especies como en relación a las generaciones futuras.” [sic] (Valencia, Á. 1998: 92)

Para Valencia, las decisiones políticas relacionadas con los problemas medioambientales deben ser orientadas teniendo en cuenta algunos principios básicos, como la necesidad de la reservación de la diversidad biológica por razones económicas y éticas, tal como se mencionan en el Informe Brundtland y en la Agenda 21, que requieren un tipo de ciudadanía que respete a otras especies y a las generaciones futuras y supone la existencia de un estado que garantice los derechos medioambientales.

La nueva ciudadanía que la democracia verde pretende construir hace referencia a un compromiso y una práctica políticos de los individuos sobre la base de la lealtad ecológica y no de la lealtad nacional. Crear ciudadanos ecológicos, en este contexto, está en relación con la fuerza del cambio social que cause el deterioro ambiental y con la solidaridad medioambiental que se genere. Por lo anterior, los movimientos medioambientales han dado gran importancia a la esfera pública, a la democratización del estado y la economía y se han planteado al estado

152

demandas ético-ecológicas que son consideradas como una extensión de los movimientos civiles y sociales. (Valencia, Á. 1998:93)

El “ciudadano ecológico”, se preocupa por transformar al estado y a la sociedad civil y redefinir la comunidad relevante y los actores relevantes en una participación y representación democráticas acerca de los temas del medioambiente.

Contexto medioambiental actual

La gran mayoría de los países, incluyendo a México por supuesto, han afrontado desde muchos años atrás, incluso siglos, graves y complejos problemas sociales, económicos, de agotamiento y contaminación de los recursos naturales y en términos generales, un creciente deterioro ambiental. Entre las principales causas que generan tales problemáticas, se encuentran los sistemas políticos antidemocráticos y tienen también, todas ellas, una dimensión ética fundamental. Esta crítica situación se vislumbra en prospectiva aun más grave debido a la magnitud que han alcanzado los problemas ambientales.

El modelo de desarrollo económico industrializado del capitalismo ha propiciado que la capacidad de sustentación de nuestro planeta haya sido rebasada y que el medio ambiente continúe deteriorándose, comprometiendo la posibilidad de subsistencia de los seres humanos, no tan sólo de las generaciones futuras sino de las actuales incluso. La mayoría de los modelos de desarrollo han ocasionado gran cantidad de males debido a que priman los aspectos económicos por encima de los sociales, culturales y políticos, dimensiones que se mantienen en permanente tensión en el modelo neoliberal vigente.

Tales problemáticas, en el momento presente no solamente persisten, sino que se han tornado más complejas y por ello se han agravado, por lo que se hace evidente la urgencia de

analizar la relación fundamental que construyen los seres humanos entre sí y para con la naturaleza, así como la participación permanente de la dimensión ética en tales interacciones. Estas relaciones han sido tradicionalmente soslayadas por los modelos del desarrollo económico que se han abocado al logro de un crecimiento económico sin consideraciones de cuidado del medioambiente y sus recursos, ni tampoco hacia la calidad y la forma de las interacciones entre los seres humanos y de éstos para con la naturaleza.

Diversas corrientes teóricas y grupos políticos y ecologistas han cuestionado a los referidos modelos de desarrollo centrados en el economicismo y a sus concepciones, metodologías, técnicas, políticas y estrategias, debido a los problemas sociales y ambientales a los que han dado lugar. Después de muchos años de debates, surgió en la ONU, en 1987, con la publicación del Informe Brundtland: “Nuestro futuro común”, la noción de desarrollo sostenible, definido como aquel que: “...satisface las necesidades de la generación actual sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.” (Informe Brundtland, 1987: 67) Sin embargo, diversos estudiosos de los problemas del desarrollo y del medio ambiente han considerado posteriormente que incluso la noción de desarrollo sostenible requiere ser clarificada y presentan diversas críticas a ella.

Dada la magnitud del deterioro ambiental, de la pérdida de la capacidad de sustentación y de la gran cantidad de males sociales que han sido producto de los modelos de desarrollo, tal es el caso de la pobreza, Gustavo Esteva, en una postura radical, afirma que el concepto de desarrollo está condenado a la extinción, pues constituye una construcción ideológica que responde a intereses políticos y económicos de diversos sectores en el poder. Sostiene que desarrollo es un concepto hegemónico, una ideología que determina las formas de pensar y actuar. Para este autor, plantear un desarrollo sostenible implica garantizar la equidad y otros principios y valores que la

clase dominante no reconoce, en consecuencia implica una contradicción (Esteve, G., 1996: 54-65).

Una de las principales objeciones que se plantean al modelo de desarrollo sustentable consiste en que aún plantea la necesidad del crecimiento económico en todos los países del mundo, pese a que reconoce las desigualdades en el gasto y consumo energético entre norte y sur. A partir de esta premisa, el concepto ha sufrido una erosión semántica ya que se ha sustituido la noción de desarrollo sustentable por crecimiento sostenido y se ha eliminado toda referencia ecológica; aspecto que se le cuestiona ampliamente a este enfoque. Además se discute a este modelo su ausencia de consideración y análisis de problemas sociales como la justicia, la equidad y la distribución, que son esenciales a la posibilidad de satisfacción de las necesidades básicas de todos los seres humanos, las cuales, considera este enfoque, podrán satisfacerse en el mismo esquema del crecimiento económico (Riechmann, J., 1995: 1-20)

Se afirma que el desarrollo sostenible ha desactivado el poder contestatario y subversivo del discurso ambientalista frente al desarrollo, ya que los problemas sociales y ambientales que ocasiona son considerados como desajustes internos que pueden corregirse mediante la aplicación de la ciencia y la tecnología. Dicho discurso justifica la institucionalización del desarrollo sustentable que esconde una lógica productivista al servicio del mercado. (Hopwood, B., Mellor, M., y O'Brien, G.2005: 38-49)

El crecimiento económico indefinido no es posible porque existen límites ecológicos y los modelos economicistas generan pobreza, desigualdad social y degradación ambiental, entre otros graves problemas, por lo que ponen en riesgo el futuro de la humanidad. Los conceptos de desarrollo y desarrollo sustentable son conceptos antagónicos, por lo que es necesario pasar del desarrollo sostenido al desarrollo sustentable, hacer avanzar la noción de sustentabilidad que

representa una visión holística de las interacciones entre los seres humanos y para con el medio ambiente, como proceso político amplio y complejo que incorpora también las dimensiones económica, ecológica y social. Además, la sustentabilidad no puede ser entendida como un principio puramente técnico sino como un concepto ético–normativo, ya que cada momento del desarrollo económico exige una decisión moral. (Riechmann, J. 1995: 15-16)

Al depender la supervivencia de los seres humanos y de los ecosistemas del establecimiento de sociedades sustentables y democráticas, se muestra imprescindible la transformación del modelo económico y se exigen por ello también constantes decisiones políticas y éticas. La noción de sustentabilidad concibe y demanda un estado promotor y una sociedad comprometida; por ello se requieren nuevas normas e instituciones, la adaptación del sector productivo a partir de la adopción de tecnología “limpia”, un comercio sustentable, distribución equitativa de los recursos y los bienes, así como justicia social y desarrollo de la virtud cívica, entre otras transformaciones.

En tal sentido, a partir del reconocimiento de las consecuencias ocasionadas por la intervención humana en la naturaleza, afirman algunos estudiosos que el concepto medio ambiente implica una forma de pensar la naturaleza desde una perspectiva humana. El propio empleo del concepto medio ambiente en sustitución del de naturaleza, implica concebir a esta última, en términos de su relación con los seres humanos y con formas particulares de organización social y productiva.

También con respecto a la relación que se establece entre la naturaleza y los seres humanos, Anthony Giddens postula que vivimos en un entorno creado, en el cual debido a la influencia del desarrollo social, se presenta en forma inminente el riesgo de sufrir “grandes consecuencias” o problemas generados debido a la expansión de la “incertidumbre fabricada”

156

Recordemos que para Giddens, la “incertidumbre fabricada” es un concepto que hace referencia a los riesgos creados precisamente por la intrusión consciente en nuestra propia historia y nuestras intervenciones en la naturaleza. (Giddens, A. 1995:150) Resulta entonces de gran importancia política, el reconocimiento de la existencia de diversos peligros que potencian esas graves consecuencias, los cuales tienen un origen social y del hecho de que la naturaleza se encuentra enfrentada a sus propios límites debido a la acción humana, ya que a partir de esta toma de conciencia es que se pueden buscar alternativas para evitar dichos peligros.

Además, como parte de la referida toma de conciencia, al aceptar la responsabilidad de la participación humana en la generación de los problemas, es imprescindible percatarse de que la crisis ecológica pone en riesgo el futuro de las sociedades y de los seres humanos como especie, de ahí que demanda alternativas de solución también en los ámbitos económico, político, social, cultural y ético, orientadas al logro de la sustentabilidad.

Dada la aceptación de la interconexión entre la naturaleza y los diversos factores que generan los problemas contemporáneos, han surgido movimientos sociales y partidos políticos, tales como la política verde y el ecologismo político, que parten de la premisa de que los problemas de la naturaleza se deben a que los seres humanos hemos intervenido en ella causando una serie de consecuencias negativas, generadas por el impacto que han tenido la industria, la ciencia y la tecnología. A partir de las consideraciones antes expuestas, el ecologismo político considera que la incuestionable relación entre los seres humanos y la naturaleza ha cobrado preponderancia política y social, de manera que el medio ambiente en el que se lleva a cabo la interacción naturaleza-sociedad e individuo se considera un asunto de interés público y por ende, social y políticamente relevante.

2.5 Gobernabilidad democrática. Cultura cívica democrática

Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la gobernabilidad democrática es

“...la capacidad de una sociedad de definir y establecer políticas y resolver sus conflictos de manera pacífica dentro de un orden jurídico vigente. Esta es una condición necesaria de un Estado de Derecho junto con la independencia de los poderes y un sistema legal que garantice el goce de las libertades y derechos –civiles, sociales, políticos y culturales- de las personas. Para ello se requiere de instituciones basadas en los principios de equidad, libertad, participación en la toma de decisiones, rendición de cuentas y, promoviendo la inclusión de los sectores más vulnerables.” (PNUD/Centro Regional Panamá)

“La democracia es un valor universal, basado en el derecho de los pueblos a determinar su propio sistema político, económico, social y cultural. La Gobernabilidad democrática parte del derecho de las personas a elegir su camino hacia el desarrollo sostenible y centra su atención no sólo en el rendimiento de las instituciones sino también en su legitimidad, para ello adopta un enfoque basado en derechos, en los que la ciudadanía es titular de los mismos con carácter universal.” (AECID 2012: 1)

La gobernabilidad no concierne exclusivamente al ejercicio unilateral del poder público por parte del ejecutivo, sino que tiene que ver con la participación de todo el gobierno, incluidos el Poder Legislativo y el Judicial, con las actitudes de los partidos políticos, la sociedad civil. Esta participación incluye a los tres niveles de gobierno: municipal, estatal y federal.

La gobernabilidad democrática es un enfoque que se aplica al análisis de los procesos de desarrollo. Comparte las preocupaciones acerca del “buen gobierno” del enfoque de la gobernanza, el cual aplica criterios de eficiencia administrativa de las políticas públicas en la

escala nacional y de desempeño institucional en los asuntos de política económica e inserción nacional en el mercado global. La gobernanza actúa desde la dimensión local hasta la supranacional, pero el peso decisivo lo adjudica a la dimensión del estado nacional.

Por su parte, la “gobernabilidad democrática” comparte las preocupaciones de la gobernanza, pero metodológicamente, su propuesta supera la dirección del gobierno e incorpora la participación ciudadana, de la sociedad civil, de las redes de instituciones u organizaciones no gubernamentales. Cuestiona los mecanismos autoritarios de toma de decisión, de arriba hacia abajo que pertenecen a la democracia procedimental y en su lugar propone formas deliberativas que pertenecen a un nuevo debate democrático. Abarca de lo global a lo local sin menosprecio de la dimensión nacional.

Arbós y Giner (vid en Preciado, J. 2002: 4) reconocen cuatro niveles en los que se mueve el proceso en que se ejerce el poder entre los actores para explicar las relaciones entre democracia y gobernabilidad:

1. Dilema entre legitimidad y eficacia del gobierno. Plantea la necesidad de incluir una cultura política plural y participativa, que transforme los mecanismos de decisión de “arriba hacia abajo” y que incorpore y concilie las iniciativas de abajo hacia arriba. Propone la transformación hacia formas de cultura participativas y fomentar la pluralidad, a través de los tres instrumentos que propician formas de participación ciudadana: el plebiscito, la iniciativa popular y el referéndum. El interés social encuadra las políticas de gobierno que influyen en los fenómenos locales y en la dimensión nacional.

2. Identificación realista de las presiones y demandas vis a vis el entorno gubernamental supone una distribución de las responsabilidades en la relación Estado-sociedad. Capacidad institucional para gestionar el conflicto y la generación de consensos, necesita un diseño institucional que evalúe las políticas públicas por parte de los involucrados y la rendición de cuentas en forma sistemática. Para que la cooperación entre los actores sea horizontal, se requiere la implementación de metodologías participativas que involucren a los actores preocupados por solucionar sus propios problemas y lleven a los ciudadanos a saber exigir el cumplimiento de las obligaciones del estado.
3. La manera en que se da la regulación para alcanzar acuerdos que lleven al establecimiento de un pacto social consensuado. Mayntz (2000) propone dos formas de negociación: a) acuerdos neocorporativos que implican una nueva definición de los ámbitos público y privado, mediante políticas públicas. Es una restructuración corporativa de la sociedad que supere el corporativismo tradicional que permite concretar una sociedad participativa e incluyente. Permite cubrir el déficit democrático. b) acuerdos basados en la autoregulación social, en los que no participa necesariamente el gobierno. Enfatiza la capacidad y el deseo de los grupos para establecer determinados arreglos y establecer compromisos que den mayor peso a grupos de masas políticamente relevantes por encima de grupos elitistas.
4. Planteamiento de la vinculación entre la gobernabilidad democrática y los temas del desarrollo particularmente con la expansión y el cambio tecnológicos, por sus repercusiones demográficas, ecológicas y sociales importantes para la

democratización de las relaciones entre Estado-sociedad a partir del combate a la desigualdad, la recuperación del Estado social y la reasignación de responsabilidades en el marco de la globalización. (Preciado, J. 2002:6)

2.5.1 Indicadores de gobernabilidad democrática. Modelos de sociedad civil

En los anteriores capítulos realizamos un análisis del concepto de ciudadanía, los elementos que la constituyen y las dimensiones que involucran. Asimismo, realizamos un breve recorrido a través de la evolución de esta concepción a lo largo de la historia con la intención de comprender sus transformaciones y las discusiones actuales en torno a ella. Por otra parte, la comprensión de las nociones de democracia y gobernabilidad resultan fundamentales para el análisis del concepto de ciudadanía, toda vez que ambas suponen la participación ciudadana.

En la valoración de toda formación política que se propone como democrática es imprescindible contrastar las percepciones y vivencias de la democracia según sus habitantes, con indicadores que incluyen diversas variables que se han sistematizado para evaluar los derechos civiles, políticos y sociales del régimen.

Dentro de los indicadores de gobernabilidad democrática, resulta fundamental el papel que desempeña la sociedad civil. Por lo anterior, presento a continuación el análisis que presenta el politólogo Benjamin Barber acerca de la sociedad civil, en su libro: *Un lugar para todos*. He seleccionado la propuesta de este estudioso, ya que, además de sus valiosas reflexiones, presenta una síntesis de los tres principales modelos de sociedad civil que han sido presentados en las diversas propuestas teórico-filosóficas, así como en la experiencia práctica e histórica en distintos sistemas políticos.

De acuerdo con Benjamin Barber, la sociedad civil se ha convertido en un factor de gran importancia para la administración de la política actual y existen diferentes ideas acerca de su significado. Sostiene que los hechos y los principios morales no se pueden separar y mantener aislados y que en la política existe una zona claramente demarcada que combina lo ideal y lo real; dicha zona es la sociedad civil.

De esta manera, propone que en tanto concepto político, sociedad civil tiene un significado empírico y otro normativo que son inseparables, ya que indica cómo nos comportamos, al mismo tiempo que presenta un concepto ideal de cómo deberíamos comportarnos. En palabras del politólogo:

“Lo que pretendo es que cuando utilicemos un término ineludiblemente político como el de sociedad civil, su significado normativo ideal, marcado por ciertos ideales de carácter democrático y cívico esté unido de manera inextricable a varias actitudes y prácticas cívicas que circundan nuestra existencia.” (Barber, B., 2000: 21)

El concepto de sociedad civil es histórico y sus representaciones varían de acuerdo con las diversas formas de organización social y política, por lo que es fundamental comprenderla en su práctica cotidiana en diversos contextos pasados y presentes y no en forma abstracta. Sin embargo, aunque hay una diversidad de concepciones, Barber señala que por lo general se le representa como una aspiración o ideal, un espacio imaginario de libertad. El concepto de sociedad civil, a partir de la segunda mitad del siglo XX, se desarrolló en dos ambientes políticos distintos entre sí y continúa siendo vigente en ambos: como radicalismo utópico, se presentó en los regímenes dictatoriales a manera de crítica, una forma de hablar de la política y la disidencia y en las democracias consolidadas como una serie de fundamentos ideales que se encuentran

actualmente en decadencia, pero poseen, sin embargo, una historia y una legitimidad institucional.

La sociedad civil, de acuerdo con Benjamin Barber, es un espacio cívico libre e independiente, creado por los ciudadanos a través de la acción asociada común en las familias, en los clanes, en las iglesias y en las comunidades; abarca tanto a determinados tipos de instituciones, como a la militancia social, así como algunos ideales. Constituye el ámbito en el que es posible mantener nuestra individualidad y al mismo tiempo nuestra colectividad abstracta y que se conforma precisamente como una red de interacciones y asociaciones entre los individuos. La sociedad civil no es una entidad dada, por el contrario, es un tejido vivo que se mantiene en permanente construcción.

Una de las concepciones que Barber propone acerca de la sociedad civil, la postula como un *tercer sector*, intermedio entre el estado y el mercado. No obstante, considera que el mercado es necesario, pero distingue la *incivilización* del mercado y el egoísmo comercial, respecto del mercado privado. La tesis de Barber es que sólo en el terreno cívico que se extiende entre los extremos de un gobierno fuerte y los mercados comerciales privados, podemos mediar entre lo público y lo privado, entre la comunidad y la individualidad y entre el poder de las comunidades públicas y la libertad de las individualidades privadas.

La sociedad civil puede democratizar a los gobernantes y de ese modo legitimar el gobierno. Al mismo tiempo, el gobierno civiliza y *domestica* a los mercados. De ahí que proponga Barber que la sociedad civil es indispensable para la supervivencia de la democracia, ya que es el contrapeso indispensable entre ambas instituciones.

Afirma Barber que la sociedad civil carece de orientación ideológica particular, pero requiere mantener vínculos con la política para no perderse en conflictos de intereses y de poder. Al igual que Hannah Arendt y Chantal Mouffe, Barber considera indispensable restaurar el ámbito político de la sociedad civil como condición para garantizar la democracia.

La sociedad civil, plantea Barber, establece las condiciones del libre espacio en el que germinan las disposiciones democráticas y el comportamiento democrático. Considera al gobierno democrático como la forma más pura de expresión de la asociación civil. La renovación cívica implica una renovación democrática.

En el mismo sentido que Barber, Michael Walzer concibe a la sociedad civil como: “el espacio de asociación humana no coercitiva...el entramado de redes basadas en la relación (formadas por la familia, la fe, el interés y la ideología) que ocupan ese espacio.” (Walzer Michael, en Barber, B. 2000: 1) El problema es que en ocasiones dicho entramado en sí mismo es coercitivo y esta paradoja es el núcleo de las diferencias entre los distintos tipos de sociedad civil. De acuerdo con lo anterior, propone Barber tres tipos de sociedad civil, conforme a las circunstancias políticas en que se desarrolla:

- Perspectiva libertaria.
- Perspectiva comunitaria.
- Modelos democráticos sólidos. Auténtica perspectiva democrática.

2.5.1.1. La perspectiva libertaria: la sociedad civil como sinónimo de sector privado.

La perspectiva libertaria considera como opuestos incompatibles e incluso como rivales a la vida pública y a la vida privada. Así, este enfoque supone que el sector público es el ámbito de

la política y la universalidad, en el que cumplimos nuestras obligaciones cívicas y demandamos distintos servicios apelando a un concepto de justicia. El ámbito público está constituido por el Estado y sus instituciones, lo que caracteriza al Estado es el poder y la restricción y cuando es democrático, ésta se manifiesta por su capacidad de monopolización legítima.

El sector privado, por su parte, abarca a los individuos, organizaciones sociales, corporaciones económicas y asociaciones civiles. Se convierte en el lugar en el que se llevan a cabo todas las demás actividades: trabajo, ocio, descanso, religión, aprendizaje, producción, consumo y reproducción. El sector privado se define por la libertad, en lo que respecta al mercado ésta se asegura mediante un contrato voluntario y por la libre asociación de la cual emana la condición de privacidad e individualidad.

En esta perspectiva, se considera que la auténtica libertad exige una elección entre el gobierno y los mercados, ello porque se concibe a la sociedad civil como sinónimo de sector privado del mercado, un territorio de individuos libres que se asocian voluntariamente en varias agrupaciones de carácter económico y social de naturaleza contractual en la que se incluye la familia. Cuando se ha polarizado al estado y a los individuos, el desarrollo que se produzca en uno, es a costa del debilitamiento del otro. En palabras de Benjamin Barber: “El clásico modelo libertario (enfrentar al pueblo y a su gobierno con el fin de convertir al poder en el destructor de la libertad y al Estado en el enemigo de los individuos) no da paso a la sociedad civil, sino al sector privado”[sic] (Barber, B., 2000: 26).

La sociedad civil es concebida en el modelo libertario como un sustituto del mercado, como una elección que el consumidor realiza; representa la libertad desde un punto de vista completamente privatizado en que la perspectiva social es casi inexistente. La concepción del Estado lo limita a ser un proveedor de servicios y se le percibe también como una amenaza a la

165

libertad. Ante tal amenaza, los libertarios proponen que las libertades deben estar protegidas por los derechos.

El ciudadano, definido únicamente como consumidor de servicios gubernamentales, el *homo economicus* –como lo denomina Barber-, no es un elemento participante sino un guardián de los representantes políticos que han adquirido una responsabilidad con él. Para este *homo economicus* las asociaciones civiles son, cuando mucho, cooperativas de consumo o alianzas de derechos y prácticamente no tienen relación con la participación, la cooperación o la sociabilidad, ni con la solidaridad, la cooperación y el bien público. Las relaciones sociales en el sector privado y entre éste y el estado, se realizan mediante una relación contractual, este modelo es una versión del modelo del contrato social en el que la gente “vive vidas separadas” y no es posible que exista un equilibrio moral” y cada vez que uno intenta cristalizar una relación con otro, se requiere su “consentimiento voluntario (Nozick, Robert vid en Barber, B., 2000: 27)

No obstante, la democracia requiere fundarse en una cultura cívica que la privatización no puede sostener, los consumidores son votantes, pero no se constituyen como ciudadanos en sentido pleno. Su única participación en el sector social es como consumidores de los servicios del estado, el modelo de las relaciones sociales es elemental. La única arma política a la que pueden recurrir los ciudadanos privados es a los derechos.

En este modelo de sociedad civil, la libertad se concibe y utiliza en forma extremadamente individualista, reducida a las alternativas elegidas por los consumidores entre las opciones de beneficios que se les ofrecen, por lo que no puede mediar entre el individuo y el estado. Su principal debilidad consiste en que es insensible a las peticiones de solidaridad y comunidad que demandan las culturas modernas en la sociedad postindustrial. La existencia humana parece exigir solidaridad e identidad y una ley básica de la política moderna es que

166

donde no existen comunidades democráticas que lleven a cabo dichas tareas aparecerán comunidades no democráticas para llevarlas a cabo (Barber, 2000:29).

El modelo libertario propone un aparato gubernamental reducido a su mínima expresión y considera que el mercado es apto para realizar distintas tareas de gobierno. El objetivo principal es acabar con el gobierno para evitar la imposición de valores a los grupos y a los individuos libres. Apela a un ideal puro y simple y a la puesta en marcha de un programa para la creación de nuevas instituciones.

2.5.1.2. La perspectiva comunitaria: la sociedad civil como sinónimo de comunidad.

Esta perspectiva mantiene la división entre el dominio gubernamental, el público y el privado.

Sostiene Barber que este modelo percibe al ámbito privado como espacio de la solidaridad, de la defensa de los derechos individuales, dominio del mercado e incluye los lazos que preceden y condicionan la individualidad, relaciones sociales ineludibles que unen a las personas desde las familias y asociaciones similares, después en agrupaciones, vecindarios, comunidades, hasta jerarquías sociales más amplias. La sociedad civil se concibe como una mezcla confusa de relaciones sociales, un espacio de interacción, de asociación en comunidades y condición indispensable para la unión social. La sociedad civil se entiende como un nexo privado y cerrado de comunidades unidas estrechamente.

Es un modelo iusnaturalista, ya que parte de la premisa de que la mayoría de las asociaciones humanas vienen dadas, no se eligen. Las comunidades antiguas tienen una base social y se han autorizado con el tiempo y gracias a la tradición, lo que ningún contrato social podría lograr. Sus propósitos son de carácter natural primordialmente.

El actor determinante de la sociedad civil es el miembro del clan, ligado a su comunidad y comprometido con ella. La ciudadanía adquiere una dimensión cultural y marca su territorio por la exclusión y no por la inclusión. Los extranjeros, desconocidos, ayudan a definir a los miembros excluyentes y por ello exclusivos que forman la comunidad.

La ventaja de la sociedad civil, para esta perspectiva, consiste en que proporciona un vínculo social a individuos y grupos dispares en un mundo social y económicamente anárquico. La familia y otros grupos sociales intermediarios proporcionan vínculos de solidaridad y fraternidad que pueden evitar que la masa caiga en el anonimato, en la impersonalidad. Se cuestiona a este modelo el hecho de que la sujeción a los fuertes vínculos comunitarios puede conducir a la autoridad que a su vez, puede llevar a la jerarquía, asimismo, la solidaridad a la exclusividad y la conformidad.

En este modelo, el estado y sus instituciones parecen subordinarse a una comunidad mayor, una comunidad de sangre que puede resultar totalitaria. La sociedad civil se convierte en la comunidad de todas las comunidades, de forma orgánica y completa, la fuente de toda autoridad política y moral, incluyendo la gubernamental.

Por otra parte, en el pluralismo, las demandas de justicia, inclusión e igualdad, debilitan los vínculos de solidaridad. Por lo anterior, afirma el politólogo que la democracia no es inherente al comunitarismo, sino que debe trabajarse para conseguirla.

Los comunitaristas temen a la anarquía y están a favor de la disciplina autoritaria, consideran que el debilitamiento de la comunidad conlleva una ausencia de autoridad y pérdida de valores, asociados con la desaparición de instituciones como la familia y la iglesia. La sociedad civil es concebida como una comunidad de sangre, la comunidad por excelencia de

forma orgánica y completa y se convierte en la fuente de toda autoridad política y moral, incluyendo la del gobierno.

Los comunitaristas temen que el Estado puede estar desprovisto de valores, buscan garantizar la seguridad cultural mediante el control cultural, por lo que la sociedad civil debe basarse en principios morales fundamentales que se imponen sobre el Estado y sobre los sectores privados. La perspectiva comunitaria acerca de la sociedad civil propone recuperar las virtudes de las antiguas comunidades que desaparecieron como consecuencia de la modernización. Al censurar a la modernización, proponen a la comunidad como remedio, así como el volver a identidades ancestrales.

En la actualidad, muchas comunidades que se quieren fortalecer, frecuentemente se ponen en práctica de manera artificial ya que ante el secularismo, el utilitarismo y la transformación de las ataduras sociales naturales o tradicionales, deben esforzarse para constituirse artificialmente en comunidades orgánicas naturales que ya no son o no pueden ser. Las imitaciones son más radicales que los originales.

“El peligro político del comunitarismo es que tiende a absorber, asimilar y, finalmente monopolizar todo el espacio público.” (Barber, B., 2000: 35)

2.5.1.3. Modelo Neorepublicano. La auténtica perspectiva democrática: la sociedad civil como el dominio entre el gobierno y el mercado.

Considera Barber que la sociedad civil es factible, no tiene que ser un ejercicio de nostalgia. Propugna por una sociedad civil democrática en la que se den el aprendizaje, el ocio, la justicia y las oportunidades, en la que las instituciones libres y la sociabilidad puedan descansar

sobre la ciudadanía sin verse atrapadas por un gobierno arrogante. Un tipo de sociedad civil que esté unida a los ciudadanos.

Barber considera que no debe existir oposición entre los sectores público y privado y en su lugar postula un tercer sector mediador. Concibe a la sociedad civil como un ideal de compromiso social, regulado para los ciudadanos que aspiran a una nueva forma de actividad cívica: "...que no tenga fuerza ni inspiración como el liberalismo de mercado y que no sea densa ni glutinosa como la comunidad en clanes." (Barber, B., 2000: 43)

Distingue el ámbito público ocupado por el gobierno y sus instituciones soberanas y un sector privado ocupado por una serie de individuos y sus asociaciones contractuales en el mercado. Propone un tercer dominio que actúa como mediador entre ambos y comparte las virtudes de cada uno. Este tercer sector independiente se define por sus comunidades cívicas; su esencia es la pluralidad, constituido por asociaciones abiertas e igualitarias que permiten la participación voluntaria.

Plantea Barber que las opciones políticas que ofrecen los libertarios y los comunitarios son rígidas y no son deseables ni realistas, al combinar lo privado con la sociedad civil, ya sea en forma de mercados o de comunidades. Aunque las asociaciones contractuales y las comunidades representan formas de agrupación humana, no ofrecen un lugar en el que sea posible el compromiso con quienes requerimos convivir: vecinos, amigos, ciudadanos e incluso extraños. En opinión de Barber, un espacio social que contenga tres sectores distintos presenta un marco más flexible para el debate político y civil, nos permite considerarnos como seres que presentan una pluralidad de identidades y proyectos múltiples, en lugar de pensar nuestras identidades como individualidades que se definen exclusivamente por lazos de sangre o por aspectos económicos.

De acuerdo con esta concepción, algunos grupos cívicos actuales no cumplen las condiciones ideales para constituir una sociedad civil puramente democrática de carácter voluntario, ya que pueden tener algunos elementos de exclusión. Así, proponen algunas características para el dominio cívico o sociedad civil, tales como el hecho de que constituye un marco abierto y público como el estado y es también voluntario y no coercitivo, como el sector privado. Sus miembros, para constituir sus comunidades, requieren distinguirse por su apertura e inclusión y aunque sus asociaciones constitutivas sean privadas, requieren mostrar rasgos de igualitarismo y no exclusión propios del ámbito público democrático.

Asimismo, tales asociaciones constitutivas de la sociedad civil, aunque sean públicas, no deben ser soberanas ni coercitivas y deben presentar los rasgos de libertad y voluntarismo del sector privado. Dicha sociedad es profundamente democrática porque comparte virtudes del sector público y del privado. En tal modelo de sociedad, la creación de comunidades se da debido a la actividad conjunta, así como por la historia común.

La tarea pública y la labor privada del dominio cívico, alcanzan alto grado de igualdad porque es un tipo de sociedad plural, ya que es hogar de distintas entidades. Esta multiplicidad es la característica democrática que las define, aunque aisladamente las asociaciones no sean igualitarias ni voluntarias, ni inclusivas, constituyen un conjunto caracterizado por la variedad y la diferencia. Al mismo tiempo, las identidades particulares pueden ser reformuladas para dotar a sus ciudadanos de una naturaleza plural.

“La liberalidad de una sociedad civil fuertemente democrática viene marcada por las características de la sociedad en su totalidad y no por la de cada comunidad en particular...el pluralismo es la condición indispensable de la libertad en una sociedad civil fuertemente democrática. Y cuanto más haya, mejor.” (Barber, B., 2000: 45)

Es este dominio fuertemente democrático, un todo libre, de carácter voluntario, en el que hombres y mujeres pueden elegir libremente sus formas de asociación. De tal forma, pueden coexistir diversas comunidades poderosas. Presenta de diversas maneras el aspecto del “Republicanismo cívico”¹⁷, en el que se observa la existencia de todas las virtudes democráticas, se adoptan hábitos y se practican formas de vida democráticas, se define por su carácter público y por su libertad, por su igualitarismo y por ser formas voluntarias de asociación.

Este modelo de sociedad civil democrática ideal es habitado por ciudadanos que no son únicamente consumidores de los servicios que proporciona el gobierno, que defienden sus derechos ante la intrusión del gobierno, cuya participación no se limita al voto ni a cuidar en forma pasiva a los representantes del gobierno. Se constituyen como ciudadanos activos, responsables, miembros comprometidos de grupos y comunidades que aunque tengan diferentes principios e intereses contrapuestos, están dispuestos a arbitrar esas diferencias explorando un terreno común, realizando una tarea pública y estableciendo relaciones comunes. Establecen relaciones sociales profundas y provechosas, aunque menos solidarias que en las comunidades unidas por lazos de sangre.

2.5.1.4 Worldwide Governance Indicators

El proyecto *Worldwide Governance Indicators* (WGI) o Indicadores de gobernanza a través del mundo, es un esfuerzo desarrollado por el Banco Mundial, para medir y evaluar la gobernanza y comparar la calidad de la misma entre los países alrededor del mundo. Publica indicadores globales e individuales para más de 200 países en seis dimensiones de la gobernanza:

¹⁷ Barber reconoce que el republicanismo cívico no representó la edad dorada de la historia de EEUU ya que coexistió con la esclavitud y otras muchas desigualdades, sin embargo lo propone como un modelo**. A su vez, Michael Sandel lo analiza y considera que logró vincular la libertad con la participación en el autogobierno, lo que se entendió como la posibilidad de que los conciudadanos deliberaran sobre el bien común y colaboraran en la formación del destino de la comunidad política. el republicanismo cívico, generó un tipo de ideal democrático liberal que acabó apoyando el modelo libertario de sociedad civil.

voz y rendición de cuentas, estabilidad política y falta de violencia, efectividad gubernamental, calidad de la regulación, estado de derecho y control de la corrupción.

El Instituto del Banco Mundial realizó estudios sobre la gobernanza a escala de cada país, llamados *World Bank Governance Surveys*, que recogen información de los propios ciudadanos, de la comunidad de negocios y trabajadores del sector público para diagnosticar las vulnerabilidades de la gobernanza y sugerir enfoques concretos para luchar contra la corrupción.

2.5.1.5 Índice de Gobernanza Mundial (IGM)

Es un nuevo índice a disposición que pretende ser mejorado mediante la participación pública. Está conformado por los temas: paz y seguridad, estado de derecho. Derechos humanos y participación, desarrollo sustentable, desarrollo humano.

2.5.1.6 Marco Analítico de la Gobernanza (MAG)

Es una metodología que tiene un fuerte potencial para la investigación en políticas sociales, especialmente en el ámbito de la salud.

Se desarrolla una metodología apoyada en varias disciplinas sociales que sirve para diagnosticar los procesos colectivos, misma que a su vez, se basa en cinco unidades analíticas principales presentadas aquí: problemas, actores, normas, procesos y puntos nodales. Estas unidades analíticas pretenden constituir una metodología coherente y lógicamente articulada y se propone su uso como instrumento metodológico para la investigación en políticas sociales.

Define el concepto de gobernanza de manera pragmática, haciendo referencia a los procesos de interacción entre los actores involucrados en un asunto público, que llevan a la toma de decisiones o a la formulación de normas sociales. Se postula que hay procesos de gobernanza

presentes en cualquier sociedad y, a diferencia de otros acercamientos, éstos se pueden observar y analizar a partir de una perspectiva que no sea normativa o prescriptiva.

2.6 Democracia y ciudadanía en México.

En el presente apartado se analiza el proceso que el país ha atravesado en su camino hacia la democratización; se presentará un breve esbozo de algunos momentos históricos y hechos relevantes para comprender el proceso de democratización y conformación de la ciudadanía que ha atravesado México. Sin embargo, no constituye una cronología exhaustiva y absoluta de los períodos y acontecimientos históricos, sino una aproximación hacia aquellos considerados relevantes para comprender el contexto en que se ha llevado a cabo el proceso democratizador.

Se expone también un análisis crítico de los acontecimientos históricos desde la perspectiva de las condiciones reales de la democracia en nuestro país y de los posibles avances que en él se han dado, encaminados al logro de una democracia y una ciudadanía *verdes*.

Afirma José Woldenberg que

“...la transición a la democracia en México es un período histórico...la transición no es una idea ni un esquema preconcebido; no es el proyecto de un grupo ni de un partido; no tiene un protagonista privilegiado ni un sujeto único; no es una fecha, una coyuntura, una reforma, un episodio y mucho menos una campaña electoral, por importante que sea. La transición es la suma de todo eso y más.” (Woldenberg, J. 2002:21)

Resulta fundamental, de inicio, comprender las diversas circunstancias y procesos históricos que se han atravesado en el transcurso hacia la vida democrática, con la intención de poder analizar la situación actual de México, en lo relativo a los niveles de democratización

alcanzados, así como al tipo de ciudadanía que existe. A partir de dicho análisis, será posible comparar dichos niveles y tipos con los que se ostentan en países que han alcanzado un ejercicio pleno de la democracia. Como resultado de dicha contrastación, será posible valorar el estadio en el que nos encontramos y proponer las acciones más adecuadas al logro de la gobernabilidad democrática *verde*.

La democracia, entendida como un sistema con derechos políticos, civiles y sociales. (Cámara de Diputados. Indicadores de gobernabilidad y democracia: 1)

La democracia se caracteriza porque el poder se origina en la soberanía popular, asimismo porque su ejercicio se realiza a través de las instituciones republicanas de gobierno y normado en el Estado democrático de derecho, con la finalidad de garantizar, materializar y extender los derechos ciudadanos en las tres esferas básicas de la ciudadanía: civil, política y social. (PNUD. Nuestra democracia. 2010: 15)

La democracia es una forma de organización del poder que implica la existencia y buen funcionamiento del Estado, posee un régimen electoral, pero no se reduce a las elecciones, implica el ejercicio de una ciudadanía integral, que implica participación en la toma de decisiones a través de diversos mecanismos, exigencia de rendición de cuentas, ejercicio y reivindicación de derechos, entre otras acciones.

2.6.1 Hechos históricos relevantes para la vida democrática de México.

2.6.1.1 Antecedentes. Construcción del Estado Nacional.

Debido a que no existe un consenso respecto al surgimiento del estado mexicano autónomo, se presentan una serie de opiniones contradictorias al respecto. Lo anterior ha determinado que tampoco exista entre los diversos politólogos un acuerdo acerca del momento en

que surgen en nuestro país la preocupación y las acciones constitutivas de la ciudadanía y de la democracia; dichas acciones son vinculadas con la concepción de nación y soberanía. Es por ello que uno de los principales aspectos en los que disienten los liberales y los conservadores es precisamente por el momento en que nace nuestro país.

A partir de los recurrentes debates entre ambas corrientes, algunos politólogos e historiadores sostienen que la construcción del proyecto nacional ha sido el resultado de una mezcla entre dos posiciones conflictivas y antagónicas: tradición y modernidad.

Los conservadores sostienen que durante la Colonia, el Reino de la Nueva España, al pertenecer a España, tendría igualdad jurídica, su propio ejército y territorio, por lo que algunos afirman que podía considerarse un estado. Para esta corriente, el surgimiento de México fue en 1521 con la conquista. Lucas Alamán, uno de los principales representantes de la corriente conservadora, afirmaba que todo lo que existe en el país fue originado a partir de la conquista, que dio pie a la civilización y por lo anterior, consideraba a la Independencia como una caída.

Por su parte, los liberales plantean que aunque en la Nueva España existía el Consejo de Indias que tenía entre sus funciones la administración gubernativa, el gobierno espiritual, la administración de algunos asuntos de justicia y la auditoria a las cuentas de los oficiales reales, dichas atribuciones no se respetaban. Asimismo, señalan que los cargos en dicho Consejo, eran ocupados por españoles peninsulares y letrados en diversas áreas como el derecho, entre otras, sin representación de la ciudadanía. Por lo anterior, la corriente liberal considera que la Independencia había dado paso a la nación soberana.

Enrique Krauze (1998) plantea que ambas posiciones tenían en parte la razón y en parte también ambas se equivocaban pues tendían a la idealización. En lo relativo a la verdad de ambas

posiciones, el citado historiador plantea una serie de reflexiones. Respecto al pasado indígena de nuestro país, valorado por los conservadores, a la importancia de considerar que proporciona raíces culturales fundamentales. Dicho pasado nos legó valores éticos, estéticos, intelectuales y religiosos, entre otros, que dan sentido a nuestra identidad.

Con relación a la corriente liberal, Krauze propone que logró construir en un siglo, pese al atraso con respecto a otros países, un país independiente, consciente de sí mismo y del respetable lugar alcanzado entre las naciones, relativamente moderno, con un mercado interno relacionado con el exterior y una sociedad libre y laica. En cuanto al error de idealización en que incurren ambas tradiciones, afirma el historiador que los liberales sobredimensionaron la posibilidad de acceso del país a un futuro plenamente moderno: republicano, capitalista, federal, democrático en el momento en que se lo propusiera y los conservadores al ensalzar las instituciones del pasado, se aferraron a un rígido anacronismo que les impedía responder a las necesidades y problemas del mundo moderno. (Krauze, E. 1998:94-95)

2.6.1.2 La Guerra de Independencia

Algunos investigadores afirman que el nacimiento de México como nación se presentó a partir de la independencia, que se gestó debido a la influencia de la ilustración y de las tesis liberales que se divulgaron con motivo de la independencia de las colonias norteamericanas, de la Revolución francesa¹⁸ y de la Constitución de Cádiz. Constituyó un movimiento político y social que se resolvió mediante el uso de las armas. La guerra por la Independencia en México abarcó desde el Grito de Dolores, el 16 de septiembre de 1810, hasta el 27 de septiembre de 1821 fecha en que entra el Ejército Trigarante a la Ciudad de México.

¹⁸ Parte de la construcción del Imperio napoleónico, fue con la intención de instituir los principios de la Revolución francesa, lo cual impulsó su divulgación.

Es importante señalar que el proceso que dio como resultado la Independencia de México no fue un proceso que incluyera a todos los estratos socioeconómicos, ni a todo el país, sino que fue un proceso marcado por contradicciones internas y realizado por algunos sectores sociales. El movimiento a favor de la Independencia de México y las ideas ilustradas, fueron difundidos a través de la filosofía escolástica y de los jesuitas en las universidades y colegios que vinculaban la fe religiosa con el racionalismo. Estas ideas permitieron una interpretación particular de las ideas innovadoras tales como las referentes al origen de la autoridad civil y la subordinación del poder de los monarcas al del pueblo, hasta el derecho de resistencia en contra de un dominio tiránico y la nulidad de leyes injustas.

Los intelectuales criollos de la Nueva España recibieron la influencia de los acontecimientos históricos ocurridos en Francia y en Estados Unidos, así como del ideario que les daba fundamento. Dichos intelectuales, formados primordialmente por los jesuitas, revaloraron el pasado prehispánico, defendiendo que no había argumentos para hablar de una inferioridad americana, sino por el contrario, la cultura azteca se encontraba al nivel de las europeas. Las ideas de los intelectuales criollos fueron difundidas a través de sus propias obras, tal es el caso de José Xavier Clavijero, que en 1781 publica su *Historia Antigua de México*, José Antonio Alzate, Fray Servando Teresa de Mier y muchos otros científicos e intelectuales, así como curas, frailes, médicos, abogados y militares que compartían las ideas de la Ilustración, principalmente en el aspecto político.

A continuación se hará una breve referencia a las circunstancias en las que se desenvolvía la vida cotidiana en la Nueva España, antes de la independencia, con la intención de comprender las principales causas que le dieron origen. La sociedad colonial se regía por derechos de nacimiento, determinados por la religión y conferidos como una gracia por los reyes de España, a

partir de los cuales se fundamentaba la desigualdad entre los pobladores en lo relativo al status socioeconómico, político y a las cuestiones raciales.

Algunos investigadores afirman que la condición de división que se expresa en el sistema de castas, es la mejor justificación para afirmar que existía un Estado mexicano.

Enrique Krauze (1998: 115*) propone que la conformación de dicha sociedad se caracterizaba por una gran mayoría de población indígena (60%), otro amplio sector de castas (25%) y un sector menor (15%) por población blanca, de los cuales sólo un 2% eran peninsulares. Lo anterior permite captar la gran desigualdad social, económica, política y jurídica en la que se vivía y que causó grandes problemas entre las distintas clases, pues la riqueza y los privilegios estaban concentrados en la población blanca, primordialmente en los peninsulares.

Las actividades económicas que tenía bajo su cargo la población blanca, sobre todo la de origen peninsular, eran las del clero, la milicia, el comercio, la minería y las haciendas, mientras que otros sectores de criollos y mestizos ocupaban cargos menores en el clero, la milicia y como artesanos y letrados; por otra parte, la población indígena se dedicaba a las labores en el agro. Los deberes y derechos ciudadanos fueron un legado del liberalismo político que interesaban a los distintos grupos políticos existentes, los cuales enarbolaban diversos proyectos y aspiraciones y establecían diferentes requisitos para alcanzar el status de ciudadano, del cual quedaba marginada la mayoría de la población, que como hemos señalado estaba constituida por mestizos e indígenas, así como los mismos criollos cuyo status era inferior al de los españoles peninsulares, lo que los motivaba a transformar dicha situación.

Afirma María García Jacales (2006:1) que en el siglo XIX la ciudadanía era una categoría promovida por el sector ilustrado, que tenía un fuerte sentido nacional pues se vinculaba con el

interés por convertir a la entonces Nueva España, hoy México, en una Nación, la cual requería de sus ciudadanos. En el mismo sentido, Lorenzo Meyer sostiene que la visión del mundo y la situación social relativamente marginal de un pequeño grupo de mexicanos-los criollos- les llevaron a adoptar de manera radical las ideas liberales y motivaron su intención de reconstruir la sociedad mexicana de acuerdo con los principios de la democracia política, para lo cual - conformaron el Partido Liberal. (Meyer, 1988).

Dichos ideales liberales inspiraron tanto a los grupos propiamente liberales, como a los conservadores; sin embargo, la oposición que existía entre ellos, además de los aspectos materiales y de poder, los cuales trascendía, se fundamentaba en distintas visiones y aspiraciones de organización política y social para el nuevo país que impulsaban. Entre las principales divergencias entre ambos grupos, resalta la consideración por parte de los conservadores acerca de que la “plebe” no podía hacerse cargo del gobierno ni de ninguna responsabilidad política, pues los concebía incapaces de razonar y reconocer lo que más les convenía, de ahí que planteaban que la democracia era una utopía peligrosa y que el gobierno debía estar a cargo de minorías de “excelentes”. Al consumarse la independencia, se acuerda que la forma de gobierno será la monarquía y se funda el Imperio Mexicano a cargo del General Agustín de Iturbide.

El triunfo de la generación que promovió la independencia, formalmente dio vida a México como país, al mismo tiempo se planteó el problema de cómo gobernarlo y se comenzó a buscar una identidad propia. Durante treinta años se enfrentaron diversos proyectos contrapuestos, así se oponían liberales y conservadores, centralistas y federalistas, monárquicos y republicanos, sin lograr acuerdos.

En materia política la sociedad colonial de la Nueva España, se había caracterizado por el despotismo ilustrado y por ello, el autogobierno, que es un fundamento necesario para la

democracia, era ajeno a la sociedad de la época. La participación de los pobladores de la Nueva España se limitaba entre los grupos no indígenas a la formación de cabildos y a las elecciones internas en las órdenes religiosas y en los gremios y entre los indígenas a la elección de cargos de autoridad y religiosos. En lo relativo a los asuntos políticos importantes, se exigía a la sociedad obediencia absoluta al monarca, por lo que al lograrse la Independencia, dicha sociedad carecía de experiencia en el autogobierno.

Cuando se fundaba una ciudad colonial en el siglo XVI, el adelantado designaba entre los soldados, a quiénes fungirían como regidores y alcaldes y conformarían el Cabildo. Cuando los funcionarios del Cabildo tenían que discutir acerca de situaciones extraordinarias o peligrosas, convocaban a un Cabildo abierto en que se convocaba a participar a *la parte más “sana” y principal de la población*, para ofrecer alternativas de solución y tomar decisiones. Las personas invitadas a participar en el Cabildo abierto, por el ordinario, representativas de la ciudad y sin participación del pueblo, constituían la aristocracia local, sin embargo este hecho le confería a estas asambleas un carácter más democrático.

Durante los primeros siglos de la colonia, los Cabildos abiertos fueron abundantes, pero carecían de importancia política. Bajo el control de la aristocracia criolla estas asambleas abiertas, fueron menos frecuentes. En 1810, debido a que Napoleón arrestó al monarca español Fernando VII, se nombraron juntas de gobierno para gobernar en lugar del rey y ello originó el movimiento de independencia.

En sus inicios tuvieron amplias atribuciones de gobierno y justicia, llegando a designar al gobernador; con el paso del tiempo, en el siglo XVIII, con la llegada al trono de los Borbones, fueron perdiendo sus facultades y prerrogativas, las cuales fueron tomadas por la burocracia real y se rigieron por el sistema central en el cual los cargos se compraban en subasta por quienes

podían asumir el gasto; dicha situación de compra de cargos se extendió hasta fines de la colonia. Los Cabildos perdieron su carácter democrático y popular y se convirtieron en un organismo dominado por la oligarquía criolla que mantuvo una alta cuota de poder en la institución colonial, en manos de la élite criolla.

De esta manera, al comenzar su vida independiente, México tenía una tradición muy pobre en materia de autogobierno, presente en algunas corporaciones pero ausente de la sociedad en su conjunto y que constituye el fundamento sobre el cual otras sociedades construyeron sus democracias políticas modernas. Diversos factores dificultaban la constitución de una conciencia política nacional compartida y por ende de una nación, de la ciudadanía, así como el establecimiento de las condiciones económicas, sociales y culturales que requería la democracia liberal. Entre tales factores, Meyer señala la diversidad social, étnica y cultural entre las clases e incluso al interior de las mismas, ya que se hablaban una gran cantidad de lenguas distintas, se mantenían diferentes tradiciones y valores, lo que impedía alcanzar acuerdos en común, pues al no existir un pueblo, sino agregados de grupos heterogéneos, la soberanía popular, era imposible. (Meyer, L. 1988: 76)

Otro obstáculo para que en nuestro país pudiera construirse la democracia en el siglo XIX fue la ausencia de una nación verdadera, pues la población mexicana era muy heterogénea, ya que su división de clases mostraba muchos contrastes además de una gran diversidad cultural. Fueron también impedimentos determinantes para la construcción de una ciudadanía la ausencia de redes de comunicación adecuadas, -antes de la construcción de vías férreas-, la debilidad del sistema educativo y los altos índices de analfabetismo; las luchas entre el incipiente aparato de estado y la Iglesia, a la que mediante la secularización se pretendía marcar un límite en la

influencia que tenía sobre asuntos terrenales de competencia exclusiva del estado, entre otros muchos agentes causales.

“La búsqueda por lograr la igualdad de los habitantes ante la ley al luchar por liquidar los fueros de la aristocracia, clero y milicia, requería de la secularización de la sociedad a través de la legalidad establecida y ejercida por el Estado en todo lo relacionado al status del ciudadano y a la educación; la nacionalización de los bienes eclesiásticos y la integración de la tierra comunal al circuito capitalista para alcanzar el desarrollo económico, así como igualar los derechos sociales de todos los ciudadanos al liquidar el privilegio exclusivo de un reducido grupo que gozaba de ellos, a lo cual se añadía la disputa por integrar central o federativamente al país para crear una nación.”(García, M. 2006: 2)

Durante casi dos siglos la categoría ciudadanía estuvo profundamente ligada a la noción de nacionalidad. En ese afán por consolidar la nación y sus ciudadanos, las distintas facciones políticas, promulgaron en el siglo XIX diversos documentos legislativos¹⁹.

En 1811, Ignacio López Rayón²⁰ en sus *Elementos Constitucionales*, artículo 4, señalaba que América era libre e independiente de cualquier otra nación, que la soberanía dimanaba del pueblo y residía en el monarca y su ejercicio correspondía al Supremo Congreso Nacional Americano. Esta postura fue reafirmada un año después en la Constitución de Cádiz (1812), que en su artículo 3 señalaba que la soberanía pertenecía sólo a la nación y sólo ella podría darse sus

¹⁹ La relación y análisis crítico de los documentos legislativos ha sido extraída del texto citado de García Jacales, María.

²⁰ Ignacio López Rayón. 1773-1832. Insurgente mexicano, secretario del cura Miguel Hidalgo y Costilla, nombrado Secretario de Estado y del Despacho, así como Jefe del Ejército Insurgente en 1811.

leyes fundamentales. Se abolía la esclavitud, se planteaba la necesidad de la separación de poderes.

En 1813, José María Morelos en sus *Sentimientos de la Nación* señalaba la independencia y establecía que la soberanía radicaba en el pueblo y en el Supremo Congreso Nacional Americano, pero mantenía la figura del monarca. Dicho documento es considerado uno de los textos políticos más importantes de nuestro país. Las ideas que expresa se fundamentan en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, así como en la Revolución francesa.

Durante ese mismo año y con fundamento en los *Sentimientos de la Nación*, el Acta Solemne de Declaración de Independencia de América Septentrional declaraba disuelta la dependencia de España.

En 1814, con inspiración en la Constitución francesa de 1791 y en la Constitución de Cádiz, se emite el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, conocido como la Constitución de Apatzingán y considerada como la primera constitución del México independiente. Dicha Constitución establece acerca de la soberanía: “La facultad de dictar leyes y de establecer la forma de gobierno que más convenga a los intereses de la sociedad, constituye la soberanía” (Constitución de Apatzingán, Cap. II, artículo 1º) el medio para asegurar la soberanía era el Congreso a través de la representación.

Por primera vez desde la conquista española, se denominó ciudadano a todos los gobernados. Determinaba que la ciudadanía se adquiría por nacimiento (nacer en un territorio), por naturalización de los extranjeros radicados, que profesaran la religión católica y respetaran la libertad de la Nación. En contraparte, la ciudadanía se perdía y sus derechos correspondientes se suspendían si se cometían determinados crímenes.

Tal documento, desconocía al monarca, como puede captarse del mandato que señala: "Por consiguiente la soberanía reside originariamente en el pueblo, y su ejercicio en la representación nacional compuesta de diputados elegidos por los ciudadanos bajo la forma que prescriba la constitución". (Constitución de Apatzingán, Cap. II, art. 5) Señalaba también, en su artículo 6º, que los ciudadanos tienen el derecho de elegir a sus diputados.

Los derechos que los ciudadanos gozaban eran la igualdad, la seguridad, la propiedad y la libertad. La justicia se volvía más equitativa e incluyente. Las obligaciones de los ciudadanos para con la patria eran la entera sumisión a las leyes, obediencia absoluta a las autoridades y contribución a los gastos públicos, entre los más importantes.

El propio contexto de la guerra de Independencia impidió la aplicación total de la Constitución de Apatzingán. No obstante, este importante documento inspiró a las subsecuentes constituciones de 1824 y 1857 con alto sentido federal y liberal.

Otros documentos que han sido determinantes para el proceso democratizador, la constitución del estado, del régimen republicano y de la ciudadanía, fueron las Siete Leyes Constitucionales de 1835 y el Proyecto de Bases para la Organización para la República en 1843, con un sentido centralizador, conservador y oligárquico. Asimismo, el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba de 1821 y el Estatuto Provisional del Imperio, en 1865 que proponían un orden monárquico.

Es importante señalar que lo largo de todo el proceso de lucha ideológica y militar en busca de la independencia, se dieron avances de gran importancia que quedaron establecidos en diversos documentos. De la misma manera, se dieron diversas rupturas y retrocesos dependiendo de los grupos vencedores en los distintos enfrentamientos.

Dichos documentos obedecían a la intención de imponer distintas formas de gobierno y de establecimiento de la ciudadanía por parte de los diversos grupos políticos. (García, M. 2006:1)

2.6.1.3 Revolución de Ayutla

En 1854 en Ayutla Guerrero, ante el levantamiento de Juan Álvarez contra Santa Anna, el coronel Florencio Villarreal proclamó el plan revolucionario de Ayutla, que fue una reforma programada con la intención de quitar del poder al dictador Santa Anna y convenir una junta del Congreso Constituyente para establecer una constitución federal. El triunfo sobre la tiranía de Santa Anna significó el progreso de las ideas, promovió la consolidación de la nación, hizo una profunda transformación de la estructura del país y cimentó el Estado. Con la república restaurada, las Leyes de Reforma, la Constitución y la paz.

2.6.1.4 La Guerra de Reforma

En 1857 el Congreso Constituyente promulgó una Constitución inspirada en los más altos valores de la democracia liberal: tolerancia, libertad y respeto a la persona sin importar su origen ni credo y hacía a un lado los privilegios de la aristocracia. El proyecto democrático impulsado por los liberales constituyentes no pudo realizarse plenamente debido a las oposiciones de la Iglesia y la clase conservadora y a la ausencia de una clase media sobre la cual se sustentaran las transformaciones democráticas. El mejor legado de dicha Constitución, que se mantiene hasta nuestros días, han sido las garantías y libertades individuales que consignó, ya que los argumentos de la filosofía política más allá de su valor, se adaptan a las circunstancias del contexto real.

Ambas corrientes se fundamentaban en el pensamiento político liberal, sin embargo; proponían distintos órdenes políticos y sociales para guiar la construcción del destino del país. De estos ideales heredados por el liberalismo político se encontraban ajenos los sectores mayoritarios de la población.

Los conservadores querían derogar la Constitución de 1857 y llamar a un Congreso extraordinario que elaborara otra constitución, así como la permanencia en el poder del presidente electo: Ignacio Comonfort. Benito Juárez, que ocupaba la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia, defendió la Constitución y se opuso a colaborar con los conservadores por lo que fue apresado y posteriormente puesto en libertad cuando se proclamó el Plan de Ayutla que desconocía a Santa Anna como presidente. Posteriormente, Félix Zuloaga fue elegido Presidente por una junta de representantes.

Juárez estableció un gobierno itinerante, paralelo al de Félix Zuloaga y dictó en 1861 las Leyes de Reforma que establecieron la separación entre la Iglesia y el Estado y marcaron importantes distinciones en materia económica, política y cultural.

Las grandes diferencias entre los dos grupos opuestos de las elites mexicanas los llevaron a enfrentarse en una guerra civil, la guerra de Reforma que se libró de 1857 a 1861, de la cual resultó vencedor el grupo liberal que restauró la República y la Constitución.

Aún en nuestros días resulta difícil conciliar en un estado la relación entre religión y sociedad. Martha Nussbaum (...) plantea que aunque el Estado sea laico y de ciudadanos libres, ello no implica eliminar a la religión. Todo ciudadano puede tener su fe y debe comportarse como ciudadano de acuerdo con todos.

2.6.1.5 La Revolución Mexicana

El acontecimiento más importante del siglo XX para la política mexicana fue la Revolución mexicana:

“...El desarrollo político del México moderno se relaciona, necesariamente, con la Revolución mexicana. Es parte del proceso que se inicia con la Independencia y continúa con la Reforma. La Revolución fue la *revelación* mexicana.” (González, E. 2006: 225)

En 1867, al triunfar los liberales durante la Guerra de Reforma, la vida democrática y republicana debió dar inicio en México, sin embargo, el dominio político que en la práctica ejercieron los liberales dio paso a la dictadura liberal de Porfirio Díaz, implantada en 1888 y derrocada en 1911. Durante el porfiriato se hicieron patentes una serie de contradicciones que manifestaban la influencia de las dos corrientes políticas que habían entrado en pugna; a pesar del triunfo liberal, subsistían en forma de un *integrismo de Estado* muchas ideas y prácticas conservadoras. Así, Díaz era formalmente el presidente de una república democrática, representativa y federal y en la práctica era el dictador de una monarquía absoluta, centralizada y vitalicia: “...una extraña integración de república y monarquía, de centralismo y federalismo, de democracia y autocracia que alentó no la madurez política, sino la confusión.” (Krauze, E. 1998: 96)

Afirma Lorenzo Meyer que la Revolución mexicana tuvo su origen en la intención de realizar la democracia política que debía haber quedado establecida al término de la Independencia, 44 años antes, ya que desde 1857 existía un ordenamiento constitucional basado en la soberanía del pueblo y el gobierno representativo. La Revolución mexicana dio inicio con el Plan de San Luis, a través del cual Francisco I. Madero convocó a la insurrección en 1910; dicho plan se fundamentaba en el ideario de la democracia política liberal.

A través del Plan de San Luis, Madero proponía que se pusiera en práctica lo determinado en la Constitución de 1857 que establecía que México era una república, representativa, democrática y federal en la que había pluralismo político al reconocer a los diversos partidos existentes. Krauze afirma que es muy probable que los principios del liberalismo político fueran significativos para algunos sectores de la clase alta, la cual permanecía marginada del ejercicio del poder, y para la clase media, que además se encontraba en malas condiciones económicas y carecía de prestigio social. Sin embargo, sostiene que las mayorías no se sentían identificadas con fines tan abstractos y alejados de su experiencia, cultura y expectativas como podía ser el sufragio, de ahí que considera que su participación en la revolución se dio en contra de los abusos de jefes políticos, para recuperar derechos de propiedad perdidos y la expectativa de un cambio positivo en sus condiciones individuales, más que inspirada por los ideales políticos liberales.

Madero, con apoyo de Pascual Orozco y Francisco Villa, derrocó a Porfirio Díaz en 1911: “Tras ganar las elecciones ese mismo año, Madero dio pie al único experimento de democracia plena en el México del siglo XX: los quince meses de su gobierno.” (Krauze, E. 1998: 99) Al concluir el gobierno de Díaz se instaura el Estado y se concibe a la mayoría de los mexicanos como ciudadanos.

El posterior golpe de Estado organizado por el general Victoriano Huerta en contra de Madero y su asesinato en 1913, cerraron la alternativa democrática y dieron paso al conflicto social y al surgimiento de diversos caudillos, pues la revolución se extendió a varias zonas del país. Se inició como una revolución política que pretendía la democracia plena, pero después de la muerte de Madero, dicho ideal también desapareció.

La revolución permitió a los habitantes del país tomar conciencia de la gran heterogeneidad y dispersión geográfica que caracterizaban a la sociedad mexicana y comprender

que existían “muchos México”, situación que hacía sumamente complejas todas las acciones a emprender, lo cual se agravaba debido a la precariedad de las vías de comunicación. A partir de las circunstancias previamente señaladas, sostiene el citado autor que México vivió distintas revoluciones, una en el norte y otra en el sur.

A partir de la muerte de Madero, la revolución del sur encabezada por Emiliano Zapata como representante de los campesinos, enarboló dos demandas básicas: la devolución de la tierra y su repartición, ya que buscaba una vuelta al pasado, al consenso en que los seres humanos eran libres y solidarios y en que reinaban la justicia y la armonía, cuando la propiedad de la tierra era comunal. Después del asesinato de Madero, también los jefes militares del norte pretendieron continuar la modernización que había comenzado Porfirio Díaz; fue esta revolución la que triunfó, la del norte. Esta era una revolución liberal promovida por pequeños propietarios y clase media, que concebían al ejido fundamentalmente en términos económicos y marcaban la tendencia a imitar a los Estados Unidos de Norteamérica. (González, E. 2006: 225-227)

La democracia no había logrado reconciliar las diversas tendencias históricas del país y se desató una larga y sangrienta revolución. Venustiano Carranza, con la intención de restaurar el orden constitucional, organizó un movimiento militar de amplia base para oponerse a Huerta y en 1914, al renunciar este último y ser desterrado, los jefes militares se reunieron en Aguascalientes en una convención que tenía el objetivo de proponer un nuevo gobierno; para esa fecha se hizo evidente que entre Villa y Carranza había enfrentamientos, por lo cual los dirigentes tenían que tomar partido por alguno de los dos. Carranza no reconoció al gobierno propuesto por la convención, encabezado por Eulalio González y apoyado por Villa y Emiliano Zapata.

Por otra parte, Carranza proponía un gobierno civil, mientras que Álvaro Obregón proponía un gobierno militar. Carranza gobernó al país de 1917 a 1920, convocó a un Congreso

190

Constituyente que proclamó la Constitución de 1917 la cual remplazó a la de 1857 que no operaba. Aunque este nuevo ordenamiento estableció que México debía ser una sociedad regida por un sistema político democrático en el cual el voto y un sistema de partidos determinarían quiénes asumirían la dirección del gobierno y del estado, puso de manifiesto que la democracia política no era la principal meta de la Revolución.

La de 1917 fue la primera constitución en el mundo en consignar al lado de los derechos individuales, los derechos sociales (González, E. 2006: 231). Dicha carta legislativa otorgaba al estado poderes políticos, responsabilidades sociales y jurisdicciones económicas similares a las que anteriormente ostentaba la monarquía española. Asimismo, estableció las bases para una reforma agraria, reconoció los derechos del trabajo, enfatizó la propiedad nacional de los recursos naturales y la primacía de los intereses nacionales por encima de los extranjeros. (Krauze, E, 1998: 105, Meyer, L. 1988: 78)

En cuanto a los derechos de las mujeres en este ordenamiento, se les reconocieron derechos laborales y sindicales, más no políticos. La idea de la participación de las mujeres había sido ya planteada por ellas en Inglaterra, pero no fueron tomadas en consideración por la clase política, aunque había consciencia, no se extendió al resto de la sociedad. Aunque los dirigentes eran lúcidos y conocían tales reivindicaciones no quisieron aceptarlas, en su lugar retrocedieron a posturas anteriores.

El movimiento armado se dio de 1910 a 1920, periodo durante el cual se generaron diversas fuerzas militares y sociales que no lograron acuerdos que permitieran restaurar el orden. Cuando Carranza quiso nombrar un civil como sucesor, el ejército del noreste, comandado por Adolfo de la Huerta, se levantó contra él y lo depuso, asumiendo la presidencia Álvaro Obregón, de 1920 a 1924, quién según se afirma, era el poder que movía a de la Huerta. Para fines de 1920,

191

con el triunfo de una facción, habían quedado atrás los enfrentamientos y el proceso para determinar quiénes ocuparían los puestos de mando entre los líderes se fue haciendo en forma más pacífica e institucional, aunque no democrática.

2.6.1.6 La revolución institucionalizada. Los regímenes posteriores

Plutarco Elías Calles asumió la Presidencia de 1924 a 1928 y fue nombrado “jefe máximo” de 1928 a 1934. Cuestionaba “la condición inerte de las masas rurales... y la pasividad ciudadana casi atávica de las clases medias y submedias” (Calles, P. en González, E. 2006:119) Planteaba la necesidad de crear leyes e instituciones, de lograr la representación de todos los intereses legítimos y de todos los estratos sociales en el Congreso.

El mismo Calles propuso también la importancia de constituir las instituciones democráticas. Planteó la necesidad de crear organizaciones políticas y dejar atrás a los caudillos. A pesar de lo anterior, se convirtió en uno de los caudillos más importantes del país.

En el año 1929, Calles y los vencedores del conflicto armado crearon el Partido Nacional Revolucionario (PNR), reuniendo a los partidos políticos locales existentes, ligas de resistencia, sindicatos, facciones y clubes de ciudadanos en una totalidad nacional. Este partido logró establecer un ambiente de paz para la resolución de los conflictos entre grupos dispares, lo que permitió la creación del Banco Central y la construcción de carreteras, escuelas, hospitales, así como las instituciones que darían paso a la nación.

El PNR, tuvo gran importancia porque volvió el poder del presidente un poder institucional (González, E. 2006: 229) y le permitió *al monarca-presidente* (Krauze, E.1998:106), tener control absoluto del poder en la vida de la nación. “En México...la concentración del poder

en una sola persona...ha representado la norma histórica a lo largo de los siglos.” (Krauze, E. 1998: 107)

Si bien, como afirma Lorenzo Meyer, (1988:78) el PNR impuso orden en los procesos internos del grupo en el poder, fue sumamente perjudicial para la democracia política, ya que el sufragio no fue la vía para la elección de quienes ocuparían los cargos populares ni al interior del partido, lo cual se decidía de antemano a partir de acuerdos entre candidatos y fuerzas políticas. El PNR se convirtió en la palanca de mando de Plutarco Elías Calles. De la década de los veinte a la de los cuarenta, el país experimentó diversas transformaciones políticas, sociales, económicas y culturales impulsadas por los militares desde el estado.

A partir de 1934 y hasta 1940, Lázaro Cárdenas ocupó la presidencia, desarrollo y perfeccionó el régimen de la revolución mexicana, asimismo, transformó el PNR en Partido de la Revolución Mexicana (PRM), el cual estaba conformado por los sectores campesino, obrero, popular y militar, encuadró a las fuerzas populares más representativas. El nuevo presidente intentó unir al norte y al sur del país y las garantías individuales con las sociales; con tales fuerzas organizadas, llevó a cabo la reforma agraria y la expropiación petrolera y logró mantener la paz y la soberanía nacional. Su política internacional se fundamentó en la autodeterminación y la no intervención y recibió a diversos exiliados políticos.

En 1939 surgió el Partido Acción Nacional, como reacción a la expropiación petrolera efectuada por el presidente Lázaro Cárdenas y con la intención de continuar la batalla política hacia la democracia por la vía pacífica. En sus orígenes el PAN estaba conformado por militantes católicos comprometidos y demócratas. Paulatinamente fue incrementando su éxito en forma paralela a su participación y su representación.

Para 1940, el Estado mexicano había alcanzado una solidez en su conformación, fundamentada en la figura omnipotente del presidente elegido cada seis años sin posibilidad de reelección pero, como hemos señalado, con atribuciones para designar a su sucesor dentro del partido oficial. A mediados de los años cuarenta, el PRM, se transformó en Partido Revolucionario Institucional (PRI). Este partido apoyó la industrialización del país que promovía el presidente Alemán, durante el período civilista.

En la década de los cuarenta, en los regímenes de Manuel Ávila Camacho y de Miguel Alemán, ya se hacía mención de una crisis de la Revolución mexicana que “degeneró en gobierno”, haciendo alusión al abandono de los ideales y metas de democracia y justicia social, sin haberlos logrado. Dicha crisis fue producto, en opinión de Meyer y González Pedrero, de la urgencia de incorporar de manera forzada al país al progreso industrializador. Para lograr dicha incorporación el partido de Estado permitió el control necesario que impidió la participación política democrática y plural.

A partir de 1940 el país se vio inmerso en lo que se ha denominado la ideología del desarrollo estabilizador, se planteaba la tesis de que era necesario crecer económicamente y que la redistribución de la riqueza se daría posteriormente y como consecuencia, pues se terminaría con la inflación que había prevalecido en la década de los cuarenta y se lograría la estabilidad de los precios y los salarios, así como el incremento en los niveles de producción y consumo. Así, el país dio inicio al fenómeno que posteriormente se denominó como el “milagro mexicano”, que se extendió durante quince años.

No obstante, los economistas plantean que en dicho período se dio un crecimiento sin desarrollo, un crecimiento hacia afuera, ya que a pesar de que aumentó el número de industrias, de la consolidación del mercado interno y del logro de México al insertarse en la economía

mundial, la industria no pudo generar la cantidad de empleos que se demandaban. La fuerte presión sobre el empleo se debió fundamentalmente al agotamiento de las condiciones para la Reforma Agraria, lo que propició que los campesinos se desplazaran del ámbito rural.

Entre los principales factores internos que dieron origen a la crisis del régimen de la revolución, hay que mencionar en primer término a la corrupción. En este aspecto coinciden Jesús Silva Herzog y Daniel Cosío Villegas, entre otros. El triunfo de la Revolución Mexicana permitió el acceso al poder a nuevas generaciones antes marginadas, sin embargo, a decir de Daniel Cosío Villegas, los nuevos gobernantes se olvidaron de la búsqueda del bienestar de las mayorías, para transformar su situación, ya que antepusieron sus intereses y deseos de lucro personal, lo que impidió en consecuencia también, que se fortalecieran los lazos de la colectividad. (Cosío, D. 1947: 31)

En el mismo sentido, Cosío Villegas consideraba que el mal desempeño del gobierno instituido por la Revolución se debía a: "...una corrupción administrativa general, ostentosa y agravante, cobijada siempre bajo un manto de impunidad... ha dado al traste con todo el programa de la Revolución." (Cosío, D. 1947: 34) Por lo anterior proponía reafirmar los principios de la Revolución y depurar a los hombres para que se lograra la auto regeneración del país.

Respecto a la relación con el país vecino y a la necesidad de eliminar la corrupción, Silva Herzog afirmaba: "No siempre el país fuerte trata de igual manera a un país débil, anárquico y manejado por gobernantes ineptos y sin escrúpulos, que a un país débil pero en orden y bajo la autoridad de hombres responsables...Pongamos nuestra casa en orden. Seamos inteligentes...para manejar nuestros asuntos públicos y, seamos, sobre todo, honestos ciento por ciento. Esta es la única ruta para poner a salvo la soberanía de México." (Silva Herzog, J. 1953: 195)

58) En el mismo sentido, Cosío Villegas afirmaba que el gobierno debía velar por los intereses y gustos de nuestro país, que estaban por encima de los extraños.

Entre otros graves problemas que se señalan como causas de la citada crisis, se hace hincapié en la precariedad de la educación (Silva Herzog) y su fragilidad e inconsistencia, lo que había debilitado el carácter revolucionario de la nación (Cosío Villegas). Asimismo, la *confusión ideológica*, los graves problemas del campo, la debilidad del movimiento obrero debido a su vínculo estrecho con el gobierno y la debilidad y pobreza del país al lado de la fortaleza y riqueza de los Estados Unidos de Norteamérica, la nación más rica del mundo.

Para 1958, el 63% de los ingresos estaban concentrados en el 20% de la población y aunque el Estado proporcionó la infraestructura necesaria para la industrialización, no logró mantener la acelerada acumulación del capital y al mismo tiempo legitimar el proyecto con una política social basada en hechos y no en mera retórica. Se dio en ese año un enfrentamiento entre el gobierno y los ferrocarrileros, que marcó un retroceso en la liberalización de las prácticas políticas de los sindicatos y frenó durante un tiempo toda posibilidad de cambio. En tal contexto, la prosperidad no era para todos, por lo cual la libre empresa no era compatible con la democracia, debido a lo anterior y al autoritarismo, la relación entre sociedad y Estado hizo crisis. (Cordera, R. vid en González, E. 2006: 238)

Diversos analistas políticos han señalado el hecho de que como partido oficial y prácticamente único, desde su creación en 1929 hasta 2000, el PRI impidió a sus oponentes ocupar cualquier posición, no tan sólo la presidencia, ni siquiera una posición en el Senado. El control social, político y electoral que el partido ejerció fue posible debido a que contó con el apoyo de las masas y al hecho de que manipuló, incluso mediante el fraude, los procesos electorales.

Se presentaron algunos casos de miembros del partido que al no contar con el apoyo presidencial para su beneficio personal mediante el presupuesto, decidieron formar y liderar partidos de oposición sin éxito, de manera que a partir de las elecciones de 1958 la Presidencia impuso plenamente su voluntad y ningún miembro del partido oficial buscó nuevamente el apoyo de las bases en contra de la decisión presidencial. Al convertirse el PRI en un aparato electoral al servicio del gobierno federal fue perdiendo las características esenciales de un partido político, como la capacidad de participar en la toma de decisiones y ser la vía para ocupar altos cargos políticos y administrativos.

2.6.1.7. La transición hacia la democratización

De acuerdo con José Woldenberg (2002), la transición hacia la democracia es un proceso y por tanto incluye diversos acontecimientos, proyectos, actores, etc. Después de la revolución, la sociedad mexicana fue transformándose en forma gradual: el crecimiento demográfico, la industrialización, la urbanización y el aumento en la escolaridad, entre otros, fueron creando las condiciones para la transformación en las prácticas políticas. México estaba escindido pues tan sólo una parte de la población progresaba.

Para 1968 ya se anunciaba la crisis del antiguo régimen político de la revolución mexicana y el inicio de la transición política, cuando un importante sector urbano de clase media exigió, mediante manifestaciones, mayor democracia y pluralidad en el sistema político, así como abandono de las prácticas autoritarias. El de los jóvenes estudiantes fue uno de los primeros sectores en los que la crisis del autoritarismo y la ausencia de democracia se hicieron manifiestas.

Los estudiantes iniciaron en 1968 la lucha por la justicia y por la democracia, que posteriormente convocaría a otros sectores de la población. El gobierno no adaptó las estructuras

políticas a las nuevas circunstancias sociales y económicas y reprimió brutalmente dicha lucha, lo que determinó que las relaciones entre sociedad y Estado se deterioraran aún más. En consecuencia, el régimen experimentó una importante pérdida de legitimidad.

Con la intención de recuperar la legitimidad perdida debido a la represión, a partir de los años setenta, se realizaron una serie de reformas políticas. Se señaló la necesidad de crecer para luego repartir y de incorporar al desarrollo a los que antes habían estado marginados. Se planteó el lema de “compartir el desarrollo” y la tesis del sexenio que inició en 1970 fue: la del “progreso con justicia social.” (González, E. 2006: 239)

No obstante, dicha justicia social no pretendió ser realizada mediante la democratización del sistema, sino mediante el aumento de la inversión pública que trajo como consecuencia improvisación, burocracia e ineficiencia. El Estado empleaba el discurso populista mediante el cual trataba de tranquilizar las demandas democráticas iniciadas desde 1958, pero no pretendía llevarlas a efecto; empleó una serie de prácticas demagógicas, concertaciones con sindicatos y tuvo algunos logros en materia de justicia distributiva. Con el propósito dar credibilidad a la reforma política que inició para recuperar su legitimidad, permitió la participación de algunos partidos políticos de oposición.

La alianza que el sistema había mantenido con el sector empresarial y con los sectores populares se quebró en el sexenio 1970-1976, debido a que los empresarios demandaban mayor autonomía en sus decisiones y los sectores populares ya no estaban satisfechos con lo que se les ofrecía. Los Estados modernos no son hegemónicos, están llenos de fracturas y tienen fuertes oposiciones internas. La propuesta de crecimiento que el Estado había planteado, en los hechos sólo se tradujo en mayor autoritarismo del sistema, magno poder presidencial, así como inflación.

Aunque hubo episodios en la historia de México, tendientes a la democratización, a las reformas electorales y al debilitamiento del autoritarismo, incluso en épocas recientes como los referidos acontecimientos de 1968, José Woldenberg sitúa el proceso democratizador en 1977, ya que afirma que a partir de este año y durante dos décadas se ponen en marcha y se encauzan en una misma dirección democratizadora, energías políticas, se fortalecen partidos políticos y se realizan reformas electorales que conforman la estructura del cambio e instauran una mecánica en tal dirección. (Woldenberg, J. 2002: 21-23)

Afirma este mismo analista que la plataforma originaria de la transición se construyó sobre las siguientes bases: reconocimiento de los partidos políticos como entidades de interés público y se da paso a su constitucionalización, es decir que se les reconoce su personalidad jurídica y su importancia en la conformación de los órganos del Estado; las fuerzas políticas de izquierda, hasta entonces marginadas, obtuvieron su registro condicionado y con ello acceso a la competencia electoral; se amplió el Congreso y se introdujeron diputados plurinominales con lo que la Cámara de Diputados adquirió mayor pluralismo; el Estado asumió la obligación de otorgar recursos para sostener a todos los partidos; se multiplicó la participación electoral de alternativas diversas, legalizadas y legitimadas por la Constitución.

Según González Pedrero y sus seguidores, de 1976 a 1982 se propuso incorporar al “progreso y desarrollo compartido” a los sectores marginados, mediante la explotación petrolera que según se consideraba, proporcionaría abundancia. Se buscó nuevamente el apoyo empresarial, a quienes se les otorgarían subsidios y financiamientos. Para lograr nuevamente el apoyo de los sectores populares, se llevó a cabo una Reforma Política que no pusiera en peligro al sistema, pero que diera la impresión de autenticidad.

A través de la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR), creada en 1977, el gobierno quiso sentar las bases para asegurar “mínimos de bienestar”. A través de insumos materiales y organización suficientes, se pretendió garantizar que los sectores rurales participaran en forma más equitativa de la riqueza. Sin embargo, la burocracia y los métodos verticalistas mediante los cuales se instrumentó, absorbieron una gran parte de dichos recursos.

El sistema basó su acelerado crecimiento económico en el endeudamiento, hasta que se desplomó el precio del petróleo y la imagen de la abundancia desapareció. La construcción de mejores condiciones de vida para la mayoría de los mexicanos, no podía ser resultado de las decisiones y acciones de un solo hombre. “Pero todavía habrían de pasar varios años para que esta certidumbre empezara a difundirse y a hacerse evidente que sólo a una democracia efectiva podrían reclamarle los mexicanos el mejoramiento en sus niveles de vida.” (González, E. 2006: 240-241)

En 1982, el sexenio que iniciaba se enfrentó a graves problemáticas que afectaban principalmente a la estructura del modelo económico que había adoptado desde los años cuarenta y se vio sometido a una seria crisis que se extendió muchos años. El poco dinamismo de la economía y la nacionalización de la banca privada generaron una ruptura entre el gobierno y el sector público y revivieron la desconfianza de los estratos medios hacia el sistema político. La relación de los sectores populares con el gobierno se deterioró aun más debido a la política de austeridad que éste tuvo que imponer, que se tradujo en la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y el déficit del número de empleos que el crecimiento demográfico demandaba. (González, E. 2006: 241)

El Estado no quería renunciar a su rectoría sobre la economía, pero por estar ocupado en lograr avances macroeconómicos bajo el control de los organismos internacionales, no logró atender al bienestar social. Además, la calidad de vida para una gran cantidad de grupos sociales había empeorado considerablemente, de la misma manera que la inseguridad pública.

En la primera mitad de los años ochenta, debido a la gran crisis económica, el aparato estatal dejó de expandirse y se inició una política de contracción. “México –junto con otros países de América Latina- entró entonces en un periodo de reajuste y redefinición de la relación entre el gobierno y el Estado por un lado y la sociedad civil y el mundo externo, por el otro. A la incapacidad del gobierno por dar respuesta tradicional a las demandas de los diferentes actores políticos importantes, le deberá seguir, necesariamente, una redefinición de todo el pacto político en el que se sostenía la dinámica del México posrevolucionario, una dinámica propia de un sistema de partido dominante y autoritarismo benigno.” (Meyer, L. 1988: 82)

Si no se lograra una redefinición positiva, el riesgo que se corría era el de la degeneración de la estructura política hasta un punto en donde no hubiera ya salida de la crisis. Los analistas señalaban que el proyecto nacional había fracasado y el tejido social se había desintegrado. Bajo esas circunstancias, el país requería insertarse en una economía mundial que se dirigía hacia la globalización.

En 1982, ante tales circunstancias, la demanda democratizadora fue ganando adeptos entre la clase media, los empresarios, partidos políticos, intelectuales, universitarios y movimientos sociales. El problema consistía en que, para México, la democracia formal no tenía significado concreto al no tener tradición. No obstante, el terremoto de 1985 propició que surgieran diversas manifestaciones de solidaridad que fueron los catalizadores de una sociedad civil participativa.

Algunos investigadores consideran que aunque el terremoto impulsó la salida a escena de las organizaciones no gubernamentales, debido a que los organismos internacionales canalizaron su apoyo a través de ellas y no del gobierno y ante la incapacidad de éste por responder a los problemas que se generaron con dicho desastre natural, fue hasta el año de 1992, cuando comenzaron a atender programas sociales, debido a que el aparato estatal se retiró de la atención al bienestar social. Hoy en día se les considera protagonistas de la gobernanza, nueva forma de gobierno, ya que se les convoca a formar parte de consejos consultivos en las dependencias de gobierno, para el diseño de políticas públicas, así como programas y la conducción de estos últimos.

“Si bien las Organizaciones no Gubernamentales, preexistían con participación pública en acciones asistenciales y de desarrollo social, con presencia creciente desde principios de siglo, un desarrollo exponencial a partir de los años setentas y visibles a la luz pública a partir del terremoto de 1985, prácticamente habían sido ignoradas por el Gobierno. La inexistencia de relaciones entre el gobierno y la Sociedad Civil encuentra su justificación en la política de Estado surgida de la Revolución Mexicana, que al adoptar un modelo corporativista, prefirió crear sus propios interlocutores sociales, una política paternalista y un fuerte intervencionismo estatal en la vida pública. Por otra parte la ruptura de relaciones con la iglesia como resultado de la guerra cristera, mantuvo un clima de tensión entre el gobierno y las organizaciones con vínculos con la iglesia entre las que se inscribieron mayoritariamente las OSC.”
(Valencia, E., en Collin, L. y Molina, R. 2009: 8)

Para 1985, también el PAN había logrado una amplia representación, debido a la participación de los empresarios como candidatos. Asimismo, este partido se vio fortalecido por las llamadas *concertaciones* que estableció con el PRI.

La desigualdad económica y social se profundizó y los problemas que ocasionó la crisis económica fortalecieron a los partidos de oposición, tanto a los de derecha como los de izquierda, tendencia que se puso de manifiesto en las elecciones de 1988, cuyo resultado favorable al PRI fue cuestionado. Ante tal proceso electoral, el país reclamaba democracia y su derecho a participar, daba inicio la transición en pro de tales objetivos y de la modernización del pacto social y político. En tal contexto, la sociedad exigía ajustar los métodos políticos a sus necesidades y expectativas concretas.

En opinión de Lorenzo Meyer, en 1988, los sectores sociales activos políticamente buscaban mediante el ejercicio efectivo de la democracia política, la fórmula para que México iniciara su ingreso a una nueva etapa histórica con la estabilidad que había disfrutado en el pasado. Sin embargo, afirma que la democracia formal no era una práctica sino tan sólo una propuesta que no se logró concretar. Al respecto, José Carreño Carlón (1988: 318) considera que la oposición se auto engañaba con su propio discurso acerca de que el PRI había sido desplazado, que había llegado el momento de tomar el poder por la vía electoral y dejó de lado la cuestión real que debía ocupar el centro del debate: la revisión de la institución presidencial.

El mismo Carreño señala la falta de correspondencia entre las demandas sociales por la democracia y la situación real de los partidos políticos, principalmente ante el cuestionado triunfo del candidato del PRI, Carlos Salinas de Gortari. Así, la lógica política fue abandonada y en su lugar, el nuevo gobierno priista, con la antigua imagen del presidente omnipotente, se fundamentó en una racionalidad económica que ofrecía un acceso rápido al “primer mundo”, así

203

como la integración a la economía de los Estados Unidos, a través del Tratado de Libre Comercio (Meyer, L. 1988)

Los analistas políticos consideraban que en 1988 había iniciado la transición democrática y que habría de forjarse un nuevo pacto, basado en la creación de nuevas estructuras. La reforma política que era necesaria para la democratización, se aplazó, pues no se habían creado las nuevas instituciones que se necesitaban, impulsadas por las aspiraciones sociales. Reyes Heróles propone que hay un liberalismo económico-social y otro político-jurídico.

En el liberalismo económico-social están inmersos como temas fundamentales, la propiedad, el libre cambio y la protección; en el político-jurídico, se encuentran las libertades, la vinculación del liberalismo con la democracia, la secularización de la sociedad y la identidad liberalismo-federalismo. (Aguirre, J. 2009: 3)

Para 1990 se había vuelto evidente que el esquema de dependencia exclusiva respecto de la inversión externa -que era especulativa-, era muy frágil. Las medidas económicas eran impuestas por el círculo íntimo del presidente sin tomar en consideración a la sociedad cuyo destino era el que estaba en juego. El reclamo democrático que el pueblo había hecho evidente en las elecciones de 1988, no había sido escuchado. El gobierno intentó mediante el programa de Solidaridad, compensar los efectos negativos de la crisis económica en la vida de los habitantes del país.

Aunque el sistema había comenzado a fragmentarse en los años ochenta, el autoritarismo del sistema encarnado en el presidente, impidió que se conformara una nueva cultura política. No se logró el paso a la democracia debido al control del proceso electoral que el Estado mantuvo.

Para el país resulta fundamental lograr el tránsito pacífico del autoritarismo a la democracia, así como darle a dicha demanda un contenido concreto.

Desde varias décadas atrás, el denominado régimen de la revolución abandonó el proyecto nacionalista, revolucionario, democrático y progresista contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las desviaciones respecto del proyecto revolucionario, corrupción y descuidos han culminado en una crisis. Ante el reconocimiento de que el sistema de gobierno se había desviado de sus postulados, que no tenía congruencia entre sus palabras y sus acciones, surgió al interior del propio Partido Revolucionario Institucional la Corriente Democrática, con la intención de revisar aspectos fundamentales.

César Buenrostro, dirigente nacional de dicha corriente, considera que a pesar de los innumerables actos de desviación y corrupción por parte del PRI, a lo largo de su historia y sus transformaciones, hubo avances en el desarrollo del país, mediante la ampliación de infraestructura en términos generales, carreteras, industrias, energía eléctrica, construcción de escuelas, creación de fuentes de trabajo, entre otras. Sin embargo el mismo Buenrostro plantea que en la administración de Salinas de Gortari (1988) se presentaron tres graves circunstancias que determinaron el abandono de los compromisos establecidos por el régimen de la revolución. En primer lugar, abandonó el compromiso de velar por la soberanía nacional, tanto en lo político como en lo económico y por la capacidad de autodeterminación como Estado libre, ya que importantes decisiones son tomadas desde otros países y agencias internacionales.

Un segundo aspecto de traición a los ideales revolucionarios, que señala Buenrostro, es el abandono de la actividad productiva del país que generó un retroceso en el Producto Interno Bruto y con ello el deterioro del poder adquisitivo y del nivel de vida de la población. Entre los principales problemas que se agudizaron en la administración, resaltan el incremento a la deuda

205

externa, la imposición de obligaciones por el Fondo Monetario Internacional que descapitalizaron al país en sus recursos naturales, el aumento en el desempleo y el subempleo, entre otros. En estos aspectos, considera el político citado, se hace evidente el abandono del proyecto de la Revolución Mexicana cuyos puntos básicos están contenidos en la Constitución, primordialmente en la definición que se hace de la democracia en el artículo 3° que además de un sistema de gobierno, la concibe como un sistema de constante búsqueda del bienestar de la población.

Las intervenciones en la economía nacional y en la política económica impuestas por los organismos internacionales extranjeros, atentan contra el principio de libre determinación y contra la soberanía nacional, que fueron ideales revolucionarios que el presidente Lázaro Cárdenas defendió. En general, el ideario Cardenista fue abandonado, ya que hubo diversas transgresiones y retrocesos en materia de justicia, paz y democracia. Asimismo, el Estado dejó de atender el desarrollo social y hubo un desmantelamiento de las diversas asociaciones y corporaciones, entre otros graves problemas.

El tercer aspecto que señala Buenrostro es el que la democracia en las organizaciones del partido, especialmente en los procesos de elección de representantes, se caracterizó por el fraude. (Buenrostro, C. 1989: 174-176)

Según Carlos, Monsiváis, para el año 1989, grandes sectores de población y la oposición lograron cierto freno a la impunidad absoluta del caciquismo sindical, mediante algunas acciones de presión tales como la detención del líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Joaquín Hernández Galicia, apodado “La Quina”, y su grupo. De igual forma, el principio del fin de los especuladores que se ejemplifica con el arresto de Eduardo Legorreta y sus socios, a resultas de presiones de la opinión pública; el reconocimiento de facto de la existencia de la disidencia sindical; la forzosa aceptación del diálogo entre autoridades y

206

sociedad que terminó con la prepotencia absoluta de las autoridades y el reconocimiento de que el régimen de la revolución se había alejado de sus principios.

En el sexenio de Salinas de Gortari se hicieron cambios constitucionales que modificaban los artículos que regulaban la propiedad de las tierras y aguas de la nación, así como las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Aunque dichos cambios eran esenciales, fueron llevados a cabo como si se tratara de meras reformas administrativas.

Al no llevarse a cabo la esperada reforma política en el sexenio de 1988-1994, se ocasionó un deterioro institucional y se obstaculizó el tránsito hacia la democracia. Los “acomodos” que hacen los partidos con motivos electorales pueden ser causa de su consolidación o de su deterioro; la incertidumbre, la desconfianza y el creciente clima de inseguridad amenazan al país con la ingobernabilidad. Si la incertidumbre política prevalece, se agravarán la incertidumbre económica y financiera que nos han golpeado e impedirán la recuperación y nos hará más vulnerables a todo tipo de presiones.

El primer día del año 1994 entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLACAN) suscrito entre Canadá, Estados Unidos y México. Ese mismo día, al amanecer, un grupo de indígenas denominado como Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), comandado por un universitario al que se designó como “Sub Comandante Marcos”, se levantó en armas en Chiapas, exigiendo la renuncia del presidente Carlos Salinas de Gortari, en protesta contra la recurrente marginación y pobreza en que históricamente vivían, así como en contra de las políticas neoliberales que las agravaban. Después de unos días de tensiones entre la guerra y los acuerdos, se logró una tregua, fundamentada en cambios en el gabinete presidencial que condujeron a la firma de un Pacto de Civilidad entre todos los partidos políticos y a la tercera reforma electoral de dicho sexenio.

A partir de dicho levantamiento armado se sucedieron una serie de acontecimientos diversos de gran importancia política, como las pugnas entre el negociador de Chiapas con el candidato Colosio y el posterior asesinato de este último; la propuesta de un nuevo candidato, las sucesivas negociaciones, interrupciones y aplazamientos del diálogo hasta las elecciones de 1994.

Cuando se acercaban las elecciones de 1994, se afirmaba que el sistema político estaba agotado y que era necesario acceder a uno nuevo a través de la contienda electoral entre partidos. Al mismo tiempo, se enfrentaba el temor de que un fuerte cambio respecto del sistema autoritario pudiera generar inestabilidad. Así, ante las elecciones, se debatía entre las inercias del pasado y las expectativas de cambio.

Se esperaba que por la vía electoral se alcanzara paz y estabilidad en el país y que el candidato vencedor lograra negociar con los contendientes más representativos para establecer un gobierno de transición nacional que en forma gradual fuera construyendo las instituciones necesarias para la vida democrática. Tal vida democrática permitiría al país enfrentar con estabilidad los problemas económicos, políticos y sociales.

Las elecciones de 1994 disputaban tanto la legalidad, que implica conformidad con la ley, como la legitimidad que supone el apego a la voluntad de la nación. Los comicios significaban para los mexicanos la esperada transición hacia la democracia, que tenía que enfrentar la profunda desconfianza existente entre ciudadanos, candidatos y autoridades, lo que se puso de manifiesto en el cuestionamiento, que un amplio sector de la población nacional hiciera, de la legitimidad del candidato del PRI que se adjudicó el triunfo, Ernesto Zedillo Ponce de León. La reforma electoral no fue suficiente para garantizar elecciones democráticas; al mismo tiempo de la vigilancia que los partidos pudieron llevar a cabo en las casillas, no se cubrió ni siquiera el 50% de las mismas.

El riesgo para la democracia es que la desconfianza genera ingobernabilidad, incredulidad, desorden e inseguridad, las que fracturan las leyes y las instituciones. “*Ya casi nadie cree en casi nada*. Los ciudadanos, desconfiados, son islas átomos, separados: se han aflojado los vínculos del pacto que legitimaba a la sociedad. El gobierno requiere de la confianza ciudadana: mandar sin confianza pública, es como girar cheques sin fondos.” (González, E. 2006: 71)

Las elecciones democráticas son caminos al desarrollo y a la resolución de los problemas de la nación, cuando las demandas no encuentran respuesta se genera la ingobernabilidad. En el México de 1994, la desconfianza en que las elecciones pudieran encauzar las demandas, ponía en peligro la gobernabilidad. Aún más, González Pedrero opina que la falta de confianza en el voto y en las elecciones para resolver los problemas del país, aunados al levantamiento armado del EZLN, a los crecientes problemas de desempleo, inseguridad y malestar social generalizado, potenciaron una crisis explosiva que trasciende la ingobernabilidad.

González Pedrero considera que a partir de 1994 la sociedad mexicana entró en una efervescencia tal que no le bastaban los cauces establecidos por los partidos políticos existentes, lo que dio lugar a múltiples acciones y organizaciones ciudadanas, de observación, vigilancia, capacitación y participación activa hacia el tránsito democrático. “La sociedad civil está despierta y parece imprudente reprochárselo. Quiere participar y es bueno que lo haga para orientar y facilitar ese tránsito y evitar que la contienda se polarice y se transforme en violencia; para evitar que la política degenera en *polemós*, en guerra.” (González E. 2006: 74)

Se pensaba que esta participación ciudadana permitiría establecer el diálogo, concertar pequeñas acciones que unidas logren transformaciones, que la mera vía electoral no logrará. Ante las elecciones de 1994 se manifestó también la necesidad de trabajar por la inteligencia política,

209

de manera que los candidatos dejaran a un lado la tentación de vencer a sus oponentes a como dé lugar, aún empleando trampas, hacer a un lado el autoritarismo y convertirse en verdaderos demócratas. La tolerancia es una virtud necesaria para hacer efectivo el compromiso de lealtad ante todos los contendientes y permitirá un gobierno plural que aleje la posibilidad del conflicto armado a favor de la democracia y la legitimidad.

La democracia representativa es nueva en México, ya que recién en las elecciones de 1997 se plantea una participación efectiva de más de un solo partido político.

En el año 2000, ante las nuevas elecciones presidenciales, el PRI manejó la imagen de una democratización interna presentando al candidato elegido por el presidente junto con otros precandidatos, a la consulta pública y a la ratificación popular. Sin embargo, estas medidas no fueron suficientes para transformar la memoria de la población ni la realidad política y social, después de 70 años de historia en que los intereses partidistas se antepusieron a los del pueblo, impidiendo la democracia. Prevalecían problemas graves a los que el partido en el poder había llevado al país, tales como la inseguridad, el narcotráfico y la corrupción, el desempleo, el gran endeudamiento interno y externo, así como la insuficiencia educativa, entre otros.

Ante las graves problemáticas, el sistema se agotó y el gobierno se volvió ineficiente. Durante las elecciones del año 2000, los ciudadanos se afirmaron como tales al ejercer su derecho al voto. La sociedad hizo patente su descontento al unirse en una votación que favoreció al candidato de la oposición panista: Vicente Fox. Sin embargo, la magnitud de los problemas y el gran rezago social, representaron un gran peso para el nuevo gobierno.

Ese acto de votar colocó a la sociedad mexicana en una modernidad cultural y política, un acto individual cuyo sentido cobró fuerza al volverse colectivo, a través del cual millones de mexicanos se unieron en pro del cambio político y la convivencia.

Después de las elecciones del año 2006, el sistema electoral ha enfrentado un gran retroceso, ya que se han puesto en duda los logros alcanzados, la legitimidad del Instituto Electoral y la del Presidente que resultó electo en ellas. Esta condición es aún más grave después de las elecciones presidenciales del 2012 ante las nuevas demandas por aclarar los resultados del proceso electoral.

Haciendo un balance histórico acerca del crecimiento económico de México en los últimos veinte años, puede decirse que el promedio del crecimiento en el periodo 1989 a 2000 fue del 3.7% y 2001 a 2012 fue de 1.9%; el per cápita fue de 1.8% y 0.5% respectivamente. El crecimiento en México es lento y poco en comparación al crecimiento internacional, en el periodo 2000-2012, el crecimiento acumulado fue de 7% mientras que en los países desarrollados fue de 14%, en América Latina del 28% y en los países del denominado mundo emergente, del 60%.

Este crecimiento lento lo explican los analistas a la luz de razones estructurales y coyunturales. Entre las principales razones coyunturales se hace mención de la relación de nuestro país con los Estados Unidos, que es la economía más importante para nosotros, ya que es nuestro principal socio comercial. En la década de los noventa Estados Unidos tuvo uno de sus mejores momentos ya que creció un 3.4% anualmente con estabilidad, baja inflación, finanzas públicas fortalecidas, un incremento en su productividad que alcanzó el 40% y muy importantes cifras en la generación de empleos.

La situación económica de los Estados Unidos, ha cambiado, al inicio del siglo XXI, los ataques terroristas, las crisis que experimentaron los sectores de la alta tecnología e inmobiliario que se tradujeron en la recesión de 2001 y la de 2008 y la peor crisis financiera desde la Gran Depresión que ha generado un índice de desempleo muy alto.

Pese a que la década de los noventa fue económicamente muy buena para nuestro socio comercial, en México no benefició en la misma proporción a nuestro país que atravesó en 1994 por la crisis denominada “efecto Tequila”, generada en nuestro país debido a una gran devaluación, un gran endeudamiento del sector público, gran dependencia por parte del sector gubernamental, con respecto al dólar. Dicha crisis llevó a México al peor declive económico desde la Gran Depresión, ya que el PIB descendió un 6.2%.

A partir de los gobiernos divididos y la alternancia democrática, el crecimiento ha sido lento y desigual, también. Se plantean como factores que han obstaculizado dicho crecimiento los cambios importantes en la economía mundial, como cambios sectoriales y regionales, así como revolución tecnológica. México no está presente, por falta de relaciones comerciales, entre los países que están marcando el desarrollo económico y la alta tecnología. Se afirma que México está anclado en los modelos de productividad del pasado, incapaz de reaccionar a los cambios de la economía global, imposibilitado técnicamente, carente de capital humano y financieramente para generar alta tecnología (Gómez A., 2012: 2).

Asimismo, se plantea la necesidad de ampliar la competencia y la inversión en el sector de las telecomunicaciones para poder disminuir los precios al consumidor, que actualmente representan el 1.8% del PIB. Algunos estudios señalan la necesidad de inversión extranjera en distintos sectores de la productividad, así como de reformas estructurales que han sido imposibles

debido a los gobiernos divididos que han acompañado a la alternancia política (Gómez A., 2012: 2). Existen diversos factores que se plantean como frenos al desarrollo nacional, que están relacionados con una agenda de política económica, principalmente.

Análisis crítico de la democracia en México

2.7.1 Breve consideración crítica sobre los antecedentes históricos

Después de llevar a cabo una breve mención de los principales acontecimientos históricos relevantes para comprender el proceso que ha seguido México hacia su democratización, es necesario reflexionar críticamente acerca de las diversas circunstancias que los han caracterizado a fin de comprender y valorar las condiciones actuales de la vida democrática en el país.

Enrique Krauze, considera que fue la política la que consolidó a la nación mediante el desempeño político de diversos actores sociales. En tal sentido, la primera Constitución y el *primer sueño* republicano los propició Morelos, mientras que Iturbide consumó la Independencia y Juárez y Díaz construyeron el Estado-nación Mexicano.

Con respecto a la independencia, uno de los primeros acontecimientos de importancia en la conformación de nuestro país, afirma Enrique Krauze, que si Hidalgo en lugar de convocar a la violencia hubiera llamado a un pacto entre criollos, hubiera logrado la consolidación de la democracia, en lugar de generar la intolerancia, la violencia y la irracionalidad. En el análisis que realiza Krauze acerca de los factores que han impedido consolidar la democracia en México, destaca en primer lugar la violencia y cita diversos ejemplos, como el caso de Hidalgo y Madero.

Todos los politólogos que analizan el proceso de formación del Estado y la democratización en México, coinciden en que la Revolución mexicana ha sido uno de los periodos históricos más importantes en el camino que nuestro país ha transitado en tal dirección.

El régimen de Porfirio Díaz había logrado pacificar al país, pero a costa de la libertad y se tornó dictadura; se garantizó la riqueza y la educación de unos pocos a costa de la pobreza e ignorancia de una mayoría y se volvió injusticia. Madero pretendía renovar el gobierno de acuerdo con las leyes y fundó para tal fin, el Partido Nacional Antirreeleccionista que postulaba “el sufragio efectivo y la no reelección”.

Por su interés en la democratización de nuestro país, Madero es considerado el “apóstol de la democracia”. No obstante, su breve estancia en el poder le impidió alcanzar los ideales que perseguía.

En sus orígenes, el llamado a la democracia, al sufragio efectivo y la no reelección fue el punto de convergencia de hombres, ideales e intereses plurales en una lucha común. Sin embargo, Lorenzo Meyer afirma, que después de la muerte de Madero los revolucionarios mexicanos, invocaban la democracia tan sólo como discurso para legitimar la lucha que enarbolaban por demandas más concretas y cercanas a las exigencias populares, pues dicho concepto había alcanzado ya legitimidad en otros países y sostiene que aunque la democracia política fue la bandera de la Revolución mexicana, no logró arraigo en el nuevo régimen que ésta instauró. En el mismo sentido, Enrique Krauze plantea que aunque el nuevo régimen constituido por la Revolución mantenía argumentos democráticos, sus prácticas políticas y de gobierno permanecían muy lejos de alcanzarlos.

Como resultado, el régimen de la revolución institucionalizada se presentó como un antidemocrático *integrismo* de Estado, muy parecido al porfiriano. (Krauze, E. 1998: 99) No obstante, el nuevo gobierno logró estabilidad debido a que la mayoría de la población lo consideró legítimo. Dicha legitimidad no la obtuvo por la vía electoral, sino debido a su capacidad de responder, aunque de manera insuficiente y distorsionada, a las demandas

materiales de un gran número de mexicanos, pues el sufragio efectivo fue substituido por subsidios y por el ejido, entre otros aspectos (Meyer, L. 1988: 80).

Aunque no hubo alternancia de partidos políticos en el poder, debido a las formas que adoptaron las reglas del juego político, la Revolución destruyó la oligarquía porfirista y permitió, vía la educación, el ascenso social de la clase media, que podía ocupar cargos en la administración pública y en la empresa privada. El espacio que abrió a la clase media resultó de suma importancia para el mantenimiento de la estabilidad. Asimismo, al destruir las haciendas e incorporar a la gran masa campesina al partido oficial vía la reforma agraria, el sector rural se convirtió en un cimiento sólido del gobierno y del régimen.

Los sindicatos fueron aceptados como líderes legítimos e incorporados al partido oficial a través de las grandes centrales y organizaciones nacionales, que se convirtieron en aliados que formaron en los centros urbanos, una base organizada y disciplinada, subordinada al partido oficial que mantuvo un sistema de control absoluto.

La seguridad social, los subsidios al consumo popular, la expansión de la educación gratuita, los proyectos de vivienda popular y dotación de servicios, mostraron a los sectores populares la conveniencia de la cercanía con el gobierno y con el partido para enfrentar sus necesidades más urgentes. Al mismo tiempo los líderes sindicales eran cooptados por el gobierno, lo que generó, entre los trabajadores, un desinterés por desconfianza hacia los asuntos de la democracia en el sistema político y la franca oposición hacia ella por parte de los líderes sindicales, pues ello implicaría cambiar las reglas y afectaría los intereses creados. La burguesía que conformaba el sector empresarial, se benefició de las acciones del Estado cuando la clase en el poder apoyó la industrialización y la sustitución de importaciones en los años cuarenta, lo que hizo posible que sus capitales se expandieran.

La legitimidad del régimen procedía, para el sector privado, no de su naturaleza democrática, sino del control que ejercía sobre el sector obrero, de la construcción de infraestructura, del sistema de protección tarifaria y de los subsidios e incentivos fiscales. Aunque la mayoría de las organizaciones empresariales no están representadas en el partido de gobierno, pocos empresarios se interesaron por participar en partidos de oposición. Por su parte la Iglesia aceptó las reglas de juego del nuevo régimen, al cual le dio su apoyo informal, cuando éste abandonó el espíritu anticlerical de la Constitución de 1917 y le permitió continuar participando en la educación privada.

La relación con los Estados Unidos durante la Revolución mexicana fue de confrontación y dicho país cuestionaba la legitimidad del nuevo régimen, sin embargo, dicha situación cambió cuando su nacionalismo y antiimperialismo característicos aminoraron y cuando ambos países actuaron en forma concertada durante la segunda guerra mundial. El reconocimiento de México como una democracia se dio en los Estados Unidos a principios de los años cuarenta, aunque el sistema de gobierno era esencialmente igual que en la etapa anterior.

Enrique Krauze sostiene que la Revolución se convirtió en un mito y adquirió una fuerte carga ideológica que además de la década de la lucha armada y la Constitución de 1917, incluía el proceso de transformación y creación de instituciones que derivaba de su programa. El proceso revolucionario de 1910 se convirtió en el parteaguas de una nueva era y se creó una cultura revolucionaria. (Krauze, E. 1998: 101-102) Asimismo, opina que la revolución no logró establecer la democracia que postulaba, pues hizo que florecieran los fueros y los bajos instintos de los militares.

En el mismo sentido, Enrique González Pedrero señala que la idea de nación y el nacionalismo se construyeron de manera imperfecta en nuestro país, ya que es una ideología

irracional, además de que llegamos a ella mediante la violencia y a través de permanentes tensiones y contradicciones, en tanto fueron producto de la primera revolución social del siglo XX. Sostiene además el citado politólogo que la creación de la nación se dio a partir del intento de reunir una serie de disparidades, en algo único.

Otro de los factores que según el historiador citado han frenado la democratización de nuestro país ha sido la participación de la Iglesia que no nació bajo el signo de la tolerancia, el pluralismo y la libertad, sino por el contrario marcada por la intolerancia, el integrismo, el dogma y la autocracia. A la Iglesia le interesaba para el país únicamente la conservación del pasado, razón por la cual, en lugar de favorecer la formación de un liberalismo cristiano, que fue una posibilidad, combatió a los constituyentes de 1857 (Krauze, E. 133-135).

Ante tales acontecimientos históricos que han marcado nuestras formas de gobierno y a la sociedad civil, la vida política de nuestro país se encuentra alejada de la democracia y lo que es peor, se han arraigado una serie de vicios, intereses particulares de individuos, grupos y sectores, así como errores y verdaderos obstáculos para la transición democrática.

2.7.2. La situación actual.

Según los datos obtenidos del Informe Latinobarómetro de 2009, en América Latina se requieren reformas institucionales que den salida a los conflictos. “La democracia no es otra cosa más que un mecanismo mediante el cual se regula la solución de los conflictos.” (Informe Latinobarómetro 2009: 6) Asimismo resultan imprescindibles las reformas refundacionales que cuenten con apoyo popular.

Se expresan como otras necesidades inaplazables para la democratización de la región, la representación articulada a través de la formación de mayorías con un sistema político de

representación y las sustantivas modificaciones de las estructuras de la sociedad para que permitan el acceso a las oportunidades, la movilidad social y la igualdad ante la ley. Las citadas reformas estructurales permiten avanzar en la percepción de la democratización, como en el caso de Bolivia, con el presidente Evo Morales.

Entre los principales problemas que atentan contra la democratización en la región de América Latina, que fueron captados por el Informe Latinobarómetro 2009, se encuentran los siguientes:

Una crisis de representación que se muestra a través de: hiperpresidencialismo, autoritarismo, fiebre reeleccionista, falta de confianza en las instituciones y atomización de partidos. La democracia no se consolida porque hay reformas pendientes que se requieren realizar y debido también a que se manifiesta una confusión en la concepción de democracia con lo que el estudio denomina como “Neo democracia”.

Además de los golpes de Estado, otra amenaza autoritaria a la democracia en América Latina son las “Neo Democracias” que avanzan hacia crecientes grados de autoritarismo. Aunque se siguen llamando democracias, constituyen un tipo híbrido de régimen político en donde no están presentes importantes elementos de las democracias, se cita como ejemplo el caso de Venezuela y de alguna manera de Honduras, en la percepción democrática que tiene su propia población.²¹

Pese a la tesis que se tenía respecto a que la crisis económica generaba los efectos negativos sobre el proceso democratizador, los datos obtenidos a través del informe indican que

²¹ Cfr. La tabla en el informe.

los resultados de la crisis económica han sido positivos para la democracia en América Latina.

“La democracia se afianza con la crisis” (Latinobarómetro, 2009:6)

América Latina aprecia más sus instituciones, sus presidentes, el mercado y está más satisfecha con su democracia. “A pesar de la crisis económica del 2009 y del golpe de Estado en Honduras, A.L. es más democrática, más tolerante, más feliz” (Latinobarómetro, 2009:6).

La situación en México

El país está amenazado por el autoritarismo ya que, según el citado informe, el 27% de la población entrevistada en México considera que es probable un golpe de Estado. En comparación el promedio en América Latina el perfil de los que creen que es poco probable un golpe de Estado en su país, muestra que son los hombres (65%) los que lo creen menos probable que las mujeres (58%), los más educados (66% Educación Superior o menos) más que los menos educados (59% Educación Básica o menos) y son los que están en la izquierda (67%) más que los que están en la derecha (63%) (Latinobarómetro, 2009:11).

El informe solicitó información a los ciudadanos respecto a sus actitudes ante el autoritarismo.

	México	América Latina
En ninguna circunstancia apoyaría un gobierno militar	56%	65%
Está de acuerdo en que los militares remuevan al presidente si viola la	58%,	42%

constitución		
Está de acuerdo en que cuando hay situación difícil está bien pasar por encima de las leyes	29%	27%
Considera probable que en el país haya un golpe de Estado	27%	21%

Los resultados obtenidos muestran contradicciones y evidencian que en México la percepción antidemocrática y autoritaria es mayor que la media en AL. (p. 17)

Plantea el informe que en AL²² las actitudes hacia la democracia están llenas de confusiones autoritarias, los ciudadanos combinan cosas que no se pueden combinar en la democracia; se rechaza el gobierno militar y se acepta el poder total del presidente. El autoritarismo presidencial es una forma de neo-democracia en la que se otorga poder absoluto a los presidentes, como sustitutos del sistema democrático, de la legitimidad de las instituciones. Hiperpresidencialismo con poder total, reeleccionismo y control de la prensa, son las nuevas amenazas para la consolidación de la democracia. Los datos muestran una confusión por parte de los latinoamericanos y concretamente de los mexicanos en torno a la concepción de la democracia.

²² Uno de los problemas no resueltos adecuadamente en el estudio de Latinobarómetro es un detalle técnico: el cuestionario no puede discriminar si la respuesta por la democracia es hacia el régimen democrático o hacia el gobierno en cuestión, de manera que cuando se pregunta si se está de acuerdo con la democracia en el (X) país, la gente contesta a veces teniendo en cuenta el régimen y en ocasiones teniendo como referencia al gobierno realmente existente.

¿AL reacciona sólo cuando hay golpes de Estado y no interviene cuando se transgreden las instituciones? ¿Es más importante la gobernabilidad que la democracia?

El 74% de los mexicanos está de acuerdo en que los medios de comunicación deben tener libertad de expresión.

El análisis de la democracia en América Latina, que realiza el Informe Latinobarómetro en 2009, sostiene que en la región se desarrolla una suerte de Neo democracia en la cual los presidentes se atribuyen más poder del que corresponde al equilibrio de poderes y sustituyen la legitimidad de las instituciones, en la que se aceptan transgresiones a la institucionalidad más allá de lo democrático y no se interviene porque hay gobernabilidad, con lo que parece más importante la gobernabilidad que la democracia.

Para definir el concepto de democracia se consideraron aspectos normativos, institucionales y culturales. Con la información recabada se pusieron de manifiesto aspectos relacionados con la ideología, determinantes de la concepción de democracia de los ciudadanos, por lo que no es el funcionamiento de las instituciones, ni los procedimientos, ni las normas lo que cuenta, sino la orientación de los gobernantes.

Otro dato relevante que aporta el informe Latinobarómetro 2009 consiste en que en los países latinoamericanos el número de adeptos a la democracia aumenta entre los sectores más educados y disminuye entre los menos educados. Consideran que ello se debe a que los sectores menos educados son los que resultan más afectados por la crisis económica.

La evolución de la adhesión a la democracia se ha polarizado y la distancia entre quienes menos se adhieren y los que más lo hacen ha aumentado de 9 a 19 puntos entre 1996 y 2009. En México, a lo largo del mismo período la adhesión a la democracia disminuyó en 9 puntos.

También establece el informe del 2009 que las acciones y opiniones acerca de la democracia no son consistentes ya que las personas tienen actitudes democráticas y no democráticas y la mayoría de ellas muestra algún comportamiento antidemocrático. El elemento común a todas las concepciones y definitorio de la democracia son las elecciones, todos los países consideran que sin elecciones no hay democracia y ella puede existir, sin embargo, aunque no haya partidos ni congreso. Por tal motivo se ha denominado a las democracias latinoamericanas como democracias electorales.

Satisfacción con la democracia

En México el 42% de la población considera que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno en contraste con el 59% que representa el promedio en América Latina. (38)

Por otra parte, el 28% de los mexicanos está satisfecho con la democracia. La satisfacción es un indicador que se refiere al desempeño del régimen, mientras que el apoyo antes señalado, se refiere al tipo de régimen.

Asimismo, en México el 44% de la población considera que los regímenes democráticos están más preparados para enfrentar una crisis económica (54% AL). La percepción que los ciudadanos mexicanos tienen sobre cuán democrático es su propio país, lo ubica con 6 puntos en una escala de 1 a 10 en donde 1 es totalmente no democrático y 10 totalmente democrático.

El 50% de la población considera que sin congreso no puede haber democracia y el 58% piensa que sin partidos políticos tampoco la hay. La comparación entre los datos que arrojó el estudio en el período 1996-2009 en México, muestra un incremento en la idea de que sin partidos

políticos no puede haber democracia, mientras que se incrementaron quienes sostienen la idea de que puede haberla aún sin congreso, es decir que hubo una pérdida de confianza en el congreso.

Se muestra también en México un desencanto hacia la política que se refleja en la respuesta a la pregunta acerca de ¿para quién se gobierna en el país? El 21% de la población mexicana afirma que se gobierna para el bien de todos en contraparte al 79% que considera que está gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio. Esta es según Sidney Verba (2009: 41), la pregunta central sobre la soberanía y el alto porcentaje de respuestas que apuntan a los intereses de grupos hegemónicos, parece estar relacionado con la desconfianza y el desencanto con la política.

El 70% de la población considera prioritario el desarrollo económico, aún a costa de la democracia y en contraparte, sólo un 30% postula que la democracia es lo más importante. El 51% piensa que en un régimen democrático el sistema funciona bien en lo general.

Un tema relevante es también el de la confianza, pues es a partir de ella que se puede construir el capital social necesario para la gobernabilidad democrática. Tan sólo el 24% de los mexicanos afirma que se puede confiar en la mayoría de las personas; por lo tanto, al haber un 76% de la población que no confía, se evidencia que no se ha avanzado en el tema de la integración, ni se han desarrollado vínculos entre la población. Señala Latinobarómetro 2009 que en México, al igual que en los países de la región, la confianza únicamente se forma al interior de redes y entre redes hay desconfianza, ya que, afirma, son sociedades segregadas por las diferencias sociales, económicas, de raza y de educación. (Latinobarómetro. Informe Anual 2009: 35)

Al mismo tiempo, la confianza hacia las instituciones no ha aumentado, lo que se confirma además por el hecho de que únicamente el 21% de la población mexicana está de acuerdo en que se gobierna para el bien de todo el pueblo. Considera el análisis presentado por el citado informe que los niveles de confianza hacia las instituciones no han cambiado porque las razones de la desconfianza son estructurales. Por otra parte sostiene que las confianzas hacia las instituciones de la democracia, están “atadas entre sí”, de manera que no basta el cambio en una de ellas, todas tienen que cambiar al mismo tiempo paraqué se logre la confianza.

El informe muestra datos interesantes pues al indagar acerca de las instituciones, grupos y personas en las que se tiene mayor confianza. Se muestra en primer lugar a la Iglesia y en último a los partidos políticos. Después de la Iglesia, son los medios masivos de comunicación (radio, televisión y diarios) los que captan mayor confianza por parte de la población latinoamericana.

En quinto y sexto lugar se ubican las fuerzas armadas y el gobierno, respectivamente, les siguen los bancos y las empresas privadas en séptimo y octavo lugar. Los gobiernos locales y municipales, la administración pública y la policía, ocupan las posiciones novena a onceava. Los cuatro últimos lugares están ocupados por el Congreso, el poder judicial, los sindicatos y los partidos políticos.

Un análisis global de las instituciones que motivan mayor confianza en Latinoamérica nos permite afirmar que el Estado y la administración pública, los poderes legislativo y judicial, así como la clase política son las que menor confianza inspiran.

Con respecto al mismo tema, el 32% de la población mexicana considera que se ha avanzado en reducir la corrupción en las instituciones del Estado y el 41% piensa que la democracia ayuda a solucionar problemas, principalmente debido a que se vincula con bienes

concretos. En las sociedades latinoamericanas permanece como un grave problema el de la desigualdad, así sólo el 15% de los entrevistados en México consideró que existe una justa distribución de la riqueza y el 20% que la democracia garantiza la distribución equitativa.

La percepción de los ciudadanos latinoamericanos es que la democracia en sus países está garantizando libertades civiles y políticas, pero no está garantizando derechos sociales y económicos. Un ejemplo, en México, en la escala de medición de riqueza y pobreza, la población se ubica por debajo de la mitad con 4.6, puntos de un total de 10.

Por otra parte, de los mexicanos entrevistados, el 16% comparte la auto percepción de sentirse discriminado y el total de la población considera en México que un 44% de la misma es discriminado. La mayoría de los casos de discriminación están relacionados con el género. Éste es un indicador muy importante para valorar el grado de democracia y tolerancia que hay en un país; las mujeres son discriminadas primordialmente en asuntos económicos, políticos y laborales y se mantienen valores tradicionales como el hecho de que si gana más que el hombre, tendrá problemas.

Aunado al anterior, otro indicador de democracia es el que valora la tolerancia hacia los homosexuales, el que se ha incrementado en la región latinoamericana.

En cuanto a la participación política, se han incrementado las opiniones favorables respecto a la legitimidad de los diversos mecanismos que existen. El 95% de la población encuestada, considera a las marchas, protestas, comités de vigilancia y consultas como mecanismos legítimos en democracia. Del 95% citado, 70% considera legítimo y democrático, participar en comités de vigilancia y % 64% en consultas populares.

El informe 2009 destaca que existen contradicciones en las concepciones de la democracia, pues aunque una gran cantidad de la población considera que la participación es indispensable para alcanzarla, al mismo tiempo no valoran a la participación como instrumento de la ciudadanía. Así en México, tan sólo el 13% de los entrevistados considera que no se puede dejar a un lado la participación si se quiere ser un ciudadano y tal dato se relaciona con el hecho de que sólo el 6% considera que el gobierno puede resolver todos los problemas, aunque se le demanda que así lo haga.

El 56% afirma que el voto puede hacer que las cosas sean diferentes en el futuro, pero tan sólo el 23% tiene confianza en que las elecciones en el país son limpias.

La familia y los amigos, fuentes informales, constituyen los principales medios a través de los cuales una persona se enteraría de asuntos políticos, se mantiene la importancia de la televisión y disminuye la de los diarios. El 26% de los entrevistados en México se informa a través de la familia.

Más del 59% de la población señala que los problemas económicos son los que afectan mayormente al logro de la democratización y el 32% aprueba la forma en que el presidente aborda tales problemas. El segundo problema en promedio de la región es la delincuencia.

Los aspectos anteriormente analizados acerca de consideraciones sobre la democracia, repercuten en la manera en que se concibe a la ciudadanía. A continuación se presentan los requisitos que en América Latina se consideran constitutivos de la ciudadanía. Aunque los datos no son específicos de México, sí tienen un alto valor de representatividad y por ello son de gran importancia para el presente estudio.

Respecto a los requisitos para la ciudadanía en América Latina, el informe Latinobarómetro 2009 destaca 8 aspectos que se plantearon como fundamentales, en el orden jerárquico en que fueron presentados. A la pregunta: *¿Cuáles de las siguientes cosas cree usted que una persona no puede dejar de hacer si quiere ser considerado ciudadano?*, en primer lugar se considera al voto; en segundo lugar, pagar impuestos; en seguida obedecer las leyes; en cuarto sitio, ayudar a los connacionales que están peor que uno; el quinto lugar lo ocupa la elección de productos medioambientalmente responsables; en sexto lugar, cumplir con el servicio militar; en séptimo participar en organizaciones sociales y en octavo participar en organizaciones políticas.

El informe realizó una comparación entre los resultados obtenidos en tres años, 2007, 2008 y 2009. Respecto al voto, considerado como el rasgo definitorio de la ciudadanía, por excelencia hubo un ligero incremento en el último año del informe; en relación con el segundo rasgo que es el pago de impuestos, hubo una leve disminución con respecto a la primera medición; el tercer rasgo propuesto: obedecer las leyes, mostró una pequeña disminución; la idea de “ayudar a los connacionales que están peor que uno”, que ocupó el cuarto lugar, se muestra un pequeño incremento; el quinto rasgo considerado fue: elegir productos medioambientalmente responsables y mostró también un incremento ligero; en el sexto lugar, el cumplir con el servicio militar se mantuvo estable, mientras que en el séptimo y octavo lugares, participar en organizaciones sociales y participar en organizaciones políticas, respectivamente, mostraron una disminución leve.

Lo anterior nos permite afirmar que la noción de ciudadanía continúa muy vinculada con el cumplimiento de las obligaciones, entre ellas, en primer lugar: el voto y en los dos lugares subsecuentes el pago de impuestos y la obediencia a las leyes, que sin embargo tuvieron una disminución, probablemente en relación con la percepción que tiene la ciudadanía acerca de la

corrupción. Aunque evidentemente la participación en los procesos electorales es fundamental para el establecimiento de gobiernos democráticos, por sí misma no es condición suficiente para la democracia.

Es interesante que la solidaridad y la conciencia ecológica estén cobrando mayor importancia como rasgos ciudadanos, aunque sea de forma paulatina y continúen en el cuarto y quinto lugares, por su parte la realización del servicio militar continúa estable en el séptimo lugar, lo que nos hace pensar nuevamente en la relación con las obligaciones y en este caso concreto, con un deber patriótico, arraigado hace mucho tiempo. Finalmente los temas relacionados con la participación, ocupan los últimos lugares y en lugar de incrementarse, disminuyeron, lo que nos lleva a plantear que el camino hacia la democratización en nuestro país es eminentemente en una comprensión formal de la democracia aunada a falta de confianza en instituciones y hacia otros ciudadanos. Los tres primeros requisitos que se señalan como importantes, refieren a derechos y obligaciones civiles, mientras que los derechos y obligaciones sociales y políticos tienen menor consideración.

2.7.3. Reflexiones finales.

En opinión de Enrique Krauze, en México la democracia ha sido relegada siempre, anteponiendo como motivo para ello la urgencia de otras tareas también muy válidas y necesarias, como la justicia social, el bienestar económico, la estabilidad y la paz entre otros. También se ha postergado su atención, mediante el argumento de que no es posible superar supervivencias culturales e incluso que es peligroso promover la democratización, pues implica el inconveniente de remover ciertas estructuras. Sin embargo, afirma el mismo historiador, las sociedades más diversas y las estructuras más autoritarias han descubierto en momentos de crisis que el progreso político es un fin en sí mismo y la forma de lograrlo es vía la democracia.

Daniel Cosío Villegas plantea que en México el camino a la democracia se ha caracterizado por ser una respuesta al agravio, lo que ha determinado que en ocasiones se logre avanzar y en otras se presente un estancamiento. Dicha tesis ha sido denominada la teoría pendular. Krauze aplica la teoría pendular al análisis de los distintos hechos históricos que son representativos de la vida política en México. (Cosío Villegas, D., vid en Krauze, E., 1986:53)

A partir de la Independencia, Krauze marca una serie de momentos en que como respuesta a agravios políticos, económicos y sociales muy arraigados, se han generado acontecimientos y periodos que logran la democratización, los cuáles se han visto interrumpidos por nuevos agravios que la destierran. Es necesario reconocer también que a lo largo de la historia política de nuestro país, se pueden señalar diversos hechos que favorecieron la democratización y la pusieron en práctica. Sin embargo, en cada periodo histórico, distintos grupos que ostentan el poder o se lo disputan, han antepuesto sus intereses políticos y económicos, marcando retrocesos en los avances en materia de democratización que se van conquistando.

Uno de los principales obstáculos para el establecimiento de la democracia ha sido el hecho de que a lo largo de la historia del México posrevolucionario, ningún sector de la sociedad, ni los militantes del partido oficial, centralista, creado por los militares, hayan promovido la formación de otros partidos no centralistas con ideologías y prácticas políticas divergentes. Krauze considera que el Partido Revolucionario Institucional logró dar al país una gran estabilidad después de los conflictos armados, ya que atraía y cobijaba a una gran cantidad de fuerzas de poder real, tales como obreros, burocracia y ejército, sin necesidad de recurrir a la violencia. Sin embargo, ello no implicó un verdadero avance político pues no suponía madurez ni responsabilidad.

Los vestigios del colonialismo y la dictadura amenazaban con destruir los ideales revolucionarios y con volver a presentar el clima de violencia e inestabilidad. Entre los diversos factores que ponían en riesgo tales ideales e incluso la viabilidad del Estado, podemos citar el caciquismo, el caudillismo, la intolerancia religiosa y antirreligiosa, la tradición de los militares en el ejercicio del poder y el monopolio que compañías extranjeras y sus aliados tenían sobre los principales instrumentos económicos del país.

A través del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la revolución se institucionalizó y con ello se inmovilizó el tránsito del país hacia formas superiores de vida política, debido a que dicho partido ofrecía justicia social para todos los que se acercaran al mismo y acaparó el control político. Durante varias décadas, el partido en el gobierno frenó las posibilidades de democratización del país, ya que propició falta de interés por participar en la vida pública e incluso significó en muchos aspectos una regresión. Entre las más graves consecuencias del control político que ejerció, hay que destacar la gran corrupción que generó y que prevalece en la actualidad, ya que ha pasado a formar parte de nuestra cultura política.

En el largo periodo en que gobernó, dio prioridad a la industrialización por encima del avance político. Asimismo, el Estado empresario fue la base de una política nacional de desarrollo económico e industrial. Hacían falta grandes inversiones y prácticamente no existían empresarios para cubrirlas. (González, P. 1965: 59-60)

Bajo el gobierno priista la división de poderes era formal, ya que se fortaleció grandemente el poder presidencial. En relación a tal hecho, opina Pablo González Casanova (cita) que después de las incesantes confrontaciones entre facciones políticas que se presentaron como consecuencia del movimiento revolucionario, el presidencialismo logró terminar con las conspiraciones del poder legislativo, del ejército y el clero, para terminar con los caudillos y sus

partidos *de membrete*; el régimen centralista permitió terminar con los feudos regionales y controlar a los caciques locales. Sin embargo al paso de los años, el gran poder adquirido por el presidente impidió la democratización del país y con ello el pleno desarrollo.

Esta forma de gobierno fortaleció la centralización del poder y la federación se impuso sobre los estados y municipios. No existía, con las diversas administraciones priistas, una auténtica democracia electoral y las libertades no crecieron en relación con las que se gozaban desde el porfiriato, las leyes no eran observadas, la impunidad, la irresponsabilidad y el despotismo se extendieron y arraigaron, entre otras consecuencias negativas.

El modelo de integración que instauró el PRI a lo largo de cincuenta años sobre premisas financieras, llegó a su agotamiento, al no haber crecimiento económico en el país, lo que impidió al partido oficial cumplir su tradicional función de dar.

González Pedrero considera que México es un país en el que coexisten distintos pasados y acontecimientos que no hemos sabido armonizar para lograr la solución de nuestros problemas individuales ni colectivos, los cuales, por el contrario, frenan nuestro avance. Como posible respuesta a tal problemática, propone lo que denomina *democracia municipal*.

”Cuando cada uno de sus ciudadanos cuente, y se cuente, y éstos decidan lo que a su ciencia y paciencia convenga, ese día México habrá reunido a sus átomos, hoy dispersos y sin autonomía real. Se generará entonces una enorme corriente de energía que, ciertamente, no va a resolvernos todos los problemas pero nos dará una confianza y una seguridad en nosotros mismos que nos volverá, por fin, dueños de todos nuestros tiempos.” (González, E. 2006: 51)

Sostiene José Woldenberg que en México la transición democrática se inició debido a que la sociedad mexicana ya no se ajustaba al formato político del partido hegemónico, ni quería hacerlo, pues el país se había tornado más complejo, plural y diverso y por ello un solo partido no podía representar ni conciliar los intereses y proyectos de una población que crecía y se diversificaba rápidamente. Así concibe a la transición democrática como la búsqueda de una vida política que corresponda con la modernidad social y tiene la intención de cambiar las relaciones políticas autoritarias, por otras de carácter democrático. La creación del Instituto Federal Electoral en 1990, permitió que los comicios resultaran más confiables, organizados y equitativos.

A partir de la creación del citado instituto, se sucedieron una serie de procesos y reformas electorales que fueron fortaleciendo la democracia, mantuvieron abierta la vía electoral y la hicieron confiable para todas las fuerzas políticas, así como para la opinión pública del país. El periodo de transición democrática en México abarca dos décadas, en las cuales se promovió la creación y el fortalecimiento de diversos partidos políticos y se logró el consenso subyacente entre los diversos contendientes, los que se comprometieron a evitar la violencia política en el país (Woldenberg, J. 2002: 21-22)

En opinión de José Woldenberg, como resultado del proceso de negociación entre las principales fuerzas políticas del país, se ha constituido el “edificio electoral, legal” que abarca todos los estados del país y brinda mayor calidad a la competencia electoral. Dicho edificio es parte indisociable del aprendizaje democrático de ciudadanos y partidos políticos.

Por su parte, la transición hacia la democracia requiere, según González Pedrero, la creación de un ambiente y una cultura democráticos, que proporcionen las bases para la construcción de las nuevas instituciones. Resulta fundamental también instaurar nuevos valores

cívicos y una nueva moral pública, así como el republicanismo, el federalismo y una auténtica división de poderes. En tal sentido, los poderes legislativo y judicial requieren funcionar como contrapeso real al gran poder que ejerce el ejecutivo, para que éste sea verdaderamente un mandatario que rinda cuentas al pueblo mexicano.

Es indispensable también para la democratización del país promover las garantías individuales y los derechos humanos de los ciudadanos, ya que favorecen el desarrollo de la conciencia ciudadana. Es necesario además trasponer las preocupaciones económicas para dar lugar a la política. “En este sentido creo, con Rousseau, *que hoy más que nunca todo tiene que ver con la política*, vivimos tiempos impulsados por la presión ciudadana.” (González, E. 2006: 89)

La democracia se fundamenta en la estabilidad y ésta a su vez, además de la creación de empleos, requiere de la tolerancia y la pluralidad que posibilita el diálogo. Se impone un auténtico federalismo, una democracia madura y un verdadero estado de derecho que respete la dignidad y los derechos humanos. Las decisiones políticas y económicas deben ser tomadas por los ciudadanos a través de las distintas fuentes de consulta y es para ello indispensable también, la cobertura y la calidad educativa.

Los especialistas en materia política afirman que los distintos sectores sociales de nuestro país quieren la democracia pero no han aprendido como practicarla, pues a lo largo de la historia hemos imitado los modelos extranjeros sin lograr desarrollar nuestros propios métodos y formas.

Ante la apatía que muestra la sociedad civil en materia de participación política, el politólogo Alfonso Zárate presenta reflexiones acerca de diversos hechos históricos que han contribuido a formar una actitud pasiva. Por principio hace mención de la época colonial en que

se otorgaban mercedes que permitían a los gobernantes abusar de sus cargos. Cita también una frase que expresó el virrey Carlos Francisco de Croix en 1767, quien comunicó a los vasallos: “del gran monarca que ocupa el trono de España que nacieron para callar y obedecer y no para discurrir ni opinar en los asuntos del gobierno.” (Zárate, A. El Universal, 28 de octubre)

Afirma el citado politólogo, entre otros aspectos que han determinado la pasividad de la sociedad, los robos y actos de corrupción cometidos por los revolucionarios o “robolucionarios” como Huerta y Álvaro Obregón.

Señala Zárate que en fechas más cercanas, la que denomina “la docena trágica” conformada por los sexenios de Luis Echeverría y José López Portillo, marcó el final del denominado “milagro mexicano”. Durante el gobierno de Echeverría, la deuda externa se incrementó casi cinco veces y la inflación pasó de un 2.5% a un 27.2%; por su parte, López Portillo, en lugar de “distribuir la abundancia” como había prometido, dejó al país sumido en una grave crisis.

Es posible analizar los diversos errores económicos y políticos, así como actos de corrupción que se generaron a lo largo de los distintos sexenios y que han representado graves obstáculos a la democratización del país. Al respecto, resalta por su elevado costo político el sexenio de Vicente Fox (2000-2006), quien no supo aprovechar el clima democrático que se vivía en el país y desperdició el capital político que dicho momento le brindaba; se afirma que tal presidente no logró gobernar con austeridad y eficacia ni renovar la vida pública. Sin embargo, sostiene Zárate que ni la irresponsabilidad de la clase dominante ni la indolencia de la sociedad civil han terminado con el país, que es mucho más grande que sus dificultades.

Es necesario que se consolide y fortalezca, en términos políticos, un sistema multipartidista, en beneficio de la incipiente democracia. El fortalecimiento de los partidos se traduce en un fortalecimiento del estado nacional. Plantea José Woldenberg que a partir de la transición democrática en México, se ha dado la “mecánica del cambio político en México”²³, proceso cíclico de participación de los partidos en contiendas electorales, en las que se ganan posiciones legislativas o posiciones de gobierno, desde las cuales se plantean nuevas exigencias y reformas electorales, de ahí que se autorrefuerza y mantiene en permanente cambio. (Woldenberg, J. 2002: 22)

Los efectos de la reforma electoral impactaron el ámbito gubernamental y la vida de millones de personas, pues la distribución del poder podía ser constatada. La vida política y cultural del país se fue transformando debido a la reforma electoral que fue motor y vehículo para un aprendizaje democrático. Se transformó la forma de gobierno, el funcionamiento del estado y se dio mayor vitalidad a las libertades públicas.

La convivencia plural entre gobernantes de distintos partidos políticos en los tres niveles de gobierno hizo tangible el cambio político y a partir de ello dejó de ser fuente de temores. Dicha pluralidad también se alcanzó en el Congreso de la Unión, los congresos locales y los ayuntamientos. El reparto equitativo del poder y la convivencia de la pluralidad que hizo posible, estimuló la participación y la democratización ya que generó confianza en la vía electoral.

Como consecuencia del proceso democratizador, se multiplicaron las asociaciones, se crearon y registraron nuevos partidos políticos y se abrió la contienda a nuevas organizaciones. Para que los nuevos partidos y asociaciones obtuvieran su registro y entraran a la contienda

²³ Mecánica del cambio político en México la designación que Ricardo Becerra, Pedro Salazar y José Woldenberg proponen para el proceso a que se hace referencia.

electoral tuvieron que cumplir una serie de requisitos legales previamente establecidos, transparentes y mensurables, las viejas prácticas de la decisión presidencial, la negociación y la opinión pública quedaron a un lado. Paralelamente, se fueron conquistando condiciones esenciales a la democracia, tales como la libertad de asociación y la posibilidad de inclusión en la contienda legal.

Aunque hubo importantes luchas que reivindicaban la democracia, Woldenberg sitúa el inicio de la citada mecánica de cambio político en 1977, cuando se permitió el libre desarrollo de las opciones organizadas y su participación en el ámbito electoral, se configuró entonces “la estructura del cambio”. El propio Woldenberg (2002: 23-24) propone que la transición se sustentó en cinco bases: declarar a los partidos políticos como entidades de interés público y reconocimiento de su personalidad jurídica e importancia para conformar los órganos del Estado. Acceso a la contienda electoral a las fuerzas más significativas de la izquierda, fundamentalmente al Partido Comunista, a través del “registro condicionado”. En opinión de Krauze, la reforma política, aunque ha permitido la entrada en escena a la izquierda y con ello representa un avance democrático, ha sido más un movimiento en el sentido cardenista de la integración que maderista en sentido de ceder el poder a la sociedad. (Krauze, E. 1998:20)

Se concluye la ampliación del Congreso y se introduce a los diputados plurinominales, la nueva fórmula incluía 300 diputados de mayoría y 100 de representación proporcional, lo que motivó a los partidos a realizar campañas a favor del voto a nivel nacional y se dio mayor pluralismo a la Cámara de Diputados. El Estado asumió la obligación de otorgar recursos para sostener a todos los partidos políticos que además adquieren prerrogativas en los medios de comunicación y en dinero público. Al estar registrados, los partidos adquieren la posibilidad de

participar en las elecciones estatales y municipales. A nivel nacional se multiplicó la participación electoral de distintas alternativas legalizadas y legitimadas por la Constitución.

Se fueron incorporando paulatinamente diversos contingentes con distintas ideologías que ampliaron las alternativas y fortalecieron a las ya existentes. Una gran diversidad de partidos políticos fue colonizando y pluralizando al estado nacional y erosionando al autoritarismo, a la cultura y las prácticas del partido hegemónico. Otro factor de gran importancia para la transición ha sido que los procesos electorales y los partidos se convirtieron en un proceso político y cultural ya que llamaron la atención de académicos e investigadores.

Al mismo tiempo, la experiencia de la pluralidad, la competencia, la cohabitación y el cambio en el gobierno, al volverse experiencias cotidianas y visibles, hicieron que la gran mayoría de la población dejara de tener miedo al cambio político. La pluralidad, conquistada por la vía electoral, llegó al Congreso de la Unión, a los Congresos locales y los ayuntamientos y el reparto del poder se convirtió en una verdadera escuela de democracia para millones de personas tradicionalmente formados en un sistema autoritario. La idea de pluralismo se ha tornado una noción compartida por todos los actores sociales y se hacen más amplios los valores de la convivencia con tolerancia en la diversidad.

El análisis que presenta Woldenberg permite captar que los procesos electorales significaron la expansión de las libertades públicas, asimismo el hecho de que bajo el amparo de la ley y la Constitución fue posible la manifestación y la crítica abierta; asimismo, al ingresar diputados de diversos partidos a la Cámara, el trabajo y el debate legislativo se modificaron.

Los partidos cambiaron sus estrategias y su cultura política, en cuanto a los partidos de izquierda, fueron abandonando su idea de la revolución y sustituyéndola por la lucha legal y las reformas. El ejercicio del presidencialismo y sus decisiones dejaron de ser unánimes y son cada

vez más discutidas, cuestionadas e incluso impedidas por fuerzas opositoras cuyo poder es creciente.

“En el transcurso ocurrió lo que quizá sea el cambio más importante de todos: una verdadera creación de ciudadanía. No escépticos ni súbditos, sino personas que saben que su voto contribuye a optar entre diferentes alternativas. Fue un cambio individual pero cuyo sentido ha adquirido toda fuerza al volverse colectivo. No hablamos ni de cien ni de mil ni de un millón, sino de decenas de millones de mexicanos quienes han abandonado actitudes tradicionales –autoritarias o pasivas- para influir en la marcha del país.”

(Woldenberg, J. 2002: 27)

El federalismo cambió el funcionamiento del gobierno pues los gobernadores y presidentes municipales que antes eran decididos por los gobernantes comenzaron a ser disputados en elecciones, ello determina un cambio en las relaciones políticas ya que los cargos no son determinados por el presidente sino por los ciudadanos. El funcionamiento del Estado nacional se transforma y los mecanismos constitucionales de negociación, diálogo y acuerdo deben ponerse en operación.

En los diversos países democráticos se hace referencia a la *sociedad civil* para hacer mención de la participación plural de la población en los asuntos políticos. Cuando el Estado disminuye sus actividades, la sociedad civil adquiere mayor poder. Actualmente en las sociedades occidentales, el mercado tiene primacía sobre la ciudadanía, la economía sobre la vida social y el individuo sobre la sociedad.

Al respecto, Enrique González Pedrero afirma que en México, diversos acontecimientos ocurridos en 1968, 1985, 1988 y 1994, propiciaron el surgimiento de grupos ciudadanos que

levantaron la voz para plantear sus demandas y exigir su cumplimiento, que generalmente desbordaron a las instituciones existentes. Se organizaron al margen del Estado y de partidos políticos, debido a que buscaban soluciones a problemas muy concretos y en tal proceso de transformación de la realidad social, se transformaron tanto individual como colectivamente. “Por eso algunos rasgos de las organizaciones ciudadanas parecerían más éticos que políticos: sólo que, no hay que olvidarlo, el *ethos*, en la calle, se vuelve *virtud pública*. (González, E. 2006: 142)

Mediante una reforma del Estado y un modelo de desarrollo más humano, las organizaciones de la sociedad civil buscan democratizar la toma de decisiones, eliminar la burocracia que obstaculiza el desarrollo social y lograr una mayor participación y transparencia en las relaciones entre la sociedad y el Estado. Para que la sociedad civil participe se requiere conciencia cívica. Estas organizaciones de la sociedad civil son lo opuesto al autoritarismo que ha caracterizado a las instituciones, incluyendo al virreinato y a la presidencia, pues con vocación eminentemente humanista, protestan, levantan la voz en contra del individualismo egoísta neoliberal. Afirma Woldenberg que, hoy en día, gracias a la reforma electoral, tenemos un régimen pluripartidista y competitivo en el cual el presidencialismo está limitado, los tres poderes son independientes, los distintos niveles de gobierno son autónomos, al igual que los grupos sociales, se presentan elecciones altamente competidas y la elección de quien gobierna la llevan a cabo los ciudadanos. Propone que la naturaleza del poder político ha cambiado y continúa cambiando en un sentido democratizador, con apego a la ley, sin violencia y a cargo de los ciudadanos.

En opinión del citado analista, las elecciones han demostrado ser la verdadera llave del cambio apolítico y han impactado en otras dimensiones de la vida social y cultural. México ha

constituido un régimen democrático, y según afirma Woldenberg, hemos resuelto la cuestión democrática, pero faltan otros grandes problemas como la pobreza y la gobernabilidad.

Tal afirmación acerca de que hemos conseguido la democracia, la sustenta en la existencia de diversos factores políticos y sociales que posibilitaron su construcción: “México posee ya una ciudadanía protagonista de un cambio cultural enorme; individuos que han aprendido a usar el voto como su instrumento de inserción en el presente político del país y en las definiciones de su vida pública.” (Woldenberg, J. 2002: 34) Considera que en nuestro país existen otros aspectos que posibilitan la democracia y son realidades sociales tangibles que han generado un proceso de transformación política nacional, democratizadora. Tales factores determinantes son los partidos políticos nacionales, competitivos, bien estructurados y arraigados, que se encuentran en el centro de las decisiones estatales; una opinión pública alerta y sensible, así como medios de comunicación que pueden desplegar su actitud crítica y una sociedad organizada, extraordinariamente diversa en sus intereses, atenta y visible, en la que existen instituciones y reglas electorales que garantizan elecciones limpias.

Con relación a la creación de la ciudadanía, Pierre Mendès Frances, primer ministro francés de 1954-1955 afirmaba que: “Todo individuo contiene un ciudadano. Las sociedades organizadas democráticamente deben acercarse a cumplir.” (Mendès, P. PNUD. 2010:31) “La creación de ciudadanía es también creación de libertades. Otorga a los ciudadanos el ejercicio de los derechos que permiten que la libertad sea realmente practicada: el derecho a elegir, a vivir, a la seguridad, a no ser perseguido, a la educación, a un salario decente, a la salud, al amparo social.” (PNUD 2010: 40)

Sostiene Woldenberg que los ciudadanos son individuos que se reconocen y se insertan activamente en los instrumentos de la democracia representativa: en los partidos y en las

240

elecciones. Observan las reglas que marcan tales instrumentos, participan, algunos militan, comprenden el poder de su voto y lo ponen en práctica. “El ciudadano es aquel individuo que ha tomado conciencia de su poder legal para mantener o para cambiar la situación política de su país.” (Woldenberg, J. 2002: 38)

De acuerdo con este experto, la ciudadanía no es un hecho histórico dado que únicamente esperaba el advenimiento de partidos nacionales y leyes justas. Es un hecho político y cultural masivo que se ha creado sobre la marcha en forma paralela a la ampliación de las libertades públicas y a la renovación de la vida política que ha sido posible debido a la concurrencia de los argumentos de todas las tendencias. En ese sentido, Octavio Paz anticipaba en 1994, con relación a las elecciones, que generarían una modificación en la conciencia nacional, como producto de la transformación moral y cultural, afirmó:

“Estamos ante un fenómeno que revela una mutación en la conciencia nacional y que, probablemente señala el principio de un cambio de rumbo de la nación...[Las elecciones] parecen indicar que en las profundidades del alma popular aparecen actitudes ante la vida pública que son la negación de las tradicionales. Emerge, todavía entre brumas, un México de ciudadanos.” (Paz, O. 1998: 84)

José Woldenberg plantea que ha sido fundamental a la constitución de la ciudadanía, el incremento de la participación, la cual ha adquirido sentido gracias a la confianza en que el voto será respetado. El mismo analista señala que lo electoral ha trascendido la mera creación de instrumentos técnicos que reflejen las preferencias de la sociedad y ha dado vida a una ciudadanía para la cual el voto y la democracia son valores fundamentales en su vida social, por lo que se ha involucrado en el proceso político. La diversidad de intereses, sensibilidades y racionalidades, es la base del cambio cultural y de la pluralidad política.

En México es fundamental fortalecer a la sociedad civil, incluso se requiere una reforma electoral que permita las candidaturas independientes, tanto de individuos como de grupos. La participación popular es la esencia de la democracia. Al respecto, González Pedrero (2006: 144), considera que la participación de la sociedad civil tiende a incrementarse y cita como argumento el poderoso impulso que mostró en 1994, pese a que se mantuvo la resistencia al cambio, debido a los intereses creados y por falta de voluntad política de las élites y del gobierno, que han arrojado costos económicos, políticos y sociales muy elevados.

Como resultado de la experiencia de la sociedad civil, se establecieron los *Veinte Compromisos por la Democracia* y los *60 puntos del Seminario del Castillo de Chapultepec* cuyo análisis es indispensable antes de realizar reformas electorales y políticos. Si su aplicación continúa retrasándose, con ello, afirma González Pedrero, tanto el costo histórico como la división entre mexicanos, el deterioro nacional y la irritación popular se incrementarán y con ellos el riesgo de la ingobernabilidad en tanto incapacidad de las instituciones de responder a las necesidades de la sociedad civil.

De acuerdo con los politólogos, se requiere una nueva reforma: política, económica, social, constitucional, cultural y científica, que dé inicio con la reforma electoral y con la formación de una ciudadanía participativa. Para empezar se necesitan elecciones justas, equitativas, democráticas, ciudadanas. Los partidos políticos deben pensar a largo plazo y no tan sólo en sus intereses inmediatos, como lo hacen en la actualidad.

Se afirma también la necesidad de que la ciudadanía establezca metas a largo plazo. La reforma necesita, además, incluir plena representatividad en sus diferentes modalidades como la revocación del mandato, el derecho a la reclamación, el referéndum, el plebiscito, la audiencia

pública, el derecho a la información y la consulta popular. También, consolidar una cultura republicana que permita la legalidad y acabe con las inequidades y escisiones.

Las elecciones recientes han manifestado la voluntad democrática de la ciudadanía, por ello la agenda democrática nacional no debe aplazarse. Esta búsqueda democrática se ha puesto en evidencia en la nueva conformación de la cámara de diputados, más equitativa en su representación de las diferentes fuerzas políticas.

Es posible afirmar que en México hemos tenido democracia formal, ya que la Constitución establece que somos una república representativa, democrática y federal cuya soberanía reside esencialmente en el pueblo. No obstante, en la práctica es necesario crear una democracia de acuerdo con nuestra cultura, intereses, necesidades y circunstancias nacionales. De acuerdo con González Casanova (1975), si se hubiera respetado de manera ortodoxa la teoría clásica de la democracia y de la economía, en nuestro país, el respeto equitativo a todos los poderes hubiera significado permitir el fortalecimiento de quienes conspiraban contra el régimen instaurado por la revolución y el respeto a los partidos implicaría el de los caciques y militares; sin intervención en la economía, otros países y sus compañías habrían operado sin ningún control y no se hubiera creado el mercado interno ni el capital nacional.

De esta manera, en opinión de González Casanova se dio inicio a la democracia a la mexicana y la distancia entre el México de la democracia formal establecida por la Constitución Mexicana y el México real que ha creado la historia. En nuestro país la sociedad civil ha atravesado por un proceso de maduración que ha tenido distintas e importantes manifestaciones en la época contemporánea. El movimiento estudiantil de 1968, por ejemplo, manifestó en forma muy evidente, el despertar de la conciencia ciudadana y su deseo de democracia y aunque la

represión hizo que por un tiempo no se expresara el descontento social, ya se había puesto en marcha la concientización de la sociedad.

De igual forma, los terremotos de 1985 en la ciudad de México movilizaron la solidaridad de la población y permitieron el surgimiento de la sociedad civil. Como consecuencia, surgieron diversas organizaciones vecinales que después se mantuvieron y continuaron haciendo dinámicas las demandas sociales. Las elecciones de 1988, por su parte, transmitieron el mensaje de que la sociedad civil había despertado y demandaba una democratización. El surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, (EZLN) en 1994 mostró que la sociedad había madurado y no deseaba resolver los problemas por medio de las armas, sino a través del diálogo.

Las elecciones federales de 1997, cuya finalidad era renovar la mitad del poder legislativo fueron de gran importancia porque fueron organizadas por ciudadanos, permitieron a los ciudadanos del Distrito Federal elegir a su jefe de gobierno y con ello sus derechos políticos fueron equiparados con los ciudadanos de las demás entidades federativas; también posibilitó la cohabitación del presidente con un jefe de gobierno de un partido opositor y la Cámara de Diputados fue conformada en forma más equitativa entre las distintas fuerzas políticas del país.

Después de estos importantes acontecimientos, se ha abierto una vía pacífica hacia la democracia, como se manifiesta en el mandato ciudadano en las elecciones y la creciente disposición al diálogo y a la participación social en la solución de los problemas. Sin embargo, los partidos políticos se enfrentan a una crisis de legitimidad. Por otra parte, se presenta la expectativa de que lo social y lo político se vinculen y no caminen cada uno por un camino diferente.

“Es la hora de los espacios públicos, de las tareas comunes a las organizaciones sociales y a los dirigentes políticos, es la hora de buscar los consensos indispensables, para culminar el trabajo, lento y persistente, de la sociedad civil.” (González, E. 2006:170)

En opinión de González Pedrero, como parte de la transición democrática, lo más importante es que el país vuelva al camino del derecho, lo que significa la conducción constitucional del país formal y real. Asimismo, para volver al cauce del derecho, resulta fundamental la reforma electoral, la reforma del Estado en las dimensiones política, social y económica a partir de lograr consensos y alianzas entre partidos y con la participación de la sociedad civil construir un proyecto nacional con la participación de todos los ciudadanos, sin exclusiones y mediante la eliminación del centralismo

La democratización exige también una auténtica división de poderes, que es un atributo de un régimen republicano, y en consecuencia el fortalecimiento de los poderes legislativo y judicial, para lograr un estado fuerte y eficaz. El logro de una auténtica separación de poderes es posible cuando el Congreso de la Unión alberga distintas fuerzas políticas que sancionan las decisiones del presidente.

Hacer efectivo el federalismo y acabar con el centralismo, promover la democracia como forma de vida, como cultura, que trascienda el mero ejercicio electoral, para convertirse en participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones y en las tareas de gobierno.

La política recobra su papel relevante para lograr que se dé la tolerancia, el diálogo, la recuperación de los elementos del pasado que sean útiles para la vida democrática del presente y para la creación de las instituciones que se corresponden con ella. La sociedad civil y las organizaciones políticas son las que pueden lograr la transición democrática y para ello necesitan

encontrar un equilibrio. Es necesario que nuestro país defina cual será su proyecto de democratización, particular. La democracia es posible tan sólo si se da la participación auténtica de las personas que manifiesten su voluntad y sustenten las políticas públicas y la política de Estado.

Según datos proporcionados por Latinobarómetro, en el año 2008 en México, sólo el 23% de la población consideraba que en nuestro país, la democracia funcionaba mejor que en otros países de América Latina. (Latinobarómetro, 2008. Sin embargo, el informe anual del mismo observatorio pone de manifiesto una serie de contradicciones en la concepción de nuestro país acerca de la democracia (Informe anual 2009 Latinobarómetro: 18)

El nuevo proyecto de nación requiere posibilitar el encuentro entre ciudadanos, sociedad y el Estado. “Sólo un proyecto fundado en valores solidarios y en el reconocimiento de que somos un país *tradicional* y a la vez *moderno*, será capaz de ofrecer una garantía de viabilidad para la nación.” (González, E. 2006: 298)

Es necesario abatir la corrupción que es bastante alta y constituye uno de los principales obstáculos para la gobernabilidad democrática. El índice de Percepción de la Corrupción, elaborado con opiniones de empresarios y analistas del país, determina el grado de corrupción que, de acuerdo con su opinión, existe entre autoridades oficiales y políticos. Para el año 2008, México ocupó la posición número 72 entre 180 países y obtuvo un puntaje de 3.6 en donde la escala era de 0 para altamente corrupto y 10 para ausencia de corrupción. (IPC, 2008: 6, Informe anual 2009: 41)

“México al igual que otras democracias en América Latina, requiere hacer frente a tres desafíos para el ejercicio democrático del poder: articular nuevas formas de participación

política para contrarrestar la crisis de representación; fortalecer la organización republicana del Estado, es decir, la independencia de los poderes, su control mutuo y las instancias de rendición de cuentas, e incrementar, en el marco de dichos controles republicanos, el poder político real del Estado, modernizando sus organizaciones y proveyéndolas de recursos humanos eficaces. Los avances en estos frentes y en el diseño y la ejecución de políticas públicas eficaces en tres campos clave –la fiscalidad, la exclusión social y la seguridad pública– son esenciales para la sostenibilidad de la democracia en la región.” (PNUD 2010:15)

El informe del PNUD 2010, *Nuestra Democracia*, sostiene que en la región latinoamericana cada vez hay menos preocupación por volver al autoritarismo del pasado y más por resolver el déficit democrático, por proporcionar mayor calidad y posibilidades de sostenibilidad a la democracia. Entiende el informe PNUD/OEA a la democracia como: “...un método de organización del poder y de la sociedad para que sus ciudadanos progresen en la realización efectiva de sus derechos, entendiendo ese paso –de lo nominal a lo real– como la creación de ciudadanía.” (PNUD 2010:27)

Ciudadanía es a su vez igualdad en la posesión y ejercicio de los derechos, está asociada a la pertenencia a una comunidad.

“La democracia define la ciudadanía como un precepto de igualdad básica asociada con la pertenencia a una comunidad, que en términos modernos es equivalente a los derechos y obligaciones de los que todos los individuos están dotados en virtud de su pertenencia a un Estado nacional.”

Lo anterior implica que incluye la titularidad de derechos y la exigencia de hacerlos efectivos. (PNUD 2004: 60)

El ejercicio de la ciudadanía no es un proceso espontáneo, de ahí que la función esencial de la democracia es otorgar a cada individuo lo que es parte de su naturaleza, corregir los desbalances de poder para equilibrar los derechos ejercidos. La calidad de las democracias está ligada directamente a su capacidad para crear ciudadanía y son instrumentos para promoverla, la agenda pública y el debate.

La ampliación de la ciudadanía se logra mediante un proceso a través del cual hombres y mujeres avanzan hacia condiciones de mayor bienestar espiritual y material, individual y colectivo. (PNUD 2010: 28) La ciudadanía tiene un carácter dinámico, contingente y abierto que es tanto condición como producto de las luchas históricas para enriquecer o menguar su contenido y ampliar o disminuir el número de personas a las que se reconoce como tales. El concepto de ciudadanía puede apoyar las formas de la política y sus finalidades. (PNUD 2004: 32)

“El concepto de ciudadanía tal como fue formulado en los siglos xviii, xix e incluso xx ya no está expresando los complejos problemas políticos actuales, por lo menos en Bolivia. [...] Es un concepto que es necesario construir y reconstruir permanentemente.[...] La experiencia boliviana nos enseña algunas cosas importantes: la primera es que no basta con las leyes. Tenemos una nueva constitución política en la cual se han inscrito cerca de cien artículos sobre derechos. [...] Sin embargo, ¿cómo hacemos para que el Estado efectivamente pueda garantizar su cumplimiento? Pero no podemos pensar la ciudadanía solamente desde el punto de vista del Estado: hay que pensar la ciudadanía desde el punto

de vista de los ciudadanos, de la propia sociedad civil.” (Investigador de Bolivia. PNUD: 2010: 34)

Las opiniones de distintos expertos, expresan la idea de que la ciudadanía es una construcción cotidiana y no sólo un llamado en tiempo de elecciones. El libre mercado ha generado en lugar de ciudadanos, consumidores que resuelven sus problemas solos a diferencia de los ciudadanos, que los resuelven en comunidad.

“Resulta pertinente establecer la diferencia entre el ciudadano de la democracia liberal — que se limita, cuando puede, a exigir el respeto y reconocimiento a sus derechos y deberes y se sumerge en la individualidad proclive al egoísmo y la insolidaridad— y el ciudadano republicano que [...] es consciente de que el orden social al que pertenece no está dado y se puede cambiar para bien, y [por lo tanto] no permanece inerte sino que se involucra responsable y racionalmente.” (Académico colombiano PNUD 2010: 34)

Asimismo, el informe del PNUD plantea que las democracias sostenibles son aquellas que logran cumplir con el ejercicio efectivo de los derechos de sus ciudadanos y ciudadanas, es decir en las que está presente el bienestar ciudadano. Los derechos que componen la ciudadanía se dividen en tres conjuntos o dimensiones, propuestos originalmente por Thomas Marshall: derechos civiles, derechos políticos y derechos sociales.

Los derechos civiles constituyen la ciudadanía civil. Está compuesta por los derechos que garantizan la libertad individual: libertad de expresión, pensamiento y religión, derecho a la justicia, derecho a la propiedad y a establecer contratos válidos. El derecho a la justicia defiende y hace valer el conjunto de los derechos de una persona en igualdad con los demás mediante los debidos procedimientos legales.

Las instituciones relacionadas directamente con los derechos civiles son los tribunales de justicia.

Los derechos políticos que componen la ciudadanía política consisten en el derecho a participar en el ejercicio del poder político como miembro de un cuerpo investido de autoridad política o como elector de sus miembros. El parlamento y las juntas de gobierno locales son las instituciones correspondientes. Cámara de Diputados y de Senadores.

Los derechos sociales componen la ciudadanía social. También han sido denominados derechos económicos, sociales y culturales. Abarcan un amplio espectro, desde el derecho a la seguridad y a un mínimo de bienestar económico, hasta el de compartir plenamente la herencia social y vivir conforme a los estándares predominantes en la sociedad. Incluyen el derecho de los pueblos indígenas a sus prácticas y expresiones culturales, a su herencia social. Las instituciones relacionadas son el sistema educativo y los servicios sociales.

Ante todos estos derechos, el ciudadano tiene sus correspondientes deberes, primordialmente el compromiso de su ejercicio, respetando los valores y las normas que la democracia adopta para hacerlos efectivos y los derechos de sus conciudadanos.

“La democracia es una forma de organización del poder en la sociedad con el objetivo de ampliar la ciudadanía, evitar o limitar la dominación de individuos o grupos que impidan este objetivo y lograr la perdurabilidad de la organización democrática.” (PNUD 2010: 32)

La legitimidad de la organización democrática del poder radica en su origen en la soberanía popular, expresada a través de procesos electorales periódicos, libres y transparentes. La idea es que el poder descansa en el pueblo y su ejercicio sólo es delegado a través de un

mandato. Otra condición para la legitimidad, consiste en que se ejerce a través de instituciones republicanas de gobierno, normado en el Estado democrático de derecho y se toman decisiones para formular políticas públicas y normas. Y un tercer requisito consiste en su finalidad de garantizar, extender y ejercer los derechos ciudadanos en sus tres dimensiones, la ampliación de los derechos es entendida como su realización efectiva.

Cada una de las dimensiones de ciudadanía tiene mínimos aceptados y que garantizan las condiciones para el ejercicio de la democracia. La existencia de elecciones libres y transparentes, el respeto de la libertad y seguridad de las personas, la defensa de la libre expresión, entre otros, son mínimos derechos para garantizar el mínimo de ciudadanía que debe estar presente en una democracia. Más allá de estos mínimos, es tarea de la democracia ampliar permanentemente los derechos.

2.8 Teoría de las Representaciones Sociales

2.8.1. Antecedentes y surgimiento de la teoría

El campo de la Psicología Social se transformó de manera importante en la década de los 60, debido a las aportaciones del psicoanalista rumano Serge Moscovici. En 1961 Moscovici retoma el concepto de representaciones colectivas propuesto por el sociólogo Emile Durkheim, que había caído en desuso y lo reformula como representaciones sociales, que considera como una modalidad particular y muy importante del pensamiento social, el cual es difundido a todas las ciencias sociales.

Bajo el concepto de representaciones colectivas, Durkheim agrupa nociones diversas como creencias, mitos, ideologías, opiniones y conocimientos, las cuales considera de gran importancia para la vida de las sociedades puesto que las dominan. Durkheim concebía las representaciones

colectivas como opuestas a las representaciones individuales y asignaba a las primeras el papel de imposiciones en cuyo marco el individuo piensa, actúa y formula juicios sobre su entorno natural y social. A partir de este concepto, Durkheim reconoce que cada sociedad genera sus propias representaciones colectivas y en consecuencia, los pensamientos y las conductas de los miembros de la misma, serán orientados en un sentido específico propio.

Al retomar el concepto durkheimiano de representaciones colectivas, reformularlo y teorizar acerca del mismo, Moscovici insta una línea de investigación sobre las representaciones sociales que propone una perspectiva integral en el estudio de las relaciones entre individuo y sociedad y rompe con el paradigma positivista imperante en Psicología Social que mantenía una separación entre ambas dimensiones al centrarse en lo intrapsíquico, individual. La teoría acerca de las representaciones sociales constituye una perspectiva integradora ya que reconoce que el individuo es un producto social y al mismo tiempo, produce elementos sociales y transforma la dimensión social. Sin embargo, la dimensión social es concebida, tanto como una realidad diferenciada, un sistema que busca el equilibrio o en contraparte, como espacio del conflicto y el cambio y en tal sentido relativo a lo interaccional; asimismo, entre sus elementos constitutivos se incluye a las interacciones, lo simbólico, lo ideológico, lo cultural, así como aspectos de tipo práctico-económico.

El punto de partida de ésta teoría es su abandono de la separación entre las dimensiones interna y externa del individuo, entre sujeto y objeto. A partir de su integración, la realidad objetiva adquiere otro estatus.”Plantearemos que *a priori* no existe la realidad objetiva, pero que toda realidad es representada, apropiada por el individuo o el grupo y reconstruida en su sistema cognitivo, integrada en su sistema de valores que depende de su historia y del contexto social e ideológico que le circunda.” (Abric, J.C. 2001: 12)

El concepto de representaciones sociales es dinámico y permite captar la heterogeneidad, por tanto es opuesto al concepto de representaciones colectivas propuesto por Durkheim, que al englobar el pensamiento social dominante enfatiza su aspecto estático.

En términos de Elisa Casado, en el marco de esta teoría: "...se concibe la relación individuo-sociedad estando en una interacción dialéctica-constructiva. En efecto, el individuo y los procesos psicológicos se construyen dentro de una estructura social determinada, en una red de relaciones sociales hilada a través de procesos de interacción comunicativa, en una ideología y una cultura que otorgan los contenidos con los cuales se construyen la visión y el conocimiento de sí mismo, de los otros, de las relaciones entre ellos y de la realidad. El individuo aislado, independiente de la sociedad es una abstracción; no tiene sentido pensar el hombre sino como ser social." (Casado, E. 2002: 60)

Al estudiar la teoría de las representaciones sociales se captan claras influencias de diversas disciplinas y corrientes del pensamiento que la han nutrido. En principio, evidentemente de acuerdo con los precursores del concepto y de la perspectiva social, señalamos las influencias de la sociología, asimismo, al ser una teoría del conocimiento, se evidencian las influencias de la epistemología y particularmente de la epistemología genética desarrollada por el filósofo y pedagogo suizo, Jean Piaget. Es posible también percibir importantes influencias del psicoanálisis, del marxismo y de la semiótica en donde encuentro relaciones con la Semiótica de la Cultura desarrollada por Iuri Lotman en la Escuela de Tartu- Moscú.

2.8.2. Hacia una conceptualización de la noción de representación social

Cabe en este momento definir qué se entiende por Representación Social y señalar al respecto que no existe una definición unívoca, sino diversas aproximaciones a su

conceptualización, ya que el mismo Moscovici ha considerado difícil ofrecer un concepto único, e incluso lo considera perjudicial e inútil; asimismo, afirmó: “...si bien es fácil captar la realidad de las representaciones sociales, no es nada fácil captar el concepto.” (Moscovici, S. 1984: 474)

Afirma Denise Jodelet, principal colaboradora de Moscovici, que el concepto de Representación Social, designa fenómenos múltiples que se observan y estudian a diferentes niveles de complejidad: individual y colectivo, psicológico y social y apunta que constituye además una nueva unidad de enfoque tanto para la Psicología Social como para las otras ciencias sociales. Así las representaciones sociales pueden concebirse como: “Una manera de interpretar y de pensar nuestra realidad cotidiana, una *forma de conocimiento social*. Y correlativamente, la actividad mental desplegada por individuos y grupos a fin de fijar su posición en relación con situaciones, acontecimientos, objetos y comunicaciones que les conciernen.” (Jodelet, D. en Moscovici, S. 1984: 473)

“La noción de Representación Social es compleja porque es un concepto puente entre lo individual y lo social, se refiere a un fenómeno sociocognitivo, y en tanto tal, un concepto integrador que engloba una gama amplia de fenómenos representacionales: información, actitudes, opiniones, creencias, estereotipos, imágenes, etc. Es un concepto que puede aludir a una simple imagen que condensa multitud de significaciones, a sistemas categoriales y hasta a elaboradas y complejas <<teorías>> sobre un determinado objeto.” (Casado, E.2002: 66-67)

Las representaciones sociales, tienen un componente cognitivo, textura psicológica y se rigen bajo las reglas de los procesos cognitivos. Por otra parte tienen un componente social, ya que las condiciones sociales determinan la puesta en práctica de los procesos cognitivos.

Constituyen la interiorización de experiencias, modelos de conducta y de pensamiento socialmente transmitidos. Aluden a los procesos cognitivos formales o actos de pensamiento y a los contenidos socioculturalmente determinados. El actor social, desde su lugar social produce una representación que refleja las normas institucionales derivadas de su posición e ideologías relacionadas.

“La identificación de la <<visión>> del mundo que los individuos o grupos llevan en sí y utilizan para actuar o tomar posición es reconocida como indispensable para entender la dinámica de las interacciones sociales y aclarar los determinantes de las prácticas sociales. (Abric, J.C. 2001: 11)

Al respecto Jodelet afirma que en tanto fenómenos, pueden presentarse en diversas formas con distintos niveles de complejidad entre los que señala: imágenes que condensan un conjunto de significados; sistemas de referencia que nos permiten interpretar lo que nos sucede, e incluso, dar un sentido a lo inesperado, categorías que sirven para clasificar las circunstancias, los fenómenos y los individuos, teorías que permiten establecer hechos sobre ellos. Al comprenderlas en la realidad de la vida social, son todo ello junto. (Jodelet, D. en Moscovici, S. 1984: 472)

Jodelet plantea que las representaciones sociales son una producción mental social, son tanto el proceso como el producto de una elaboración psicológica y social de lo real. El estudio de las representaciones sociales está relacionado con la forma en que como sujetos sociales aprehendemos en relación con nuestro entorno y a través de la interrelación o interacción con los demás, se refiere a las formas en que socialmente es elaborado y compartido el conocimiento de sentido común o conocimiento práctico. El conocimiento de sentido común, al asignar sentido al interior de la dinámica social, participa en la construcción social de nuestra realidad, forja las

evidencias de la “realidad consensual” y en tal sentido las representaciones sociales cumplen una función social.

Son formas del saber, Jodelet propone que: “El concepto de representación social designa una forma de conocimiento específico, el saber de sentido común, cuyos contenidos manifiestan la operación de procesos generativos y funcionales socialmente caracterizados. En sentido más amplio, designa una forma de pensamiento social...constituyen modalidades de pensamiento práctico orientados hacia la comunicación, la comprensión y el dominio del entorno social, material e ideal. En tanto que tales, presentan características específicas a nivel de organización de los contenidos, las operaciones mentales y la lógica.” (Jodelet, D. en Moscovici, S. 1984: 474) Para esta teoría, el conocimiento de sentido común es un producto sociocultural válido y apropiado.

En el mismo sentido, Elisa Casado afirma que la teoría de las representaciones sociales aborda de una manera diferente el problema del conocimiento de la realidad y se fundamenta en la premisa de que la integración del hombre a la sociedad sólo es posible a través del conocimiento que da sentido a la acción social. Es necesario considerar que en los procesos cognitivos es posible captar tanto aspectos formales como los contenidos de la cognición que son inseparables en el pensamiento social cotidiano. (Moscovici, S., en Casado, E. 2002: 61)

Son modalidades de pensamiento práctico. Los procesos a través de los que se construyen las representaciones sociales y los contenidos de las mismas están determinados por las condiciones y los contextos en que surgen, por las formas de comunicación a través de las cuales circulan, así como por las funciones que desempeñan como parte de la interacción con el mundo y con los demás. Las representaciones sociales se definen por un contenido referente a un objeto y figuran la relación de un sujeto con relación a otros, de ahí que dependen de la posición de los

sujetos en la sociedad. No son meros duplicados de lo real ni de lo ideal y constituyen el proceso de pensamiento por medio del cual se establece la relación entre sujeto y objeto.

Así las representaciones sociales son tanto el proceso como el producto de una elaboración psicológica y social de lo real. Constituyen un acto de pensamiento por medio del cual un sujeto se relaciona con un objeto.

En tanto pensamiento social, las representaciones sociales están, determinadas por el contexto socioeconómico y cultural, sin embargo una característica específica de las mismas es que se actualizan en una organización psicológica particular y cumplen una función específica. “...el concepto de representación social alude tanto a procesos cognitivos como a procesos simbólicos: de cómo un sujeto, en interacción con otros sujetos y por la interiorización de producciones socioculturales, conoce la realidad y cómo este conocimiento se convierte en productos que circulan y permiten interpretar, pensar la realidad y actuar sobre ella.” (Casado, E. 2002: 69)

“Las representaciones sociales son una rejilla de lectura de la realidad social, guían la conducta de los miembros del grupo y a su vez pueden ser modificadas por cambios en las prácticas sociales.” (Ortega, E. 2009: 66)

A diferencia de los estereotipos, las creencias y las opiniones, las representaciones sociales presentan un contenido estructurado, constituido por un conjunto de informaciones, actitudes y un núcleo figurativo o temas organizados jerárquicamente. Afirma Di Giacomo (vid en Casado, E. 2002: 73) que un criterio para determinar que nos encontramos frente a una representación social, es que esté estructurada, es decir que sea un sistema cognitivo que permite aprehender y

organizar la realidad. La estructuración tiene un carácter modélico que posibilita incorporar nuevas informaciones.

Para Abric “...toda representación es un conjunto de elementos cognitivos estructurados que se organiza alrededor de un núcleo central y de elementos periféricos.” (Abric, vid en Casado, E., 2002: 74)

El núcleo central está constituido por elementos fuertemente conectados entre ellos que le dan a la representación su significación, así las RS pueden tener el mismo contenido y variar en su organización al presentar elementos centrales o nucleares diferentes. La centralidad se define por aspectos cuantitativos que aluden a su prototipicalidad y por elementos cualitativos que le dan la significación. “El núcleo central tiene una determinación fuertemente social, está asociado a normas y valores y es relativamente independiente del contexto social específico. Presenta un <<anclaje>> social, está enraizado en la memoria colectiva del grupo que la elabora (condiciones históricas y sociales), y se conforma por elementos bastante estables y rígidos. Asimismo se corresponde con la parte más consensual y homogénea de una RS.” (Abric, vid en Casado, E. 2002: 74)

El núcleo central también es denominado núcleo duro, nodo representativo, núcleo estructural latente o principios organizadores. El semiólogo de la cultura, Iuri Lotman afirma que en toda formación semiótica está estructurada por un núcleo duro y elementos periféricos. En el núcleo central se encuentran la religión, la moral, los valores, la ideología, las normas, etc.

Los elementos periféricos dependen para su significación del núcleo central, son más accesibles, variables, comunicables, flexibles y dinámicos que aquel, por lo que se adaptan a las circunstancias particulares. Ejercen en la RS una determinación más personalizada y

contextualizada y por ello son más adaptables a circunstancias particulares, por lo que permiten un “anclaje psicológico a la realidad mediata”. (Abrie, Vid en Casado, E. 2002: 74) Los elementos periféricos son los esquemas organizados por el núcleo, los cuales permiten responder a las situaciones y modulan en forma personal la representación y la conducta sin contradicciones con el núcleo central. (Flament vid en Casado, E. 2002: 74)

El núcleo central al organizar los elementos periféricos y condicionar las cogniciones, define al objeto.--> 75 Está conformado por condiciones con un rol prescriptivo de ahí que es posible vincular la cognición y la conducta.

2.8.3. Origen y funcionamiento de las representaciones sociales

Para explicar el origen y el funcionamiento de las representaciones sociales, Moscovici desarrolló los conceptos de objetivación y anclaje, respectivamente.

Dimensiones que presenta la representación:

- a) De contexto. Ante la interacción social o estímulos sociales la representación aparece como un caso de cognición social. El juego de las relaciones intergrupales, determina la dinámica de las representaciones. Las interacciones modifican las representaciones.
- b) Dimensión de pertenencia ya que el sujeto social hace intervenir en su elaboración los aspectos de su cultura (ideas, valores, modelos que provienen del grupo al que pertenece o de ideologías.

1. Objetivación.

Proceso que explica las motivaciones de personas y grupos en la construcción social del conocimiento de sentido común y en su adquisición. Según Moscovici, el interés, la curiosidad, la disonancia cognitiva son motivaciones, pero la fundamental consiste en su opinión, en “transformar por reflexión de un colectivo, lo desconocido, en algo familiar.” (Casado, E. 2002: 75-76) El conocimiento sobre un objeto social cumple una función importante para el grupo, por lo que existe presión a la inferencia es decir para que se asuma una posición al respecto y lo desconocido debe ser relevante y amenazante para la identidad colectiva.

La elaboración de una representación social implica la difusión de conocimientos ideológicos y científicos que permanecen en la memoria colectiva, como fondo cultural en una determinada sociedad y contexto histórico. Existe un acceso diferencial al conocimiento por parte de individuos y organizaciones. Según Jodelet, la objetivación es una operación formadora de imagen y estructurante, es un proceso de concreción: lo abstracto se concretiza, el concepto se materializa, las ideas adquieren una *textura material*, las palabras se corresponden con cosas.

“Objetivizar es reabsorber un exceso de significados materializándolos.” (Moscovici, S., en Jodelete, D. 1984: 481)

El proceso de objetivación determina que lo abstracto se transforme en concreto, los conceptos o ideas, en realidades, materialización de imágenes, símbolo en signo. “Actualmente se estudia la objetivación en término de dos elementos que concentran la significación del objeto representado y su articulación con la práctica cotidiana en el interior de los grupos sociales.” (Wagner y Elejebarría en Casado, E. 2002: 77) La función social de la objetivación es facilitar la comunicación, mediante la apropiación y comunicación simplificada de conceptos y teorías complejas y abstractas.

Niveles y fases del proceso de objetivación²⁴

Según Moscovici se llevan a cabo diferentes niveles de objetivación correspondientes a distintos niveles de realidad que transitan de la ilusión completa a la realidad última; cada representación al paso de tiempo se irá saturando de realidad mediante el pensamiento y el lenguaje lo abstracto se va materializando, lo inconcebible pasa a ser concebible y esto a su vez, a ser una costumbre.

Las fases de la materialización u objetivación son:

- a) Selección y descontextualización de los elementos de una teoría, en función de criterios culturales y normativos: “sólo se retiene aquello que concuerda con el sistema ambiente de valores.” (Jodelet, D. 482)
- b) La creación de imágenes vinculadas a ideas, conceptos o palabras
- c) Estructuración de las imágenes y conceptos en un modelo o núcleo figurativo. Los conceptos teóricos se constituyen en un conjunto gráfico y coherente que permite comprenderlos de forma individual y en sus relaciones. “Una estructura de imagen reproducirá de manera visible una estructura conceptual.” (Jodelet, D. 482)
- d) Naturalización de la imagen, que es tratada como real y el concepto pierde el valor de símbolo, pierde su carácter convencional y se trata como realidad objetiva. La coordinación de los elementos en el modelo figurativo, los concretiza al naturalizarlos. Las figuras o elementos del pensamiento se convierten en elementos de la realidad, referentes para el concepto.

²⁴ Vid en Casado, : 77-78

- e) La realidad objetiva, adquiere existencia autónoma y pasa al lenguaje y a la memoria colectiva. Así su existencia se prolonga se incorpora a la cultura y facilita la reproducción de lo social. El modelo figurativo adquiere un estatus de evidencia, al ser considerado como adquirido, integra los elementos de la ciencia a una realidad de sentido común.

Lo nuevo, desconocido es integrado a lo viejo, conocido.

Los productos del proceso de objetivación conformarán el “universo consensual”²⁵ (Moscovici vid en Casado, E. 2002: 77) que es una realidad subjetiva y cambiante construida a través de la comunicación e interacción entre los individuos; dichos productos pueden hacer referencia a:

- La personificación
- Uso de metáforas
- Imágenes físicas
- Analogías

“...la objetivación la tomaremos como un proceso sociocognitivo que **condensa**²⁶ un conjunto de contenidos relevantes...de un objeto en un esquema o núcleo que aparece luego como lo natural de ese objeto.” (Casado, E. 2002: 78)

2. Anclaje

²⁵ Cfr. Asimilación en psicología genética y consenso formal en filosofía política

²⁶ Las negritas son más

Es el proceso que explica la forma en que los contenidos o productos del proceso de objetivación se anclan a la realidad social. Después de que se concede a una estructura de imágenes, valor de realidad y se materializa, comienzan a emplearse en la vida cotidiana y al funcionar adquieren significación social. “...el <<anclaje>> es un mecanismo sociocognitivo que permite explicar la inserción del conocimiento objetivado en los sistemas cognitivos preexistentes (en los sistemas simbólicos previos) así como en las relaciones sociales.” (Casado, E. 2002: 78-79)

Los elementos nucleares de una representación social se insertan y relacionan con otros elementos del universo simbólico de una sociedad, como los valores, categorías, tipologías, etc. Para Moscovici, el anclaje supone la inserción de nuevos elementos del saber en una jerarquía de valores y una red de categorías más familiares²⁷. Es también la instrumentalización del saber y un mecanismo que interviene en la consolidación y el funcionamiento de la representación social.

Procesos cognitivos que dan cuenta del anclaje, vinculados con la categorización según Doise: (vid en Casado, E. 2002: 79).

- Asimilación
- Contrastación
- Categorización prototípica. Facilita la incorporación de nuevos elementos al conocimiento preexistente. Etiquetamiento.
- Prototipicidad
- Memorización

²⁷ Cfr. Estructuras y acomodación en psicología genética

- Juicio

El comportamiento objetivado se emplea como marco de interpretación o guía de lectura de la realidad. Las representaciones sociales se comportan como teorías implícitas que describen, evalúan, explican, prevén, guían y justifican el comportamiento. El anclaje es el marco de referencia para interpretar y actuar sobre la realidad, es la instrumentalización del saber.

El anclaje al ser un sistema de interpretación se fundamenta en los aspectos nucleares de la representación. Doise considera que de acuerdo con los niveles de explicación, existen tres tipos de anclaje:

- a) Anclaje psicológico. Se refiere al estudio de las representaciones sociales en cuanto fenómenos intra e interindividuales
- b) Anclaje Psicosociológico. Supone la imbricación de la representación social con respecto a cómo se ubican los individuos simbólicamente en función de las relaciones, posiciones o categorías sociales existentes.
- c) Anclaje sociológico. Mecanismo por medio del cual se establece el vínculo entre la representación social y la pertenencia a determinadas posiciones sociales.

2.8.4. Dinámica de las representaciones sociales

Es una noción dinámica porque aborda la diversidad dentro de la homogeneidad y los aspectos dinámicos del pensamiento que permiten la transformación de una representación social ya estructurada. Aunque tienden a ser conservadoras y estables, se dan cambios en las mismas. Los elementos nucleares de una representación son muy estables en contraste con los elementos periféricos.

Los elementos periféricos defienden la coherencia y congruencia del núcleo central. Al cambiar las prácticas sociales como consecuencia de las circunstancias externas, inciden en nuevos comportamientos que modifican los esquemas periféricos.

Las cinco características fundamentales de representación: (Casado, E. 2002: 81)

1. Siempre es la representación de un objeto
2. Tiene un carácter de imagen y la propiedad de poder intercambiar lo sensible y la idea, la percepción y el concepto.
3. Tiene un carácter simbólico y significativo
4. Tiene un carácter constructivo
5. Tiene un carácter autónomo y creativo

2.8.5. Funciones de las representaciones sociales

1. Funciones de saber. Permite a los individuos adquirir conocimientos e integrarlos en un marco comprensible. Son indispensables para la comunicación social al definir un marco de referencia común que posibilita la interacción social. Función cognitiva: entender y explicar.
2. Funciones identitarias, ya que sitúan a los individuos y los grupos en el campo social, compatible con los sistemas de normas y valores social e históricamente determinados. Participa en los procesos de comparación social y permite salvaguardar una imagen positiva de su grupo de pertenencia.

3. Funciones de orientación de los comportamientos y las prácticas. Interviene determinando la finalidad de la situación y con ello el tipo de relaciones y el tipo de gestión cognitiva por adoptar. Produce un sistema de anticipaciones y expectativas, preceden y determinan las interacciones. La representación es prescriptiva.
4. Funciones justificadoras. Permiten también justificar y explicar sus acciones. "...Tiene
5. por función perpetuar y justificar la diferenciación social. (Abric, J. C. 2001: 17)

2.8.6. Lo simbólico en la construcción de representaciones sociales²⁸

"Todo proceso de conocimiento de la realidad está mediado por procesos simbólicos."
(Casado, E. 2002: 62)

En tanto es un acto de representación de un objeto, que incluso puede ser mítico o imaginario, supone el *sustituir a, estar en lugar de*, remite a otra cosa y por ello está en relación con el símbolo y con el signo. Por otra parte re-presentar es volver a hacer presente un objeto en la mente, en la conciencia, es la reproducción mental de otra cosa, sea persona, acontecimiento, idea, etc. La restitución simbólica de algo ausente que se realiza por medio de la representación, le proporciona a la misma, un carácter de imagen.

La representación implica una reproducción y reconstrucción mental del objeto, remite a algo que sustituye simbólicamente y afirma Casado que aunque se expresa como imagen a un nivel concreto. No puede confundirse con ella, ya que no es mero reflejo del mundo en la mente; cuando se alude a ella como imagen, se está haciendo referencia a la participación de lo imaginario en la interpretación y atribución de significados en un determinado marco

²⁸ Cfr. Guriévich: cuadro del mundo, Villoro: figura del mundo

sociocultural. La representación es construcción, ya que es significativa, los objetos adquieren un sentido y son interpretados en el marco de un espacio sociocultural determinado.

No es simple representación, sino construcción y conlleva una parte de creación colectiva y otra de creación individual o autonomía. Por esta doble determinación, la representación social presenta dos caras en su estructura, el aspecto figurativo (la imagen) y el aspecto significativo (simbólico). “Decimos que representación igual a figura, igual a sentido, lo que significa que la representación hace que toda figura corresponda a un sentido y a todo sentido corresponda una figura.” (Jodelet, D. En Moscovici, S. 1984: 476)

En el mismo sentido, afirman Jodelet y Abric, que la representación no es un puro reflejo del mundo exterior, no es reproducción pasiva, sino una *organización significativa*. Cuando se emplea el concepto imagen en representaciones sociales, alude al imaginario, es un conjunto figurativo de rasgos de carácter concreto. Este concepto fue incorporado a la psicología social, precisamente para dar cuenta de las interacciones significativas de las personas con el mundo, lo que implica que siempre hay una parte de actividad de construcción y reconstrucción en el acto de representación.

El proceso de conocimiento está mediado por procesos simbólicos, de ahí que cobran relevancia para la psicología social, los contenidos del conocimiento, además de los procesos cognitivos, “...ambos aspectos restituyen simbólicamente algo que está ausente.” (Casado, E. 2002: 68) Los conceptos o ideas pasan a formar parte de las propiedades que constituyen al objeto, los contenidos forman parte de la realidad del objeto, le dan sentido y significación en un contexto social determinado y explican la acción social, la práctica social sobre los objetos. Por lo anterior, se afirma que la realidad es parcialmente simbólica pues “el sujeto construye al objeto en la medida en que se lo representa.” (Banchs, vid en Casado, E. 2002: 63)

El sujeto es productor de sentido, expresa en su representación el sentido que da a su experiencia en el mundo social (Jodelet, D. en Moscovici, S. 1984: 479) cuando es propia de sujetos que comparten una misma experiencia o condición social, la representación plantea una dinámica que hace aparecer lo imaginario.

La significación es uno de los componentes fundamentales de la representación y está determinada por el contexto discursivo y por el contexto social. Es importante analizar las condiciones de producción del discurso a partir del cual se formulan las representaciones sociales. Asimismo resulta imprescindible analizar el contexto ideológico y por la posición que ocupan el individuo o el grupo en el sistema social como lo afirma Doise: “La significación de una representación social, está entrelazada o anclada siempre en significaciones más generales que intervienen en las relaciones simbólicas propias al campo social dado.” (Doise, vid en Abric, J.C. 2001: 15)

Las representaciones sociales son vehiculizadas por el discurso ya que son interacciones comunicativas. Al ser considerada también como una forma de discurso, sus características se desprenden de la práctica discursiva de los sujetos situados en la sociedad.

“El juego del simbolismo social se impone a nuestro sujeto, el cual, a su vez, lo manipula con fines de expresión.” (Jodelet, D. 478). Determina un conjunto de expectativas y anticipaciones. La representación funciona como un sistema de interpretación de la realidad, funciona como una guía para la acción y para las relaciones sociales.

Plantea Abric, (vid en Casado, E. 2002: 63) que la dinámica de la interacción y las prácticas sociales requieren ser comprendidas a la luz de la visión o pensamiento que los individuos y grupos tienen y usan para comprender el mundo, incluyéndose a sí mismos, a los otros y sus

relaciones. La visión o realidad representada es construida socialmente y cumple a su vez funciones sociales determinadas ya que los procesos sociocognitivos son mediadores de la acción.

En el proceso de representación social se reproducen o reconstruyen ideologías, pensamientos, normas, valores, se mantienen o transforman formas de organización y contenidos sociales, etc. Estos productos sociales trascienden al individuo, al permanecer en el tiempo, se incorporan a la memoria colectiva y se vuelven autónomos para convertirse en pensamiento social con el que se construyen los procesos psicológicos y psicosociales que guían el comportamiento, la comunicación y las relaciones sociales.

Al ser procesos sociocognitivos generan nuevas propiedades psicológicas que dan estructura social a las mentes individuales, ya que la interacción crea diversos productos colectivos que son internalizados por los individuos y crean estructuras sociocognitivas que afectan los juicios, la percepción, el comportamiento y la comunicación entre individuos y grupos. Para que la comunicación se realice, se requiere un sistema de símbolos y signos compartidos, en términos generales, un conocimiento compartido. Las representaciones sociales se expresan siempre a través de categorías de lenguaje

2.8.7. El otro (*Alter*) en la construcción de las representaciones sociales

Dado que las representaciones sociales se construyen en la interacción social, la presencia del otro es indispensable. Moscovici concibe la interacción social como una unidad global que se constituye por la interdependencia real o simbólica de varios sujetos en su interrelación con un ambiente físico o social común. La plantea como una relación compleja y dinámica, en la que

participa la comunicación de la que surgen nuevos fenómenos que comprometen a los participantes, sus relaciones y sus realidades.

En el conocimiento de sentido común y particularmente en la construcción de representaciones sociales hay vínculos intersubjetivos y sociales que median la relación del sujeto con la realidad, en términos de Moscovici: "...la relación sujeto-objeto está mediatizada por la intervención de otro sujeto, de un *`Alter`* y se convierte en una relación compleja de sujeto a sujeto y de sujetos a objetos..." (Moscovici, S. vid en Casado, E. *: 63)

2.8.8 Derivaciones metodológicas de la teoría de las representaciones sociales.

Necesidad de contextualizar las representaciones sociales para su comprensión: "Al tomar este objeto de estudio (la interacción social comunicativa), el análisis se vuelca hacia los procesos y productos que emergen de la actividad entre individuos en un contexto sociocultural determinado" (Casado, E. 2002: 64)

Uno de los aspectos importantes cuando se investiga sobre las RS es estudiar sus contenidos (¿Qué se sabe o piensa sobre una determinada realidad) Las RS son "definiciones específicas de un objeto compartidas por los miembros de un mismo grupo." (principios o dimensiones compartidas) (Casado, E. 2002: 70) En el pensamiento social cotidiano, los procesos y los contenidos son inseparables (Moscovici, 1982, Banchs, 1998, vid en Casado, E. 2002:61) Las RS hacen referencia a los actos de pensamiento (procesos cognitivos formales) como a los contenidos socioculturalmente determinados. (Casado 68)

Para comprender el contenido y la dinámica de una representación es necesario referirse al contexto social y al contexto discursivo. El conocimiento compartido no implica siempre igualdad de contenidos o de actitudes representativas, sino igualdad en los elementos centrales

nucleares o en los principios generadores. (Casado, E. 2002: 70) El consenso no es pues, una característica esencial de las RS, lo importante es llegar a explicitar la igualdad de los principios de regulación que pueden estar implícitos en la diversidad de opiniones, de actitudes o de tomas de posiciones. (Casado 71) Es posible hablar de RS dominantes o estereotipos y otras que pueden ser sustentadas por grupos minoritarios.

Orientar los estudios en un plano colectivo dando prioridad a los vínculos intersubjetivos y sociales que median entre los vínculos directos con la realidad. (Casado, E. 2002: 63) La interacción social comunicativa es la unidad de estudio de la Psicología Social y de la Teoría de las Representaciones Sociales. Facilita captar la interacción recíproca entre individuo, sociedad y cultura. (Por lo tanto es necesario definir discurso y comunicación, texto)

Conclusiones

Esta teoría tiene influencias de diversas disciplinas y corrientes, entre las que sobresalen la sociología durkheimiana, la epistemología, específicamente la Epistemología Genética elaborada por Jean Piaget, el marxismo, el psicoanálisis, así como la semiótica.

Sus aportaciones al campo de las disciplinas sociales, a la psicología son de gran relevancia porque permiten estudiar aspectos de la relación entre individuos y grupos, da cuenta de los aspectos sociales, culturales, económicos y en general, contextuales, así como de los individuales presentes en toda interacción social. Asimismo aborda un aspecto de gran relevancia para las citadas interacciones, la forma en que los seres humanos dotamos de sentido a nuestras acciones, a partir de nuestras creencias compartidas y socioculturalmente estructuradas.

III Metodología

El presente apartado metodológico se ha diseñado a partir de las preguntas que se han formulado como guía de la investigación, así como de los objetivos que se pretenden alcanzar y de las hipótesis que se plantean, con la intención de mantener coherencia. A fin de ubicarnos en la perspectiva correspondiente, retomaré dichos elementos que estructuran la investigación como marco para el diseño metodológico.

3.1. Preguntas de investigación

¿Cuáles son las principales representaciones y prácticas sociales relativas a la ciudadanía en Monterrey, en el momento presente?

¿Qué virtudes cívicas se expresan a través de las representaciones y prácticas ciudadanas identificadas?

¿Qué distancia existe entre las virtudes cívicas identificadas, respecto de las que se esgrimen para la democracia verde?

3.2. Hipótesis

En Monterrey, la noción de ciudadanía se encuentra muy distante de las virtudes cívicas constitutivas de una democracia verde.

La formación de virtudes cívicas contribuye a la constitución de una democracia verde.

3.3. Propuesta metodológica

Teniendo en consideración que el objeto de estudio de la presente investigación es la identificación, el análisis y la caracterización de los valores ciudadanos o virtudes cívicas que se captan en las representaciones y prácticas sociales sobre ciudadanía de los habitantes adultos de la ciudad de Monterrey, el enfoque metodológico que resulta pertinente y que arroja la información que permita su identificación y caracterización es el cualitativo. Por lo anterior, el estudio será fenomenológico y sincrónico (aquí y ahora) primordialmente. Sin embargo debido a que la metodología de construcción de las representaciones sociales plantea obtener datos cuantitativos para determinar la estructura y el contenido de las representaciones, así como el núcleo central, se trabajará también el enfoque cuantitativo, como apoyo para la interpretación cualitativa.

El enfoque cualitativo es el más pertinente para abordar las representaciones y prácticas sociales acerca de la ciudadanía, que presentan los propios ciudadanos regiomontanos, ya que como afirman Taylor y Bogdan: “El fenomenólogo quiere *entender* los fenómenos sociales desde la propia perspectiva del actor. Examina el modo en que se experimenta el mundo. La realidad que importa es lo que las personas perciben como importante.” (Taylor, S. y Bogdan, R. 1987: 16)

“El enfoque cualitativo persigue un análisis en profundidad de un número más reducido de casos, con el propósito de explorar determinados procesos o contextos de forma detallada (Wittrock), entender la forma en que las personas construyen la realidad social (De Miguel), describir el significado que los individuos atribuyen a los procesos psicosociales que experimentan (Castro Nogueira), y comprender lo más profundamente posible un fenómeno vital o situación determinada.” (Izcara, S. 2007: 12)

La metodología cualitativa, se refiere en sentido amplio a la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta observable. La perspectiva fenomenológica está ligada con la teoría y metodología de las representaciones sociales.

Este enfoque resulta pertinente al estudio de las representaciones sociales, definidas como: “Una manera de interpretar y de pensar nuestra realidad cotidiana, una *forma de conocimiento social*. Y correlativamente, la actividad mental desplegada por individuos y grupos a fin de fijar su posición en relación con situaciones, acontecimientos, objetos y comunicaciones que les conciernen.” (Jodelet, D. en Moscovici, S. 1984: 473)

Lo anterior, atendiendo al hecho de que: “Para el fenomenólogo, la conducta humana, lo que la gente dice y hace es producto del modo en que define su mundo...” (Taylor, S. y Bogdan, R. 1987: 23)

El enfoque cuantitativo pretende establecer relaciones entre variables y medirlas en un contexto determinado a fin de llegar a proposiciones precisas y establecer recomendaciones, así como conclusiones en relación con las hipótesis.

3.4. Estrategia

Elisa Casado plantea que la unidad de estudio de las representaciones sociales, más claramente social y de mayor consenso es la interacción social comunicativa, por lo que el análisis se vuelca hacia los procesos y productos que emergen de la actividad entre individuos en un contexto sociocultural determinado.

Considerando lo anterior y a fin de caracterizar las virtudes cívicas en las representaciones sociales sobre ciudadanía, se aplicarán cuestionarios con preguntas abiertas que propicien la

asociación libre, así como la asociación libre jerarquizada. Estas técnicas son las que propone Jean- Claude Abric (2001) para captar las representaciones sociales y para delimitar el núcleo central y los elementos periféricos. Las preguntas abiertas permiten a los informantes contestar bajo sus propios términos, captando matices en las respuestas y seleccionar sus propias categorías.

Se llevará a cabo un análisis de discurso de corte cualitativo que permita realizar una interpretación densa (Geertz, C. 2000). Se efectuará también, en forma simultánea, un trabajo cuantitativo de los datos obtenidos a través de las preguntas cerradas y del tratamiento estadístico de las categorías que se construyan a partir del análisis del discurso. Como resultado se obtendrá información en dos niveles complementarios: una interpretación cualitativa y caracterización de las virtudes cívicas implícitas en las representaciones y prácticas sociales acerca de la ciudadanía y datos que puedan ser contrastados con indicadores.

3.5 Determinación de la población y la muestra.

Universo poblacional.

Hombres y mujeres adultos, habitantes de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León que ostentan la ciudadanía mexicana.

El universo poblacional ha sido delimitado a los habitantes adultos, hombres y mujeres, de la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, considerando que concentra la mayor densidad de población del mismo y es además una de las tres mayores urbes del país. Monterrey es una importante zona de desarrollo económico en el ámbito nacional, principalmente por sus actividades industriales y de servicios, estos últimos, entre los que destacan los de educación, salud, comunicaciones y turísticos. En tal sentido las representaciones sociales acerca de

ciudadanía que poseen sus habitantes resultan importantes en el marco más amplio de los procesos de construcción de una democracia verde en el país.

Esta ciudad es también polo de atracción de migrantes nacionales y extranjeros, muchos de los cuáles han hecho de ella su lugar de residencia definitiva y han solicitado la nacionalización, por lo que caracterizar los significados y alcances de la ciudadanía resulta relevante.

Aunado a lo anterior, existe el interés por parte del Estado y los sectores académico y empresarial, porque Monterrey llegue a ser una ciudad del conocimiento, lo cual implica la necesidad de alcanzar un alto índice de desarrollo científico, tecnológico e industrial, así como un elevado nivel educativo de sus habitantes, que en su totalidad requieren formar parte activa de dicho proceso mediante la creación de nuevos conocimientos y su aplicación a la resolución de problemas concretos. Para dicha participación ciudadana activa, se requieren también transformaciones culturales y democráticas. Precisamente, entre los aspectos primordiales de la educación que los habitantes de una ciudad del conocimiento requieren a fin de prepararlos para la gobernabilidad democrática que implica la participación, consiste en la formación ciudadana que promueve en ellos el desarrollo de las virtudes cívicas necesarias para el logro de una gobernabilidad democrática de tales ciudades en un marco de sustentabilidad.

Por las razones antes expuestas, el estudio de las representaciones sociales acerca de la ciudadanía que ostentan los habitantes de Monterrey, resulta fundamental para el logro de los objetivos de alcanzar una democracia verde en el ámbito estatal y nacional.

3.6. Diseño y aplicación de instrumentos para recabar información

- Se diseñó y piloteó el cuestionario²⁹: “Representaciones y prácticas sociales sobre ciudadanía desde la perspectiva axiológica y su relación con la democracia verde.”
- Para el diseño y la aplicación de los cuestionarios, se empleó la Metodología de Recolección de las Representaciones Sociales propuesta por Jean-Claude, Abric (2001). Con tal finalidad, se diseñó un cuestionario conformado por 46 preguntas en total, que se aplicó a 60 informantes. La muestra está constituida por estudiantes de nivel licenciatura de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Estructura de los cuestionarios:

Cinco secciones con diferentes tipos de ítems y orientación temática.

Sección I.

16 preguntas abiertas con el fin de estimular la asociación libre y evocar con ello las representaciones sociales.

- ❖ Nociones de ciudadano
- ❖ Rasgos que caracterizan al buen y mal ciudadano
- ❖ Derechos y obligaciones del ciudadano mexicano
- ❖ Ciudadanía
- ❖ Valores que se asocian con la ciudadanía
- ❖ Noción de democracia y condiciones para la misma en Monterrey

²⁹ Ver anexo 1. Cuestionario .

Sección II.

2 preguntas abiertas:

- ❖ Rasgos característicos del buen y el mal ciudadanos. Explora primordialmente los valores y disvalores que se atribuyen a los ciudadanos.
- a) Se responden con cinco opciones cada una
- b) Posterior jerarquización de las opciones por los propios informantes según importancia asignada personalmente

Sección III

23 preguntas con una serie de opciones que se combinan con un espacio abierto para complementar información.

- ❖ Derechos que se disfrutan
- ❖ Condiciones particulares indispensables y existentes para una vida democrática en Monterrey.

Sección IV.

Constituida por 3 preguntas, cada una de las cuales plantea una serie de opciones a las que responde el informante.

- ❖ Las preguntas indagan acerca de las libertades que disfrutamos en Monterrey en la vida diaria
- ❖ Aspectos relativos a la participación ciudadana

- ❖ Tipos de organización y actividades en que participan, indicando la frecuencia con que lo hacen.
- ❖ Esta última sección se refiere a las prácticas de participación ciudadana efectiva y permite la contrastación con las representaciones sociales.

Sección V.

2 preguntas con respuestas abiertas.

- ❖ solicitan al informante propuestas para la formación ciudadana y experiencias significativas de su participación ciudadana.

En total 46 preguntas conformaron el cuestionario

- Aplicación de cuestionarios

Es importante señalar que la aplicación de instrumentos a la población abierta en general, se vio obstaculizada por el contexto de gran violencia e inseguridad de nuestra entidad federativa y particularmente de Monterrey y el área metropolitana que generan una gran desconfianza entre la población en el momento en que se les requiere información, sobre todo cuando aborda temas políticos. Por lo anterior, el instrumento se aplicó a estudiantes y egresados de distintas licenciaturas de la UANL, población a la que se tiene más cercanía y facilidad de acceso. Lo anterior considerando además que las características del cuestionario: abierto y compuesto por 46 ítems, demandaron una gran cantidad de tiempo para ser contestados, en promedio de 45 minutos a una hora por informante.

Unidad de análisis

Las representaciones y prácticas sociales sobre ciudadanía que se presentan en estudiantes adultos de la ciudad de Monterrey.

Muestreo.

Es importante señalar, de acuerdo con Simón Izcara, que: “El rigor científico de una investigación no está determinado por el tipo de muestreo utilizado, sino por la utilización de un diseño metodológico adecuado para dar respuesta a los objetivos perseguidos, y la aplicación de un diseño muestral riguroso.” (Izcara, S. 2007: 15)

En tal sentido, para la obtención de las muestras realizaré un muestreo intencional³⁰, (Izcara, S. 2007: 21), en el cual el investigador decide qué individuos formarán parte de la muestra y el tamaño de la misma. Afirma Izcara: “El muestreo intencional es aquel mediante el cual el investigador selecciona de forma no aleatoria a individuos caracterizados por una riqueza de información en torno al fenómeno social que se pretende estudiar.” (Izcara, S. 2007: 12)

“La lógica del muestreo intencional aparece cimentada en la selección de casos ricos en información, que serán objeto de estudio en profundidad...El método cualitativo haciendo uso del muestreo intencional (no probabilístico), pretende profundizar en aspectos concretos de la realidad social, a través de la interpretación y análisis de los discursos de los actores sociales, sin perseguir la generalización de los resultados a la población general en términos de error calculable estadísticamente.” (Izcara, S. 2007: 21)

“En el muestreo teórico el número de casos estudiados carece relativamente de importancia. Lo importante es el potencial de cada caso para ayudar al investigador en el

³⁰ Muestreo intencional, conocido como muestreo teórico por Taylor, * y Bogdan, *: Introducción a los métodos cualitativos de investigación, y como muestreo no probabilístico o dirigido por Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, Pilar. Metodología de la Investigación. **

desarrollo de comprensiones teóricas sobre el área estudiada de la vida social.” (Taylor, S. y Bogdan, R. 1987: 108)

Para determinar las unidades de análisis que serían estudiadas, realicé un muestreo intencional bola de nieve.

El muestreo en cadena o *bola de nieve*³¹ consiste en la selección de la muestra a partir de la ayuda de una serie de informantes que guían y sirven de enlace al investigador en la selección de nuevos informantes.

Determinación de la muestra

Como se ha mencionado, en la investigación cualitativa es el investigador quien decide qué individuos formarán parte de la muestra, considerando su conocimiento y aptitud para informar sobre un tema específico y cuál será el tamaño de la misma.

La muestra estuvo conformada por 60 informantes.

En el muestreo intencional se selecciona un pequeño número de casos que presentan gran riqueza de información. Respecto al tamaño de la muestra en el muestreo intencional, Izcara sostiene que: “Las muestras son desconcertantemente pequeñas para los estándares manejados por la investigación cuantitativa. (Izcara, S. 2007: 21)

En el anexo 2 se incluyen los cuestionarios respondidos que se encuentran digitalizados. Hay un porcentaje de cuestionarios que fueron respondidos en papel.

En el anexo 3 puede conocerse la distribución de frecuencias en Excel.

³¹ Taylor, S. y Bogdan, R. Muestreo Bola de Nieve

En el anexo 4 puede consultarse el Ejercicio de Articulación analítica que representa un primer nivel de categorización, a partir de la distribución de frecuencias.

3.7. Métodos y técnicas para el análisis de información

❖ Se aplicaron 60 cuestionarios.

- a) Se trabajó con la metodología de análisis de contenido de Madeleine Grawitz, adaptada al análisis de corte cualitativo.
- b) Se aplicó el Método Comparativo Constante (MCC), procedimiento de la Grounded Theoryⁱ, que permite estudiar los contenidos y la estructura interna de las representaciones sociales. A continuación presento las etapas y actividades que llevé a cabo como parte de la citada metodología.

Ambas metodologías se combinaron.

- a) Análisis de contenido de corte cualitativo. Madeleine Grawitz

Descripción de etapas y actividades:

- 1. Construcción de una matriz de distribución de frecuencias. Incluye todas los ítems del cuestionario y cada una de sus opciones
- 2. A partir de los cuestionarios aplicados se vació la información a la matriz
- 3. Primer ejercicio de análisis de la información y categorización.
 - 3.1 Identificación de temas y conceptos emergentes
 - 3.2 Clasificación de los temas y conceptos relacionados o sinónimos
 - 3.3 Determinación de categorías
 - 3.4 Cálculo de las frecuencias en que se presentaron los conceptos

- 3.5 Determinación de porcentajes a partir del número de frecuencias en relación con la muestra. Cada sujeto expresó más de un concepto y fueron contabilizados en su totalidad.
4. Segundo ejercicio de categorización. A partir del análisis e interpretación de la información, se hizo una revisión y depuración de las categorías, con apoyo teórico. Se aplicaron criterios de generalización, extensión, exclusividad, precisión, etc. que marca la metodología de Grawitz.
 5. Presentación de los resultados. Después del primer ejercicio de análisis de la información y categorización, se agruparon los resultados de acuerdo a la forma en que se obtuvo la información.
 6. Para las preguntas que solicitaron jerarquizaciones, se calculó el Rango.

b) Método Comparativo Constante (MCC)³²:

I Etapas de reconstrucción de las representaciones sociales:

1) Análisis Descriptivo. Reconstrucción inductiva de categorías a partir de elementos particulares y contenidos socialmente compartidos por medio de comparaciones de representaciones singulares. Descripción exhaustiva de los contenidos de las RS del grupo social investigado.

1.1 Etapas del análisis descriptivo.

A. Fragmentación

B. Conceptualización

C. Articulación analítica

³² La metodología se encuentra explicada ampliamente en: Araya Umaña Sandra. "Las representaciones sociales: ejes teóricos para su discusión." En Cuadernos de Ciencias Sociales 127. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. FLACSO. Sede Académica Costa Rica. Octubre 2002

D. Comparación constante de los datos codificados

E. Registro verbal y gráfico de los datos generados a partir de las comparaciones

2) Análisis relacional o reconstrucción del núcleo central

Reconstrucción de la estructura interna de las RS, es decir las relaciones y jerarquías que existen entre sus diferentes contenidos.

Etapas:

A. Codificación axial. Generar diferentes modelos comprensivos sobre diferentes aspectos que se destacan en los resultados.

B. Codificación selectiva.

C. Construir un modelo comprensivo general que articula los aspectos esenciales de los resultados en torno a un fenómeno central que representa el núcleo central.

D. Junto con la comparación constante, implica reducción de categorías por descarte, fusión o transformación.

Paradigma de codificación. Permite contextualizar la producción de las representaciones sociales.

2. Discusión de los resultados

A partir de la categorización y tomando en consideración las frecuencias de aparición y las relaciones entre las categorías, se determinó el núcleo central y los elementos periféricos. Este ejercicio se hizo pregunta por pregunta y posteriormente se realizó el análisis global o total del

cuestionario, trabajando con un mapa de categorías que permitiera la representación de las relaciones entre todos los temas de todos los ítems.

Una vez elaborado el mapa de categorías de los resultados obtenidos, realicé un trabajo de interpretación de la información obtenida, de sus relaciones, de la estructura en la que se presentan los datos; analizando el núcleo central y los elementos periféricos. El trabajo de interpretación consistió, además de la determinación del contenido y la estructura de las representaciones sociales, en la discusión de los datos obtenidos, con apoyo teórico.

Dicha discusión e interpretación teórica me permitió construir la representación social de la ciudadanía, de la democracia, así como captar las prácticas sociales reales que en materia de ciudadanía, participación democrática posee la población.

En anexos se pueden consultar tanto los cuestionarios aplicados y digitalizados, como la información que arrojaron, la tabla de distribución de frecuencias de las respuestas, los ejercicios de análisis que lleve a cabo y la primera presentación de los resultados de los mismos.

3.8. Presentación de resultados. Representaciones sociales del ciudadano y la ciudadanía en Monterrey, N.L.

3.8.1. Ejercicio de articulación analítica. Tablas de resultados.

Los resultados obtenidos al analizar la información recabada, permiten captar una diversidad de temas emergentes y la frecuencia con que se presentaron. La agrupación y clasificación de los temas emergentes por cada pregunta dio lugar a la construcción de categorías. La frecuencia total que presenta cada categoría está constituida por la cantidad de veces en las que aparecen los temas que agrupa.

Las preguntas que solicitaron una jerarquización de las respuestas que el informante proporcionó en un primer momento, además de la frecuencia, presentan el rango que ocupan en las representaciones sociales. Se presenta en otro apartado posterior, la construcción de las mismas.

I Nociones sobre el ciudadano y la ciudadanía

De acuerdo con los resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos, las principales categorías o dimensiones que serán constituyentes de las representaciones sociales del ciudadano, la ciudadanía y la democracia son las siguientes:

I Nociones sobre el ciudadano y la ciudadanía

Tabla 1. Ciudadano

Concepto	Porcentaje total
Habitante	57%
Persona	48%
Identidad	44%
Pertenencia	35%
Titularidad de obligaciones	33%
Titularidad de derechos	26%

Tabla 2. Ciudadanía

Concepto	Porcentaje total
Pertenencia. Respeto a la comunidad , a sus leyes, normas y obligaciones.	52% Núcleo central
Nacionalidad. Estatus jurídico formal: residente, habitante, mayoría de edad.	48%
Participación: cooperación	22%
Ejercer sus derechos	4% elementos periféricos

Tabla 3. Qué suele llamarse ciudadanía

Concepto	Porcentaj total
Estatus jurídico- político:	98% Núcleo central

nacionalidad, pertenencia, estatus jurídico, titularidad de derechos y obligaciones.	
Habitante.	50%
Participación	7.4% elementos periféricos
Ejercicio de derechos.	1.8% elementos periféricos

Tabla 4. No ciudadanos

Concepto	Porcentaje total
No tienen sentido de pertenencia ni reconocimiento jurídico político.	100% Núcleo central
Transgreden las leyes e incumplen con las normas y obligaciones	68.5%
No hay exclusión	37%
No participan en la comunidad	11% elemento periférico

II Valores relacionados con la ciudadanía

Tabla 5. Rasgos de un buen ciudadano

Concepto	Frecuencia total
Respetuoso. Respeta leyes, normas, obligaciones, a la patria, a las autoridades, a los demás y sus derechos.	74% Núcleo central
Tiene sentido de pertenencia: es responsable consigo mismo, con los demás, con la naturaleza y con el bien común. Es respetuoso.	55%
Participación a favor de su comunidad.	41%
Justicia: honesto, sincero y legal.	22%
Educado	9% elemento periférico
Ejercer sus derechos	9% elemento periférico
Exigir sus derechos	5.5 % elemento periférico
Cuidar la naturaleza	4% elemento periférico

Tabla 6. Rasgos de un mal ciudadano

Concepto	Porcentaje total
Transgresor: incumple obligaciones, no respeta leyes, delinque, corrupto, deshonesto, violento, ilegal.	100%
Irrespetuoso de los demás y de las autoridades. Relacionado con la transgresión.	61%
No participa en la comunidad: no colabora.	26%

Tabla 7. Valores asociados a la ciudadanía.

Concepto	Porcentaje total
Respeto: a las leyes y normas, a la dignidad, tolerancia y empatía.	44%
Respeto	24%
Solidaridad: ayuda comunitaria, empatía, generosidad.	20%
Responsabilidad: cumplir obligaciones, acatar leyes, establecer compromisos.	17%

Tabla 8. Valores de un buen ciudadano (jerarquizados)

Concepto	Porcentaje total
1. Respeto	26%
2. Responsabilidad	24%
3. Responsabilidad	35%
4. Honestidad	24%
5. Solidaridad	37%

Cada uno de los valores que se presentan en el cuadro, recibió el mayor porcentaje de frecuencias en cada nivel de la jerarquización que realizaron los informantes. Por lo anterior el porcentaje puede ser más alto en el tercer y en el quinto lugares.

Tabla 9. Contravalores que caracterizan a un mal ciudadano (jerarquizados)

Concepto	Porcentaje total
1. Deshonestidad	100%
2. Deshonestidad	100%
3. Deshonestidad	100%
4. Deshonestidad	100%

5. Deshonestidad	100%
------------------	------

Para esta pregunta, es imprescindible hacer notar que en las respuestas, los primeros lugares de cada uno de los niveles de valoración, -del primero al quinto-, hacen referencia al mismo contravalor: la deshonestidad.

III Identidad de los ciudadanos mexicanos

Tabla 10. Rasgos de identidad como ciudadanos mexicanos

Concepto	Porcentaje total
Cultura	89%
Nacionalidad	74%
Titularidad de derechos y obligaciones	52%
Rasgos negativos	31%

Tabla 11. Rasgos distintivos de identidad como ciudadanos mexicanos

Concepto	Porcentaje total
Cultura, sentido de pertenencia	
Estatus jurídico- político: titularidad y ejercicio de derechos y obligaciones, destacan los civiles y políticos: libertades de expresión, decisión, elegir lugar en dónde vivir y en dónde trabajar.	

Tabla 12. Descripción de la ciudadanía regiomontana

Concepto	Porcentaje total
Trabajadora, responsable y emprendedora, valores arraigados: buenos principios, sincera, honesta, patriota.	33%
Apática: desinformada, desorganizada, desconfiada, convenenciera, deshonesto, atemorizada.	31%

IV Derechos y obligaciones de los ciudadanos mexicanos

Tabla 13. Derechos

Concepto	Porcentaje total
Derecho a la educación	70%
Libertades: expresión,	44%

agrupación, elección del lugar de residencia, tránsito, manifestación, acción.	
Salud y sufragio	26%
Derechos políticos: elegir representantes, ser votados, buen gobierno, exigir rendición de cuentas.	15%
Derecho a la vida	11%
Igualdad, justicia, vivir en paz, familia, huelga.	Elementos periféricos

Tabla 14. Obligaciones de los ciudadanos mexicanos

Concepto	Porcentaje total
Respeto a las leyes, normas y obligaciones: cumplir leyes, pagar impuestos, sufragio.	100%
Respeto a la nación: símbolos patrios, constitución, Buscar bien común: cuidar país, recursos naturales, medioambiente.	67%
Participación política: votar	41%

V Prácticas sociales relativas a la ciudadanía. Participación

En esta sección se presentan los resultados del grupo de preguntas acerca de las prácticas ciudadanas, es decir, aquellas que se relacionan con la participación efectiva de los informantes. La intención es contrastar este grupo de respuestas con las representaciones sociales sobre ciudadanía.

Tabla 15. Qué hace para ser un buen ciudadano

Concepto	Porcentaje Total
Cumplir u obedecer las leyes, obligaciones, deberes como mexicano, normas establecidas.	74%
Contribución al bien común, cooperación, buen comportamiento.	46%
Respeto a la patria y a los demás	39%
Respeto y cuidado al medioambiente	26%
Participación política y exigencia de derechos.	26%

Tabla 16. Realización del servicio militar (Varones)

Concepto	Porcentaje total
Obligación	96%
Servicio a la patria	3%

Tabla 17. Conocimiento de la existencia de instituciones que promueven la participación ciudadana.

Concepto	Porcentaje total
No existen o no conocen	52%
Si existen. *	46% *Sólo el 24% de las instituciones que proponen son correctas.

Tabla 18. ¿En qué tipo de organizaciones participa, con qué frecuencia lo hace y cuánto tiempo le dedica?

Concepto	Porcentaje total
Clubes deportivos	30% 12 horas/mes promedio
Grupos de la iglesia	26% 17 hrs/mes promedio
Clubes sociales	17% 11 hrs/mes promedio
Comités y redes vecinales	13% 2 hrs/mes promedio
Comités, consejos y organizaciones ciudadanas	9% No especifican tiempo
Actividades estudiantiles en beneficio a la comunidad	8% 16 hrs/mes promedio
Colegios profesionales	7% 10 hrs/mes promedio
Organizaciones de asistencia social	5.5% 4 hrs 30 mins/mes
Debates	
Trabajo comunitario	5.5% 16 hrs/mes promedio
Obras de caridad	3 hrs/mes promedio
Asociaciones civiles	4% 22 hrs/mes promedio
Foros	2hrs/mes promedio
Asociaciones de padres de familia	2% 2 hrs/mes promedio
Partidos políticos	
Cámaras empresariales	
No participa	2% Falta de tiempo

VI Democracia. Nociones, condiciones necesarias y reales.**Estado de Derecho. Nociones de democracia.****Tabla 19. Nociones.**

Concepto	Porcentaje total
Derechos: elegir, opinar, igualdad, ejercicio del voto*.	78% núcleo central

Sistema de gobierno	54%
Utopía	Elementos periféricos

Tabla 20. Condiciones necesarias para la vida democrática

Concepto	Porcentaje otal
Conciencia y acción ciudadana	56% núcleo central
Titularidad y ejercicio de derechos y obligaciones	56%
Buen gobierno	43%

Tabla 21. Existencia en Monterrey de las condiciones necesarias para la participación ciudadana

Concepto	Porcentaje total
Si existen Instituciones democráticas. Libertad de expresión Sufragio	50%
No existen: Desinformación y control de los medios masivos de comunicación por el gobierno. Corrupción Manipulación del gobierno Fallas y defectyos en las instituciones. Incompetencia de los ciudadanos	46%

Tabla 22. Respeto a los derechos ciudadanos en la vida diaria

Concepto	Porcentaje total
Ocasionalmente: Desigualdad socioeconómica, discriminación, corrupción, abuso de poder, impunidad e injusticia. Derechos violados: Seguridad pública, libertad de expresión, acceso a la enseñanza, voto, participar en puesto público y privacidad.	72% en sentido negativo
	21% en sentido positivo
No	7%

Tabla 23. Quiénes no respetan los derechos de los ciudadanos

Concepto	Porcentaje total
Autoridades: Policías	70% (19%)
Personas	54%
Instituciones	24%
Nadie (Todos los anteriores)	22%

Tabla 24. Exigencia de respeto a los derechos por los ciudadanos en caso de que no sean respetados

Concepto	Porcentaje total
Ocasionalmente: en casos extremos, ante injusticias o errores. Cuando nos afectan directamente o involucran a alguien cercano.	46%
Si los exigimos	11%
No los exigimos	11%

Tabla 25. Igualdad en el ejercicio de derechos

Concepto	Porcentaje total
No hay igualdad: desigualdad social, discriminación, corrupción e ignorancia.	87%
Si. Igualdad por ley	13%

Tabla 26. Respeto a la diversidad de creencias

Concepto	Porcentaje total
Si lo hay	81%
No lo hay	19%

Tabla 27. Tolerancia ante personas que piensan, actúan o parecen ser diferentes

Concepto	Porcentaje total
Hay tolerancia	52%
No	44%

Tabla 28. Respeto al voto y a ser votado para un cargo público

Concepto	Porcentaje total
Si se respetan	72%
No se respetan	26%

Tabla 29. Garantías a la seguridad por parte del Estado

Concepto	Porcentaje total
No las hay	91%

Tabla 30. Justa distribución de la riqueza en Monterrey

Concepto	Porcentaje total
No existe: hay polarización, corrupción, intereses individuales.	93%

Tabla 31. Libertades que disfrutamos los regiomontanos

Concepto	Porcentaje total
Creencias	93% siempre 7% ocasionalmente
Elegir oficio o profesión	76% siempre 12% ocasionalmente
Pensamiento	65% siempre 31% ocasionalmente 4% nunca
Elegir con autonomía	61% siempre 37% ocasionalmente
Elegir lugar residencia	56% siempre 42.5% ocasionalmente 25% nunca
Asociación	37% siempre 61% ocasionalmente 2% nunca
Expresión	31% siempre 63% ocasionalmente 5.5% nunca
Tránsito	30% siempre 57% ocasionalmente 11% nunca
Participación política	28% siempre 63% ocasionalmente 7% nunca

Tabla 32. Existencia de igualdad de oportunidades en Monterrey

Concepto	Porcentaje total
No existen: desigualdad socioeconómica, discriminación, desiguales oportunidades de acceso a la enseñanza y al trabajo	81%
Si existen	15%

Tabla 33. Existencia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en Monterrey

Concepto	Porcentaje total
Si existe	59%
No existe	39%

Tabla 34. Actividades que realiza relacionadas con la vida democrática y frecuencia con que lo hace

Concepto	Porcentaje total
Votar	69% siempre 20% nunca (por edad)
Obedecer a las autoridades	63% siempre 28% casi siempre
Pagar impuestos	59% siempre 20% nunca (por edad)
Obedecer las leyes	56% siempre 35% casi siempre
Cuidar el medioambiente: áreas verdes, agua, no tirar basura, ser vegetariano. Plantar árboles No tirar basura y separarla	41% siempre 24% a veces 20% casi siempre
Enviar a sus hijos a la escuela	31% casi siempre 57% nunca (no tiene hijos)
Actividades en beneficio a la comunidad	22% siempre 39% no tiene tiempo 30% a veces
Exigencia de rendición de cuentas, propuesta de iniciativa de leyes, diseño y evaluación de políticas públicas	100% nunca

Tabla 35. Servicios que el gobierno proporciona efectivamente

Concepto	Porcentaje total
Salud	70%
Vivienda	56%
Oportunidades laborales	50%
Educación	46%
Protección al medioambiente	37%
Protección a la propiedad privada	19%
Ninguno	7%
Seguridad personal	6%

VII Corrupción

Se planteó un grupo de preguntas que inquirían acerca de la corrupción, ya que es una práctica que constituye uno de los principales obstáculos para la vida democrática.

Tabla 36. Frecuencia con que se nos pide “mordida”

Se propusieron cuatro opciones entre las respuestas posibles:

frecuentemente, ocasionalmente, todos los días y nunca.

Concepto	Porcentaje total
Frecuentemente	50%
Ocasionalmente	31%

Tabla 37. Actitud ciudadana ante la “mordida”

Concepto	Porcentaje total
Rechazo	54%
Darla	35%
Ofrecerla	9%
Recibirla	2%

Tabla 38. Existencia de corrupción en Monterrey

A la pregunta ¿en Monterrey existe la corrupción?:

Concepto	Porcentaje total
Si	98%
No	2%

Tabla 39. Funcionamiento adecuado del sistema de justicia en Monterrey

Concepto	Porcentaje total
No funciona adecuadamente	87%
Si funciona adecuadamente	9%

Tabla 40. En Monterrey ¿es posible confiar en la mayoría de las personas?

Concepto	Porcentaje total
No es posible	76%
Si es posible	19%

VIII Cuidado al medioambiente

El siguiente grupo de preguntas se refiere específicamente a temas de cuidado al medioambiente.

Tabla 41. En Monterrey, ¿cuidamos nuestros recursos naturales

y especies animales, como árboles, ríos, osos, aves, entre otros?

Concepto	Porcentaje total
No cuidamos	72%
Si cuidamos	28%

Tabla 42. ¿Las autoridades se preocupan por garantizar la protección al medioambiente?

Concepto	Porcentaje total
No se preocupan	69%
Si hay una preocupación	31%

Tabla 43. Cuidado al medioambiente, los recursos naturales, el aire, etc., por parte de los ciudadanos regiomontanos

Concepto	Porcentaje total
No cuidamos	76%
Si cuidamos	22%

Tabla 44. Los regiomontanos evitamos tirar basura en la calle, lugares públicos y áreas naturales

Concepto	Porcentaje total
No evitamos	78%
Si evitamos	13%

3.9. Representaciones y prácticas sociales sobre ciudadanía en Monterrey, N.L. Discusión de los resultados obtenidos.

Introducción.

Presento en este apartado, la propuesta de construcción de las representaciones sociales que tienen los informantes en torno a las nociones de ciudadano y ciudadanía, así como de sus derechos y obligaciones. Esta construcción de las representaciones sociales es una interpretación a partir de tales nociones y de sus concepciones acerca de la democracia y las condiciones que consideran necesarias para que se logre, así como las que perciben como reales o efectivamente existentes en Monterrey, Nuevo León, y en el marco más amplio de la nación. Me interesó

explorar además, como parte de estas representaciones y prácticas sociales, sus relaciones con el medioambiente y con los demás ciudadanos, entre otros temas.

La perspectiva desde la cual se construyó el cuestionario y que por ende es la que orienta la construcción de las representaciones sociales, es la axiología. La Democracia Verde, es el referente teórico-político con el cual quiero contrastar las representaciones y prácticas sociales sobre ciudadanía en Monterrey, N.L., para su interpretación. La elección de tal referente ha sido motivada en el hecho de que pretende vincular aspectos éticos y políticos con otras condiciones para la construcción de una sustentabilidad democrática y participativa.

En el apartado anterior, denominado Ejercicio de Articulación Analítica, mostré un primer nivel de análisis e interpretación de los resultados obtenidos mediante la aplicación de los instrumentos para recabar información, los cuales revelaron una diversidad de temas emergentes y la frecuencia con que se presentaron. Clasifiqué dichos temas y los jerarquicé de acuerdo con las frecuencias de su aparición. Posteriormente determiné las categorías que engloban a los diversos temas que surgieron en las respuestas.

En este apartado, a partir de las categorías anteriormente establecidas, realizo el trabajo de análisis y construcción de las representaciones y prácticas sociales, que implica la interpretación de los datos obtenidos y sus relaciones, así como la discusión de cada grupo de preguntas que conformó el cuestionario. Una vez expuestos los resultados de cada grupo de preguntas, presento en un primer momento las representaciones sociales que se construyen a partir de las respuestas de los informantes, a cada pregunta de cada uno de los grupos. Posteriormente, analizo y discuto dichas representaciones con apoyo teórico.

Al terminar de analizar cada grupo de preguntas, presento una interpretación general en la que vinculo la totalidad de las representaciones sociales y propongo el tipo de sociedad civil que caracteriza a la ciudad de Monterrey, N. L. y discuto sus ventajas y desventajas con apoyo teórico.

❖ Ciudadano

En estas representaciones sociales, el núcleo central de la concepción del ciudadano es la **pertenencia**. Cuando escucha la palabra ciudadano, la mayoría de los informantes la relaciona con la **pertenencia a un lugar**, en primera instancia por el hecho de ser **habitante** del mismo, lo que lo hace miembro o integrante de la misma:

“Pertenecer a una sociedad” (s.5), “Forma parte de una ciudad o comunidad” (s.28)

En estas representaciones sociales, conforman la Nación, -en sentido amplio-, los habitantes del mismo territorio; sin embargo se considera ciudadanos tan sólo a los habitantes de la ciudad y se excluye de esta condición a los habitantes de las zonas rurales. No obstante, los extranjeros, residentes en la ciudad si gozan de la condición de ciudadanos, en estas RS, ya que forman parte de la sociedad o comunidad en que habitan, son parte importante del lugar en que viven. De esta manera la noción de ciudadanía está muy apegada al sentido etimológico que tenía en la Roma Republicana e imperial: *civis Romanus o citoyen*: habitante de la ciudad.

“Persona que vive en una ciudad y no en un pueblo” (s.33), *“Habitante de una ciudad”* (s.7), *“Persona que vive en una ciudad”* (s.3)

La pertenencia a una comunidad supone compartir una cultura y determinados sentimientos hacia el citado lugar. Esto significa que para los informantes el elemento más importante para determinar la ciudadanía es el formar parte de una comunidad política hacia la

que se han desarrollado sentimientos y lazos de arraigo a su cultura. Estos sentimientos se expresan también al señalar el hecho de que el habitante debe residir pacíficamente y demostrar interés por mejorar su estado.

Considerar al ciudadano como una persona que pertenece a un lugar en calidad de miembro, supone la condición de ser habitante. En este aspecto se hace alusión al referente territorial de la ciudadanía aunque no vinculado con el nacimiento, sino con la residencia.

Como se señaló, 9 de cada 10 entrevistados marcaron esta relación metonímica de declarar ciudadano a quien vive en un lugar, sin considerar el compromiso o integración a los valores hegemónicos o predominantes, lo que aparece esporádicamente y con escasa elaboración simbólica.

El habitante o integrante de una sociedad, se vincula directamente con la comunidad de la que forma parte y por ello, en estas representaciones sociales, al ser la pertenencia el principal elemento definitorio de la ciudadanía, ésta hace referencia a un proceso de identificación, que supone la creación de vínculos afectivos, compartir una cultura, normas, una moral y hábitos, así como el desarrollo de un sentimiento de solidaridad hacia el resto de los miembros y patriotismo. Recordemos que Derek Heater (2007), plantea también que la ciudadanía es una cuestión que atañe a los sentimientos de los ciudadanos hacia sus compromisos cívicos y por ello no se limita a una cuestión de Derecho Constitucional. En estas representaciones sociales se propone además, con menor frecuencia, como un segundo elemento en orden de importancia en la conceptualización que nos ocupa, que el ciudadano adquiere ciertas **obligaciones y derechos-Titularidad-**, lo cual alude al estatus jurídico político formal (59%). Al respecto se da mayor importancia al ejercicio de las obligaciones (33%), ya que los derechos sólo quedan indicados

(26%), sin mayor referencia. Para ilustrar esta primacía, examinemos los verbos y frases que se emplean en algunas de las respuestas:

Tiene derechos, cumple normas y reglas, acata reglas y normas, respeta a los demás.

Ubicada la titularidad de derechos y obligaciones después de la pertenencia, nos lleva a plantear que, en estas representaciones sociales, pertenecer a una comunidad política implica compartir además de la cultura y los sentimientos, ciertos derechos y obligaciones y tener la facultad de participar en dicha comunidad. En un sentido clásico, la pertenencia garantiza el derecho de igualdad ante la ley o “isonomía”³³ y el derecho de intervenir en la asamblea o “isegoría.” (Rodríguez, 2008) Respecto a la igualdad resalta la representación social de los ciudadanos como semejantes.

“Pertenece a una sociedad con derechos y obligaciones” (s.6), “Integrante de la sociedad en calidad de semejante, tiene derechos y obligaciones” (s.12), “En un ser humano que tiene derechos y obligaciones en la sociedad.”(s56), “Persona que forma parte de la sociedad, cumple normas y reglas.” (s.18), “Vive en una sociedad acata reglas y normas, respeta a los demás” (s.21), “Responsabilidad Social y bienestar común.” (s55)

Un aspecto que requiere resaltarse en relación a los derechos es que se menciona tan sólo su titularidad sin que se proponga el ejercicio ni la exigencia realizarlos. Podemos interpretar que se tiene una concepción política formal del ciudadano y los aspectos de exigencia y ejercicio no son visibles, tan sólo la obediencia y el respeto a leyes, normas, obligaciones y autoridades.

³³ Ley de la igual naturaleza que existía en el pensamiento griego y penetró con mayor fuerza el romano a través de la visión y promoción del humanismo sostenida por el republicanismo. Ledesma, J.L.

En estrecha relación con el aspecto de los derechos y obligaciones, se hace mención también de que el ciudadano goza del estatuto de persona. El concepto político de persona designa a un individuo sujeto a derechos políticos, así como a obligaciones.

El ciudadano goza además del estatuto de **persona** (48%)

Se conocen diversas acepciones del concepto persona, las cuales han sido desarrolladas por diversas disciplinas y corrientes de pensamiento. La filosofía, la psicología, la antropología, la teología, la ética. En términos generales pueden señalarse las siguientes³⁴:

Persona como sustancia: atribución de propiedades particulares tales como independencia y raciocinio (Aristóteles, Boecio y Edad Media).

Persona como ser pensante: un sujeto epistemológico donde la razón supera a su existencia física (Pensamiento Moderno).

Persona como ser ético: individuo absolutamente libre, pero sujeto a una obligación moral, respondiendo a un conjunto de leyes divinas antes que a las leyes de su propia naturaleza (estoicos, Kant y Fichte).

Persona como ente jurídico: individuo sujeto a leyes intrínsecas de su esencia que están relacionadas con los derechos universales. Dicha característica, está por encima de la esencia ética del ser.

³⁴ Significados del concepto de persona, tomados de la síntesis que presenta Word Press.

Persona religiosa: individuos ligados a una fe, cumpliendo mandatos divinos y buscando la verdadera libertad. (existencialismo y personalismo, tradición judeo-cristiana, San Agustín, Pascal, Kierkegaard).

En su uso cotidiano, el concepto persona alude a un ser que tiene poder de raciocinio, conciencia de sí mismo e identidad; capaz, por lo tanto, de vivir en sociedad, que posee además de inteligencia y voluntad, sensibilidad. La psicología resalta que refiere a alguien específico, es decir aquello que distingue a los individuos, que los hace singulares y únicos.

En el ámbito del derecho, persona es todo ente susceptible de adquirir derechos y obligaciones. Las personas físicas, por el sólo hecho de existir, cuentan con diversos atributos que han sido reconocidos por el derecho.

Por su parte, la filosofía ha debatido ampliamente acerca de esta concepción, que varía de acuerdo con las distintas corrientes. Según Boecio³⁵, una persona es una substancia individual de naturaleza racional y es la razón la que le sirve para demostrar su naturaleza individual, a partir de lo cual se entiende que antes que ser social, es un individuo libre capaz de razonar y decidir sobre sus actos. Emmanuel Kant estableció que la persona moral es el sujeto racional libre, bajo el imperio de las leyes éticas. (Vid en Larroyo, F. 1949: 4) El concepto kantiano de persona, supone que hay una realización psíquica del individuo mediante los valores.

Al analizar estos elementos que se plantean como prioritarios en la constitución de la ciudadanía, estoy de acuerdo con Carlos Torres (2001: 131), quien afirma que definir a la ciudadanía como un grupo de ciudadanos que disfrutan derechos limitados dentro del contexto de una ciudad determinada, es simplista. Asimismo, debido a que en estas representaciones sociales,

³⁵ Boecio. Filósofo del siglo VI a quien se atribuye la primera definición técnica de persona

como en la mayoría de las concepciones, la ciudadanía se finca en la pertenencia, al mismo tiempo se cimienta en la exclusión, ya que no todas las personas pueden gozar de la condición de ciudadano de determinado lugar.

Por otra parte, es necesario hacer notar que al enfatizar el sentido de pertenencia a una comunidad, se resalta en estas representaciones sociales, el aspecto nacional en la conformación de la ciudadanía. Aunque en primera instancia no se plantea como determinante de la ciudadanía el país de nacimiento, el hecho de que se haga alusión al lugar en que se habita expresa la concepción de una ciudadanía local, que según Juan Manuel Ramírez Sáiz, es: "...una particularización espacial de la nacional, en un ámbito espacial específico que no modifica la referencia al estado nacional correspondiente." (Ramírez J.M. 1995: 99) Para sostener que la ciudadanía es nacional, Ramírez Sáiz, cita a Thomas Marshall, quien sostiene que la ciudadanía es en principio, nacional y a Jean François, Lyotard, quien plantea que la nación es el soporte de toda soberanía y ciudadanía. (Ramírez, J. M.1995:95)

En sentido amplio, la nación tiene varios significados: estado, país, territorio o habitantes de ellos, etnia, pueblo y otros. En este caso, como fuente del sentido de pertenencia e identidad, estas representaciones aluden a la nación cultural, que implica una construcción social e ideológica subjetiva. La nación cultural puede definirse como una comunidad humana que comparte determinadas características culturales comunes: la cultura, una etnia, lengua y/o territorio, a las que asigna un sentido ético-político. Entre las características compartidas por los ciudadanos, se proponen en estas representaciones sociales diversos elementos que conforman a la nación cultural, primordialmente la identidad, arraigada en la cultura: principios, ideales, valores, tradiciones; así como la identidad jurídico política: compartir derechos y obligaciones.

Derek Heater (2007) propone cinco tipos de ciudadanía, que en su opinión pueden coexistir. Según su clasificación de los tipos de identidad sociopolítica o ciudadanía que se pueden experimentar de acuerdo con los sistemas políticos, la concepción que se presenta en estas representaciones sociales, hace alusión a una ciudadanía nacional que se caracteriza por la identificación de los individuos a la nación, que los conduce a reconocerse como miembros de un grupo cultural y a desarrollar sentimientos de amor hacia el país y sus tradiciones de las que son concientes. Se exige a los individuos ser fieles a aquello que ha hecho del país “algo grande” y se establecen relaciones entre grupos.

A partir de esta noción de nación cultural se hace referencia al patriotismo que se vincula también con el sentido de pertenencia. En estas representaciones el sentido de pertenencia supone el desarrollo de las actitudes de respeto, responsabilidad, conciencia, involucramiento e interés en el mejoramiento de la comunidad. Por lo anterior subyace la noción de patriotismo.

“Quiere verdaderamente a su ciudad” (s.23), “Parte de la sociedad, comparte leyes, cultura, derechos y obligaciones” (s.13), “Persona con valores que habita pacíficamente su estado y le preocupa mejorarlo” (s.51)

Por lo que respecta a la gran importancia que se da al cumplimiento de las leyes y obligaciones establecidas en la sociedad, exenta de la participación ciudadana y del ejercicio y exigencia de derechos, se pone de manifiesto una concepción del habitante como objeto de gobierno, es decir como súbdito, que se presenta en las dictaduras y en las monarquías absolutas.

El contenido de la representación social de ciudadanía alude a la **identidad** que se desarrolla a partir de la pertenencia, ya que se hace referencia a la cultura: principios, ideales, valores, patriotismo, responsabilidad, respeto e interés en el bien común. La estructura y

organización de la representación, ponen de manifiesto las relaciones entre las nociones de habitante, persona, identidad cultural y titularidad de obligaciones y derechos.

Considero que el contenido de la representación social de ciudadanía es la **identidad**, ya que se hace referencia a la cultura: principios, ideales y valores; al patriotismo que además de la cultura, implica el respeto a la patria y a los demás, así como el interés en el bien común y la responsabilidad. La identidad a la que se alude es territorial porque es relativa al hecho de ser habitante de un lugar, fundamentalmente y en segundo lugar apela a la cultura. El contenido y la organización de la representación ponen de manifiesto las relaciones entre las nociones de pertenencia, habitante, titularidad de obligaciones y derechos.

Considero que el tipo de ciudadanía al que se alude en este momento de construcción de las representaciones sociales, es esencialmente comunitarista.

❖ Determinantes de la ciudadanía

En lo que respecta a los aspectos determinantes de la ciudadanía, el núcleo central condensa nuevamente los dos elementos fundamentales previamente señalados cuando se definió al ciudadano: la noción de **pertenencia** (52%) y el **respeto** a la comunidad, a sus leyes, normas y obligaciones (52%). Ambos elementos implican formar parte de una sociedad, como miembro, como habitante, además de la identidad que supone integrarse a la vida cultural y moral y el patriotismo que dicha integración, genera. Se es ciudadano cuando se pertenece a un país y se respeta a la comunidad, las leyes y obligaciones que establece.

Se puede desarrollar el sentido de pertenencia a una comunidad o país tanto por nacimiento, como también por ser habitante, aunque no se haya nacido en ella. Los residentes, incluso extranjeros pertenecen a la comunidad ya que se han integrado a su cultura y colaboran

con su desarrollo y por el bien común. Parte importante de los aspectos culturales que determinan la ciudadanía son los valores o la moral compartida.

Algunos de los valores que se proponen son el patriotismo, cuando se hace referencia al orgullo y a los sentimientos positivos o buenos hacia el lugar de nacimiento o residencia, responsabilidad, colaboración, cooperación y solidaridad, compromiso comunitario, amistad, buenos hábitos y costumbres, convivencia y legalidad entre otros. Como puede constatarse, todas estas representaciones mantienen la idea de ciudadanía en un nivel pasivo de comportamiento, es decir, la ciudadanía es algo que se recibe y se mantiene, pero no es necesario hacer nada para mantenerla.

“Ser perteneciente natal u extraordinario de una delimitación territorial.” (s55), “Ser mexicano tener derechos.” (s27), “Ser integrante, miembro de la sociedad, dentro de la democracia.”(s.40), “Sentirse orgulloso del lugar en que se nace o reside y aportar algo bueno para éste.” (s24), “Interesarse e involucrarse en su comunidad y que se sienta parte de ella.” (s1), “Tener buena amistad con sus vecinos, ayudar a la comunidad etc.” (s39), “Buenos hábitos y costumbres.” (s28), “Sus valores, su ética, la moral, etc.” (s56), “Convivir en una sociedad.” (s2), “La inclusión o el aceptar las condiciones, ya sea por el mero hecho de vivir dentro de determinada sociedad, como por aceptarse parte de la misma.” (s12)

La pertenencia está constituida también por la identidad que se forma al compartir una cultura y los sentimientos de orgullo que se generan:

“Orgullo por lugar de nacimiento y residencia, aportar.”(s.24), “Cierta persona que cumple con las normas establecidas para poder estar dentro de una sociedad y llevar una vida moral.” (s17), “El derecho de ser humano y pertenecer a una sociedad en común lo hace ser ciudadano, además

de contar con derechos y cultura dentro de una sociedad. Además de tener una identidad propia.” (s53), “Sus valores, su ética, la moral, etc.” (s56), “Respetar a su comunidad, seguir las leyes y reglas, vivir en grupo o comunidad.” (s5), “Cumplir con las normas establecidas.” (s33)

“Habitar en un lugar y cumplir con sus deberes y obligaciones.” (s16), “Pertener a una sociedad en la que se tienen derechos y obligaciones y una patria.” (s13), “Inclusión, aceptar condiciones, ser parte.” (s.12)

El aspecto que ocupa el segundo lugar en las representaciones sociales de las determinantes de la ciudadanía, es la **nacionalidad** que asigna un **estatus jurídico político o reconocimiento formal** (48%). Este aspecto se encuentra casi al mismo nivel que el núcleo central y está constituido por la nacionalidad, la residencia, la mayoría de edad y el reconocimiento oficial de la ciudadanía que implica la titularidad de derechos y obligaciones. De todas maneras, también se asume una condición de pasividad: se tienen derechos por vía legal, pero eso es independiente de lo que uno haga, la ciudadanía es más una cuestión de azar que de logro o merecimiento.

“Nacer y vivir en la ciudad.” (s3), “Nacer en determinado país.” (s6), “Ser mexicano tener derechos.” (s27), “Nacer y pertenecer a una sociedad.” (s11), “Ser mayor de edad y tener un modo honesto de vivir.” (s34), “Legalmente, contar con credencial de elector. Técnicamente, formar parte de una sociedad y ejercer un rol en ello” (s.9), “Sus documentos.” (s.38), “Pues hoy en día solo la credencial de elector.” (s50), “Que sea mexicano, y mayor de 18 años, aunque todos somos ciudadanos unos con mas obligaciones.” (s32), “Nacer y registrar ese nacimiento legalmente en un lugar determinado, con todas las obligaciones y derechos que eso conlleva. Tomando en su formación la cultura de ese lugar.” (s36), “El simple hecho de haber nacido en dicho país te da el derecho de ser ciudadano, más sin embargo, al cumplir la mayoría de edad que

308

son 18 años, te hace acreedor a ser más libre en la toma de tus decisiones, pero al mismo tiempo también derechos y obligaciones.” (s31)

Podemos apreciar una concepción formal de la ciudadanía fundamentada tan sólo en la nacionalidad y la mayoría de edad, ambas reconocidas a través de sus correspondientes documentos oficiales. Es decir que se considera que la ciudadanía es un mero reconocimiento oficial y se dejan al margen la participación, el ejercicio y la exigencia de derechos que son fundamentales para la concepción de una ciudadanía democrática y participativa.

Al respecto, en estrecha relación con la pertenencia y el respeto a la legalidad, se propone a la **participación** como otro aspecto importante (22%) para la determinación de la ciudadanía, aunque en menor proporción. Como formas de participación se plantea: ser una persona productiva, tener un modo honesto de vivir, aportar a su comunidad para transformarla, cooperar para mejorarla, cuidarla y preocuparse por ella, éstas, son algunas de las formas de participación que se proponen y están estrechamente ligadas a la pertenencia. Estas formas de participación están relacionadas con los sentimientos que se desarrollan hacia la comunidad y sus habitantes y de tal forma con el patriotismo.

Es importante señalar además, que el tipo de participación que se manifiesta está vinculada con la noción de cumplimiento de las obligaciones y en tal medida con la obediencia, es decir que no surge de una iniciativa personal, libre o espontánea, de esta manera no se propone una participación política democrática, ni una exigencia de rendición de cuentas que caracterizan una gobernabilidad democrática.

“Tratar de cambiar o algo productivo para nuestro estado.” (s4), “Cooperar con los demás para ser mejor.” (s18), “Participar en la vida social del país.” (s7), “Que cuide y le preocupe lo que

pasa en su ciudad. “ (s23), “Participar en las actividades de su colonia o ciudad, involucrarse en los acontecimientos que suceden a su alrededor” (s.46)

Los elementos periféricos son el hecho de ser persona (6%) y ejercer sus derechos (4%).

“Ejercer derechos en instituciones correspondientes.” (s8)

Algunos de los informantes muestran una visión que incluye varios de los aspectos señalados:

“Legalmente: contar con credencial de elector. Técnicamente, formar parte de una sociedad y ejercer un rol con ello.” (s9)

El núcleo central de las representaciones sociales sobre los aspectos que determinan la ciudadanía, está conformado por las nociones de pertenencia a la comunidad o sociedad y el respeto a sus leyes, normas y obligaciones. Se reiteran las categorías y la frecuencia con la que se presentaron cuando se planteó la noción de ciudadanía

Con lo anterior, podemos afirmar que en estas representaciones sociales la ciudadanía es determinada por el desarrollo del sentido de pertenencia a una comunidad, el respeto a sus leyes y normas y el cumplimiento con sus obligaciones. Como elemento periférico, está la relación con la participación en la vida social del país y específicamente de su comunidad.

❖ Qué suele llamarse ciudadanía

El núcleo central de las respuestas acerca de ¿qué suele llamarse ciudadanía?, está ocupado por los conceptos de **nacionalidad, pertenencia y titularidad y ejercicio de derechos y obligaciones** (53%). Se han vinculado los tres conceptos, ya que en este caso las tres nociones hacen referencia al territorio en el que se nace, lo cual, como señalamos más arriba, es una

cuestión azarosa, ligada una tierra, condición de naturaleza primitiva. La pertenencia está relacionada o supeditada a la nacionalidad y así también la titularidad de derechos y obligaciones que se adquieren junto con ella.

Considero que el contenido de esta representación social es la noción de **patriotismo**. Hace referencia al hecho de poseer una fuerte identidad cultural o étnica que identifica a los miembros de un grupo y los separa de otros grupos y desarrolla un sentimiento de orgullo por pertenecer a un país determinado. Es el pensamiento que vincula a un ser humano con su patria y el sentimiento que tiene hacia su tierra natal o adoptiva por determinados valores, cultura, afectos e historia.

“Nacer en un país” (s.11), “La nacionalidad dada por el lugar de nacimiento” (s.12), “Al **concepto** del lugar de dónde vienes” (Sujeto 1), “Pertenecer a un país” (s. 6), “A la pertenencia a un determinado lugar” (s. 14), “El registro de pertenecer a algún lugar que nos identifica.” (s3), “Se refiere a la calidad y derechos de un ciudadano” (s.4), “Todo aquel que forma parte de una sociedad política.” (s.18), “Grupo de ciudadanos expuestos a derechos y obligaciones” (s.19)

“Al conjunto de derechos que tienen personas de una nación.” (s25), “Condición de derechos que el Estado da a una persona.” (s30), “A la condición de un miembro en una ciudad.” (S 56), “Integrar una sociedad, regida por leyes” (s.5)

“A adquirir las responsabilidades y derechos de la Constitución o leyes de un país.” (S 55)

El concepto que ocupa el segundo lugar para describir a la ciudadanía es el de **habitante**, empleándose en plural para hacer referencia a la población de un país o ciudad, a la colectividad o sociedad que comparten un gobierno común. De esta manera la ciudadanía es el conjunto de

los pobladores de un país o ciudad, que cuentan con el estatus jurídico-político formal y que desarrollan el sentido de pertenencia hacia dicha comunidad.

“La gente que vive en una ciudad” (s2), “Grupo de personas que conforman una sociedad” (s.10),

Se reconoce también la pertenencia a los habitantes de un lugar determinado que comparten una cultura común:

“Grupo de ciudadanos pertenecientes a la misma cultura, comparten costumbres” (s.13),

Estas características de la nacionalidad son las que fundamentan la construcción de una identidad territorial, asociada por ende con las nociones de **Estado y patriotismo**.

Como elementos periféricos a estas representaciones sociales de la ciudadanía, se presentan los conceptos de **participación** que es una dimensión fundamental, constitutiva de la misma y el **ejercicio de los derechos** que tan sólo obtuvo una mención, pese a ser una condición fundamental de la ciudadanía. Estos elementos periféricos, muestran casos excepcionales por su escasa frecuencia, que sin embargo, merecen ser destacados por su importancia para el tema. Por otra parte, estos elementos periféricos tan escasos son relevantes para la interpretación, debido a que muestran aquello que no forma parte del núcleo central, que resalta las diferencias:

“Poder ejercer todos los derechos que la Constitución señala.” (s41), “La participación y los roles establecidos de ésta” (s9), “Derecho de todos de participar en una comunidad” (s.27), “A la participación que tenemos en una comunidad.” (s26). “Vivir la democracia con derechos y obligaciones dentro de la sociedad.” (s40), “Organización de personas participes dentro de una sociedad.”(S 53), “Poder que tienes al pertenecer a una sociedad, incluye derechos y obligaciones” (s 54)

La mayoría de las respuestas manifiestan que el concepto de ciudadanía hace referencia a un sustantivo colectivo: la gente, la sociedad, la población, el conjunto de los habitantes, etc. que comparte determinado estado, situación, índole, constitución, modo, cualidad, facultad, entre otras. Estas expresiones las asocio con el referido sentimiento de pertenencia a un colectivo.

“La gente que vive en una ciudad.” (s2), “A la población de un país.” (s7), “El conjunto de personas de una sociedad.” (S 15), “Todo aquel que forma parte de una sociedad política.” (S 18), “Pertenecer a un país.” (s6), “A la pertenencia a un determinado lugar.” (s14), “Tener registro de nacimiento y derechos” (s8), “**Grupo de personas** que conforman una sociedad” (s10), “**Grupo de ciudadanos** pertenecientes a la misma cultura y costumbres.” (s13), “**Grupo de ciudadanos expuestos** a derechos y obligaciones.” (S 19), “Conjunto ciudadanos tienen un gobierno común” (s 32), “Conjunto de derechos que tienen personas de una nación” (s 25), “Es la condición de derechos que le da el Estado a una persona.” (S 30), “Se refiere a la calidad y derechos de un ciudadano.” (s4)

El contenido de la representación social de la ciudadanía apunta a la noción de **estado**³⁶, ya que se vinculan con ella, la nacionalidad y en tal sentido, el territorio, la pertenencia, la titularidad y el ejercicio de derechos y obligaciones. Ocupa un lugar importante el concepto de habitante, con lo cual cobra relevancia el aspecto territorial. Se hacen mínimas alusiones también, a la concepción de que la ciudadanía es el poder que tienen los ciudadanos de participar en la vida democrática.

Así, a través de las respuestas que se presentan, la ciudadanía es el conjunto de los ciudadanos, además es una condición, situación o modo de estar que éstos comparten e implica el

³⁶ No debe olvidarse que la noción de estado es una construcción imaginaria, consecuencia de la paz de Westfalia

reconocimiento oficial; en ese sentido es una categoría o jerarquía. La ciudadanía es el concepto o auto concepto que tienen los ciudadanos sobre sí mismos, sobre su *calidad*, sus derechos, tanto individuales como colectivos, producto de procesos históricos, políticos y socioculturales, de conquista y reivindicación de los mismos, como lo apuntó Thomas Marshall. En este sentido alude también al concepto de Estado.

❖ No son ciudadanos

En estas representaciones sociales, acerca de quiénes no son considerados ciudadanos, se ubica en el núcleo central a aquellos que **no han desarrollado el sentido de pertenencia**, es decir que no sienten lazos comunitarios. También se incluye en esta categoría a los que **no tienen reconocimiento jurídico político, es decir**, es decir quienes no son sujetos de derechos y obligaciones, debido a que **no poseen el estatus legal**. En este último caso se encuentran los no nacidos y los que no son habitantes del lugar, entre éstos, los habitantes de zonas rurales. (65%)

“Aquellos que no están integrados.” (s44), “Personas que no sienten lazos con su comunidad.” (s1), “Quienes no les importan lo que pasa y no se preocupan por el lugar donde viven y conviven.” (s23), “No nacidos (en el lugar), sin reconocimiento legal.” (s. 26), “Los no nacidos en el país.” (s6), “En el caso de Monterrey, los no nacidos aquí.” (s2), “Los que no nacieron en el país, pero no por eso dejaron de ser ciudadanos, ciertamente cualquier persona puede serlo.” (s26), “Los que viven en áreas rurales o los que no están registrados en el IFE.” (s52), “Son los que no son reconocidos en el lugar donde se encuentran.” (s25), “Legalmente los menores de edad” (s9), “Las personas que no tienen un papel que los nombre ciudadanos residentes y aquellos que no se sientan orgullosos de su lugar de origen.” (s24), “Los menores de edad, los deshonestos y los ilegales.” (s34), “La persona que no tiene mayoría de edad.” (s35), “Los menores de edad y los que no cumplen los deberes básicos.” (s42), “No viven en la ciudad”

(s.29), “No viven en el país.” (s30), “Los habitantes de rancherías” (s. 46), “Las personas que viven en zonas rurales.” (s3)

Es interesante señalar que tal como afirma Charles Taylor, el reconocimiento es una afirmación que los demás miembros de la comunidad hacen a cada sujeto, en el proceso de constitución de la propia identidad. Así los delincuentes:

“Son los que no son reconocidos en el lugar donde se encuentran.” (s25)

1. *En segundo lugar se ubica a aquellos que **transgreden las leyes e incumplen las normas y las obligaciones de la comunidad** y en menor medida, quienes no ejercen sus derechos.*
(37%).

“Los que no respetan las normativas y obligaciones del país en el que estás establecido.” (s56), “No cumplen las reglas” (s. 21), “No cumplen con derechos y obligaciones” (s.33), “Quienes no se integran a la sociedad, por ejemplo, aquellos que no respetan las leyes que rigen a esa comunidad.” (s5), “Aquellos que no acatan lo establecido y llevan muchas veces una doble vida moral.” (s17), “Aquel que se desentiende de sus derechos y obligaciones, ya sea emigrando, como separándose a sí mismo de tal condición.”(s12), “Los que transgreden las leyes y renuncian a su derechos políticos.” (s8), “La personas que no habitan en un lugar y {no} cumplen con sus deberes.”(s16), “Los que dañan el ambiente social.” (s49), “El que pierde esa categoría por ley.” (s40)

En estas representaciones sociales, se niega la condición de ciudadano también a quien transgrede las leyes e incumple las normas sociales establecidas y demuestra con ello que no ha desarrollado el sentido de pertenencia a una comunidad, que implica lazos afectivos que unen al ciudadano con la misma, así como carecer del estatus legal. La transgresión de la ley y el

incumplimiento de las normas y obligaciones sociales son manifestaciones de que las personas no han desarrollado el sentido de pertenencia y respeto hacia la comunidad, es decir no se encuentran integradas. Asimismo, los transgresores pierden sus derechos civiles y políticos.

2. En tercer lugar, un 20%, piensa que **todos somos ciudadanos de algún lugar**, con lo que se relaciona con el estatuto de persona y con la idea de formar parte de una sociedad.

“Creo que nadie, todas las personas somos ciudadanos, pero depende en que país naces, es al que perteneces.” (s10), “Todos somos ciudadanos de un país.” (s11), “Todos somos ciudadanos si obedecemos normas.” (s28), “Todo ser humano es ciudadano” (s. 51)

3. Se propone también, que aquellos que **no participan** en su comunidad, no aportan a la misma ni les importa lo que ahí suceda (6%), no son ciudadanos. Estos dos aspectos se vinculan con la no pertenencia.

“No participan socialmente” (s.7), “No participa en la ciudadanía” (s.18), “Los que no aportan ni participan, al contrario, dañan su ciudad.” (s4), “A quienes no les importa lo que pasa y no se preocupan por el lugar donde viven y conviven.” (s23), “Las personas que no contribuyen con la comunidad.” (s39), “Los que no participan socialmente.” (s8), “Yo pienso que es todo aquel que no tiene participación en la ciudadanía.” (s18), “Los que no aportan al bienestar de otras personas, como sociedad, trayendo consigo mismo, una mala cultura, educación que no es favorable, los que no le dan importancia a los problemas que día a día se presentan en su comunidad y los que no aportan para solucionar problemas de conflicto dentro de la misma” (s53)

Cuando se analizan las diferencias en los resultados al comparar las dos categorías: ciudadano y no ciudadano, podemos aventurar una explicación acerca de la variación en las respuestas:

La ciudadanía, en estas representaciones sociales, es inicialmente un sentido de pertenencia y un reconocimiento formal, por lo que para muchos supone también un compromiso de respeto a los demás miembros de la comunidad, al bien común, a las leyes y normas establecidas. Por lo anterior, la ciudadanía formal no basta para garantizar el pacto social, éste requiere mantenerse y evidenciarse a través de la obediencia y el respeto cotidiano. Las personas transgresoras manifiestan su ausencia de vínculos comunitarios y sentido de pertenencia. Los transgresores han perdido o renunciado a sus derechos políticos (y civiles) al haber omitido el cumplimiento de sus obligaciones.

Cuando se señalaron las determinantes de la ciudadanía, el primer lugar lo ocupó el sentido de pertenencia, mientras que los principales elementos excluyentes de tal condición como ciudadanos, son la transgresión a las leyes y normas establecidas, así como carecer del reconocimiento jurídico-político por ser menores de edad y por no haber nacido en el lugar. Los transgresores pierden sus derechos civiles y políticos y manifiestan a través de su comportamiento su ausencia de interés hacia el bien común. Las personas excluidas de este reconocimiento no gozan del derecho de participar en la toma de decisiones de la comunidad y en estricto sentido no son ciudadanos.

Aquellos que **no participan** en su comunidad, no aportan a ella ni les importa lo que ahí suceda, no son ciudadanos. Estos dos aspectos se vinculan con la no pertenencia, en el primer caso aludiendo a la identidad territorial y en el segundo a la falta de sentimientos de pertenencia y vínculos con la comunidad que se manifiesta en forma de no aportar a sus actividades o metas.

Uno de los elementos fundamentales para la determinación de la ciudadanía es precisamente la pertenencia, el reconocimiento formal a partir del cual se adquieren derechos y obligaciones, así como la participación. Desde la Grecia clásica, la ciudadanía se ha

fundamentado en la pertenencia a una comunidad para algunas personas a las que se les reconocen derechos y obligaciones, pero su contraparte ha sido la exclusión de aquellos que precisamente no pertenecen debido a que no cumplen ciertos requisitos jurídicos. Asimismo, quienes forman parte de la comunidad pero transgreden las normas y obligaciones que han sido establecidas en función de la preservación del bien común, pierden sus derechos políticos y algunos derechos civiles y por ello son excluidos de la condición de ciudadanos.

Considero que el contenido de estas representaciones sociales del no ciudadano, hace alusión a los marginales: quienes no viven en la ciudad, quienes son expulsados de la comunidad y son marginados o marginales, debido a que transgreden y atentan contra sus normas. Es interesante hacer notar, en lo que se refiere a la estructura de esta representación social, que antes que la titularidad jurídico política, se ubica en el núcleo central del no ciudadano a quienes no pertenecen por no tener el reconocimiento formal y por no habitar en la ciudad, seguidos de los transgresores y finalmente por los que no participan.

El contenido de la representación social del no ciudadano es la identidad, asociada en primera instancia con habitar una misma comunidad y de tal forma, pertenecer a una misma cultura, de ahí su relación con el patriotismo y con el nacionalismo. La estructura y la organización de la representación social del no ciudadano muestra a los que transgreden las leyes y normas e incumplen las obligaciones, quienes no pertenecen a la ciudad y aquellos que no participan. Podemos afirmar que el contenido de la representación social muestra que la marginalidad o exclusión es el concepto central para los que no son considerados ciudadanos. Se excluye también a los habitantes de zonas rurales ya que se concibe al ciudadano como habitante de una ciudad, por lo que a diferencia de un connacional del sector rural, un extranjero habitante de la ciudad si pertenece a la categoría de ciudadano.

II Valores relacionados con la ciudadanía

En esta sección se agrupa el conjunto de preguntas que hacen alusión a los valores que en estas representaciones sociales se proponen en relación con la ciudadanía y los rasgos que caracterizan a un buen ciudadano.

❖ Valores asociados a la ciudadanía

Cuando se solicitó a los informantes que comentaran los valores que asocian a la ciudadanía, respondieron con varios atributos o rasgos. El primer ejercicio de articulación analítica consistió en establecer frecuencias en la aparición de los valores y en su ubicación en primer, segundo, tercer o cuarto lugar de ocurrencia.

El valor que es máspreciado en las representaciones sobre ciudadanía es el **respeto**. El respeto se presenta en primer y segundo lugares de las respuestas de asociación libre, lo que manifiesta la gran relevancia que tiene para los informantes y concentra el 68% de las frecuencias. Este valor constituye el núcleo central de las virtudes cívicas en estas representaciones sociales, con ello se evidencia que es el valor fundamental de la ciudadanía en esta representación social.

Este valor se expresa también como obediencia a las leyes y normas sociales, a la dignidad, como tolerancia y empatía.

En tercer lugar, después del respeto, la virtud cívica que se considera más importante, es la **responsabilidad** (17%).

En cuarto lugar se propone a la **solidaridad** (20%).

Otras expresiones de la solidaridad son la ayuda comunitaria, la participación, la empatía y la generosidad.

Respeto, responsabilidad y solidaridad apuntan a valores más integrales (amplios) como la lealtad y el patriotismo. El ciudadano es patriota ya que obedece las leyes, respeta las normas sociales, respeta a los demás y al medio ambiente, muestra en tal sentido un comportamiento responsable. Dicho comportamiento está orientado a la búsqueda del bien común que es uno de los aspectos más importantes del patriotismo.

❖ Rasgos de un **buen ciudadano**

En estas representaciones sociales, el principal rasgo que se atribuye a un buen ciudadano, es el **respeto**. Este valor concentra la gran mayoría de las respuestas y por ende es en el que se ubica el núcleo central de las representaciones sociales (74%)

El concepto de respeto es aplicado también a la obediencia de las leyes y observancia de las obligaciones que la sociedad impone. Esta noción adquiere también el sentido de aceptar los compromisos establecidos.

Las formas más importantes en que los informantes proponen las manifestaciones del respeto por parte de los ciudadanos, son el hecho de que cumplan y respeten las leyes, normas y obligaciones sociales. El respeto incluye la tolerancia. El buen ciudadano respeta a la patria, a las autoridades, a las demás personas y sus derechos:

“Respeto a las normas y reglas de un país” (s.6), “Cumple sus obligaciones cívicas, sociales y fiscales” (s. 34), “Cumple con todas las leyes y las reglas del gobierno” (s.43), “Una persona que reconoce su compromiso local y nacional, conoce sus derechos y obligaciones, llevando una vida acorde con las leyes del territorio.” (s55)

El segundo rasgo que se valora en las características de un buen ciudadano en estas representaciones sociales es el **sentido de pertenencia** (55%). Un buen ciudadano es aquel que ha desarrollado un sentido de pertenencia a su comunidad, que se integra a su sociedad, se acepta como parte de ella y funciona en ella:

“Aceptarse parte de la sociedad, aceptar sus condiciones, funcionar” (s.12)

El buen ciudadano quiere a su patria, aporta valores e ideales:

“Quiere a su patria, respeta a sus semejantes, es honesto.” (s. 27)

- a) Como parte del sentido de pertenencia que conforma estas representaciones sociales del buen ciudadano, resalta el valor de la **responsabilidad**. Se afirma que el buen ciudadano se preocupa por las condiciones, busca el bien común, cuida su propia integridad y la de su prójimo, así como a la naturaleza, es ejemplar.
- b) La responsabilidad está asociada con el **respeto**. El respeto implica responsabilidad hacia uno mismo y hacia los demás:

“Responsable, respetuoso, educado, tiene valores, es sincero” (s.17), “Comportamiento responsable” (s.33), “Ser buen vecino, ser responsable” (s.37), “El ser responsable, tolerante, tener ética, ser culto, el que cuida el medio ambiente, etc.”(s56)

Hasta aquí los rasgos del buen ciudadano se asocian con el valor de la lealtad, ya que hacen referencia al respeto como correspondencia a un deber que tenemos hacia los demás con los que nos relacionamos en la vida cotidiana, desde nuestra familia y amigos, hasta nuestros conciudadanos y compatriotas. Es posible interpretar que el valor de la lealtad es el que se propone en estas representaciones, ya que como valor significa cumplir con nuestros compromisos.

Un tercer rasgo, al que se da importancia en estas representaciones sociales para definir al buen ciudadano, es el de la **participación** (41%) en favor de su comunidad, para el desarrollo de ella y comprometerse con ello. El principal sentido que se asigna a dicha participación, a lo largo de la construcción de estas representaciones sociales, es el de colaborar; de esta manera, la concepción de la participación es limitada al sentido de ayuda o contribución, pero no clara y directamente vinculado con los conceptos de intervenir, asociarse, cooperar. Con lo anterior quiero expresar que el sentido de la participación, en la mayoría de los casos, es a título personal y no a través de una participación política, grupal, organizada.

“Alguien que se preocupa y ayuda en su comunidad.” (s.1), “Rol participativo, en pro a su comunidad” (s.9), “Participa en actividades políticas, se interesa por sus vecinos y su entorno” (s.45).

La **Justicia** es otra característica de un buen ciudadano. De acuerdo con la concepción de que el ciudadano observa y respeta las leyes y normas sociales, se destaca la justicia como una característica fundamental. El comportamiento justo se manifiesta a través de la honestidad, la sinceridad y la legalidad. 22%

A través de los elementos periféricos en los rasgos que describen al buen ciudadano, encontramos la valoración a las personas educadas, en el sentido de una preparación o formación académica, que se evidencia también a través de la limpieza y el orden que mantiene. Ocupan también la periferia, los aspectos relacionados con los derechos, se señala en una escasa proporción (9.2%) que el buen ciudadano ejerce sus derechos y entre ellos se resalta fundamentalmente el voto. Otra proporción menor (5.5%), considera que un buen ciudadano exige sus derechos y pide cuentas a sus gobernantes.

El hecho de que estos aspectos relacionados con el ejercicio y la exigencia de derechos se encuentren ubicados en la periferia con escasas referencias, aunado a la gran importancia que se da al respeto y obediencia de las leyes como aspectos determinantes de la ciudadanía, parecen indicar que en esta representación social el buen ciudadano es respetuoso en el sentido de obediente, sumiso y pasivo.

Aunque son escasas las referencias al **cuidado a la naturaleza** y pueden considerarse también parte de los elementos periféricos en las representaciones sociales, me interesa resaltar las respuestas que apuntan a los rasgos de un buen ciudadano, que se relacionan con el medio ambiente, dado que la presente investigación tiene como uno de sus enfoques primordiales, el paradigma de la democracia verde y es por ello fundamental poder identificar el grado de importancia que puede tener para los ciudadanos y valorar qué tan cercanos o lejanos estamos de alcanzar dicho modelo democrático, según nuestro tipo de sociedad civil.

“...cuida el medio ambiente.” (s56), “Respetar las leyes, ser honesto y honrado y cuidar la naturaleza.” (s11), “Que sea honesto, se preocupe por el medio ambiente, que cumpla con sus obligaciones como por ejemplo votar, etc.” (s51)

Se considera que el respeto a la comunidad a la que se pertenece, se muestra al obedecer las leyes, cumplir las normas y las obligaciones sociales, principalmente. Se plantea también como fundamental para un buen ciudadano, el valor de la responsabilidad que implica el respeto a uno mismo, a los demás; así como al bien común y tener una participación activa en la comunidad. Sin embargo las formas en que se concibe dicha participación se imitan a preocuparse y colaborar, con tan sólo una alusión a la participación en actividades políticas y prácticamente inexistentes referencias al ejercicio y exigencia de derechos.

❖ Rasgos de un mal ciudadano

En correspondencia, en estas representaciones sociales, los rasgos que se atribuyen al mal ciudadano son los siguientes:

El principal rasgo que distingue a un mal ciudadano, el cual constituye el núcleo central de la representación social, es la **transgresión** y concentra la totalidad de las respuestas. (100%) De hecho, tiene un porcentaje acumulado superior al 100%, considerando que cada informante propuso más de un rasgo y se contabilizaron en su totalidad.

Entre las características de un mal ciudadano que se relacionan con la transgresión, se señalaron las siguientes:

Incumplir con sus obligaciones y no respetar las leyes, delinquir, ser corrupto, deshonesto, violento e ilegal. Podemos captar que se propone como mal ciudadano a quien manifiesta actitudes negativas que afectan a la sociedad en su conjunto. La irresponsabilidad, la transgresión y la delincuencia son los rasgos que se propusieron en forma más reiterada.

Se proponen también como comportamientos negativos: alterar el orden, generar conflictos, perjudicar, destruir, mostrar un comportamiento inmoral, ser mal educado, egoísta, desordenado y sucio. Todo ello atenta contra el bien común. En términos generales es posible afirmar que las personas irresponsables son consideradas malos ciudadanos, así como aquellos que no cuidan a su país:

“Alguien que no tiene interés por apegarse a las normas oficialmente establecidas quedando por entendido que no las conoce.”(s55), “Tiene actitudes negativas, hace cosas que afectan al resto de la sociedad.” (s3), “No cumple con sus obligaciones” (s.4), “Transgresor, delincuente, violento” (s.8), “Irresponsable, violento con su sociedad, familia, comunidad.” (s5), “Quebrantar las

normas” (s.15), “Alguien que no apoya o que tiene un comportamiento inadecuado para las necesidades de su comunidad.” (s9), “Trasgredir la ley.” (s6), “Irresponsable, violento con su sociedad y su comunidad.” (s.5), “Mala conducta, irrespetuoso, sucio, desordenado, ruidoso” (s.29), “Que sea deshonesto, irresponsable, que no obedezca a su patria.” (s26), “Aquel que forma parte de la delincuencia y mal y uso de la ciudad.” (s46), “Alguien que sólo vea por sus propios intereses y no por hacer el bien para los demás.” (s10)

Además de la transgresión se está apuntando hacia la deshonestidad.

Se presentan mínimas referencias al mal ciudadano como una persona que **contamina o destruye el medio ambiente** y aunque son escasas, considero importante resaltarlas, debido al tema de la investigación. Algunas de las respuestas fueron:

“Las personas que no valoran a su medio ambiente, a su misma sociedad, al que no le importan sus derechos y sus obligaciones como ciudadano.” (s56), “Ser delincuente, no respetar las leyes, contaminar el ambiente.” (s.11), “La persona que destruye el lugar donde vive o lo que está a su alrededor sin importarle.” (s16), “Que caiga en el juego de la corrupción, que tenga algún nexo con la delincuencia organizada, que no se preocupe por su medio ambiente.” (s51)

El siguiente rasgo para identificar a un mal ciudadano es que es **irrespetuoso** (61%). Podemos percatarnos que la falta de respeto está estrechamente relacionada con el aspecto de la transgresión, de la cual es de hecho una expresión. El mal ciudadano no respeta a las autoridades, ni a los demás:

“Ofende al Estado con actitudes y pensamientos” (s.24), “No respeta autoridades e incumple sus obligaciones” (s.20), “No respetar las normas, dañar a otros” (s.22), “Incumple obligaciones

transgrede irrespetuoso.” (s13), “Es todo aquel que no tiene respeto por los demás y no cuida su país.” (s18)

En este apartado, al mencionar la falta de respeto, el incumplimiento de las obligaciones sociales y leyes establecidas, hacen referencia a la deslealtad.

El tercer rasgo en orden de importancia que se destaca como característico de un mal ciudadano es el de una persona que **no participa** en su comunidad (26%) y en las decisiones que le competen, no colabora, es apática, indolente, acrítica. Se capta también el hecho de que se establece una relación entre el desarrollo de un sentido de pertenencia y la participación en el cuidado y mejoramiento de la comunidad, pero no se señala la participación en la toma de decisiones que hacen a las cuestiones importantes de la sociedad

Por lo mismo, se afirma que quien no tiene sentido de pertenencia no colabora, no es amigable ni contribuye con la comunidad, está desinteresado por su comunidad y por ello sus acciones la afectan.

“No pertenencia no colabora” (s. 1), “No participa en las elecciones, ni en el cuidado a la ciudad, delinque” (s.7), “Indolente, no participa, es transgresor” (s.31), “No contribuye con comunidad, que no sea amigable” (s.39), “Alguien que está totalmente desinteresado por su sociedad y esto hace que sus acciones afecten a los demás.” (s44).

La transgresión y la falta de respeto ocupan el núcleo central de la representación social sobre el mal ciudadano. Las dos categorías hacen alusión a comportamiento antisocial y egoísta y llevan a pensar que además, se hace referencia a la deslealtad.

Los elementos periféricos hacen referencia a una persona que no ejerce sus derechos e incluso los ignora (6%) y no ha desarrollado el sentido de pertenencia (2%)

Considero que el hecho de que el total de las respuestas acerca de los rasgos de un mal ciudadano indiquen que es la transgresión el más negativo de todos, está en estrecha relación con el contexto de gran inseguridad y violencia que se vive día con día en el país y principalmente en el estado de Nuevo León y su capital, Monterrey. Es tan apremiante la situación de violencia y tan evidente la corrupción y la impunidad que la acompañan, que la totalidad de los informantes han señalado que es el principal problema que requiere atención. Modificar este comportamiento deshonesto, transgresor, es uno de los retos más urgentes para toda propuesta de formación ciudadana y para todo modelo de sociedad civil democrática y participativa que se quiera promover a través de cualquier proceso educación o formación.

❖ **Valores de un buen ciudadano (jerarquizados)**

Debido a que el enfoque de la investigación que se presenta es el de la caracterización de la ciudadanía desde la perspectiva de los valores que aprecia y que ostenta, se plantearon nuevamente, preguntas de asociación libre acerca de cuáles valores relaciona con el concepto de buen ciudadano y cuáles contravalores con la noción de mal ciudadano. En un segundo momento se pidió a cada informante que jerarquizara según su importancia los cinco valores y los cinco contravalores que propuso a través de la asociación libre.

Se presenta en primer lugar el rasgo que consideraron más importante y en quinto el menos importante. Para determinar su importancia, se contabilizó el total de frecuencias con que apareció cada valor en cada uno de los niveles jerarquizados, hasta encontrar los primeros lugares en cada nivel. El porcentaje en el paréntesis corresponde al rango promedio que dichos valores obtuvieron en su aparición en cada orden de importancia.

Analizaré el sentido de cada uno de los valores que forman parte de la representación social para poder interpretar el contenido de esas representaciones.

El **respeto** (25%) es el valor que se considera más importante en un buen ciudadano, es la esencia de las relaciones humanas y sociales y por ello ocupó el primer lugar en la representación social. Respeto es apreciarse uno mismo como ser humano y apreciar a los demás en la misma dimensión. Respeto es consideración, reconocimiento, aceptación, aprecio y valoración de las cualidades de uno mismo y de los demás, de sus derechos..

Este valor es fundamental para la convivencia armónica, se expresa hacia las demás personas, las leyes, autoridades, es la vía para lograr la paz

Respetar a los demás, sin importar sus características físicas ni su manera de pensar y admitir el derecho a ser diferentes.

El respeto exige amabilidad y cortesía. Respetar a los demás, a las normas y a las autoridades es la base indispensable para la convivencia humana y el bien común. Sin respeto hay intolerancia y violencia.

El valor de la responsabilidad obtuvo el mayor rango en el segundo (24%) y el tercer lugar (35%) en la jerarquización realizada por los informantes. Considero de gran importancia hacer notar que el porcentaje acumulado es de 59%.

La responsabilidad es la facultad que permite al ser humano, interactuar, comprometerse y aceptar las consecuencias de un hecho realizado con libertad. La **responsabilidad** es el compromiso que se adquiere al hacer uso de la libertad que es un derecho de todos los seres humanos, sin embargo también es obligación de todos responder por sus acciones. De esta manera, actuar responsablemente significa tener la seguridad de que nuestras acciones no afectan

a los demás. Una persona responsable es digna de absoluta confianza, ya que sus actos responden íntegramente a sus compromisos y busca siempre la calidad a través de ellos.

Más aún, en la vida social, la responsabilidad implica la búsqueda del bien común, antes que el beneficio individual o el de grupos pequeños.

La **honestidad** (24%)

“Promoción, exigencia y salvaguarda de nuestras actuaciones individuales y colectivas..., caracterizadas por la ética, probidad, rectitud, honradez y transparencia. Honestidad como comportamiento honorable individual y social. respeto al ordenamiento jurídico, a las instituciones y a las normas de convivencia social y moral. Observancia rigurosa y respeto a nuestros principios, reglas, historia, deberes ciudadanos...” (USAL, 2006: 1)

La **solidaridad** (37%)

Se define como una disposición de ánimo para actuar siempre con sentido de comunidad. Al ser la vida una experiencia comunitaria, los problemas de los demás no pueden sernos ajenos y respondemos con una actitud de servicio. “Virtud humana y democrática que se expresa en la concurrencia y cooperación entre los seres humanos, en la contribución de sus aptitudes y potencialidades, en la aportación recíproca de esfuerzos y voluntades tanto para lograr fines individuales y sociales, como para superar sus dificultades.” (USAL, 2006: 1)

❖ **Contravalores que caracterizan a un mal ciudadano (jerarquizados)**

Se presentan a continuación los rasgos o contravalores que en estas representaciones sociales caracterizan a un mal ciudadano. En un ejercicio de asociación libre, los informantes respondieron indicando cinco rasgos de un mal ciudadano y posteriormente se les solicitó que los

jerarquizaran. A partir de las frecuencias de aparición de cada contravalor en la jerarquía del primer al quinto lugar, se obtienen los siguientes datos.

Al preguntar a los informantes qué es lo que caracteriza a un mal ciudadano, es imprescindible hacer notar que **en las respuestas, los primeros lugares de cada una de los niveles de valoración, -del primero al quinto-, hacen referencia al mismo contravalor: la deshonestidad.** La representación social de lo que caracteriza a un mal ciudadano es que sea deshonesto. El segundo lugar en las frecuencias de aparición en los cinco rasgos negativos es la **irresponsabilidad.**

En estas representaciones sociales los valores que caracterizan a un mal ciudadano son la deshonestidad, la irresponsabilidad y la falta de respeto.

En el contexto de gran inseguridad y violencia que se vive en Monterrey, en el estado y el país, en general, la **deshonestidad** fue propuesta por la totalidad de los informantes en los cinco niveles de la jerarquización, como el principal contravalor o característica de un mal ciudadano. Por tal razón propongo que el contenido de la representación social de los aspectos que caracterizan a un mal ciudadano o contravalores es precisamente la deshonestidad y principalmente en su expresión como transgresión.

Algunos de los rasgos que propusieron para caracterizar a la deshonestidad en estas representaciones sociales, son la transgresión de las leyes y normas establecidas en la sociedad, lo que conduce a cometer delitos. Al respecto es necesario señalar que el valor de respeto fue el que se consideró esencial en un buen ciudadano e implica también la obediencia a las leyes y observancia de las normas sociales.

El ciudadano deshonesto carece de valores, es decir es inmoral. La corrupción forma parte de la inmoralidad, el organismo Transparencia Internacional, la define como: "... el abuso en el poder encomendado, para beneficio personal." (TI 2011)

La Fundación Acción Pro Derechos Humanos plantea que la corrupción vulnera los derechos humanos, ya que generalmente entraña una violación al derecho de igualdad ante la ley e incluso puede llegar a vulnerar los principios democráticos, al conducir a sustituir el interés público por el interés privado de quienes se corrompen. Se puede presentar como tráfico de influencias o en forma de obtención de favores ilícitos a cambio de dinero u otros favores. Por consiguiente este problema genera grandes costos sociales y económicos. (FAPDH, 2012:1)

El engaño es otra acepción de la deshonestidad que está asociado a la inmoralidad y a la corrupción. La mentira como forma de llevar a cabo el engaño es otra característica de la deshonestidad que se relaciona con la noción de hipocresía. En relación con la inmoralidad se establece un vínculo con el ciudadano vicioso.

Una de las formas en que se propuso que se manifiesta la deshonestidad, relacionada con la noción de transgresión también, es el mostrar comportamientos negativos entre los cuales resalta la violencia y la agresión en sus diferentes expresiones, llegando a menciones de hasta las nociones de maldad y guerra. Por tanto, el ciudadano deshonesto es también, conflictivo.

El ciudadano deshonesto comete actos injustos.

El contravalor que ocupó el segundo rango, de acuerdo con las frecuencias alcanzadas fue la **irresponsabilidad**. Este rasgo negativo ocupó el segundo lugar en cada una de las cinco opciones.

Se propone que un ciudadano irresponsable, es flojo, incumplido con sus obligaciones en tal sentido, desobligado, no se compromete, es permisivo y no cuida el medioambiente.

Son características también, del ciudadano irresponsable, el ser descuidado, incompetente e indiferente.

El tercer rasgo que se señala para un mal ciudadano es que sea **irrespetuoso**. Ser irrespetuoso implica también, en estas representaciones sociales, ser intolerante y desconsiderado. Dado que la tolerancia supone el respeto a la diferencia y aceptación del legítimo pluralismo, la falta de respeto puede asimilarse a la noción de intolerancia.

Como elementos periféricos se señalan la apatía y la pasividad. Otras expresiones de la apatía son la pereza, el conformismo y el desinterés.

III Identidad de los ciudadanos mexicanos

❖ Rasgos de identidad como ciudadanos mexicanos

En estas representaciones sociales el rasgo más importante que determina la identidad de los ciudadanos mexicanos es la **cultura (89%)**. La cultura es el núcleo central de la noción de identidad de los ciudadanos mexicanos.

La cultura es elemento generador del sentido de pertenencia y por tanto, de la identidad por adscripción. Según afirma Gilberto Giménez Montiel:, "...la identidad es el conjunto de repertorios culturales interiorizados (representaciones, valores, símbolos), a través de los cuales los actores sociales (individuales o colectivos) demarcan sus fronteras y se distinguen de los demás actores en una situación determinada, todo ello dentro de un espacio históricamente específico y socialmente estructurado." (vid en Chihú, A. 2002: 38)

La identidad florece a partir de las formas culturales, cada individuo conoce, interpreta y actualiza la cultura a partir de sus experiencias personales y sociales. Algunos aspectos de la cultura han sido interiorizados.

Diversos elementos se proponen como parte de la cultura: los valores, la familia, las costumbres y tradiciones, la religión, el idioma, los símbolos patrios, la historia y los rasgos físicos, entre otros.

“La cultura, la moral que cada individuo tiene, la forma en que nos expresamos, el idioma que utilizamos, los rasgos físicos que tenemos, la manera de convivencia a diferencia de otras razas, el cómo festejamos nuestros logros y demás.” (s53), “Nuestra cultura, las tradiciones, las costumbres, las riquezas naturales, etc.” (s56)

Como un elemento aislado, pero importante en relación con la posibilidad de lograr una democracia verde, se hace mención a las riquezas naturales como parte de nuestra identidad. Esta referencia me parece de gran importancia ya que valorar la naturaleza y considerarla como un rasgo distintivo de identidad, a partir del cual se desarrolla nuestro sentido de pertenencia, es un elemento fundamental para su respeto y cuidado.

La identidad cultural es también una identidad territorial, ya que compartir una cultura común, es posible cuando se nace o se habita en un mismo lugar o comunidad.

“Haber nacido en territorio mexicano. El reconocimiento y respeto a nuestros símbolos patrios (bandera, escudo, himno, constitución), nuestro idioma, nuestra cultura.” (s36), “El idioma, las tradiciones y la cultura.” (s37), “Una Constitución, costumbres, tradiciones.” (s5), “Nuestra bandera, nuestro himno.” (s6)

Solidaridad

“Historia, costumbres, nuestra fuerza de trabajo, la unión que hay cuando nos sucede una desgracia.” (s7), “Las ganas por salir adelante, trabajadores, alegres, fiesteros.” (s17), “Que cuando hay desgracias, siempre estamos dispuestos a ayudar y que en buenos y malos momentos estamos unidos.” (s23), “El tener muy presente el valor de bondad y solidaridad, etc.” (s39)

Además del territorio y la cultura compartida, como parte de esta misma, se hacen especiales menciones acerca de los símbolos patrios. La identidad como ciudadanos se construye en torno al conjunto de los rasgos que conforman la identidad territorial y cultural, algunos de los cuales podemos agrupar bajo el concepto de **patriotismo**, que es el principal rasgo de identidad como ciudadanos mexicanos en estas representaciones sociales, que se expresa como sentido de pertenencia y solidaridad:

“El patriotismo, solidaridad y generosidad.” (s15), “El patriotismo.” (s21), “El orgullo a nuestro país, la permanencia de los valores, la calidez humana.” (s24), “El ser solidarios y trabajadores, nuestro respeto a los símbolos patrios.” (s1), “El honrar los símbolos patrios.” (s18), “Respetando nuestros lavaros patrios.” (s33), “El respeto por nuestra Constitución mexicana, nuestros símbolos patrios y pertenecer a la República mexicana.” (s44), “La bandera.” (s46)

En algunos casos la identidad se presenta en términos de ideales: “Es aquel que nace, vive y cumple como buen ciudadano.” (s30)

Según Álvaro Ibáñez, el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, son por excelencia, los Símbolos oficiales de nuestra Patria, cargados de historia por nuestras luchas libertarias contra la tiranía y la opresión, son emblemas de nacionalismo, fraternidad, consenso, igualdad y unidad nacional, que nos han fortalecido en los momentos históricos. Están cargados de ideales democráticos. (1997: 2)

“Nuestros símbolos patrios fincan y promueven la identidad de nuestro pueblo distinguiéndonos claramente de las otras naciones del mundo. Son elementos que expresan nuestra unidad e identifican como mexicanos frente a la heterogeneidad y los contrastes étnicos, sociales, culturales y geopolíticos que conforman a México.” (Ibáñez, Á. 1997: 3)

El escritor Andrés Henestrosa (fecha), sintetiza la importancia de los símbolos patrios para nuestra identidad mexicana, resaltando que son resultado de una historia de lucha por conseguir una patria soberana, libre e independiente y por alcanzar el pleno disfrute de los derechos y las libertades.

La **nacionalidad** (74%) es el segundo rasgo de identidad como ciudadanos mexicanos en estas representaciones sociales.

- a) Las representaciones sociales, refieren a una nacionalidad social o de sentimiento, la cual se fundamenta en una **identidad territorial**:

“Haber nacido en territorio mexicano. El reconocimiento y respeto a nuestros símbolos patrios (bandera, escudo, himno, constitución), nuestro idioma, nuestra cultura.” (s36), “El haber nacido en este país.” (s14), “El nacer en México.” (s3)

Otro elemento importante que se propone como constitutivo de la identidad territorial es el **lugar de residencia**:

“El haber nacido o vivir en la república mexicana.” (s16), “El vivir en el mismo país.” (s48)

- b) A partir del reconocimiento formal de la nacionalidad, se origina la **identidad jurídico-política**

Algunos de los elementos citados en estas representaciones sociales aluden a la **identidad jurídica formal** que se adquiere con la nacionalidad y como parte de ella se hace mención del

acto jurídico que la acredita: tener documentos oficiales como el acta de nacimiento y tener la credencial de elector, cumplir la mayoría de edad:

“Credencial de Elector.” (s32), (s35), (s51), “Documentos. “ (s38), “Documentos.” (s38), “El acta de nacimiento.” (s45)

Se reconoce en estas representaciones sociales que la nacionalidad puede adquirirse también por **naturalización**:

“El haber nacido en el país o haber adquirido la nacionalidad.” (s34), “Tener más de dieciocho años, ser mexicana o en el caso de ser extranjero, haber obtenido la carta de ciudadanía mexicana.” (s4)

A partir del reconocimiento de la nacionalidad, se hace oficial la **titularidad de derechos y obligaciones**. Aunque la identidad jurídico-política conlleva también el ejercicio de los derechos y las obligaciones, en estas representaciones sociales, prácticamente no se hace alusión al ejercicio de los derechos y en contraparte, se enfatizan las obligaciones:

“El haber nacido en México, el tener derechos y obligaciones.” (s31), “La nacionalidad, el respeto a la Nación y el entendimiento de que dicha nacionalidad conlleva también obligaciones.” (s12)

Tan sólo se presentó un elemento periférico aislado que hace referencia al ejercicio de los derechos:

“Gozar de nuestros derechos.” (s41)

Se presenta un grupo de rasgos de identidad, todos negativos (31%). Dichos rasgos agrupados, ocupan el tercer lugar en estas representaciones sociales. La mayoría de estos rasgos negativos se refieren a aspectos políticos característicos de la ciudadanía mexicana.

“Que somos una población inmensa que tiene por ahora grandes problemas que afrontar porque no solo debemos preocuparnos por cumplir las leyes que se nos imponen, sino hasta un punto en el que debemos cuidarnos de quienes “rigen” y “llevan a cabo” el cumplimiento de la constitución, esto no es responsabilidad social por parte de los funcionarios gubernamentales, entonces puede llegarse a la conclusión de que son malos ciudadanos.” (s55)

En esta respuesta se percibe la desconfianza hacia las autoridades, a las que se señala como transgresoras de la ley y socialmente irresponsables.

“Como mexicanos los valores son la familia y la religión. Como ciudadanos mexicanos, considero que no hay todavía un elemento aglutinador pero se identifica ese ciudadano mexicano incipiente con los símbolos patrios por ahora y por cuestionar la vida pública. Habrá otros casos más profundos, y ellos ya participan mas en la vida democrática del país.” (s40)

Falta elemento aglutinador: deberían ser las raíces pero no sucede, corrupción: “desgraciadamente lo corruptos que solemos ser” (51)

En estas respuestas se capta la creencia de que no existe un elemento que nos identifique como ciudadanos y nos dé unidad; se menciona que no hemos dotado a los símbolos patrios de un contenido vivencial a partir de nuestra participación democrática, sino sólo de un valor formal, según este informante, lo único que nos identifica es nuestra crítica a la vida pública y la corrupción.

Un grupo importante de los informantes propone un rasgo negativo que nos da identidad como ciudadanos mexicanos: el conformismo, expresado también en forma de pasividad y aceptación acrítica de las imposiciones.

“El conformismo.” (s47), “Lo que nos identifica como ciudadanos mexicanos es que somos muy pasivos, y no actuamos ante la situaciones que se presentan, aceptando las cosas como están.” (s54), “Estar de acuerdo con los gobernantes” (s19) “aceptar las reformas que se nos están poniendo” (s26), “Incapaz de aumentar sus derechos, inmaduro políticamente, permite coacciones” (s. 8), “pasivos, no actuamos, aceptar las cosas como están.” (s.54), “La falta de libre expresión.” (s10)

Los rasgos negativos expresan primordialmente la idea de una inmadurez política que caracteriza a los ciudadanos mexicanos. Tal inmadurez se expresa como ausencia de participación política y pasividad. Falta de compromiso con la nación, irresponsabilidad, incapacidad de aumentar derechos, expresión limitada (censurada), sumisión.

Estas tres afirmaciones coinciden en el planteamiento de que la apatía y el conformismo son los rasgos que nos dan identidad como ciudadanos mexicanos.

También, entre los rasgos de identidad, se presentan algunos elementos que pueden considerarse periféricos, pero que resultan de gran importancia ya que proponen a la corrupción como importante.

“Desgraciadamente lo corruptos que solemos ser.” (s51), “Tengo dos opiniones una mala es el ciudadano corrupto que no todos y el bueno es que somos trabajadores, *luchistas* y que tenemos dignidad.” (s25), “Físicamente, la vestimenta y el acento, y desgraciadamente la corrupción, la irresponsabilidad, violencia, etc.” (s20)

❖ Rasgos distintivos de identidad como ciudadanos mexicanos

Se repitió la pregunta con una variación, al solicitar los rasgos que **distinguen** a un ciudadano mexicano respecto de un ciudadano de otro país. Las repuestas fueron muy semejantes y los aspectos de mayor importancia para determinar la identidad, fueron también los culturales. La **cultura** ocupa la totalidad de las representaciones sociales de la identidad como ciudadanos mexicanos (100%)

Nuestra identidad como ciudadanos mexicanos se distingue por la **cultura**, constituida por nuestras costumbres y tradiciones, nuestra vestimenta. Conforman también los rasgos de identidad cultural, hábitos: como el habla y la lengua o idioma, las maneras de pensar, las creencias, los modos y el comportamiento. Se hace referencia también a la diversidad cultural.

“Arraigadas costumbres que son clichés ante otros países” (S12), “La vestimenta, el porte de charro, el conformismo, ser fiesteros y alegres” (S24), “La lengua y la vestimenta.” (S37), “El habla, nuestro comportamiento ante diversas situaciones.” (s28), “La forma de hablar, costumbres, manera de pensar, expresarse, es si las diferentes culturas.” (s17), “La cultura.” (s56)

“Nuestra cultura, modos y régimen.” (s27), “La cultura, los valores, las creencias, el gobierno, las leyes.” (s13), “Que las culturas y leyes son distintas.” (s25)

Los valores son parte fundamental de nuestra identidad cultural, entre los cuales destacan los familiares y el patriotismo. Como parte del valor del patriotismo, se resaltan nuestros símbolos patrios, entre los que se da gran importancia al respeto a ellos, principalmente a la Bandera, el Himno Nacional y la Constitución.

“Los valores familiares.” (s6), “Costumbres, valores e idioma.” (s33), “Sus costumbres, su lenguaje, sus tradiciones, sus culturas.” (s42), “Su Constitución, costumbres, tradiciones y símbolos patrios” (s5), “Respetamos la bandera.” (s22)

La fusión de la cultura con el valor del patriotismo, lleva a la noción de **sentido de pertenencia, en relación con la nacionalidad**: “Orgullo que se tiene por su nación” (s1), “«La lealtad», la inclinación por todo lo referente a los mexicanos.”(s55), “Unión, solidaridad.” (s18), “Origen” (s 34), “El país donde nacieron” (s2), “Su nacionalidad en principio.” (s40), “Humildad de sus raíces” (s10), “Nuestra Patria” (sujeto 26)

Parte de los atributos de identidad asociados a la nacionalidad que se expresa en estas representaciones sociales, son los rasgos físicos. Entre tales rasgos se proponen: la complexión y la raza. “Sus rasgos.” (s30), “Físicamente somos diferentes” (sujeto 35)

El **estatus jurídico político** que se adquiere con la nacionalidad es el segundo elemento que se propuso como distintivo de la identidad de los ciudadanos mexicanos. El estatus jurídico político, implica la **titularidad y ejercicio de derechos y obligaciones**. Dicho estatus es planteado en su expresión eminentemente formal cuando se proponen como rasgos de identidad de los ciudadanos mexicanos, aspectos como la mayoría de edad, el contar con documentos como el acta de nacimiento y la credencial de elector.

“La edad a la cual se llega a ser ciudadano: 18” (s20), “Sus documentos.” (s38), “Tiene acta de nacimiento de México y el otro no.” (s45), “Además de la credencial de elector y su mal gobierno, pues su cultura y educación.” (s50)

Entre los derechos destacan los civiles y políticos primordialmente, como las *libertades de expresión, de decisión propuesta como posibilidad, de consumo, de elegir el lugar* en donde

quiera vivir, de trabajar donde quiera,-un poco mayor que en otros países- y las garantías Individuales. “Sus derechos y obligaciones”. (s.11), “Cobertura de las Garantías Individuales de nuestra Constitución.” (s36), “Las Garantías Individuales.” (s32), “Diferencias regionales, derechos que otros países no tienen.” (s54)

Se plantea la exigencia del cumplimiento de los derechos, cuando se afirma la posibilidad de defender los derechos constitucionales. Sin embargo, esta exigencia sólo se plantea en un caso aislado, los demás sujetos únicamente hacen referencia a los aspectos formales. “Poder defender los derechos Constitucionales como la libertad de expresión.” (s.4)

En cuanto a la titularidad y ejercicio de obligaciones, se propone el respeto a las leyes de la Constitución Mexicana, cumplir con las obligaciones, primordialmente mediante el: “Pago de impuestos.” (s.19)

El estatus jurídico-político es posible en el marco del Estado, entendiéndolo como el régimen, el gobierno que nos representa. Respecto a lo que identifica las relaciones de los ciudadanos con el gobierno, se emiten algunos comentarios negativos: conformismo en relación al gobierno: “conformismo en cuanto al gobierno, se queja y no da ni abre soluciones” (s. 47), “...su mal gobierno...”(s50)

Descripción de la ciudadanía regiomontana

En cuanto a los atributos que caracterizan a la ciudadanía regiomontana en estas representaciones sociales, los que ocupan el primer lugar en frecuencias (33%), son positivos. Sin embargo, no existe mucha distancia con relación a los rasgos negativos que ocupan un 31%. Esto nos evidencia que la representación social está dividida.

Entre los aspectos positivos, se la considera **trabajadora, responsable y emprendedora.**

“Ciudadanos trabajadores, con un alto compromiso.” (s1), “Trabajadora, responsable, capaz e inteligente” (s11), “Honesta, trabajadora y muy leal.” (s14), “Alegre, leal, respetuosa, sincera, próspera e innovadora.” (s6), “Responsable, entregada, trabajadora, y muy social.” (s17), “Personas trabajadoras, entusiastas y con ganas de salir adelante.” (s31), “La mayoría son buenas personas, buenos amigos, serviciales y solidarios.” (s23), “Como personas con valores muy arraigados, personas que se esfuerzan mucho por conseguir lo que quieren, trabajadoras, muy activas y madrugadores, orgullosos de su estado.” (s24), “La mayoría cumple con sus deberes y obligaciones y practica valores.” (s16), “Trabajadora, de buenos principios.” (s27), “Unida, siempre ayudándonos unos a otros.” (s18), “Muy responsable y con fe en su país.” (s37), “Como personas inteligentes, conscientes de sus necesidades, dispuestas a obtener del gobierno lo que les pertenece, sus derechos.” (s55),

Se proponen también otros rasgos, como sus **valores arraigados**, los que pone en práctica, los buenos principios, el ser una persona sincera u honesta, la consideración de ser buenas personas en su mayoría. Entre los valores, se resalta también una ciudadanía **patriota**: “Muy responsable y con fe en su país.” (s37), “Orgullo por su estado, amor a la patria, unida, solidaria, servicial.” (s24), “Por el gran amor a la patria.” (s52)

Las representaciones sociales acerca de la ciudadanía regiomontana muestran una gran cantidad de **rasgos negativos**. Los principales aspectos negativos que se resaltan son los relativos a la falta de participación de los regiomontanos en los asuntos que deberían ser de su interés. Así la principal categoría que se obtiene y ocupa el segundo lugar,-muy cercano al primero-, es la **apatía** (31%). Esta apatía, como puede constatarse al compararla con los rasgos positivos, no tiene que ver con el esfuerzo y la laboriosidad, sino que se refiere a una apatía como falta de interés y participación en asuntos políticos.

Las representaciones sociales de la ciudadanía regiomontana la muestran desinteresada en la política y en los problemas de su entorno, además de conformista: “Pasiva, desinteresada por los procesos políticos porque consideran que no pueden hacer nada para cambiar y mejorar las cosas. Y muy pesimista en asuntos que nos competen a todos.” (S.54)

“Falta colaboración” (s. 5), “Como personas desinteresadas porque cuando hay algún problema ciudadano nadie pone de su parte y prefieren hacerse a un lado para que la autoridad lo resuelva.” (s. 46), “Es gente de trabajo que prefiere llevar la tortilla a su casa en vez de andar en politiquería barata y que debido a los altos impuestos y pocos bienes y servicios, se desahoga en el futbol.” (s34)

Las representaciones sociales de la ciudadanía regiomontana la describen como **desinformada, desorganizada**, toma decisiones precipitadas, está desintegrada: “En estos momentos rota por culpa de los ciudadanos mismos que no nos interesa más que el beneficio propio.” (s49)

Se manifiesta también gran **desconfianza** hacia los otros habitantes y principalmente hacia las autoridades, que afecta la participación ciudadana y la construcción de la democracia:

“Poco participativa, faltan líderes que participen y tengan presencia con voz y voto para llamar la atención y reprimir a los malos funcionarios.” (s.45), “Mucha gente no ejerce su responsabilidad al momento de las votaciones, no acude a votar por equis circunstancias, en su mayor parte no cree en lo que cada prospecto a gobernante propone que realizará durante su periodo gubernamental.” (s20), “Siento que en estos tiempos estamos en un momento donde no hay democracia ni libertad.” (s15)

Las representaciones sociales de la ciudadanía regiomontana muestran además una ciudadanía ambiciosa y **convenenciera**: “Convenienciera y apática, poco preocupada por una cultura de legalidad.” (s.40).

Una ciudadanía, que coloca su interés individual por encima del bien común: “Pues somos una sociedad en su mayoría convenenciera y ambiciosa, es decir, se ponen en primer término los intereses personales, luego los compromisos con terceras personas y en el siguiente lugar, si no es que más abajo aparece ahora si el interés social, que es el que debe imperar en primer lugar ya que el fin de la sociedad debe ser primordialmente el bien común.” (s25), “En ocasiones la ciudadanía es un poco conflictiva al pedir sus peticiones a las autoridades correspondientes.”(s56),

Una ciudadanía clasista, **elitista**: “clasista, a la vez segregada y segregadora.” (s9)

Otros rasgos negativos que son importantes de destacar son los que manifiestan una ciudadanía **deshonesta** que realiza malas acciones, a la que no le preocupa la cultura de la legalidad.

Se proponen también las representaciones de una ciudadanía **atemorizada** por la violencia que afronta nuestra ciudad y sociedad mexicana, en términos generales, en el momento actual: “Personas que están atemorizadas por la situación actual de la narcoviolencia y que prefieren callar a que más adelante alguien pueda atentar en su contra. Es allí donde se pierden los derechos y obligaciones al callar aquellas injusticias donde otros se ven afectados.” (s. 19), “Temerosa debido a la violencia, conformista.” (s5), se señala que incluso llega a ser una ciudadanía amarillista.

Después de analizar los aspectos negativos que caracterizan a la ciudadanía regiomontana, podemos percatarnos de que la posibilidad de conformar una sociedad civil verdaderamente

democrática y participativa se encuentra muy lejana, pues los elementos que se requieren para ello están ausentes y por el contrario, hay aspectos que lo obstaculizan. Las representaciones sociales retratan una ciudadanía apática, desinteresada, conformista y pasiva ante los asuntos que debieran ser de su interés. Al no haber interés, la ciudadanía no se informa, ni logra organizarse para defender sus intereses individuales y colectivos.

Se presentan además otros aspectos negativos que dificultan aún más la participación ciudadana. La deshonestidad y el hecho de que los ciudadanos sólo cuiden de sus intereses individuales, son un factor que impide la cohesión y el trabajo conjunto por alcanzar objetivos comunes. Además se presentan la desconfianza y el temor que hacen imposible el llegar a acuerdos y el trabajar en forma conjunta. El temor genera también el conformismo, ya que la población acepta injusticias, violaciones a sus derechos, inequidades, etc., por miedo a represalias.

Las representaciones sociales de la ciudadanía regiomontana están divididas, ya que una parte de los informantes tiene una valoración positiva de la misma y otra parte proporcional, tiene una valoración negativa. No obstante, los aspectos positivos que fundamentalmente proponen una ciudadanía emprendedora y trabajadora, parecen no ser lo suficientemente fuertes para romper con la inercia que mantienen los aspectos negativos.

IV Derechos y obligaciones de los ciudadanos mexicanos

Los derechos que los informantes proponen como propios de los ciudadanos en estas representaciones sociales son:

1. En primer lugar el derecho a la **educación** (70%) que constituye el núcleo central

2. En segundo lugar con el 44%, se señalan algunas **libertades**, fundamentalmente las de expresión, de agrupación, de elegir lugar de residencia, de tránsito, de manifestación y de acción.
3. En tercer lugar, con un 26%, se proponen el derecho a la **salud** y el derecho al **sufragio**.
4. En cuarto lugar, con 15%, se afirman derechos **políticos** como el de elegir a nuestros representantes, ser votados (participación democrática), a un buen gobierno y a exigir rendición de cuentas (gobernanza).
5. En quinto lugar, con un 11%, se propone el derecho **a la vida**.
6. Se presentaron otros derechos, en forma aislada y dispersa, que forman parte de los elementos periféricos: igualdad, justicia, vivir en paz, tener una familia, información, huelga, propiedad
7. El núcleo central de la representación social está ocupado por un derecho social de segunda generación: el **derecho a la educación**. Los subsecuentes derechos propuestos son de primera generación (civiles y políticos). A partir de un breve análisis de los derechos que se conocen y consideran constitutivos de la ciudadanía mexicana, es posible afirmar que nuestra formación cívica y participación política son incipientes, ya que se mencionan primordialmente derechos de primera generación y un solo derecho de segunda generación.

Estos datos expresan que la ciudadanía regiomontana tiene un conocimiento limitado de sus derechos, básicamente conoce que le son inherentes, derechos fundamentales que se expresan en derechos civiles y políticos, de primera generación, y tan sólo dos derechos sociales o de segunda generación, dentro de los cuales el derecho a la educación es el más importante en estas representaciones sociales. Este desconocimiento pone de manifiesto una ignorancia respecto a los derechos ciudadanos y por ello, una inmadurez política, que conducen a la imposibilidad de

346

participar activamente en la vida democrática, en las decisiones que son de interés de la ciudadanía y en la exigencia de aquellos derechos que estén siendo dejados de lado o violados.

❖ Obligaciones de los ciudadanos mexicanos

Cuando se solicitó a los informantes que expresaran cuáles son las principales obligaciones de los ciudadanos mexicanos, la totalidad de ellos coincidió al proponer el **respeto a las leyes y normas sociales** (100%). El núcleo central es ocupado por la noción de **respeto**, que se emplea en el sentido de obediencia y cumplimiento. Entre las principales obligaciones se propusieron cumplir las leyes, ejercer el sufragio y pagar impuestos.

Evidentemente esta categoría es muy amplia, pues engloba una gran cantidad de obligaciones; es necesario señalar que la mayoría de las respuestas se refieren a cumplir las leyes. Este aspecto podemos vincularlo con las respuestas que proporcionan en relación con los rasgos de un buen ciudadano en las cuales se señalaba como el más importante el respeto, como obediencia de las leyes y normas.

Algunos ejemplos de respuestas son:

a) Cumplir las leyes

“Cumplir la Constitución Mexicana.” (s2), “Respeto a la Constitución, respeto a los símbolos patrios.” (s5), “Respetar leyes cumplir con nuestros deberes” (s1), “No transgredir, respetar” (s8), “Respetar a nuestros semejantes, regirnos por la ley, etc.” (s27)

b) Cumplir las obligaciones y deberes

“Pagar impuestos, respetar las leyes que rigen nuestro país, trabajar, dar educación a los hijos.” (s30), “Cumplir con las normas establecidas, estudiar, trabajar, ayudar a tu familia.” (s17), “Cumplir mis deberes en casa” (s23)

En segundo lugar, por la importancia que se les asigna en las representaciones sociales (67%), se ubican las obligaciones relacionadas con el **respeto a la nación** en su sentido cultural, relacionado con el **patriotismo**. Respetar a los demás, sus derechos e ideologías, las tradiciones, a los símbolos patrios, a las instituciones, las etnias, etc.

“Respeto a nuestra Constitución, respeto a los símbolos patrios.” (s5), “Trabajar para sacar adelante al país, tener respeto para nuestros compatriotas y acudir al llamado de nuestro país si así lo requiere.” (s28), “Respetar nuestra carta magna (constitución), defender nuestra patria, declarar nuestros ingresos y pagar impuestos, enviar a los menores a recibir educación ya sea privada o impartida por el estado, ejercer el voto responsablemente, respetar la vida y propiedades de los demás.” (s36), “Respeto a la Nación, a sus símbolos e instituciones, al derecho ajeno.” (s12), “Cumplir con las leyes, pagar impuestos, servir a nuestro país en caso de ser necesario.” (s16), “Respetar las ideologías de las demás personas, sobre todo el origen étnico. También trabajar para formar un mejor futuro.” (s10)

También se resalta, entre las obligaciones, la **búsqueda del bien común**, cuidar al país, sus recursos naturales, el medioambiente (9%). Este último tema del **cuidado al medioambiente**, resulta de gran importancia para esta investigación.

“Respetar las leyes de la Constitución, respetar la libertad de los demás ciudadanos, cuidar nuestro estado-nación tanto en lo ambiental como en situación de guerra” (s24), “Respetar las leyes y a los demás ciudadanos, no contaminar el ambiente en que vivimos.” (s49), “A contribuir con nuestro trabajo al desarrollo del país, a votar para elegir candidatos, a cuidar el ambiente, a respetar entre nosotros, a pagar impuestos.” (s7), “Hacer que todos los niños asistan a las escuelas, contribuir a ayudar al planeta.” (s39), “Votar, cuidar el medio ambiente, tratar de no ser corruptos, pagar nuestros impuestos.” (s51), “Cumplir con lo que dice la ley, proteger el medio

348

ambiente y respetar a todas las personas.” (s52), “Cuidar el agua, tirar la basura en su lugar, respetar los derechos de los demás y los ideales de cada individuo, cuidar nuestra naturaleza, participar dentro de la sociedad, para el mejoramiento de la comunidad, votar para elegir a la persona que nos representara dentro de nuestro país.” (s53)

El 41% de los informantes plantea como obligaciones la **participación política**. Se presentan algunas menciones relativas a la vida democrática: una a la participación democrática, otra al desempeño de cargos de elección popular y dos a la exigencia de respeto a nuestros derechos. Sin embargo, la mayoría de las respuestas vinculan inmediatamente la participación política con la votación, como si en este acto se agotara.

“Participar en todo lo que lleve a la mejora de nuestro país y respetar a los demás.” (s4),

A partir de estas consideraciones, podemos afirmar que nuestra incipiente noción de la democracia es concebida estrictamente como participación en las elecciones. Esta idea de que la participación democrática consiste únicamente en ejercer el sufragio, ha determinado que se aplique la denominación de democracia electoral para definir a este tipo de sociedades que mantienen esta limitada concepción de la participación.

Afirma José María Infante que el voto se ha convertido, en muchas sociedades, en la única forma de participación política para muchas personas y se ha asociado de forma casi exclusiva con la noción de democracia. (Infante, J.M. 2000: 1)

“Enviar a los hijos a la escuela, ir a votar.” (s11), “Ser responsables, votar por los gobernantes.” (s3), “Ejercer el voto para elegir autoridades” (s 13), “Votar y cumplir con el servicio militar.” (s45), “Votar, hacer valer nuestros derechos.” (s47).

Pese a ser mínimas las referencias a la búsqueda del bien común, es importante resaltar los escasos elementos periféricos emergentes que nos orientan hacia la gobernanza, ya que señalan la obligación de una participación ciudadana en beneficio de la comunidad: “Participar en todo lo que lleve a la mejora de nuestro país y respetar a los demás.” (s4), “Hacer algo por el bienestar del lugar donde vivimos, elegir por medio de votaciones a las autoridades gubernamentales etc.” (s20), “Participar en la democracia «participativa» del país.” (s9)

V Prácticas sociales relativas a la ciudadanía. Participación

En esta sección se presentan los resultados del grupo de preguntas acerca de las prácticas ciudadanas, es decir, aquellas que se relacionan con la participación efectiva de los informantes. La intención es contrastar este grupo de respuestas con las representaciones sociales sobre ciudadanía.

❖ Qué hace para ser un buen ciudadano

Cuando se preguntó a cada informante acerca de ¿qué hace para ser un buen ciudadano?, llama la atención que muchas de las respuestas a esta pregunta se acompañaron de la palabra “trato”, principalmente las relativas al cumplimiento de las leyes, que ha sido señalado como el rasgo más importante en un buen ciudadano.

El núcleo central de las representaciones sociales (74%), muestra que las actividades que se consideran como prácticas de un buen ciudadano, primordialmente se refieren también a **obedecer las leyes y cumplir con sus obligaciones**, los deberes como mexicano y las normas establecidas. En tal sentido hacen referencia a la **cultura de la legalidad**. Podemos señalar que

existe congruencia entre las representaciones y las prácticas sociales, por lo menos en un primer momento en que se enuncian.

Aunque se les preguntó sobre prácticas efectivas, la mayoría de las respuestas se orientó a afirmaciones abstractas.

En estas respuestas acerca de las prácticas concretas que realizan como buenos ciudadanos, podemos afirmar que se perfila la noción de vivir de acuerdo con una cultura de la legalidad. Las prácticas que expresan hacen referencia nuevamente al aspecto de la obediencia de las leyes y normas.

“Cumplir las leyes y sus reglamentos. Votar en tiempos de elección” (s14), “Tratar de cumplir con todo lo que el gobierno indique” (s15), “Tratar de cumplir con todos los deberes como mexicano” (s16), “Cumple sus obligaciones, respeta los símbolos patrios y la Constitución” (s5), “Tratar de respetar las leyes” (s30), “Apoyar al gobierno, si hay basura la levanto, denuncio lo que está mal” (s37), “Busco hacer lo que debo de hacer en mi metro cuadrado que me toca vivir y si puedo (por que lo busco) pido cuentas a mis empleados públicos. Vivo una cultura de la legalidad.” (s40), “No robar, no matar, respetar las normas” (s43), “Trato de respetar a los demás, me niego a fomentar la corrupción, no dando mordidas a agentes de transito, etc.” (s46)

En segundo lugar, otro sector importante de respuestas (46%) acerca de las prácticas que pueden ser representativas de la buena ciudadanía, resalta el aspecto relativo a la **contribución al bien común**, a la cooperación y las aportaciones a la comunidad. Se mencionan como prácticas el buen comportamiento, promover la armonía, establecer buenas relaciones comunitarias, ayudar a otros, así como diversas aportaciones.

“Cumplir con las obligaciones, preocuparse por la comunidad” (s1), “Ser tan libre como pueda sin dañar al otro, tal vez intentar en lo posible, asistir a otro ciudadano” (s12), “Respetar a todos con los que convivo a lo largo del día, cumplir las reglas que me ha establecido la sociedad, ser un miembro económicamente activo.” (s21), “Actuar de una manera ejemplar para los demás, no sólo ver por mis intereses, sino también en la sociedad que me rodea” (s10), “Intento promover la democracia” (s 24)

En el tercer lugar, forman parte también de esa cultura de la legalidad, el **respeto a la patria y a los demás**: (39%) “Respetar a los demás, regirme por la ley, tener respeto hacia mi patria.” (s26), “Respeto mi país pero sobre todo el derecho ajeno.” (s18), “Ser ejemplar, pensar en los demás” (s10), “Ser tan libre como pueda sin dañar a otros” (sujeto 12)

En el cuarto lugar, de acuerdo a la frecuencia con que se presentan, se propone el **respeto y cuidado al medioambiente** (26%) y alusiones a temas que podemos englobar en el concepto de **gobernanza** (26%).

Me parece muy interesante hacer notar que en lo que se refiere al cuidado al medioambiente, las respuestas se presentan separadas de aquellas que hacen referencia al cumplimiento de leyes, por ello es posible afirmar que dichas acciones no se realizan por obligación, sino por conciencia, probablemente también porque en materia de legislación ambiental y supervisión a su cumplimiento, nuestro país se encuentra en un nivel poco desarrollado y manifiesta poca atención e interés.

Aunque no representan un sector mayoritario de los informantes, es importante señalar que empieza a hacerse patente una toma de conciencia acerca de la importancia de cuidar el medioambiente, lo que se expresa en prácticas concretas. El hecho de que no aparezcan

menciones tan frecuentes en las representaciones sociales y sí en las prácticas de un buen ciudadano me lleva a reforzar esta interpretación de que se debe a una toma de conciencia que se está desarrollando en la población sin que forme parte de una intencionalidad por parte de las autoridades.

Podemos analizar las siguientes respuestas: “Trato de establecer buenas relaciones con mi comunidad y trato de cuidar el ambiente. También participo en un proyecto de medios libres” (s9), “Cuido de mi familia y de mi prójimo su bienestar, cuido mi plantas, cuido el agua, tiro la basura en su lugar, respeto los horarios de los demás para no causar problemas, respeto su forma de pensar, apporto de mis conocimientos y valores para el mejoramiento de mi comunidad, respeto el espacio de los demás, cuido los animales, participo en eventos de mi comunidad para el mejoramiento de la misma, cuido mis calles reportando cualquier ilícito que se cometa como el rayar paredes u otras cosas, mantengo limpia mi casa.” (s53), “Cumplir con obligaciones fiscales, aportando en mi empresa mis conocimientos de un modo honesto y responsable, cuidando el medio ambiente y transmitiendo mis conocimientos y experiencia a las nuevas generaciones.” (s7), “Cumpro con mis obligaciones, trato de cuidar el medio ambiente.” (s51), “Respetar las leyes, cuidar el ambiente y cumplir con mis obligaciones” (s11), “Tratar de ayudar a los demás en lo que se pueda, no tirar basura, expresarme de manera correcta y cumplir con mis obligaciones.” (s17)

Podemos captar también que el nivel de protección y cuidado al medioambiente es muy incipiente y limitado, debido en gran parte a la falta de información y conocimiento en la materia que tiene la ciudadanía, que por ello limita sus prácticas a ciertas acciones relacionadas con la limpieza, primordialmente no tirar basura y cuidar las plantas.

La **gobernanza**, entendida como participación política y exigencia del cumplimiento de sus derechos, puede deducirse de su aparición en algunas respuestas. Debido a la importancia que tienen estos aspectos como parte de la participación ciudadana, me interesa resaltarlos y llamar la atención precisamente a su casi imperceptible aparición en las respuestas. Esta baja frecuencia nos lleva a interpretar que son aspectos a los que no se les da importancia como características de una buena ciudadanía.

Estela Ortega al exponer los datos obtenidos en una investigación acerca de las representaciones sociales de la pobreza en jóvenes mexicanos, señala que al analizar la dificultad de obtener satisfacción de los derechos como ciudadanos, se manifiesta en forma generalizada una valoración negativa, es decir que en su mayoría los informantes opina que dicha satisfacción es muy difícil; asimismo, un 86% de los informantes manifestó conformidad ante la exigencia de sus derechos como ciudadanos. (Ortega, E.2006 : 297)

Por lo que respecta a las formas de participación política, se proponen actividades vecinales y eventos de ayuda ciudadana. No se manifiesta la posibilidad e incluso deseabilidad y conveniencia de una participación de los ciudadanos en otro tipo de actividades políticas tales como participar encargos de elección popular, diseñar, impulsar y evaluar iniciativas de ley y políticas públicas, exigir rendición de cuentas a los gobernantes, exigir la observancia de los derechos de los ciudadanos y ejercerlos entre otras formas posibles.

Los derechos que son exigidos son derechos fundamentales, a una vida digna y a la libertad. Algunas de las respuestas: “Trato de respetar a cada ciudadano, respeto su libertad, exijo lo creo necesitar y doy lo que puedo dar, me siento orgulloso de mi país lo cuido ambientalmente hablando. Trato de contaminar lo menos posible pero sobre todo intento promover la democracia y evitar la corrupción.” (s24), “Pido cuentas a los servidores públicos “(sujeto 40), “Expreso y

354

opino sobre lo que considero está afectando a nuestro país.” (s4), “El votar cuando hay elecciones, el tener respeto con los demás, y conocer mis derechos.” (s25), “Cumpló (o trato de cumplir al máximo) con mis obligaciones y exijo pacíficamente el respeto al cumplimiento de mis derechos” (s36), “Dignifico mi persona superándome profesional y económicamente, y siembro ese valor cívico en los que tengo a mi alrededor.” (s16), “Que participe en la política con actividades de los vecinos, que reporte anomalías, que denuncie injusticias.” (s45)

❖ Realización del servicio militar

De los varones que respondieron el cuestionario, casi la totalidad indicó que sí realizó el servicio militar, la excepción fue un deportista representativo de la UANL. Los motivos que argumentan para haberlo realizado son en su mayoría por **obligación** para tener el documento y en casos aislados por servicio a la patria y por admiración al ejército y al servicio que da al país.

❖ Conocimiento de la existencia de instituciones que promueven la participación ciudadana.

Se preguntó a los participantes si consideraban que en nuestro país existen **instituciones que permitan la participación ciudadana** en la toma de decisiones y si conocen algunas instituciones que promuevan dicha participación.

1. El 52% de los informantes respondió que **no existen** o **no conoce** tales instituciones,
2. El 46% respondió que **si existen**.

Es necesario señalar, sin embargo, que quienes afirman conocer instituciones promotoras de la participación ciudadana, proponen muchas instituciones que no cumplen tales funciones, es decir que poseen cierta información errónea.

Entre las instituciones que se propusieron, se encuentran las siguientes:

- El IFE que tiene a su cargo funciones de educación cívica y propaganda electoral

➤ El Consejo Estatal Electoral

Las dos instituciones antes mencionadas (24%), son prácticamente las únicas entre las que se propusieron-, que pueden considerarse promotoras de la participación ciudadana. Aunque se reconoce la función promotora de la participación política de la ciudadanía, en las dos instituciones indicadas, las respuestas evidencian que se pone en duda la efectividad de las invitaciones o acciones dedicadas a promover tal participación. Es importante señalar también, en este momento, que algunos de los informantes (13.6%), resaltan la existencia de corrupción en el IFE.

“Si, el IFE y esos, se supone que para eso están pero todos están comprados.” (s9), “Si, en teoría el IFE.” (s12), “Si, considero que la principal es el IFE, independientemente de las corrupciones que pueda tener, su función es promover la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones en nuestro país. También la organización de derechos humanos.” (s54)

a) Las siguientes respuestas afirmativas, muestran gran dispersión, ya que se citan instituciones de índole muy diversa, algunas de las cuáles no realizan funciones de promoción de la participación ciudadana, ni siquiera la propician.

- Gubernamentales 5.5% (Cámaras de representantes, Secretaría de Educación Pública, Programas de salud).
- Visitas a juzgados, 5.5%
- Organizaciones No Gubernamentales 5.5% Entre estas, se cita a Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) que no promueve la participación ciudadana, aunque sí la propicia.
- Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 5.5%

- Partido Acción Nacional 2% y partidos políticos 2% Total 4% (militancia no es participación de la sociedad civil en estricto sentido)
- Instituciones religiosas 2% (no se dedican a esto, quizá la confusión se debe a las actividades que realizan en beneficio a la comunidad como misiones)
- Consultas públicas para iniciativas de ley 2%
- DIF 2%

No contestó (2) RANGO 4

En síntesis, podemos afirmar que los ciudadanos desconocen la existencia de instituciones que promuevan y posibiliten su participación política, y de las que se mencionan, algunas permiten cierto tipo de participación, aunque no es su función principal. Es posible captar además, confusión entre militancia partidaria y participación ciudadana. Esta confusión lleva a pensar que sólo quienes pertenezcan a algún partido político pueden participar en la vida democrática del país. Por otra parte, como sostienen Esthela Gutiérrez y José María Infante, la imagen y reputación de la actividad política y los políticos es negativa en las sociedades occidentales y ello parece estar determinando que quienes tienen interés en los asuntos políticos, no tengan una participación activa en los mismos. (Gutiérrez, E., Infante, J. M. 2009: 125)

❖ ¿En qué tipo de organizaciones participa, con qué frecuencia lo hace y cuánto tiempo le dedica?

Con el interés de conocer la relación entre las representaciones y las prácticas sociales, particularmente en lo relativo a la participación ciudadana y a las prácticas efectivas para ser un buen ciudadano, se preguntó acerca de las instituciones en que participan los informantes, proporcionándoles una gama de trece opciones, así como la posibilidad de incluir otras no consideradas o de señalar ‘ninguna’.

1. En primer lugar, con un 30%, se respondió que su participación se llevaba a cabo en **clubes deportivos**. El tiempo promedio es de 12 horas al mes
2. El segundo lugar, un 26% de los informantes, afirmó participar a través de los **grupos de la Iglesia**. En promedio le dedican 16.5 horas al mes
3. En tercer lugar, un 17% de los informantes, señaló que participa en **clubes sociales**, con un promedio de 11 horas al mes.
4. En cuarto lugar, el 13% de los informantes respondió que participa en **comités y redes vecinales**, a los que les dedican 2 horas al mes en promedio.
5. Ocupando el quinto lugar, un 9% de los entrevistados, señaló que su participación se realiza a través de otros **comités, consejos u organizaciones ciudadanas**, sin especificar en cuáles. En promedio 16 horas al mes.
6. El sexto lugar lo ocupan los **colegios profesionales**, con un 7% de participación y un promedio de 1 hora al mes.
7. En séptimo lugar, el 5.5% afirma que se participa en **organizaciones de asistencia social** en promedio 4.5 horas al mes. También en octavo lugar con 5.5% se plantea la participación en otras actividades como **debates y trabajo comunitario**, 16 horas al mes, **obras de caridad** 3 hrs al mes.
8. En octavo lugar, con un 4%, se **participa en asociaciones civiles** (ONG), con 22 horas al mes en promedio. Y también en noveno lugar con 4% se propone la participación en **foros**, 2 horas al mes y la participación en actividades vecinales.
9. En noveno lugar, con 2% cada tipo de actividad, se plantea la participación en asociaciones de padres de familia, partidos políticos y cámaras empresariales. En promedio 2 horas al mes. En noveno lugar también, un 2%, plantea que no se participa en ninguna actividad por falta de tiempo.

Una vez analizados los datos obtenidos, es posible plantear las siguientes afirmaciones:

- La participación ciudadana es muy baja.
- La mayoría de las actividades que refieren como parte de la participación ciudadana no son de carácter político sino formas de socialización y entretenimiento.
- La cantidad de tiempo dedicada a las actividades de participación política es muy poca.

Llama la atención que entre las actividades que pueden considerarse de beneficio a la comunidad, en las que mayor participación tienen los informantes, sean aquellas organizadas por la iglesia católica.

Esta situación puede explicarse por varios factores, por una parte hemos captado a través de otra pregunta que se desconoce la existencia de instituciones que promueven la participación de la sociedad civil y que existe también gran confusión acerca de tales instituciones y de lo que implica la participación ciudadana, lo que puede significar que no encuentran otras vías institucionales para dicha participación. Además, es posible afirmar que los informantes tienen un nivel de formación cívica y política incipiente, que los coloca en la situación de no saber exactamente en qué consiste la participación y cómo pueden organizarse para llevarla a cabo. Lo anterior impide un trabajo autogestivo y proactivo del que surjan propuestas de participación como ciudadanos organizados, ya que por el contrario, su actitud es receptiva y participan cuando se les “invita” o solicita hacerlo en actividades organizadas por otros grupos o personas.

Finalmente, la Iglesia, como espacio conocido, sigue siendo un ámbito confiable en el que pueden desenvolverse con seguridad, ante la gran inseguridad y violencia que se presentan en

nuestro país y nuestro estado particularmente y debido a la gran desconfianza que hay hacia las instituciones públicas y autoridades gubernamentales.

Los comités y redes vecinales y los consejos ciudadanos constituyen otro tipo de instancias a través de las cuales se señala la participación de los informantes. Enseguida se propuso que participan también en actividades estudiantiles de beneficio a la comunidad. Al ser estas las principales vías para la participación, podemos percatarnos que sus redes de instituciones a través de las cuales participan se conservan en el ámbito de lo doméstico, lo que implica también muy ligadas a intereses personales y familiares, principalmente.

Se hizo mención de la participación en colegios profesionales; sin embargo, podemos señalar que esta participación está al servicio de un gremio determinado al que personalmente se pertenece; por ello podemos afirmar que los intereses particulares están muy por encima de la búsqueda del bien común.

Trabajo comunitario, asistencia social y obras de caridad forman otro grupo menor de ámbitos en los que se participa. Podemos resaltar que son participaciones remediales en su mayoría y no para crear o generar proyectos y propuestas, sino con la intención de paliar las graves consecuencias de problemas como la pobreza, la inequidad y la injusticia, entre otros.

Un pequeño sector afirmó que participa en organizaciones no gubernamentales, pero continua representando una muy pequeña proporción de la población.

Otro grupo respondió que carece de tiempo para participar. La falta de tiempo suele ser una excusa recurrente, dado que de lo que se trata es de distribuir el tiempo de manera adecuada. Cuando se trata de real imposibilidad, es un problema que afecta gravemente a la organización y participación política conjunta, debido al estilo de vida actual. Esta falta de tiempo para participar

en este tipo de actividades políticas, evidencia además de lo apremiante de la situación socioeconómica, la falta de información y formación cívica y política, que permitan valorar la importancia de participar para impulsar los cambios estructurales que se requieren para una mejoría en las condiciones de vida.

VI Democracia. Nociones, condiciones necesarias y reales. Estado de derecho

En esta sección se presentan los resultados de un amplio grupo de respuestas a preguntas cuyo contenido es relativo a las representaciones sociales de la democracia, de sus condiciones necesarias y aquellas que se presentan efectivamente en Monterrey y su área metropolitana. También solicita información acerca de las prácticas sociales efectivas en relación con lo que puede considerarse una vida democrática.

❖ Abordaré inicialmente las respuestas que se refieren a las **nociones de democracia**.

Las representaciones sociales que se construyen acerca de la democracia como concepto, parten de **nociones vagas**: “Es algo que muy pocos ciudadanos conocen, pero que muchos quisiéramos que existiera.” (S 23)

El núcleo central (78%) de las representaciones sociales sobre democracia la conciben fundamentalmente como el **ejercicio del voto** por el pueblo para tomar decisiones colectivas y para llegar a acuerdos, para elegir gobernantes o representantes que tendrán el poder, por lo que la noción de democracia en estas representaciones está vinculada básicamente con el ejercicio del sufragio. El pueblo se plantea como sujeto de la democracia, otras acepciones para referirse a tales sujetos son los ciudadanos y la mayoría. Esta noción de democracia, restringida al sufragio, determina que se le designe como democracia electoral.

También ocupa el núcleo central, con 78%, la concepción de la democracia en relación con los **derechos**. Aparece nuevamente el sufragio, esta vez, señalado como derecho, relacionado con el derecho a elegir. Otros derechos que se mencionan son el derecho a la igualdad, a la justicia y a opinar libremente.

a) Sufragio

“Participación de todos los ciudadanos para elegir al representante de gobierno.” (S 4), “El acto en donde el pueblo decide a sus gobernantes” (S.19), “Toma de decisiones conjuntas para actuar” (S 11), “Ejercicio político libre, justo de toma de decisiones por medio del voto de la mayoría” (S 12), “Ser libre para decidir a alguien que queremos que dirija/gobierne a la comunidad en que nos encontramos.” (s5), “Mi opinión de la democracia es que es un derecho que tenemos todos los mexicanos para poder votar y elegir a nuestros alcaldes y/o gobernadores.” (s26), “Que el pueblo pueda elegir a quién los gobierna.” (s41), “Derecho a elegir libremente a nuestros gobernantes.” (s37), “Respeto a ciudadanos al elegir gobernantes.” (s7), “Es el libre derecho de elegir ya sea a líderes o propuestas mediante votación.” (s28), “Elección participativa de decisiones que afectan a todos.” (s9)

Es posible también captar que se hace referencia a la toma de decisiones en conjunto, mediante la elección de los gobernantes. En este momento me parece interesante que cuando se hace referencia a la toma de decisiones en conjunto, ésta se limita a elegir representantes, pero parece no trascender a otras acciones posteriores.

b) Igualdad y libertad.

Igualdad. Derecho a la equidad, a la justicia para todos los ciudadanos mexicanos, para el pueblo. “Igualdad, equidad.” (s2), “Equidad en decisiones grupales.” (s3), “Es actuar con justicia, equidad, igualdad para el bien de todos, no sólo de alguien.” (s10), “Igualdad.” (s29)

Tener libertad y opciones para elegir, para decidir y externar opiniones que merecen respeto y cumplimiento. Algunas otras libertades: “El opinar libremente y ejercer un voto.” (s1), “Que se tomen en cuenta las diferentes opiniones de los ciudadanos y se lleven a cabo acciones en cuanto a esto, respetar las opiniones y valores de los demás y que se cumplan los derechos y obligaciones de los ciudadanos.” (s13), “Derecho de poder externar sus opiniones (s16), “La libertad de pensamiento.” (s6)

El (54%) de los informantes, tiene una visión más amplia de la democracia y la concibe como **sistema de gobierno** o forma de organización del poder:

“Forma de organización social en la que todos participen y voten para decidir lo que conviene” (S. 17), “Yo creo que la democracia es la transparencia de los procesos que rigen la sociedad.” (s54), “Es una forma de organización de grupos de personas, cuya característica predominante es que la titularidad del poder reside en la totalidad de sus miembros, haciendo que la toma de decisiones responda a la voluntad colectiva de los miembros del grupo.” (S 18), “Es el sistema de organización que da origen a elegir a sus mandatarios, a ser oído y escuchado, a participar en la vida activa de la sociedad vía su gobierno.” (S 40), “Las leyes que nos representan como sociedad, así siendo partícipes de la elección de nuestros gobernantes y la participación ciudadana para cualquier decisión que se tome ante cualquier problema o circunstancia que se presente, así respetando la libertad de expresión de cada individuo.” (s53), “Sistema de gobierno en el que un país se puede regir el cual se basa en la elección de los gobernantes a través de las elecciones.” (S 32), “Es como se rige la sociedad.” (S 47), “Se refiere a la forma de establecer ciertas reglas para mantener la buena convivencia en la sociedad.” (S 49), “Yo creo que la democracia es la transparencia de los procesos que rigen la sociedad.” (S 54), “Se supone que es una forma en la que el pueblo se organiza para elegir a los gobernantes.” (s20) Este caso denota

la falta de credibilidad en la democracia, al menos en la mexicana, “Como lo dice un anuncio publicitario la democracia es cosa de todos. Es decir todos decidimos lo que nos conviene.” (S 14), “El poder reside en el pueblo que toma decisiones.” (S 15), “Es la fuerza que adquiere un pueblo unido.” (S 33), “Es el poder del pueblo.” (S 34), “En donde el poder y la soberanía está en el pueblo” (S 56)

“Que el pueblo manda.” (S 22)

Y como elementos periféricos, dos casos mínimos, que ameritan mención por el planteamiento que presentan en relación a que la democracia es una **utopía**.

“Una utopía” (S 50), “Es algo que muy pocos ciudadanos conocen, pero que muchos quisiéramos que existiera.” (S23)

Persisten algunas nociones que aluden a que la democracia es una concesión de los gobernantes y no una conquista por parte de los ciudadanos:

“Cuando **te dan** la oportunidad de dar tu opinión y que esa opinión sirve para algún cambio en la sociedad.” (S 21)

❖ **En cuanto a las condiciones necesarias para la vida democrática:**

En primer lugar, conforma el núcleo central de estas representaciones sociales acerca de los requisitos para la participación democrática, el tener **reconocimiento jurídico-político** (63%), es decir la titularidad y ejercicio de derechos y obligaciones.

Comenzaré por presentar las condiciones requeridas para participar en la vida democrática, que en este apartado de las representaciones sociales, son eminentemente formales, ya que se menciona la nacionalidad mexicana que implica el reconocimiento oficial de la

ciudadanía, la titularidad de derechos y obligaciones, estar en pleno uso de sus facultades mentales y principalmente, tener la mayoría de edad, que se reafirma en las representaciones, vinculada con el tener credencial de elector. Estas representaciones muestran que el requisito más importante para participar en la democracia es gozar del reconocimiento formal de la ciudadanía y por ello la nacionalidad.

“Creo que no debemos tener ninguna condición, el simple hecho de ser ciudadanos nos da derecho de participar en la vida democrática.” (S 51) (Concepción formal), “Yo creo que ser mayor de edad.” (S 11), “Mayoría de edad.” (s19), “Ser ciudadano y cumplir con nuestros deberes y obligaciones de todo Mexicano.” (S 16), “Ser ciudadano mexicano, ser mayor de edad (tener 18 años o mas), tener tu comprobante de ciudadano (IFE) y solo necesitas las ganas de querer participar y elegir a tus representantes o según sea el caso.” (s24), “Ser mayor de 18 años tener credencial de elector vigente.” (S 17), “Ser mayores de edad y tener credencial de elector.” (S 26), “Una credencial de elector y conciencia ciudadana.” (S 21), “Ser mayor de 18 años y ser mexicano” (S 37), “Ser mayor de edad y tener cierto nivel de educación.” (s20), “Mayoría de edad y completo estado de salud mental.” (s6)

Conciencia y acción ciudadana (cívica) (56%)

En segundo lugar y concentrando los requisitos para participar en la democracia, de acuerdo a la importancia que se le asigna en estas representaciones sociales, es la noción de lo que podemos denominar como la **formación de una conciencia ciudadana** que supone el conocimiento de los derechos del ciudadano (no se hace mención de los deberes en este momento), informarse de los acontecimientos, problemas, actividades del Estado e involucrarse en ellos, promover actividades de formación cívica. Esta conciencia incluye también la participación ciudadana.

“Informarse y estar al tanto de las actividades del Estado” (S 9), “Estar informados, tener interés por la mejoría de nuestra comunidad.” (S 47), “Conocer los derechos.” (S 25). “Responsabilidad, cumplir con las obligaciones sociales, justicia y tolerancia.”(S 5), “Respeto a la democracia, a los conciudadanos, a la política y al diálogo” (S12), “Respetar a los demás.” (S 22), “Respetar las virtudes y defectos de los demás.” (S 35)

Formas de participación. Como parte de la formación de una conciencia cívica, algunos informantes proponen la necesidad e importancia de la participación democrática y exponen las formas en que ésta se concibe. Dichas formas de participación se consideran orientadas a la búsqueda del bien común, entre ellas se plantea la militancia en algún partido político, la formación de grupos y votar en las elecciones. Es importante resaltar que estas formas de participación que se proponen, son muy limitadas y además, son poco valoradas, como lo evidencia la poca frecuencia con que se presentan en las respuestas.

La participación democrática requiere, según los sujetos participantes, libertad total, tanto de elección como de opinión y respeto a los derechos. Además, es requisito estar bien informado. El involucramiento en los problemas de la comunidad es otro requisito para la participación democrática.

“Creo que para participar de alguna forma en la democracia debemos de estar más informados de los sucesos y del desarrollo del Estado. Ser menos pasivos, y crear el hábito de crítica desde la educación básica.” (S 54), “Informarse bien y estar al tanto de las actividades del Estado.” (s9), “Involucrarnos en ámbito político y tener participación.” (s1), “Participar activamente por el bien común.” (S 4), “Decidírnos a actuar, la actitud es fundamental, el ciudadano actúa, no esperar a que lo llamen.” (S 40), “Tener voto y opiniones dentro de las decisiones del gobierno.” (S 43), “Levantar la voz y tener libertad de opinión.” (S 10), “Hacer valer nuestra opinión, derechos y

366

voto.” (S 44), “El ser militante activo de un partido político y cumplir con sus obligaciones cívicas, de votar y ser votado, necesitándose el respeto al voto o sufragio.” (S 34), “Incluirnos o inscribirnos en una asociación o partido político.” (S 45), “Necesitamos formar más grupos para decidir quienes son los que cuidaran de nosotros.” (S 39), “Estar informados, tener interés por la mejoría de nuestra comunidad.” (S 47), “Tener credencial de elector en el caso de elegir presidente, hacer que nuestra voz tenga un valor.” (S 48)

Llama la atención, también, el hecho de que se considera que la participación política sólo puede ejercerse mediante la militancia en algún partido político. De igual forma es interesante hacer notar que se expresan concepciones y actitudes dependientes o “paternalistas”, ya que se piensa que los gobernantes cuidarán al pueblo.

Buen gobierno

En tercer lugar con un 43%, como requisito para la participación ciudadana se hace alusión al buen gobierno. Los rasgos que se atribuyen al buen gobierno son que cumpla sus funciones y obligaciones, que tenga en cuenta a la ciudadanía y satisfaga sus necesidades, que funcione con transparencia y logre que sus instituciones tengan credibilidad, que muestre respeto por los ciudadanos, sus derechos, entre ellos el voto, la democracia misma, la política y el diálogo como uno de sus instrumentos.

“Tomar en cuenta a la ciudadanía y satisfacer sus necesidades.” (S 2), “Que se respete el voto de cada persona y cumplan con lo prometido en campaña, y que no se otorguen sueldos más elevados que en los países más desarrollados del mundo. Que piensen más en hacer bien a la gente y no en ellos mismos.” (S 7), “La libertad de elegir principalmente, no sólo gobernantes, qué consumir, democracia plena, calidad de vida promedio con relación a los parámetros

mundiales, libre expresión en sentido amplio: en periódicos, en el trabajo, al interior de la familia, estabilidad, libertad en el ejercicio creativo, multiculturales, fomentar buenas relaciones intergeneracionales al interior de la familia, se da por sentada la necesidad de comprensión, el Estado no permite la configuración de esos núcleos como dueños de los procesos políticos, la familia está descuidada en términos del desarrollo político del país, se descuenta o descalifican las opiniones intergeneracionales, el PRI lo supo manejar durante mucho tiempo al fomentar cohesión política al interior de la familia.” (S 8), “Buen gobierno, líderes con educación y responsabilidad social.” (S 13), “Que nuestros gobernantes nos sepan dar el valor que (tiene) cada ser humano al que ellos llaman “ciudadano”. Y que le den valor a esa palabra.” (S 23), “Que exista más transparencia en las cosas que hace el gobierno y asimismo, que se cumpla con las promesas de las campañas electorales.” (S 32), “El respeto mismo a la democracia, un respeto y empatía para los conciudadanos, una franca apertura al diálogo, una valoración real de nuestro propio (personal) mecanismo político.” (s12), “Según los partidos políticos ir y dar nuestros votos en los días de elecciones, a mi parecer exigir a nuestros gobernantes que trabajen, que bajen sus sueldos y nuestros impuestos. Se supone que la democracia es el poder del pueblo.” (S 50), “Credibilidad en las instituciones.” (S 14), “Que funcione (la democracia)” (S 29). “Tener en cuenta a la ciudadanía y satisfacer sus necesidades.” (s2)

Un elemento emergente muestra una crítica a la participación democrática al responder que para poder ejercerla se requiere: “En nuestro país, contar con las relaciones indicadas” (s3)

En este sentido Infante Bonfiglio señala que aunque el voto es un mecanismo para la democracia, se presenta también en sociedades autoritarias, como forma de legitimación de autoridades que gobiernan sin que hubiera una diversidad de opciones o alternativas para la elección de los ciudadanos. (Infante, J. M. 2000; 1)

Existencia en Monterrey de las condiciones necesarias para la participación ciudadana

Acerca de si en Monterrey existen las condiciones necesarias para la participación ciudadana, las representaciones sociales están divididas.

La mitad de los informantes (50%) considera que **sí existen** y argumentan diversas razones, principalmente la existencia de libertad expresión y para elegir representantes. Sin embargo, es necesario señalar que a pesar de que una gran cantidad de respuestas que afirman la existencia de las condiciones para la participación democrática, son complementadas con algunas frases que niegan tal existencia. Por ello podemos afirmar que en realidad, en una mayor proporción, el sentido de las respuestas es negativo.

- a) La existencia de **instituciones** que se consideran **democráticas** es una de las condiciones existentes más señaladas, se afirma:

“Existen partidos políticos, podemos votar por ellos.” (s31), “Si, porque en Monterrey, se está organizado por medio de una dependencia llamada Instituto Federal Electoral, que regula a todos los partidos políticos.” (s42), “Si, pues al ser un pueblo lo suficientemente avanzado, cosmopolita e importante, podrá formarse como un pilar democrático de México, a pesar de ser esto, muy difícil.” (s12)

En cuanto a las instituciones democráticas que proponen, es necesario hacer notar que tienen un conocimiento y una noción muy limitada del tipo de instituciones democráticas que puede tener una sociedad y de aquellas que efectivamente, tienen la mexicana y la regiomontana, particularmente. Como ejemplo de instituciones para la participación democrática, tan sólo se hace referencia a los partidos políticos y al IFE como regulador de los mismos. Volvemos nuevamente a apreciar la concepción de que a participación se limita a votar y ser votado,-en este caso, como si fuera la única vía para participar políticamente en nuestro país.

a) La **libertad de expresión y el sufragio** (democracias electorales)

“Si, podemos expresarnos y elegir libremente a nuestros representantes.” (S 4), “Si, al votar para elegir a nuestros representantes.” (S 11), “Si, ya que hay muchos lugares donde puedes votar y lugares donde te puedan informar.” (S 17)

Nuevamente se hace mención del sufragio, como la condición necesaria y suficiente para garantizar la democracia. Si bien gozar del derecho al voto y ejercerlo son condiciones necesarias para la existencia de la democracia, ciertamente no son condición suficiente, ya que las democracias participativas requieren precisamente de la concurrencia de la sociedad civil y su compromiso con la defensa de los derechos humanos y ciudadanos, en la toma de decisiones y resolución de los asuntos que son de su interés y en la supervisión de la labor de sus representantes y empleados en cargos de elección popular.

Las representaciones sociales manifiestan también,-aunque en una menor proporción (46%)-, que **no existen** las condiciones para la participación ciudadana democrática o tan sólo parcialmente, debido a la desinformación existente entre los ciudadanos, a la corrupción y manipulación del gobierno, al control que sobre la difusión de opinión ejercen los medios masivos de comunicación y la educación que se recibe. Otro aspecto es establecer si los problemas se deben a fallas institucionales o a defectos o incompetencia de los ciudadanos.

En este porcentaje incluyo respuestas que originalmente son positivas, pero cuyo sentido es negativo, considerando los predicados (complementos) de las oraciones.

“Claro que sí, aunque muchos no saben que existen.” (S 21)[sic], “Sí (existen), pero falta que nos informemos.” (S 1), “Sí, pero no nos damos la oportunidad de conocer o interesarnos.” (s47), “No, la desinformación ocasiona relegación social mediante el control de la información a través

de los medios.” (S 9)[sic], “Supuestamente sí. Pero muchas de las veces las personas se ven influenciadas por sus candidatos.” (S 19), “La educación forma ciudadanos pasivos, acríticos.” (S 54), “Pues sí existen las condiciones fundamentales, es decir, si se impulsa por diversos medios la participación democrática, desde anuncios de televisión, panorámicos, radio, encuesta directa, etc. Ahora que el resultado de ese impulso sea negativo, tiene que ver con el nivel de cultura y de educación de la sociedad, ya que la mayoría de las personas emiten un voto no razonado.” (S 25), “No porque los partidos políticos son monopolios manipulados por unos cuantos que buscan el interés particular o de grupo en vez del interés general, debido a la corrupción al no permitir que existan las candidaturas independientes.” (S 34), “Poca no hay invitación a los partidos políticos o asociaciones (s45), “El gobierno no te deja participar en nada es muy egoísta.” (s51), “Sí pero como si no existieran.” (S 23), “Sólo algunas, no en sentido pleno.” (S 8), “Podría decirse que sí.” (S 16), “En algunos aspectos no.” (S 7), “No, porque se ha dado mucho la corrupción y no se respetan los derechos de los demás.” (s5), “No, hay mucha corrupción. “ (s 22), (s48)

En algunas de las respuestas se manifiesta una relación clientelar entre sociedad y partidos políticos, así como la manipulación de la opinión pública que ejercen el gobierno y las clases hegemónicas, a través de los medios de comunicación masiva y de los aparatos ideológicos del Estado en términos generales. También se aprecia una limitada concepción de la participación ciudadana que se considera que sólo puede canalizarse mediante la militancia en algún partido político y ésta, a su vez, únicamente por invitación expresa de alguno de sus miembros. En estos aspectos se manifiesta desinformación, falta de formación cívica y política y actitud pasiva.

“Estamos al servicio de los gobernantes cuando debería ser al contrario.” (S 50), “Sólo cuando hay elecciones se hace la invitación” (s6), “No, se vive con miedo a la libre expresión, por las represalias que puede traer, no hay un gobierno que realmente gobierne en función de los

ciudadanos.” (S. 13), “No, creo que son muy pocos los que les interesan los problemas tanto sociales como políticos y económicos ya que no se molestan por leer información acerca de lo que sucede en su estado y mucho menos en su país.” (s49), “Las condiciones las busca el ciudadano, si esperamos nunca llegará porque hay una clara tendencia a que no se manifieste auspiciada y buscada por sectores dentro de las esferas de gobierno y eso ha dado pie a que ya existe una clara corriente de lucha de la ciudadanía por actuar.” (S40)

❖ **Igualdad de derechos**

A través de las respuestas a la pregunta ¿Todos **gozamos** de los mismos derechos en Monterrey?, estas representaciones sociales ponen de manifiesto en su mayoría, prácticamente en su totalidad, que **no** es así. Las principales razones para sostener que **no hay igualdad de derechos** (87%), son: la existencia de desigualdad social, discriminación, corrupción e ignorancia.

- a) En cuanto a las representaciones de la **desigualdad social** (31%), ésta se explica fundamentalmente por la existencia de distintos estratos socioeconómicos, entre los que predomina aquel en que la población se encuentra en situación de pobreza, carente de oportunidades en términos generales, pero primordial y particularmente de acceso a la educación y al empleo. Se señala el “tráfico de influencias” como factor de desigualdad social. Así, el clasismo es una de las principales expresiones de la discriminación en México y en Nuevo León.

“No. Hay preferencia por las personas con nivel socioeconómico alto.” (S 3), “Existe mucha desigualdad socioeconómica y por ello existe la desigualdad educativa, desigualdad [a*] las oportunidades de empleo debido a que en esta ciudad el mínimo requerido en muchas empresas es de educación media, los únicos empleos que no piden tanta escolaridad son para barrer o

limpiar, ya sean las empresas o la ciudad.” (S 6), “No, muchas veces las personas con mayor estatus social tienen más derechos que otros.” (S 11), “No, porque el que tiene más, goza de más.” (S 14), “No. Los derechos y libertad solo están al alcance de quien los pueda pagar, es decir, los ricos.” (s50), “No, se le hace más caso a unas personas que a otras y por eso muchas veces ya no reclaman sus inconformidades.” (s18) “No. ¿GOZAR? Solo algunos cuantos, tenerlos, todos los tenemos.” (s 23) “No, porque hay canonjías o prerrogativas de algunos políticos, sindicatos y grupos empresariales.” (S 34), “Porque mucha gente no conoce todos sus derechos y no los hace valer.” (S 39), “No, porque los que tienen más son tratados mejor que los que tienen menos.” (S 42), “No, Existe mucha pobreza, personas que ni para comer tienen, hay mucho desempleo y (no hay) oportunidades para estudiar.” (S 46), “Ni en Monterrey ni en ninguna parte, ya que siempre las personas con una posición económica alta y con buena posición gozan de muchos privilegios y derechos y la gente de nivel socioeconómico bajo sufre por no contar con el derecho a la educación, de una vivienda digna, derechos de la salud, etc.” (S 51)

Estas representaciones sociales expresan que la desigualdad socioeconómica es la principal causa de que no todos los ciudadanos gocen o disfruten de los mismos derechos. El hecho de que la población en su totalidad no pueda gozar de los derechos que le corresponden, genera a su vez mayores asimetrías, desigualdades y conflictos sociales y se convierte por ello en un factor que obstaculiza la formación de una cultura democrática y la posibilidad de su realización efectiva.

Discriminación (31%). Étnica, por género, edad, nivel socioeconómico, escolaridad, etc.

Aunque la discriminación es una expresión de la desigualdad social, en estas representaciones sociales he querido mantener su análisis por separado, con la intención de profundizar en las problemáticas que expresa. Las principales causas de la discriminación son la

edad, la apariencia física, la pertenencia a algún grupo étnico y la anteriormente señalada, el estrato socioeconómico.

En materia laboral, se evidencia la discriminación por género, fundamentalmente ejercida en contra de las mujeres y también por edad, ya que las personas mayores de 40 años, e incluso menores, no tienen las mismas oportunidades que personas más jóvenes. El acceso a la educación está vinculado con la discriminación étnica, socioeconómica, por género y por edad.

La apariencia física obstaculiza el acceso a fuentes de trabajo también y se toma en consideración en todas las dimensiones sociales. “Se discrimina, me ha tocado ver: si eres mujer, mayor de 30 casada, con hijos, no tiene acceso a áreas laborales en algunas empresas, y si eres de otro estado e indígena, peor te va. En los periódicos se especifica la edad, hasta el peso y la estatura para algún puesto administrativo.” (S 7), “No, porque se les da preferencia a las personas de acuerdo a su nivel socioeconómico, estudios, se discrimina por la apariencia y se hacen diferencias.” (S 13), “Porque se discrimina a algunas personas ya sea por su origen, por su posición social, su escolaridad, su religión, etc.” (S 16), “Porque la gente que está estudiada y sabe los derechos los ejerce más que alguien que ni siquiera sabe leer.” (S 17), “Existe una gran porción de la población marginada.” (S 29), “No, Mucha gente es maltratada por ser de un grupo social minoritario, por ejemplo los indígenas o la gente económicamente inestable.” (S 49) “No, por la discriminación, la trata de personas, por la diferencia de género y edad.” (S 53)

b) Corrupción (7%)

Otro factor que impide la igualdad de derechos es la corrupción. De acuerdo con la Fundación Acción Pro Derechos Humanos, la corrupción es un problema, ya sea que se exprese como tráfico de influencias o en forma de obtención de favores ilícitos a cambio de dinero u otros favores, constituye una vulneración de los derechos humanos, por cuanto generalmente entraña

una violación del derecho a la igualdad ante la ley y llega a suponer una vulneración de los principios democráticos, por lo que conduce a sustituir el interés público por el interés privado de quienes se corrompen. (FAPDH. 2012:1)

“No, por desigualdad, corrupción clasificación social.” (S 5), “No, porque hay privilegios o trafico de influencias y los mismos del gobierno benefician a sus parientes y amigos.” (S 45), “No, porque, pienso que la sociedad que está más arriba y que tiene poder económico esta más informada de sus derechos o más educada. Y muchas veces abusan de las personas que son ignorantes de sus derechos, o no les hacen caso por no tener poder económico.” (S 54)

c) Ignorancia (6%).

El desconocimiento de los derechos impide que se les pueda hacer valer. Esta situación pone de manifiesto la urgencia de trabajar propuestas para la formación cívica y política. Si logramos informar a los ciudadanos acerca de sus derechos, tendrán mayores elementos para ejercerlos y exigir su observancia en casos de que no se cumplan.

Si (13%)

“Sí, todos los ciudadanos son iguales ante la ley” (S 20), “Sí, todos gozamos de nuestros derechos como ciudadanos y hasta los niños tienen derecho.” (S 26), “Sí. Según” (S9)

❖ ¿Se respetan nuestros derechos en la vida diaria?

En su mayoría las representaciones sociales tienden a considerar que en la vida cotidiana nuestros derechos son respetados **ocasionalmente** (72%), con una mayor tendencia hacia el hecho de que no son respetados. Diversos son los factores que se argumentan como motivos de tales violaciones, entre los que sobresalen **desigualdad socioeconómica, discriminación, corrupción, abuso de poder e impunidad, así como injusticia.** Entre los principales derechos

que son transgredidos se encuentran el de la **seguridad pública, la libertad de expresión, el acceso a la enseñanza, el voto, a participar en un puesto público y a la privacidad***.

Respondieron que son respetados ocasionalmente con tendencia negativa.

“En ocasiones, ya que existe mucha corrupción.” (S 46), “En ocasiones. Por ejemplo vas en tu automóvil para la escuela o trabajo y los agentes de tránsito, en ocasiones, abusan de su poder.” (S 47), “Tenemos el derecho a vivir pacíficamente, pero en Monterrey todos los días es lo que menos tenemos, vivimos atemorizados a consecuencia de haber permitido que los “malitos” crecieran y no haber atacado a tiempo el mercado de la distribución de droga. ¡Teniendo hoy no solo un cartel sino dos: los del golfo y los zetas!” (s6)

“Lamentablemente en muchos ejemplos vemos como se pasa sobre nuestros derechos, haciéndolos válidos, sólo en tanto se demandan y a veces se luce por su respeto.” (S 12), “En ocasiones, hay personas que no tienen en donde estudiar, hay discriminación de las autoridades.” (S 52), “En ocasiones, cuando a la mujer no se le da oportunidad de participar en un puesto público.” (S 42), “En ocasiones, algunas personas no son tomadas en cuenta en sus opiniones.” (S 43), “En ocasiones. No existe la libertad de expresión.” (s29), “En ocasiones. Muchas veces puede más el dinero que los derechos que pueda tener un ciudadano.” (S 17), “En ocasiones, porque a veces hay desigualdad de género y de nivel socioeconómico.” (S 5), “En ocasiones, como la que mencioné en las acciones que están tomando los militares al entrar a las casas sin orden de cateo, violan nuestro derecho de privacidad y las personas no denuncian por miedo, ignorancia y apatía.”(S 54)

Ocasionalmente, en sentido positivo (22%)

“En ocasiones. Cuando los ciudadanos honestos ejercen la ley.” (s14), “En ocasiones, cuando no hay intereses personales (de la autoridad) de por medio.” (S 3), “En ocasiones. Sólo cuando se hace publico por parte de los medios de comunicación.” (S 28), “En ocasiones. Cuando son claros o cuando son peleados.” (S 40), “En ocasiones. Cuando uno los exige porque muchas veces ni siquiera estamos enterados de nuestros derechos (s36), “En ocasiones, por ejemplo mi derecho de estudiar, mi derecho de reunirme pacíficamente con quien quiera, mi derecho de decidir que religión profesar, etc.” (S 51), “En ocasiones. En el estudio si, cada quien es libre de estudiar donde quiera, y en la religión.” (s20)

Los derechos que son respetados en la mayoría de las ocasiones son: el derecho a la educación, la libertad de creencias y la libertad de reunión, según estas representaciones sociales. Sin embargo como se plantea en las mismas respuestas, el respeto a los derechos estriba en gran parte en la exigencia que los propios interesados realicen para que se cumplan. También resulta evidente en estas representaciones sociales que las autoridades respetan los derechos ciudadanos, cuando no afectan a sus intereses y que los ciudadanos no siempre los exigen, pues los desconocen.

Resalta un tema de fondo: la gran inseguridad que vive Nuevo León y el país en general, son vividos como violaciones permanentes a nuestro derecho a una vida segura, a nuestra libertad fundamental y a nuestra privacidad.

No (7%)

“No, debido a la burocracia y el poder de las autoridades, en la distribución de bienes económicos (dinero).” (S 55), “No en cuanto a derechos y leyes.” (S 2), “No, hay mucha ineficiencia e

irresponsabilidad en el cumplimiento.” (S 9), “No por corrupción y al ser víctima de injusticias.” (S 48)

Las respuestas negativas coinciden en señalar que los derechos no son respetados por ineficiencia, irresponsabilidad, corrupción e injusticia por parte de las autoridades.

❖ **Quiénes no respetan los derechos de los ciudadanos.**

Se afirma que: “Cuando no conocemos nuestros derechos no podemos exigir que se respeten.” (S 3)

El núcleo central en estas representaciones sociales evidencia que son las **autoridades** quienes no respetan los derechos (70%). Entre las autoridades, resaltan las **policías** (19%) en sus diferentes corporaciones, de las que se espera protección que los ciudadanos no obtienen.

El 54% de los informantes considera que, después de las autoridades, son las **personas** las que no respetan los derechos. El 24% de las respuestas señala que son las **instituciones** las que no respetan los derechos. Finalmente, el 22% piensa que los derechos no son respetados por **nadie**, ni personas, ni instituciones, ni autoridades.

“Creo que las autoridades son las que más corrompen estos derechos.” (S 26), “Por abuso de autoridad.” (S 27), “El gobierno con las acciones que toma para combatir el problema que está suscitándose en la sociedad.” (S 54)

Sin embargo, un elemento periférico señala que: “No todas las autoridades, el ejército sólo hace su trabajo.” (S 23) Aquí podemos atisbar cierta esperanza en que sea el ejército quien pueda detener este grave problema.

La **corrupción** (15%), es uno de los aspectos más reiterados en relación con el incumplimiento por parte de las autoridades:

“Para todo predomina la corrupción.” (S 14), “La policía, uno intenta denunciar algo y ésta lo omite dejando a un lado el derecho de protección que debemos de tener por parte de ellos.” (S 1), “Todas las policías.” (S 2), “Policías, por corrupción en sus organizaciones.” (S 5), “Tránsito, ya que siempre piden dinero a cambio de no poner multas.” (S 46 “No se cumple con el derecho a la integridad física.” (S 19), “Autoridades del municipio y estatales.” (s40)

El hecho de que sean las autoridades en sus tres niveles, federal, estatal y municipal, las que cometen más violaciones a los derechos de los ciudadanos es alarmante, ya que su función es precisamente supervisar su cumplimiento. Lo anterior pone de manifiesto la corrupción que afecta a la mayoría de los funcionarios públicos, que valiéndose de su posición privilegiada en la administración pública, obtienen beneficios personales, sacrificando el bien común. De esta manera la violación a los derechos ciudadanos está en estrecha relación con la corrupción, la injusticia, la impunidad y la desigualdad socioeconómica.

Es un signo grave de la descomposición social que ninguno de los sectores sociales respete los derechos de los demás y como lo mencioné líneas atrás, es más grave que sean las autoridades y en forma sobresaliente, las policías, quienes no los respetan. Esta situación impide crear las condiciones para una vida democrática, participativa y pacífica.

En un país y un estado que se ha militarizado y en el que diariamente recorren las calles diversas corporaciones policiacas para combatir los graves estragos de la delincuencia organizada, también cotidiana, se capta la percepción de los ciudadanos, de sentirse indefensos ante múltiples enemigos y amenazas, sin poder confiar en quienes deberían defenderlos y que por

el contrario se han convertido en una amenaza más a su seguridad e integridad. A esto se suma la sensación de que no hay nada que pueda hacerse para detener estos males sociales: violencia, corrupción, impunidad e injusticia social. Debido a estos graves problemas, la idea de alcanzar una democracia se ve lejana.

En ocasiones no son respetados ni por personas, ni por instituciones, ni por autoridades, es decir que **nadie** respeta los derechos ciudadanos:

“Personas en tanto se viva un ambiente de poca tolerancia o violencia mutua, instituciones viciadas en burocracia y desinteresadas, así como corrupción y las autoridades que en su mayoría y cínicamente benefician corruptamente a aquel que le conlleve un beneficio personal.” (S 12)

“En las personas porque la mayoría te quieren hacer daño, las instituciones porque no pasan a las personas que realmente se lo merecen si no a la que sea conocida, las autoridades por que están de acuerdo con los criminales.” (S 17), “Personas, instituciones y autoridades por abuso de autoridad.” (s27), “En todos los casos existe la discriminación en diversos aspectos, así como el abuso de autoridad.” (S 29), “Las tres por la corrupción generalizada.” (S 34), “Todos en menor o mayor grado somos corresponsables de que los derechos no se respeten.” (S 36), “Ninguna de las 3: las personas son convenencieras, las instituciones piensan en su bien económico y las autoridades son corruptas.” (S 48), “Gobierno, policía, narcotraficantes, otros ciudadanos, en especial no te respetan si eres mujer.” (S 50)

Estas respuestas permiten evaluar con mayor comprensión la magnitud del problema de descomposición del Estado de derecho en nuestro país y sus consecuencias para la vida social, económica y política. El riesgo es que se convierta en una “tierra de nadie” en la que impere la ley de la selva o la supervivencia del más “fuerte” y se rompa todo contrato social.

“Hemos tenido en Monterrey últimamente Actos delictivos y hasta asesinatos que han quedado impunes.” (S 41), “Personas y autoridades respetan cuando les conviene.” (s11), “Personas y autoridades. Ahorita con las situaciones suscitadas claro que no se respeta en absoluto.” (S 15), “No obtenemos seguridad por parte de quienes deben darla, la educación no es gratuita y se exigen cosas en cuanto a ésta.” (s13), “Los ciudadanos que desean controlar el mercado del consumismo y distribución de drogas y armas: zetas y los del golfo.” (S 6), “Automovilistas no respetan a los peatones.” (S 16), “Considero que las personas somos las que no nos respetamos.” (S 24), “Algunas personas abusan de otras.” (S 43), “Por ejemplo que no cuidan el medio ambiente y en esta ola de inseguridad por ejemplo con los secuestros no respetan nuestro derecho a la libertad.” (S 51)

Como hemos podido analizar, el gran tema en materia de violación a los derechos humanos, es la inseguridad o la falta de respeto al derecho a la seguridad e integridad. Todos desconfiamos de todos los demás hay una percepción generalizada de que existe una altísima corrupción e impunidad, que se han convertido en una cultura en la que nos desenvolvemos cotidianamente.

Se hace un señalamiento a la falta de cuidado al medioambiente como violación de un derecho y resulta necesario hacerlo notar, por su importancia para el tema de la investigación y para contrastar con las condiciones que demanda para su generalización, una democracia verde.

❖ **Exigencia de derechos por los ciudadanos, en caso de que no sean respetados.**

En estas representaciones sociales se afirma primordialmente que en los casos en que los derechos no son respetados, los ciudadanos exigimos su observancia tan sólo **en forma ocasional** (46%); en casos extremos, ante injusticias o errores grandes que involucran a alguien cercano, es decir, cuando somos afectados directamente o cuando nos conviene. Esta situación es explicada

debido al temor y desconfianza que sentimos hacia personas e instituciones, que nos obligan a callar. Otro motivo por el cual los ciudadanos no exigen sus derechos, se debe a que, como hemos citado, los desconocen.

“En ocasiones. Hay gente que no conoce sus derechos.” (s17), “En ocasiones, la mayoría si, algunos sectores poco educados, no.” (s36), “En ocasiones, depende si la persona conoce sus derechos y tiene la cultura de la denuncia.” (s 54), “En circunstancias extremas, ya que muchas veces por desidia o por evitar problemas, no exigimos nuestros derechos como debe ser.” (S 1), “La mayoría de las veces protestamos tratándose de nuestros derechos.” (S 4), “Cuando la injusticia o el error es grande y se ve involucrado alguien cercano.” (s 5), “En ocasiones, cuando afectan de una manera muy significativa.” (s15), “En ocasiones, cuando somos afectados directamente.” (s41), “En ocasiones, cuando hay necesidad.” (s34), “Cuando nos conviene.” (S 28), “En ocasiones, ya que a veces por temor a las personas o autoridades mejor no decimos nada.” (S 11), “En ocasiones, levantando quejas en las instituciones dedicadas a eso, pero muchas veces queda impune, otras ocasiones con autoridades de mayor rango.” (S 13), “En ocasiones, la situación actual obliga a las personas a callar.” (S 19), “Cuando tienen que ver con autoridades o personas por miedo a represalias.” (S 20), “En ocasiones los ciudadanos regiomontanos, por miedo, prefieren no decir ni hacer nada, ya que les puede causar muchos problemas, ya sea con el crimen organizado o con los mismos policías o hasta muchas veces con las personas de nuestro alrededor.” (S 26), “Se vive tan a prisa que en ocasiones por irte mas rápido dejas pasar muchas cosas.” (S 47)

El porcentaje de respuestas que afirman que sí exigimos nuestros derechos es exactamente el mismo que aquellos que afirman que no los exigimos (11%). Esta relación equilibrada, aunada al hecho de que el núcleo central condensa la idea de que ocasionalmente exigimos nuestros

derechos, nos muestra que, tal como lo afirman los propios informantes, dicha demanda está en función de las circunstancias, si nos afecta directamente en forma personal o a familiares y personas cercanas. Los principales derechos que son exigidos son los derechos del consumidor y derechos laborales, en casos de despidos injustificados.

Si los exigimos (11%)

“Cuando no nos tratan como verdaderos ciudadanos.” (S 42), “Compras que no cumplan injusticias laborales.” (S 6), “La mayoría de las veces protestamos por nuestros derechos.” (s4), “Si, los exigimos al gobierno.” (s43), “Si, por ejemplo con toda esta inseguridad los regiomontanos exigimos paz y seguridad por medio de marchas o huelgas.” (s51)

No los exigimos (11%)

“No, por miedo a represalias.” (s3), “No, existen pocas probabilidades de salir victoriosos, para muchos las leyes son rentables. (S 55), “No, yo creo que nunca exigimos nada, los regiomontanos, al menos la mayoría son conformistas y prefieren pagar antes que ser rectos (corrupción). (S 46), “No, no denunciemos.” (S 14), “No, Siempre nos quedamos callados.” (S 24), “No, pocas personas abogan por los derechos.” (S 12), “Muchas veces se trata de corregir la situación que se vive, pero como nos acostumbramos a no ser escuchados en nuestro propio país ya no recurrimos a exigir nada a nadie y tomamos los problemas con propia mano.” (S 48)

Las respuestas negativas ponen de manifiesto la desconfianza de la ciudadanía hacia las autoridades, ante la corrupción y la impunidad, además debido a la ineficiencia del sistema de impartición de justicia y de las funciones de la administración pública, en general. Esta situación ha creado un clima de apatía e inacción que obstaculizan el logro de una democracia participativa. En el otro polo, tal como lo señala un informante, acostumbrados a la impunidad y

falta de efectividad en la observancia de sus derechos, algunos ciudadanos toman la justicia por propia mano.

Tanto la apatía y la falta de participación, como el tomar la justicia por cuenta propia son aspectos muy delicados ya que ponen en riesgo la gobernanza.

❖ **Respeto a la diversidad de creencias religiosas**

Como parte de los derechos que se disfrutan en una democracia, en estas representaciones sociales, se plantea en su mayoría que **si hay respeto a la diversidad de creencias religiosas** (81%). El núcleo central condensa la afirmación de que si se respeta la diversidad religiosa.

Se plantean los siguientes argumentos a favor de dicho respeto:

“Hay iglesias, templos, capillas, etc., para las diferentes religiones que se desarrollan en la entidad.” (S 5), “Sí, puedes estar en un colegio católico, y no ser católico. Las distintas denominaciones se pueden congregarse a estudiar la Biblia.” (S 6), “Sí. Yo veo que la gente es de mente abierta y ya no es muy común juzgar a los demás por sus creencias, lamentablemente ni las creencias tienen importancia en esta sociedad, se está muy ocupado como para darle tiempo a la religión, eso también muy malamente.” (S 48), “Pienso que en parte si son respetadas las creencias religiosas.” (S 15), “Cada quien tiene sus creencias y su iglesia para rezar.” (S 17), “Sí, Lo bueno que tiene Monterrey es que puede respetar a las religiones, no existen problemas hasta donde nosotros sabemos.” (S 26)

No (20%)

“Hay rivalidad” (S 3), “No, cuando te juzgan por lo que crees y lo que piensas.” (S 9), “No, muchas veces se pone a la religión como segundo término y se nos cuestiona por creer en algo.”

(S 11), “No. Como parte de México, una nación católica, la existencia de otras religiones nos

pasa a la mayoría como desapercibidas, no encuentro especialmente un respeto o promoción a ninguna otra religión.” (S 12), “No, hay discriminación.” (S 40), “No. En que en muchas ocasiones las personas son muy cerradas de mente y por lo mismo no se respeta las creencias de cada quien.”(S 47)

Según estas representaciones sociales, en Monterrey se respeta la libertad de creencias religiosas, cada persona elige en cual creer y éstas coexisten en la ciudad, que tiene distintos templos los que realizan sus propios ritos particulares. Como elementos periféricos de esta representación social, se propone que en realidad no existe tal respeto sino discriminación o en el mejor de los casos, indiferencia.

❖ **Tolerancia ante personas que piensan, actúan o parecen ser diferentes.**

Las representaciones sociales están divididas en relación a la tolerancia ante las personas que piensan, actúan o parecen ser diferentes. Un sector mayoritario (52%), -en pequeña proporción-, considera que **si hay tolerancia ante las diferencias**. Algunos informantes matizan sus respuestas afirmando que ocasionalmente.

Para afirmar que existe tolerancia se argumenta:

“Sí, tenemos empatía.” (S 3), “Sí, me gusta respetar, para que me respeten y escuchen.” (S 4), “Sí, básicamente lo primordial para llevar a cabo una buena convivencia, es el respeto.” (S 5), “Sí, tolerante si, pero nunca dejo de ser crítica. Dialogo e interactúo con las personas, sin importar las apariencias.” (S 9), “Sí, cuando alguien piensa u opina diferente, sólo se le escucha, pero no por pensar así, nosotros vamos a cambiar.” (S 11), “Sí, a la hora que en la calle tratan que te unas a su religión, no les hablas de mala manera solo les dices que tu ya tienes la tuya.” (S 17),

“Sí. Al menos yo si, ya que todos tenemos defectos y virtudes.” (S 23), “Sí, en la escuela, en el trabajo y hasta en la misma casa.” (S 26), “Sí, al saber que todos somos distintos y pensamos diferente a los demás y hay respeto.” (S 42), “Sí, cuando les prestamos atención y sabemos que cada quien piensa lo que quiere.” (S 52)

No somos tolerantes (44%)

“No, depende del estrato socioeconómico y del estatus.” (s8), “No, en general, como sociedad, no me parece. Desde el arquetipo de macho (Regio), hasta la violencia hacia los homosexuales o a las comunidades indígenas e incluso foráneos a nuestra comunidad, implica ya una ignorancia y poca tolerancia infundada a otros ciudadanos.” (s12), “No, creo que con todo lo que está pasando actualmente en Monterrey no podemos decir que sí se respeten las ideas.” (s15), “No, muchas veces no y los juzgamos.” (s24), “No, porque hay veces que no somos abiertos a nuevas ideas.” (S 25), “No, desde la escuela, la calle, la casa.” (S 29), “En una respuesta plural, pienso que no, ya que hay ocasiones que nos aferramos a una idea propia y no sabemos como afrontar alguna situación que tenga que ver con un pensamiento distinto al de nosotros.” (S 31), “No. Hay discriminación.” (S 40), “No, hay gente que no acepta a las personas con pensamientos diferentes.” (S 44), “No, algunas personas son muy prejuiciosas y no se dan la oportunidad de conocer.” (S 47), “No, con las tribus urbanas.” (S 48), “No, cuando se ve una pareja gay o lesbiana, personas que se visten o se ven diferentes a nosotros y muchas veces aun a las personas con incapacidades motrices o discapacidades.” (S 50), “No, por ejemplo siempre juzgamos a las personas que se visten y escuchan música diferente a la nuestra un ejemplo son los llamados “cholos” (S 51)

La representación social plantea que sí hay tolerancia hacia las personas diferentes y hacia la diversidad de apariencias, pensamientos, creencias, etc. se argumenta que hay respeto a la

diversidad. Se hace notar que el respetar las diferencias no implica la aceptación acrítica, sino que se mantiene una actitud crítica y las propias formas de pensar.

Sin embargo, la representación social de la tolerancia denota también que se presentan ciertas circunstancias, actitudes, decisiones, etc., con las cuales los sujetos no están de acuerdo, pero se ven forzados a aceptar: “Sí, con sus excepciones pero somos tolerantes a veces de más con los diferentes pensamientos como la elección de orientación sexual por ejemplo.” (S 36)

También forman parte casi proporcional de la representación social, las opiniones respecto a que en todos los ámbitos de la vida cotidiana, desde la escuela, la familia, el trabajo y la vía pública, por ejemplo, se evidencia la falta de tolerancia ante la diversidad. Las formas en que se expresa dicha falta de tolerancia son los juicios de valor y las críticas que emitimos, la discriminación y la violencia que ejercemos, los prejuicios que mantenemos.

❖ **Respeto al voto y a ser votado para un puesto público**

Los derechos políticos referentes a votar y ser votados, **sí son respetados**, según se afirma mayoritariamente en estas representaciones sociales (72%). No obstante muchas de estas aseveraciones son matizadas e incluso contradichas por los comentarios que acompañan a las respuestas y por tanto la respuesta cambia a un sentido negativo. Por lo anterior, podemos afirmar que estos derechos políticos no son respetados en sentido estricto.

A partir de los comentarios es posible también tener una idea de las condiciones de la vida democrática, tal como la perciben los ciudadanos. Para ello se mencionan los siguientes casos:

“Se respeta el derecho pero aun así se manipula.” (s 4), “Sí, tanto como ocurre en otros estados y en tanto permita el ejercicio político.” (s12), “Sí, nos hacen creer que si.” (s 23), “Sí. Cuando vas y sabes que tú voto es secreto y nadie más tiene derecho a comprarte el voto.” (s42) (Denota

ingenuidad), “Sí, aunque en algunos casos tratan de comprar nuestro voto con obsequios o cosas que nos benefician, más sin embargo la última decisión la tiene uno mismo.” (s31), “Sí, desde las elecciones de los representantes vecinales hasta las votaciones federales, el problema es que muchos no ejercen su derecho.” (s36)

Negativas

Un sector importante de las representaciones sociales (26%) manifiesta que **no se respetan** tales derechos y argumentan diversos motivos, entre los que podemos citar:

“No. Porque dentro de lo que cabe elegir, interviene una serie de cosas a las que muchas veces por conveniencia individual o buscar el «bienestar», por así decirlo, rápido y por lo tanto momentáneo.” (S 9), “No. Creo que los candidatos, como labor de campaña, influyen demasiado en las decisiones de las personas, aunque la mayoría de las veces ya sabemos que igual serán mentiras.” (S 19), “No. Lo eligen las autoridades.” (S 24), “No. Existen serias irregularidades en los procesos electorales.” (S 29), “No. Aparentemente a votar sí, aunque hay concertaciones que alteran la intención de los votos ciudadanos, y para ser elegido se requiere un buen padrino, allá arriba en algún partido político.” (S 34), “No. Sólo si perteneces a algún partido político.” (S 41), “No. Se tiene que estar registrado en algún partido.” (S 50), “No. Hay discriminación.” (S 40), “No. Si se respeta el derecho a votar, pero a ser elegido para un puesto público no, pues esos puestos son designados a los conocidos o recomendado de todos demás integrantes de las instituciones gubernamentales.” (S 6), “No. Hay tranzas.” (S 45), “No. Se dan remuneraciones económicas a cambio del voto.” (S 48)

El hecho de que inicialmente se afirme que si se respetan estos derechos políticos y en la misma oración se refute la afirmación, me lleva a interpretar que en términos formales existe una

infraestructura institucional y partidista orientada a la promoción del voto y en general a los asuntos relativos a los procesos electorales. Sin embargo, la ciudadanía considera que el respeto al voto es una apariencia ya que en su experiencia en la participación en tales procesos, los ciudadanos perciben manipulación, clientelismo, corrupción, nepotismo, discriminación, simulación y trampas en los resultados de las votaciones. Por otra parte, en lo que se refiere a ser votado, se manifiesta claramente que es necesario pertenecer a algún partido como militante, además de contar con apoyo político y económico, para poder participar en los puestos de elección popular.

❖ **Garantías a la seguridad**

En lo relativo a las garantías a la seguridad, que constituye un derecho que el estado tiene que asegurar a la población, el núcleo central (91%) (prácticamente la totalidad de las respuestas) de las representaciones sociales manifiesta que **no existen tales garantías**.

En estas representaciones sociales, se manifiesta la concepción de que el estado no ha podido controlar a la delincuencia organizada y la violencia que ésta propaga. Estas circunstancias, aunadas a la corrupción y a la impunidad que también se perciben generalizadas a todos los ámbitos de la vida social, han generado por consecuencia, la falta de confianza hacia otras personas y autoridades por parte de los ciudadanos, así como un sentimiento de indefensión ante las circunstancias de inseguridad señaladas. Se percibe también en estas representaciones sociales, la sensación de múltiples y diversos enemigos acechando la seguridad ciudadana cotidianamente.

Las representaciones sociales muestran también la percepción de que la ciudad se ha transformado de un lugar seguro en uno inseguro y violento en los últimos años. Asimismo la

noción de que la seguridad se ha convertido, en mucho, en un derecho para quienes pueden pagarla, es, por tanto discrecional y las autoridades no se comprometen realmente con ese tema.

“No. El gobierno no puede garantizarnos la seguridad, no tiene controladas las situaciones con el crimen organizado.”(s3), “No. Y mucho menos ahora con todos estos problemas del crimen organizado.” (s4), “No. Por la violencia” (s5), “No. Las autoridades ya no saben qué hacer y nosotros los ciudadanos ya no sabemos en quién podemos confiar.” (S 6), “No. Hay mucha violencia, robos y extorsión y poca respuesta de las autoridades.” (S 13), “No. Actualmente estamos viviendo una ola de inseguridad, que hasta ahora el gobierno no ha podido poner un alto.” (S 51), “No. Porque últimamente, en estos años ha habido mucha violencia.” (S 42), “No. Nadie se esfuerza por lograr la seguridad de los ciudadanos.” (S 44), “Sí, En el caso de traer 12 guardaespaldas y andar en helicóptero de un lado para otro.” (S 34) Aquí se capta una alusión o denotación al gobernador Rodrigo Medina.

- Indefensión ante múltiples enemigos (o acechanzas)

“No. Todos estamos expuestos a sufrir violencia, actualmente la guerra entre carteles de la droga por la plaza, son quienes la rompen.” (S 19), “No. En ningún lugar se está seguro hoy en día.” (S 20), “No, por todos los grupos delictivos que en cualquier parte o a cualquier hora hacen sus ataques.” (S 25), “No. Ya no sabes si te tocará ser víctima aun permaneciendo al margen.”(s 55), “No. Vandalismo, narcotráfico, grupos armados, corrupción.” (S 29), “No. Tenemos un índice de delincuencia organizada muy alta.” (S 36)

- Miedo y vida cotidiana (miedo cotidiano)

“No, simplemente porque existe el miedo a que en cualquier lugar y momento se desate un fenómeno violento.” (S 9), “No, ya que mucha de nuestra seguridad está con el crimen y le tenemos un poco de temor.” (S 11), “No. Mucho riesgo.” (S 14), “No. Todos los días hay robos, muertes, bloqueos, etc.” (S 17), “No está garantizada, ya que en la actualidad vivimos una inseguridad terrible a la que nos enfrentamos día con día.” (S 18), “No. La gente tiene miedo aun de salir a las calles.” (S 52)

❖ Desconfianza

“No. Porque, a veces las mismas autoridades son las que cometen actos de inseguridad para los ciudadanos.” (S 16), “No. Las autoridades ya no saben qué hacer y nosotros los ciudadanos ya no sabemos en quién podemos confiar.” (S 6), “No. No se tiene confianza ni en los mismos policías.” (S 47), “No. En ninguna circunstancia, ya no tienes ni en quien confiar.” (S 50)

• Esperanza versus desconfianza

“No. Por el momento no, pero todos tenemos la esperanza de que algún día esta seguridad regrese.” (S 26)

Cabe señalar que en este contexto, en el que se cuestiona la labor de las autoridades a nivel estatal y municipal, se reconoce, en algunos casos, la labor del ejército como garante de la seguridad.

“No. Sólo por los soldados que si hacen su trabajo.” (S 24)

❖ Justa distribución de la riqueza

Cuando a los informantes se les inquiriere acerca de si en Monterrey hay una justa distribución de la riqueza, se muestra en esta representación social, prácticamente la totalidad (93%), -núcleo central-, de opiniones respecto a **que no existe** justa distribución de la riqueza.

En estas representaciones, los factores que determinan que no haya justa distribución de la riqueza son la desigualdad socioeconómica que se manifiesta en forma de polarización, la corrupción y el anteponer intereses individuales a los colectivos. Todos estos factores han sido reiterados en las distintas respuestas del presente cuestionario.

Estas ideas se expresan de la siguiente manera:

❖ Polarización

“No, Hay muchos pobres y pocos ricos.” (S 40), “No, Sólo 26 familias poseen el poder.” (S 48), “No, por eso cada vez hay menos ricos y más pobres.” (S 50). “No, en los últimos 30 años sólo se ha distribuido la miseria entre las mayorías.” (S 34), “No, los salarios mínimos siguen regidos por la federación y son muy bajos.” (S 36) “No, el rico sigue siendo rico y el pobre más pobre, son los de nivel medio los que están desapareciendo, se hacen pobres.” (s3), “No, siempre le toca más al que más tiene, como en los sueldos de los trabajadores.” (S 16), “No, la riqueza siempre se va con los que tienen más, en vez de ayudar a las clases bajas.” (S 11), “No, en Monterrey siempre han existido familias de abolengo que cuentan con grandes capitales ya sean de origen industrial o por herencia.” (S 6), “No, nunca ha existido, desde la conquista española,-y quien sabe si antes existió, pienso que si- Es evidente la marginación y la segregación social que existe, empezando por las posibilidades de desarrollarse física y psicológicamente.” (S 9)

❖ Corrupción

Otro elemento que conforma la representación social de la justa distribución de la riqueza es el problema de la corrupción, que se señala también como factor que la impide, como podemos apreciar en los siguientes ejemplos de respuestas:

“No, los puestos judiciales y de gobierno son pagados por encima de lo que merecen, cuando los ciudadanos promedio reciben un salario mínimo en el cual además se pagan impuestos que el

gobierno recibe, hay mucho desempleo y robo como consecuencia de ello.” (S 13), “No, generalmente la gente corrupta de los altos cargos se queda con mucho del dinero que le pertenece a la población, con ese dinero se podrían generar empleos y así darle a la gente un sueldo mas digno, pero la gente del gobierno es tan egoísta que no se ponen a pensar un poquito en la gente.” (S 51), “No, algunos tienen más y no lo ganan limpiamente.” (S 24), “No, Porque se me hace exagerado lo que ganan ciertos puestos que trabajan para el Estado y que no se ve el cambio, bueno según las noticias no lo hacen saber.” (S 25), “No, el sueldo de los políticos es demasiado alto, mientras que en la calle hay personas que no tienen para comer, y niños trabajando.” (s46), “No, notable preferencia y apoyo por personas de alto poder adquisitivo para personas de alto poder adquisitivo.” (S 29)

❖ Intereses individuales

“No, porque hay muchas personas que solo ven por ellas.” (S 27),

Acompañan este sentido de corrupción en la distribución de la riqueza, los temas del egoísmo y la injusticia social. El egoísmo se percibe como una causa de la corrupción y la injusticia social, una de sus consecuencias.

❖ **Libertades que disfrutamos los regiomontanos en la vida diaria (Derechos)**

Las representaciones sociales sobre las libertades que disfrutaban los regiomontanos en su vida diaria, manifiestan que casi la totalidad de los informantes (93%), considera en primer lugar que siempre tenemos **libertad de creencias** y un 7% piensa que sólo ocasionalmente. (Derecho civil, 1ª generación)

En segundo lugar, el 76% de los informantes considera que la **libertad de elegir oficio o profesión** la disfrutamos siempre y un 12% piensa que la disfrutamos ocasionalmente. (Derecho social, 2ª generación)

En tercer lugar el 65% de los informantes propone que siempre gozamos de **libertad de pensamiento**, un 31% propone que ocasionalmente y un 4% afirma que nunca. (Derecho civil, 1ª generación)

En cuarto lugar, 61% de los informantes señala que siempre gozamos de **libertad de elección con autonomía**, en términos generales y un 37% que tan sólo ocasionalmente. (Derecho Político 1ª generación)

En quinto lugar, 56% considera que siempre podemos **elegir nuestro lugar de residencia**, el 42.5 % sostiene que ocasionalmente y 2% que nunca. (Derecho civil, 1ª generación)

En sexto lugar, el 37% de los informantes piensa que siempre disfrutamos la **libertad de asociación**, mientras que un 61% piensa que ocasionalmente y un 2% que nunca. (Derecho Político 1ª generación)

El séptimo lugar lo ocupa la **libertad de expresión**, que tan sólo un 31% considera que la disfrutamos siempre, mientras que un 63% considera que ocasionalmente y un 5.5% que nunca. (Derecho civil, 1ª generación)

En octavo lugar, el 30% considera que siempre disfrutamos **libertad de tránsito**, mientras que el 57% considera que ocasionalmente y el 11% que nunca. (Derecho civil, 1ª generación)

En noveno y último lugar, se ubica a la **libertad de participación política**, respecto a la cual el 28% considera que siempre la disfrutamos, mientras que el 63% piensa que ocasionalmente y el 7% que nunca. (Derecho Político 1ª generación)

Se pidió a los informantes que marcaran cuáles libertades disfrutamos y que tan frecuentemente lo hacemos. Los derechos civiles son considerados con mayores frecuencias y los derechos políticos muestran porcentajes menores de frecuencia con que los disfrutamos.

❖ **Existencia de igualdad de oportunidades en Monterrey**

1. La gran mayoría de los informantes (81%), considera que **no existe** igualdad de oportunidades en Monterrey.

Las representaciones sociales de la desigualdad, la señalan en los siguientes ámbitos jerarquizados:

- a) las diferencias que se establecen entre los estratos socioeconómicos
- b) la discriminación que se presenta por cuestiones de género, edad, apariencia física, etc.
- c) la falta de acceso a oportunidades educativas y laborales.

- a) Diferencias entre los estratos socioeconómicos

“No, ni en ningún lugar [haciendo alusión a Monterrey], la igualdad no existe.” (S 8), “No, por distintos factores: nivel socioeconómico, estudio, cultura.” (S 5), “No, ya que los que tienen más dinero obviamente tienen más oportunidades para todo.” (S 17), “No, Porque las personas con mayor posibilidades tienen más que los demás.” (S 18), “No. Como simple prueba está aquel que se muere de hambre y frío, frente al glotón obsesivo.” (S 9), “No. La inestabilidad económica y la gran diferencia de clases sociales, ya que son pocos los que tienen mucho y muchos los que tienen poco.” (S 49), “No, Monterrey es una ciudad elitista.” (S 25)

b) Discriminación

La representación social de la desigualdad en Monterrey propone la existencia de discriminación. La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (2010) arrojó como resultados que Monterrey es la ciudad en las que se presentan más prácticas discriminatorias. Dicha encuesta mostró que la inseguridad, vinculada a la desigualdad socioeconómica, se encuentra entre los principales factores propiciatorios y que son las mujeres y los niños y niñas quienes más la padecen.

Los datos que se ponen en evidencia con las siguientes respuestas, así lo demuestran:

“No. Hay discriminación.” (S 40), “No. Porque creo que somos elitistas y discriminamos a las personas por sus rasgos físicos o por su apariencia. Se pide en los empleos preparación y presentación.” (S 6), “No, Si eres mujer o tienes alguna enfermedad o incapacidad, o también se da mucho en personas con sobrepeso.” (S 50), “No, porque no siempre se le dan las oportunidades a todos por discriminación, por discapacidad, por prestigio que le dan a ciertas personas.” (S 53) , “No. Cuenta demasiado como te veas y cuanto tengas.” (S 47), “No porque cuando ya tenemos cierta edad, no se nos da la oportunidad de trabajo.” (S 7), “No. Los discapacitados no tienen iguales derechos.” (S 26), “No. Es muy obvia la distinción de género, así como el uso de influencias y estrato social.” (S 12), “No. A veces depende del sexo de la persona.” (S 44), “No. Todo depende de la educación que se tenga, el nivel y en ocasiones, la institución en la que se haya estudiado.” (S 13)

c) Falta de acceso a oportunidades educativas y laborales.

Como parte de la desigualdad socioeconómica y de la discriminación, se enfatizó particularmente en el problema del acceso a la educación y a las oportunidades laborales, por lo que analizamos los resultados por separado. Se presentan algunos ejemplos de respuestas.

“No, los costos por la educación *pública* son muy altos lo que pone en seria desventaja a quienes no tienen recursos para acceder a ella y limitando el acceso a la educación, difícilmente podrá hablarse de igualdad de oportunidades.” (S36), “No. Porque no todos tienen la misma accesibilidad para estudiar en distintas escuelas.” (S 19), “No. Vuelvo a reiterar que la gente de dinero siempre se quedará con las mejores oportunidades laborales, mientras que a la gente humilde le dan oportunidades muy mediocres.” (S 51), “No, en cuestión de educación no hay igualdad, ya que los más pobres están ya obligados a no poder estudiar por lo altas que están las cuotas de escolaridad. En cuestión laboral, porque muchas veces los puestos de cargos importantes los heredan a familiares, en lugar de darlos a gente capacitada realmente en el área.” (S 54). “No en el acceso a la educación gratuita y de buena calidad.” (S 29)

2. El 15% de los informantes que considera que **sí** hay igualdad de oportunidades lo sostiene con las siguientes afirmaciones:

“Sí, En la zona industrial no trabaja el que no quiere, no se supera el que no quiere.” (S 14), “Sí, en la mayoría de las circunstancias: trabajo, escuela, etc.” (S 20), “Sí, porque ahora se puede ver como la mayoría de las mujeres sobresalen día a día en los trabajos que antes solo desempeñaban los hombres.” (S 31), “Sí, no hay gran discriminación.” (S 34)

❖ **¿Existencia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en Monterrey?**

El 59% de los informantes considera que **sí existe igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres**. Es importante resaltar que la mayoría de quienes respondieron afirmativamente son mujeres (46%), del total de la muestra de varones, el 50% opinó que no hay igualdad de oportunidades para ambos géneros.

También llama la atención el contraste de estas respuestas con relación a las que se presentaron en la pregunta anterior, en la que se menciona casi en su totalidad que no hay igualdad de oportunidades en Monterrey.

La mayoría de las afirmaciones plantean la igualdad en el ámbito laboral y enseguida en el ámbito escolar. Señalábamos el contraste con la pregunta anterior, por ello una posible interpretación es que las mujeres han ganado algunas posiciones laborales y educativas importantes; sin embargo, la desigualdad socioeconómica es generalizada y las afecta, así como a los hombres también. Aparentemente la desigualdad general habría aumentado y por ello también entre los géneros.

De hecho, en mi opinión, una de las razones para que las mujeres tengan mayor participación en la población económicamente activa, se debe a la grave crisis económica que atraviesa nuestro país y que ha determinado que las mujeres busquen actividades laborales remuneradas para compensar los ingresos familiares. Debido a la misma situación muchos esposos que anteriormente por razones culturales no estaban de acuerdo en que sus esposas trabajaran, han tenido que ceder. Al mismo tiempo los movimientos por la igualdad de derechos de las mujeres han ganado espacios para las mismas.

Al respecto es interesante hacer notar que al plantearse la existencia de igualdad entre los hombres y las mujeres tan sólo se mencionen los ámbitos familiar y laboral y no se tomen en cuenta otras dimensiones de la vida cotidiana. Incluso en cuestión laboral, en la que se afirma la igualdad, persisten desigualdades, por ejemplo, el caso de los ingresos, ya que las mujeres que ocupan puestos similares a los varones, reciben remuneraciones inferiores.

“Sí. La mujer se presenta en todos los ámbitos.” (S 6), “Sí. En mis tiempos, mi mamá no podía trabajar, «porque tenía que estar en su casa», pero cuando crecí empecé a trabajar y tenía los mismos derechos que los hombres.” (S 27), “Sí, En la educación en el trabajo, etc.” (S 14), “Sí, he sido testigo de eso, en cuanto a los empleos. Vivo en una región donde están ubicados los parques industriales y he podido comprobar dicho caso. Las mujeres tienen el puesto que anteriormente se creía sólo era para hombres. Ingenierías y gerencias son algunos ejemplos.”(S 19), “Sí, los trabajos en su mayoría aceptan a hombres y mujeres, en votaciones la mujer puede votar.” (s20), “Sí, Actualmente en nuestro estado son cada vez menores los casos de discriminación por genero, aunque aun existen.” (S 36), “Sí, se les dan empleos a los hombres y a las mujeres que jamás se había pensado que obtuvieran.” (S 42), “En la ruta 1 en San Nicolás.” (S 23) (Chofer), “Sí, Creo que la sociedad ya no es tan machista y las mujeres desempeñan los mismos trabajos que los hombres.” (S 48)

Por otra parte, el 39% de los informantes plantea que **no existe igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres**. El ámbito laboral es el que se señala como aquél en el que persisten las mayores desigualdades entre hombres y mujeres. El machismo es una causa de desigualdad muy recurrente y por tanto, importante. Los argumentos que proponen son:

“No. Hay discriminación.” (S 40), “No. La equidad de género aun no se respeta al 100%” (S 44), “No. Estamos en una sociedad machista en la cual los hombres tienen más oportunidades.” (S 4), “No, en algunas empresas, cuando la mujer está embarazada o cuando se casa le niegan el trabajo, o si ya estaba trabajando la despiden.” (S 16), “No, en los trabajos todavía existe el machismo y también si la mujer está casada y con hijos menos contratan.” (S 25), No, empezando por los roles establecidos,-impuestos-, por la sociedad. Masculinidad-femineidad, aprendidos por prejuicios y tradiciones obsoletas.” (S 9), “Una idea muy machista en general.

Inculcada y aceptada por hombres y mujeres.” (S 12), “No, Si eres mayor de 30 años con hijos no te dan trabajo de oficina, en una tienda si, sólo cheque el periódico y se dará cuenta.” (S 7)

❖ **Actividades que realiza relacionadas con la vida democrática y frecuencia con que lo hace.**

Entre una gama de opciones de actividades y comportamientos relacionados con la vida democrática, se solicitó a los informantes que indicaran aquellas que efectivamente realizan y que señalaran la frecuencia con que lo hacen. Cada respuesta presentaba cuatro opciones posibles: siempre, casi siempre a veces y nunca. A partir de las frecuencias con que el total de los informantes marcó las actividades y su periodicidad, se generó el siguiente orden de importancia:

1. En primer lugar entre los comportamientos democráticos, el 69% de los informantes colocó la acción de **votar**, indicando que **siempre vota**. Es importante señalar que el 20% que contestó que nunca vota esgrimió que por su edad no le había correspondido votar en los procesos electorales previos.
2. En segundo lugar, el 63% planteó que **siempre obedece a las autoridades**, mientras que un 28% señaló que lo hace casi siempre.
3. En tercer lugar, el 59% afirmó **siempre pagar impuestos**, mientras que un 20% indicó que nunca, aduciendo también que por su edad son estudiantes y algunos, recién se incorporan a la población económicamente activa.
4. En cuarto lugar, el 56% afirmó que **siempre obedece las leyes**, mientras que el 35% señaló que lo hace casi siempre.
5. En quinto lugar, el 41% propuso que **siempre participa en el cuidado al medioambiente**, preservando las áreas verdes, el agua, no tirando basura e incluso, hubo alguna afirmación, al ser vegetariano. Un 24% afirmó que a veces participa en el cuidado

al medioambiente plantando árboles, aunque es un movimiento no continuo. Por otra parte un 20% respondió que casi siempre lo hace, al no tirar basura (en lugares indebidos como la calle) y al separarla.

6. El sexto lugar lo ocupa la acción de **enviar a sus hijos a la escuela**, a lo cual un 31% respondió hacerlo siempre, mientras que un 57% indicó no tener hijos y por ello respondió que nunca lo hace.
7. En séptimo lugar se señalaron las **actividades en beneficio a su comunidad**, a lo que el 22 % indicó hacerlo **siempre** a través del cuidado hacia ella, al ser una persona pacífica y a través de la iglesia. Un 39% de los informantes señaló no tener tiempo para participar en tales actividades y un 30% planteó que a veces participa, por ejemplo en la limpieza de parques.
8. Finalmente, respecto a las actividades **de gobernanza: exigencia de rendición de cuentas a las autoridades, de proposición de iniciativas de leyes, así como diseño y evaluación de políticas públicas o la participación en la toma de decisiones**, los informantes afirman que **nunca las realizan**. Argumentan que el miedo y la falta de tiempo son los motivos para no exigir cuentas, así como el hecho de considerar que los gobernantes no hacen caso. Respecto a las iniciativas de ley señalan que no tienen tiempo y en lo que se refiere al diseño y evaluación de políticas lo justifican señalando apatía, miedo, vergüenza, falta de tiempo, no le gusta la política y las autoridades no tienen credibilidad.

A lo largo de la discusión de los resultados, se ha puesto en evidencia que en estas representaciones sociales se muestra una concepción de la democracia limitada al ejercicio del sufragio, por ello, siempre ejercer el voto fue la actividad que concentra la mayoría de las frecuencias. El porcentaje de informantes que contestó en sentido negativo, adujo razones de

401

edad, es decir que aunque ya eran mayores de edad, en los anteriores procesos electorales no había alcanzado la edad para votar.

Podemos captar el hecho de que después de la importancia que se asigna al voto, las tres principales actividades que concentran los mayores porcentajes se relacionan con la obediencia. Obedecer a las autoridades, pagar impuestos y obedecer las leyes son las actividades que se hacen siempre con las mayores frecuencias. En estas tres últimas hay algunos porcentajes importantes de quienes afirman hacerlo casi siempre.

El quinto lugar en orden de importancia lo ocupó el cuidado al medio ambiente. En este caso es necesario señalar que el porcentaje que afirma siempre hacerlo no alcanza ni la mitad de los informantes, sólo cuatro de diez personas lo hacen y las actividades que realizan son muy elementales. Otro porcentaje afirmó que casi siempre evita tirar basura en lugares indebidos, así como separarla.

En lo que respecta a las actividades en beneficio a su comunidad, dos de cada diez personas dicen hacerlo siempre a través del cuidado a la misma comunidad, al ser una persona pacífica y a través de la iglesia. Resulta interesante que sea nuevamente la iglesia, la institución a través de la que se participa en actividades democráticas. En este aspecto es interesante señalar que un 39% de los informantes señaló que no tiene tiempo para participar en tales actividades y un 30% planteó que a veces participa, por ejemplo en la limpieza de parques.

Es importante señalar que la mayoría de las actividades en que afirman participar, son aquellas establecidas por las propias autoridades con carácter obligatorio, mientras que en otras actividades que suponen iniciativa personal o de grupos organizados, no participan. La idea de la participación y de la

vida democrática, están muy ceñidas a los procesos jurídicos, formales y electorales. El hecho de colocar en primer lugar la acción de votar nos permite afirmar que nuestra noción de la democracia es estrictamente electoral y por ello bastante formal y pobre.

Resalta también el tema de la obediencia como la forma de participación que se privilegia y quizá la única que se conoce, es decir en lugar de actuar se obedece y ello se considera entre las principales actividades democráticas. Aunque es fundamental para el Estado de Derecho y para la propia democracia la obediencia a las leyes y autoridades, al estar estas actividades como prioritarias en el tema de la participación y al no estar acompañadas de otras formas de hacerlo, podemos interpretarlas como actitudes de sometimiento y dependencia.

Con el análisis previo, considero que nuestra sociedad civil es bastante pasiva, apática y desinformada y que la idea de la participación en actividades orientadas al bien común, se limita a la obediencia. Una sociedad civil verdaderamente democrática, requiere formas de organización independientes de las autoridades, es decir autogestivas y proactivas. De hecho, la desobediencia civil puede ser una acción necesaria en la búsqueda de la justicia social, la equidad y el bien común, en el marco constitucional del Estado democrático.

❖ **Servicios que el gobierno proporciona efectivamente**

Como parte de las condiciones que son indispensables para la vida democrática, se preguntó a los participantes acerca de los servicios que el gobierno proporciona efectivamente, para garantizar el bienestar de los ciudadanos. Se presentó un listado con siete servicios, de los cuáles los participantes podrían señalar aquellos que consideraran pertinentes. A continuación los resultados obtenidos.

1. El 70% de los participantes considera que el gobierno proporciona servicios de **salud**

2. 56% afirma que proporciona **vivienda**.
3. 50% afirma que **oportunidades laborales**
4. 46% **educación**
5. 37% **protección al medio ambiente**
6. 19% **protección de la propiedad privada**
7. 7% opina que **ninguno**, ya que son inadecuados, insuficientes, deficientes y corruptos y finalmente, 6% propone que el gobierno garantiza **seguridad personal**.

VII CORRUPCIÓN

Se planteó un grupo de preguntas que inquirían acerca de la corrupción, ya que es una práctica que constituye uno de los principales obstáculos para la vida democrática.

❖ Frecuencia con que se nos pide “mordida”

Se propusieron cuatro opciones entre las respuestas posibles: frecuentemente, ocasionalmente, todos los días y nunca.

1. El 50% de los informantes considera que **frecuentemente** se nos pide mordida.
2. Un 31% piensa que es **ocasional** que se nos pida mordida.

❖ Actitud ciudadana ante la “mordida”

1. El 54% de los informantes afirman que ante la mordida, su actitud es el **rechazo**
2. Un 35% acepta que **la da**
3. Un 9% incluso acepta que **la ofrece**,
4. Incluso un 2% propone que la ciudadanía **la recibe**.

Al analizar estos resultados, se pone de manifiesto inicialmente que al menos el 81% de los informantes acepta que la “mordida” o cohecho es una realidad en nuestra vida cotidiana, -

con mayor o menor frecuencia-, ante la cual el 46% está de acuerdo, dado que la paga, la ofrece e incluso la recibe.

Ante la “mordida”, el ciudadano se coloca del lado de quien la da e incluso la ofrece y son autoridades quienes la reciben o la solicitan.

❖ Existencia de corrupción en Monterrey

A la pregunta ¿en Monterrey existe la corrupción?: el 98% de los entrevistados respondió que **sí**. El núcleo central de la representación muestra un acuerdo total respecto a la existencia de la corrupción en Monterrey.

“Si, en todas partes.” (s24), “Si, en todos los niveles empezando en los hogares.” (S 36), “Si, en el trabajo, puestos públicos, elecciones, etc.” (S 22), “Si, en circunstancias legales.” (S 1), “Si, En todas las circunstancias donde se presenta controversia.” (S 14), “Si. En situaciones de poder e influencia.” (S 55), “Si, en todas las circunstancias, policía, instituciones, trabajos, etc.” (S 17)

“Si. Desde los tránsitos, hasta el sistema de justicia que por dinero actúan en favor de algo que esta mal.” (S 54), “Si en lo cotidiano. Agentes de tránsito.” (S 47), “Si, casi en cualquier aspecto e infiltrada en todos nosotros.” (S 12)

Únicamente el 2% de los informantes **negó** su existencia.

Los informantes coinciden en que la corrupción se encuentra presente en todos los ámbitos de la vida cotidiana de los regiomontanos y de los mexicanos en general. Desgraciadamente es un problema que no se limita a esta ciudad sino que es nacional.

Sin embargo, al considerar las respuestas, las representaciones sociales muestran que todas las actividades públicas funcionan mediante la corrupción. De igual forma, es manifiesto

que todos los ciudadanos y personas estamos inmersos en la corrupción, que se vive desde los hogares, en las escuelas, en la vía pública, el trabajo y llega hasta los niveles más altos como el sistema de justicia.

El análisis de las respuestas permite afirmar que en estas Representaciones Sociales, los funcionarios, autoridades, gobernantes, se benefician por ejemplo, mediante la realización de obras públicas. Es el ámbito gubernamental el que mayores ventajas obtiene de la corrupción y quien la propicia, sin embargo, todas las personas participamos en ella. Vuelve a surgir el tema de la mordida, pero se extiende a diversos ámbitos.

❖ **Funcionamiento adecuado del sistema de justicia en Monterrey**

Cuando se preguntó si el funcionamiento del sistema de justicia en Monterrey es adecuado:

El 87% de los encuestados coincidió en que el sistema de justicia en Monterrey **no funciona adecuadamente**. Tan sólo un 9% consideró que **si funciona adecuadamente**.

- a) El ámbito **estatal** es el que tiene un **peor funcionamiento**, seguido de
- b) El ámbito **municipal** que funciona mal, pero un poco mejor que el estatal.
- c) El ámbito que se considera con mejor funcionamiento es el **federal**.

Sin embargo, es importante señalar que cada informante señaló más de un ámbito de justicia en el que el funcionamiento no es adecuado.

Los que afirmaron que el sistema de justicia es inadecuado, argumentaron las siguientes razones:

“No. Se cometen muchas injusticias e ilegalidades. Estatal” (S 1), “No. Porque la economía procesal es una farsa, debido al tortuguismo burocrático, la corrupción y a la falta de personal en

las instituciones públicas.” (S 34), “No. No lo he vivido gracias a Dios, pero se les da preferencia a las personas con dinero o influencias y cuando alguien comete un delito menor, como no tiene dinero no sale. Es un secreto a voces. En los tres niveles.” (S 7), “No. Porque muchas veces por no tener poder económico no toman en cuenta tus denuncias. Estatal.” (S 54), “No. Porque en ocasiones con tal de dar a conocer a un culpable, se retiene a personas inocentes de dicho acto ilícito. Tres niveles.” (S 31), “No. Porque a veces a los delincuentes los atrapan infraganti y a los siguientes días los sueltan. Tres niveles.” (S 42), “No. Porque existen muchos casos de injusticias. Tres niveles.” (S 14)

Si

“Si. Creo en la justicia de Monterrey. Tres niveles.” (S 6)

Al analizar las respuestas la representación social de la justicia es de que no existe, por el contrario, en su lugar, se construye sólidamente la representación de la injusticia. Al preguntar por la justicia en México y en Monterrey y sus municipios, se hacen alusiones a los siguientes aspectos que la impiden: corrupción, ineficiencia, burocracia, abusos de autoridad, ilegalidad, discriminación socioeconómica y tráfico de influencias, clientelismo, racismo, clasismo, prejuicios morales, control por parte del crimen organizado (infiltración). Corrupción e impunidad son las características del sistema mexicano de justicia.

La percepción que tienen los ciudadanos sobre su sistema de justicia es completamente negativa, desoladora y atemorizante. Ante este panorama queda una sensación de miedo e indefensión y es también terreno fértil y propicio para una mayor descomposición social y aumento de la criminalidad. Todos estos factores son obstáculos serios para el logro de una democracia participativa.

❖ **En Monterrey, ¿es posible confiar en la mayoría de las personas?**

El 76% de los informantes que respondieron señalan que **no es posible confiar en la mayoría de las personas**. Mientras que el 19% opina **que si** es posible.

Quienes consideran que **no es posible** confiar en la mayoría de las personas, lo afirman con los siguientes comentarios:

“No, lamentablemente no se puede confiar en nadie.” (S 44), “No se puede confiar en nadie en ninguna circunstancia.” (S 48)

Si es posible

“Si, en las que conocemos y que realmente son de Monterrey.” (S 14), “Si, en tanto sean ciudadanos, esta confianza se limita a tú propio ambiente o estrato social, es difícil confiar en políticos, autoridades, incluso patrones.” (S 12), “Si, es en la mayoría si, porque ahorita ya ni sabes quién es tu vecino.”(S 26), “Si, Siempre hemos sido gente honrada y trabajadora, lo malo es la gente que llega de otra parte, con otras costumbres y otros valores.” (S 6)

La cultura mexicana se caracteriza por mantener una desconfianza generalizada. Monterrey, particularmente ha recibido inmigrantes desde hace mucho tiempo y siempre ha existido la desconfianza hacia el extranjero. Este rasgo se hace más patente en las circunstancias actuales que atraviesa el estado de Nuevo León y particularmente la ciudad de Monterrey, caracterizadas por la violencia y la inseguridad.

La gran mayoría de los que proponen que no se puede confiar, acompañan su respuesta con comentarios alusivos a que la pérdida de confianza es reciente, lo que manifiesta una idealización de la vida veinte a treinta años atrás. Resalta también la idea de que sólo se puede confiar en las personas que son de Monterrey y de la misma manera, la pérdida de la confianza se debe a la

llegada de personas ajenas a Monterrey. La representación social de los miembros de la delincuencia organizada, los propone como personas que han llegado de fuera y generan este ambiente de desconfianza.

Sin embargo, a partir de la información que nos proporcionan los medios informativos, conocemos que los miembros de la delincuencia organizada que opera en el estado de Nuevo León, son en su mayoría, originarios del mismo. De esta manera, esta representación social del delincuente, de aquellos en los que no se puede confiar, los presenta como extranjeros o foráneos. El círculo de la confianza se extiende cuando mucho al grupo familiar extenso y al de los amigos. Se capta una sensación o percepción de miedo generalizado, que también se percibe en las respuestas acerca de la inseguridad.

Algunos de los comentarios aclaratorios a las respuestas que afirman la existencia de confianza hacia la mayoría de las personas, cambian el sentido de las mismas o las relativizan, por lo que el porcentaje de respuestas negativas se incrementa. Se presenta también una sensación de que la pérdida de la confianza ha sido un fenómeno de nuestro tiempo presente, es decir, bastante reciente y que se está gestando cotidianamente, una rápida descomposición social.

La confianza se expresa como un valor perdido que se añora. Resalta la dimensión temporal del problema al emplear adverbios como: Hoy en día, ya no, en estos tiempos, ahora, actualmente, etc. Tal dimensión nos lleva a planteamientos que se fundamentan en y apelan a la tradición y a un tiempo pasado mítico en el que *nosotros*, los nacidos en Monterrey, éramos dignos de confianza a diferencia del presente en el que los *otros*, nacidos fuera y llegados a la ciudad, han quebrantado los valores, las costumbres, las tradiciones y los vínculos que unían a esta comunidad.

El peligro de estas concepciones es que pueden desembocar en nacionalismos o totalitarismos y por ello mismo, en la exclusión.

Incertidumbre y desconfianza, debidas a la corrupción, inseguridad, delincuencia y pérdida de valores, componen el mapa de las interacciones sociales actuales en la ciudad y en el estado de Nuevo León, en general.

Para fundamentar la interpretación de que la corrupción se ha convertido en una cultura que permea todos los ámbitos de la vida cotidiana de los ciudadanos mexicanos, es importante revisar brevemente algunas de las principales cifras obtenidas en el índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2010.

El Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG) 2010, de la Organización Transparencia en México, muestra que ésta es una práctica que ha ido incrementándose y extendiéndose a diversos ámbitos y servicios públicos que ofrece el gobierno en sus tres niveles, así como privados. De 197 millones de actos de corrupción que se identificaron en el año 2007, hubo un incremento ya que en el 2010, se identificaron 200 millones de trámites. La frecuencia de la corrupción también se incrementó.

Si nuestro país tiene un poco más de 100 millones de habitantes, ello permite aseverar que cada poblador dio al menos dos mordidas al año, -en promedio-, sin considerar que un porcentaje importante de la misma, son menores de edad. Además el precio de la mordida se incrementó y con ello significó un costo entre 14% y 33% del gasto de los hogares, proporcional a sus ingresos.

En el caso específico de Nuevo León, el índice se incrementó de un 6.0 en el año 2007 a un 9.1 en el año 2010.

VIII CUIDADO AL MEDIOAMBIENTE

El siguiente grupo de preguntas se refiere específicamente a temas de cuidado al medioambiente.

❖ En Monterrey, cuidamos nuestros recursos naturales y especies animales, como árboles, ríos, osos, aves, entre otros

El 72% de los informantes respondió que **no cuidamos nuestros recursos naturales, ni las especies animales**. Las respuestas que presentan son las siguientes:

“No, Falta cultura sobre la flora y la fauna.” (S 34), “No, poca cultura ambiental.” (S 40), “No, Es un tema que realmente les importa a la minoría.”(S 36), “No, hay falta de interés por esos aspectos.” (S 44), “No, La gente prefiere un estadio en vez de mejorar lo que es “La Pastora” que se considera un pulmón en la ciudad.” (S 47), “No, no se respetan sus espacios naturales por eso cada vez mas reportes de animales salvajes dentro de áreas residenciales.” (S 50), “No, por el crecimiento de la población desmedido, invadiendo áreas verdes.” (S14), “No, cuando se tiran árboles en las calles, no se siembran otros nuevos, por ejemplo en un parque que está cerca de mi casa quitaron varios árboles y ya no sembraron árboles nuevos, quitaron el césped y pusieron césped sintético.” (S 16), “No, tráfico de especies, tala clandestina, tala desproporcionada, contaminación de aguas...” (S 29), “No. De igual manera, no se tiene la suficiente precaución con los desechos tóxicos, estos son arrojados al ambiente, ríos en este caso. En cuanto a los árboles es muy triste cuando las personas los talan por hacer daño sobre las banquetas.” (S 19), “No, muchos ríos que alguna dependencia ha permitido que se contaminen.” (S 23), “No. Basta con ver la ciudad de Monterrey, no se ven ni las estrellas de tanta contaminación.” (S 48), “No, por lo menos las empresas, no.”(S 24), “No. Porque para empezar no se le enseña a los niños a cuidar a los animales ya que los tratan mal y hasta los matan, así como las personas que fabrican ropa o accesorios de alguna piel de animal.” (S 17), “No, ni siquiera llama la atención la agresión hacia

espacios naturales.” (S 12), “No, porque le estamos dando prioridad a otros factores que también afectan a la sociedad.” (S 53), “No, porque los cazan, además tiran deshechos industriales a los ríos, esto si lo he visto.” (S 7)

Se argumenta falta de cultura ambiental, falta de interés e importancia, incluso indolencia; prioridad a la urbanización e industrialización por encima de la naturaleza, que lleva a la tala de árboles, tráfico de especies, contaminación de aguas, todo ello por primacía de otros intereses, fundamentalmente económicos sobre la conservación de los recursos naturales. Como parte de esta importancia prioritaria a los intereses económicos, se evidencia un vínculo con el problema de la corrupción, lo que lleva a contaminación, sobreexplotación y extinción de los mismos.

Quienes respondieron que **sí cuidamos nuestros recursos naturales y especies**, representan el 28% de los informantes y sostuvieron que:

“Si, los protegemos.” (s3), ”Si, “Hay gente se dedica cuidar el medioambiente” (s11), “Si. Hay áreas especiales para ellos y restringidas para nosotros.” (S 55), “Si, somos capaces de cuidarlos.” (S 26), “Si, no matándolos, plantando árboles, regando plantas.” (S 42), “Si, por ejemplo, yo cuido mi recurso más importante, el agua, y lo cuido como si fuera mio.” (S 27)

En estas representaciones sociales, los niveles personales de cuidado al medio ambiente y las actividades que los informantes realizan, son muy elementales. Al parecer, las formas en que los ciudadanos pueden participar en el cuidado al medioambiente son muy limitadas a ciertas actividades individuales que son importantes pues contribuyen a la sustentabilidad, pero cuya aportación es menos trascendente que si se organizaran para llevar a cabo actividades con mayor impacto y magnitud. Por ejemplo, plantar un árbol en forma individual, es sin duda una acción que beneficia al medioambiente, sin embargo, si la misma acción fuera colectiva, el impacto sería mayor y más representativo.

Como elemento periférico, llama la atención una respuesta que afirma que hay personas encargadas de cuidar al medioambiente, a las que se les paga por ello. La respuesta citada muestra cómo el problema ambiental se ve ajeno y por ello lejano y se considera responsabilidad de otros, lo que hace imposible una toma de conciencia que lleve a realizar actividades para su cuidado, en términos personales y de organización en colectivos.

❖ **¿Las autoridades se preocupan por garantizar la protección al medio ambiente?**

En estas representaciones sociales, el 69% de los informantes consideran que las autoridades **no se preocupan** por garantizar la protección al medio ambiente, ya que dan prioridad a otras cosas, entre ellas a la inseguridad-, y se olvidan del medio ambiente que es importante. A continuación presento algunas de las respuestas más significativas:

“No lo suficiente.” (S 3), “No, el cerro estuvo quemándose toda la semana y no hacían absolutamente nada.” (S 21), “No. Al contrario, lo que les preocupa es lo que tienen que hacer para seguir incrementando sus ganancias.” (S 5), “No, no hay leyes, ni seguimiento, al contrario, se ha hecho notar una corrupción al respecto.” (S 12), “No, por ejemplo dando permiso para destruir una gran área verde para construir un estadio.” (S 50), “No, porque, si no dejarían de construir tantas casas en los cerros, le pondrían mas atención a la restructuración del bosque, tirarían menos basura, no utilizarían mucho los autos.” (s53), “No. Actúan muchas veces por intereses políticos y económicos. No tienen ética ni cultura por cuidar el medio ambiente.” (S 54), “No. No invierten lo necesario para la protección al medio ambiente.” (S 47), “No. Lo ofrecen al votar pero no cumplen.” (S 26), “No, Supuestamente tienen enfocadas sus ideas a la inseguridad y se olvidan que el medio ambiente también es importante.” (S 51), “No, no hay leyes que protejan el medio ambiente, no se tiene la cultura del cuidado en este aspecto.” (S 13)

“No, en no poner medidas mas extremas para que la ciudadanía cuide el medio ambiente.” (S 25)

Las autoridades no invierten lo necesario para la protección al medio ambiente, ellos mismos no lo hacen ni cuidan que los demás lo hagan. No hay cultura ecológica. Señalan además la existencia de corrupción, pues los intereses personales, políticos y económicos, se colocan por encima de los colectivos y sobre el cuidado al medioambiente.

Un elemento periférico manifiesta que en Monterrey por ser ciudad industrial, es imposible garantizar la protección al medioambiente y de alguna manera, parece implícita la necesidad de sacrificar a este último, ya que se considera más importante la producción económica, aunque se acompañe de contaminación. Además la falta de información vuelve a surgir, ya que aún una ciudad industrial puede hacer una reconversión de su producción empleando tecnología verde y procesos sustentables.

Coinciden también en que algunos candidatos a ocupar puestos públicos ofrecen cuidar el medioambiente, pero no cumplen; las campañas existentes al respecto son aisladas en épocas de elecciones, pero no hay soluciones a los problemas, ni propuestas. Señalan también, la inexistencia de medidas, campañas y programas fijos y definitivos. No hay leyes que protejan el medio ambiente, ni multas para las empresas, tampoco hay seguimiento ni supervisión.

Respecto al mismo tema, el 31% de los participantes considera que **sí hay una preocupación por parte de las autoridades**. Es importante hacer notar que las respuestas afirmativas, en su mayoría, se complementan con alguna frase que implica una negación. Por lo anterior, podemos afirmar que se fortalece el núcleo central, que niega la protección al medio ambiente por parte de las autoridades.

“Si, cuando obtienen un beneficio particular. Cuando no, NO.” (S 14), “Si. Cuando entra un nuevo cabildo o para quedar bien.” (S 24), “Si. En algunas situaciones.” (S 28), “Si, Cuando recolectan la basura, pintan los parques y los limpian, barren las calles, recolectan ramas, muebles viejos, etc.” (S 16), “Si, plantando árboles y cuidando los animales.” (S 42), “Si, sólo por temporadas.” (S 24), “Si, muchos hasta asociaciones tienen.” (S 27) ** (confusión con ciudadanos), “Si, hay personas que están encargadas de ello.” (S 11), “Si, pero sólo se preocupan, se requiere de más esfuerzos.” (S 29), “Si, pero no siempre cumplen.” (S 31)

Como he mencionado ya, aún las respuestas afirmativas llevan una negación implícita. Las respuestas dejan entrever que las autoridades gubernamentales tan sólo realizan acciones esporádicas, no sistematizadas, que no forman parte de una planeación.

Un dato interesante que se percibe a través de estas respuestas es la relación que se da entre las campañas esporádicas de cuidado y protección al medioambiente y las campañas políticas. El cuidado al medioambiente es entonces un discurso que genera un capital político, que atrae a votantes y una vez que cumple su función es olvidado y abandonado. Esta situación es posible, debido a que la ciudadanía tampoco participa en dichas actividades, ni da seguimiento a las propuestas y promesas de campaña, exigiendo a sus gobernantes rendición de cuentas en torno a estos temas.

❖ Cuidado al medio ambiente, los recursos naturales, el aire, por parte de los ciudadanos regiomontanos.

El núcleo central de las representaciones sociales sobre la participación de los ciudadanos en el cuidado al medioambiente, condensa a un 76% de los informantes, que considera que los **ciudadanos regiomontanos no cuidamos el medioambiente.**

En términos generales, se piensa que los ciudadanos carecen de cultura de cuidado al medio ambiente, ya que desperdician los recursos naturales, son inconscientes en relación con el consumo de productos, con el uso de vehículos, sobre todo cuando están en mal estado y en el manejo de desechos tóxicos que contaminan el aire y el agua. Las fábricas también carecen de tal cultura ecológica y por tanto tampoco cuidan el medioambiente.

Se enfatiza mucho que los ciudadanos, los empresarios dueños de las fábricas y las autoridades carecen de formación en el cuidado al medioambiente y sus recursos naturales y por parte de las instituciones no hay acciones integrales en este sentido. Un problema que se reitera además de la contaminación con sustancias y desechos tóxicos, es el hecho de que se contamina también al tirar basura indiscriminadamente, además de que se carece de un sistema para separarla para su reciclaje.

a) Los intereses económicos importan más:

“No se le da el cuidado a las áreas verdes, por hacer una metrópoli más desarrollada.” (s5)

b) Falta de cultura ambiental. Que incluye educación ambiental, supervisión y control.

c) Sobreexplotación y desperdicio de recursos

d) Contaminación

“No. No tenemos precaución al contaminar en gran escala.” (S 14), “No, se sigue contaminando el ambiente con fábricas, con el uso del auto, etc.” (S 1), “No. Se utiliza mucha luz (electricidad), gasto de agua, mucha industria, por lo que se contamina el aire con fábricas, vehículos, se utilizan muchos productos con empaques no degradables, se tira mucha basura.” (S 13), “No. Algunas personas no hacen lo posible por darle mantenimiento a los vehículos, esto contamina en exceso. Aparte las empresas no tienen el suficiente cuidado con los desechos tóxicos.” (S 19), “No, no porque seguimos fumando cada vez más, creamos más casas, destruyendo el hábitat natural,

utilizamos más carros para el traslado vehicular, tiramos mas basura porque no piensan en las consecuencias de sus actos debido a que no hay leyes que estipulen multas por tirar basura y así poder mantener mejor el ambiente. “ (S 53)

El 22% de los informantes considera que sí tenemos cuidado del medioambiente, los recursos y especies animales. Algunos de los comentarios:

“Si, se da el servicio de recolección de basura destinada al reciclaje y se imparte educación al medio ambiente.” (S 6), “Si. Personalmente si, pero la mayoría es muy descuidada.” (S 24)

Los ciudadanos que afirman participar en el cuidado al medioambiente, limitan sus acciones a no tirar basura en cualquier lugar, a separarla, en algunos casos, a cuidar el agua y ocasionalmente a sembrar árboles y cuidarlos. La participación ciudadana se realiza a título personal y por ello no tiene mayor trascendencia e impacto.

❖ **Los regiomontanos evitamos tirar basura en la calle, lugares públicos y áreas naturales**

En estas representaciones sociales, el 78% de los informantes considera que **no evitamos tirar basura en lugares públicos y áreas naturales**. La principal razón que se esgrime es la falta de cultura de cuidado al medio ambiente y los recursos naturales. La segunda causa que se señala es la inconsciencia.

a) Falta de cultura de cuidado al medio ambiente (24%)

“No, no existe una cultura de cuidado al ambiente y los recursos naturales.” (S 5), “No, no se tiene ese valor.” (S 19)

Me parece interesante hacer notar que el cuidado al medioambiente es considerado un valor que se transmite mediante la educación. Esta noción nos ayuda para comprender el sentido

que tiene para los sujetos sociales y diseñar una estrategia para su promoción en los diversos ciudadanos a través de la formación.

b) Inconciencia (17%)

“No, no lo evitan, desgraciadamente lo hacen, tiran sin conciencia.” (S 27), “Somos sucios por naturaleza. Al fin alguien tiene que limpiar, para eso pago mis impuestos.” (S 14), “No. Desgraciadamente los regiomontanos solemos ser muy flojos como para ir a tirar la basura a un contenedor y se nos hace fácil tirarla donde sea.” (S 51)

Las respuestas permiten percatarnos de que en opinión de los ciudadanos, si las autoridades no se preocupan por la protección al medioambiente y no establecen sanciones para quienes contaminen, la sociedad civil no se preocupa por cuidarlo. Se deduce que esta ciudadanía se interesa por aquellos asuntos que estén directamente relacionados con su economía personal.

1. **Si evitamos** tirar basura en la calle y áreas naturales (13%)

“Sí, en todo lugar procuramos tirar basura en su lugar.” (S 42)

3.10 Discusión general. Comentarios finales y conclusiones.

Sociedad civil comunitarista. Las dificultades para conformar una ciudadanía ecológica y una democracia verde.

En este apartado final presento las conclusiones que extraigo del análisis de las representaciones sociales que se construyeron a partir de la información obtenida mediante los cuestionarios. Presento mi interpretación del modelo de ciudadanía que se manifiesta a través de estas representaciones y prácticas sociales y acompaño con algunas aportaciones críticas, a la luz de aspectos teóricos relativos a los modelos de ciudadanía.

La interpretación de la información me lleva a proponer que el modelo de sociedad civil existente en Monterrey, N. L., que se manifiesta a través de la representación social en su totalidad, es fundamentalmente comunitarista, con algunos rasgos de la perspectiva capitalista libertaria. Los rasgos de liberalismo que aprecio en estas representaciones sociales del ciudadano y la ciudadanía, son básicamente el hecho de que conservan la importancia de los derechos individuales y los valores democráticos.

Existen diversas concepciones acerca del comunitarismo, desde las más radicales en su cuestionamiento al individualismo que el liberalismo propicia, hasta aquellas que mantienen ciertos aspectos de esa idea. Esta última es la concepción que propongo para interpretar estas representaciones sociales, ya que permite explicar la conjugación de rasgos del comunitarismo que es preponderante y del liberalismo.

Según Paulette Dieterlen, "... el modelo comunitarista es liberal porque considera válidos conceptos liberales como libertad, igualdad, derechos y justicia distributiva, valora las instituciones liberales considerando que se han logrado debido a la práctica política de grupos sociales determinados y distingue entre justicia en general y justicia distributiva." (Dieterlen, P. 1990: 4)

En relación a los modelos de ciudadanía, Rosa María Rodríguez Magda afirma que:

"...sólo las posturas más radicales, o su simplificación por parte de sus detractores, pretenden invocar de forma exclusiva una de estas características. Más allá de las polémicas academicistas, el acercamiento a los diversos actores en litigio nos ofrece un panorama más matizado en el que encontramos opciones híbridas: frente a las posturas extremas del libertarianismo y el comunitarismo conservador o étnico, hallamos el

liberalismo clásico, el comunitarismo nacionalista, el nacionalismo liberal, el republicanismo liberal...” (Rodríguez R., 2008: 254)

A continuación presento algunos elementos para justificar esta interpretación general respecto a que el modelo de sociedad civil en Monterrey es comunitarista, con algunos rasgos de liberalismo.

Las representaciones sociales de la ciudadanía en Monterrey, que se construyeron a partir de los datos obtenidos como resultado de esta investigación, enfatizan como aspecto determinante de dicha condición, la pertenencia a la comunidad. Así, el núcleo central de la representación social de ciudadano y ciudadanía es la pertenencia, ya que es predominante en todas las respuestas a estos temas. Al resaltar esta pertenencia, la comunidad pasa a ser el ámbito en que se articulan las nociones de ciudadanía, democracia, participación y de los atributos positivos con que se las caracteriza.

En el mismo sentido, la no pertenencia a la comunidad es el factor determinante para excluir de la ciudadanía a determinadas personas. Incluso la ausencia de sentimientos y vínculos afectivos hacia la comunidad es un rasgo negativo en un ciudadano, ya que es condición necesaria, según el comunitarismo, para compartir una idea del bien. Este aspecto resulta de gran trascendencia, debido a que la pertenencia está determinada por formar parte de una comunidad moral.

La ciudadanía, en estas representaciones sociales, es un estatus del que gozan los nacidos en la ciudad o quienes habitan en ella. Se constituye con fundamento en la exclusión de aquellos que no nacieron en el lugar, en este caso, los habitantes de zonas rurales, así como los que no muestran sentimientos de pertenencia. “La pertenencia a una comunidad se constituye como un

elemento vital, en el que recae la posibilidad de distribuir los bienes, la seguridad y el bienestar, por lo que la condición del que no tiene patria es según Walzer, de «infinito peligro». En este sentido la ciudadanía como pertenencia, es excluyente y exclusiva, en términos de Santiago, la pertenencia es el primer bien a distribuir en las sociedades comunitaristas. (Santiago, R. 2010: 165-166)

La ciudadanía adquiere, en estas representaciones sociales, una dimensión cultural primordial y marca su territorio, como he mencionado ya, por la exclusión y no por la inclusión; en este caso, gozan de dicho estatus, todos los nacidos en la ciudad y también los residentes en la misma. Afirma Carlos Cullen (2007) que la ciudadanía como pertenencia supone la inclusión cultural, que se enfrenta, simplemente por estar, con toda otra forma de inclusión cultural que no sea la propia. Es el problema de la identidad, que implica la contextualización y la vinculación con una tradición, un lenguaje, un territorio.

En el mismo orden de ideas, Rodrigo Santiago plantea que la comunidad no se identifica tan sólo por su aspecto geográfico, sino de acuerdo con parámetros culturales claros. La geografía de los grupos comunitaristas, no es sólo territorial, es también moral. Añade que de acuerdo con diversos autores, el concepto de comunidad no es empírico, sino normativo, ya que no describe lo que es sino que hace referencia a lo que consideramos que debe ser. (Santiago, R. 2010: 155-164)

Considera Barber (2000) que en la política existe una zona claramente demarcada que combina lo ideal y lo real y que en tanto concepto político la sociedad civil tiene un significado empírico y otro normativo ya que indica cómo nos comportamos, al mismo tiempo que presenta un concepto ideal de cómo deberíamos comportarnos. Si se intenta separarlos, se anulan.

En estas representaciones sociales, que se concibe como ciudadano a la persona que pertenece a la comunidad, a la cual está vinculada afectivamente y comprometida con ella, supone el hecho de compartir la cultura, principalmente los valores y las tradiciones. Se manifestaron también diversas expresiones acerca de cómo se concibe a la comunidad, a partir del deber ser.

He señalado que pertenecer significa formar parte de un lugar y de un grupo determinados y en estas representaciones sociales, la pertenencia a una comunidad es la esencia determinante de la ciudadanía, antes que la identidad jurídico-política formal. Este ordenamiento pone de manifiesto, que los derechos son puestos en un segundo lugar supeditados a la pertenencia. Esta es otra característica de las sociedades con modelos comunitaristas, privilegiar las necesidades y demandas de la comunidad por encima de los derechos individuales.

Reconocer los derechos y las obligaciones que se adquieren al gozar del reconocimiento o estatus de ciudadanía, nos indica el hecho de que se garantiza el derecho de igualdad ante la ley y el derecho de participar en la vida democrática. En estas representaciones se hace alusión a la igualdad, al expresar que el ciudadano es quien pertenece en calidad de semejante y tiene iguales derechos y obligaciones. No obstante, los derechos que se reconocen son derechos muy vinculados con las instituciones privadas, como el derecho a la educación, así como algunas libertades fundamentales. Aquí se muestran rasgos del liberalismo.

Por encima del estatus como ciudadano que se adquiere por nacimiento y que conlleva la titularidad y el ejercicio de derechos y obligaciones, se considera de mayor importancia el hecho de ser un habitante del lugar. En este punto es interesante analizar que la noción de habitante, - que refiere al habitar o morar-, nos remite al ámbito privado. El ámbito privado es el espacio de la solidaridad y la defensa de los derechos individuales y dominio del mercado.

Es característico del modelo comunitarista y también del liberal, mantener la separación entre el ámbito público al que pertenece el Estado y su función de poder y el privado al que pertenece el individuo, en el que puede ejercer su libertad. Ambos modelos plantean incluso, la oposición entre el ámbito público y el privado. Sin embargo, en estas representaciones sociales, tal como en algunos otros comunitarismos, la definición de la ciudadanía desde el espacio de lo privado, invade las funciones del ámbito público, que es el espacio de lo político, en palabras de Barber: “colonizan el espacio público con sus identidades privadas.” (Barber, B. 2000: 37)

El sector privado, al que apunta la noción de habitante, es también, según la concepción de Barber, el espacio en el que se generan los lazos que preceden y condicionan la individualidad y que unen a las personas desde las familias y asociaciones similares, hasta categorías sociales más amplias y de mayor jerarquía. Así, las relaciones sociales son concebidas como espacio de interacción y asociación en comunidades (Barber, B. 2000)

Esta concepción de las relaciones sociales en forma de asociación e interacciones de comunidades, determina a su vez una manera de pensar las posibilidades de organización y participación de la sociedad civil. En estas representaciones sociales las asociaciones se van formando a partir de la persona como miembro de la familia, primer grupo social, hacia el vecindario, los gremios, la comunidad, la ciudad y la nación.

Rodrigo Santiago plantea, al respecto, que en gran parte, en las posturas comunitaristas:

“...la pertenencia de los individuos está primero en los grupos pequeños y a partir de ahí en distintos niveles. De este modo, la familia, los gremios, los clanes, las tribus, las ciudades y las naciones son los distintos espacios a los que pertenece el sujeto, respecto

a las cuales tiene también una variedad de deberes, herencias, expectativas y obligaciones.” (2010: 165)

La sociedad civil actual es entendida por los modelos comunitaristas, según afirma Barber, como un espacio privado y cerrado de comunidades estrechamente unidas, que ofrece un vínculo social a individuos y grupos dispares en un mundo anárquico desde el punto de vista social y económico. “Solidaridad y fraternidad ante la incertidumbre y el aislamiento que caracterizan a la sociedad *postradicional*, la familia y otros grupos sociales intermediarios, pueden prevenir que la masa caiga en el anonimato y la impersonalidad.” (Juan Pablo II, vid en Barber, B. 2000:36)

De la misma manera, las limitadas prácticas sociales que los informantes afirmaron llevar a cabo, se realizan fundamentalmente en instituciones que pertenecen al ámbito privado como clubes sociales, grupos de la iglesia, familia, grupos vecinales, etc. Estos grupos, son ejemplos de asociaciones privadas y cerradas que se valoran como condición para que se manifiesten la unión social y la solidaridad.

Considero que el modelo comunitarista se fortalece en las condiciones sociales actuales, debido a que este vínculo social que se ofrece a los sujetos es fundamental en el contexto actual en el que la ciudad de Monterrey y su área metropolitana, considerada la tercera más poblada en nuestro país, presentan graves problemas para sus habitantes, entre los cuales podemos mencionar la gran inseguridad y extrema violencia que se han convertido en una realidad cotidiana, aunadas a la corrupción y la impunidad, así como el crecimiento urbano, la masificación, el individualismo, la contaminación ambiental, el desempleo y la falta de

oportunidades educativas, entre otros. Esta valoración de la familia, los amigos y la comunidad, como los grupos de personas en quienes es posible confiar y quienes se muestran solidarios ante nuestras necesidades, se capta en estas representaciones sociales a través de las distintas respuestas en cuya mayor parte, el sentido de pertenencia constituye el núcleo central, como se ha venido reiterando.

Al analizar las respuestas a las preguntas acerca de si se respetan los derechos de los ciudadanos en la vida cotidiana y si es posible confiar en la mayoría de las personas, se hizo evidente la representación social de la desconfianza generalizada, de la cual sólo se exime a las personas más cercanas: familia y amigos. Incluso se expresa desconfianza hacia algunos vecinos, pues se afirma que ya no se sabe en quién es posible confiar. En las respuestas a estas preguntas es posible apreciar además de un fuerte arraigo a la familia, una mirada al pasado y se expresa el deseo de que las circunstancias fueran las de antes, un interés por restaurar viejas tradiciones, instituciones y prácticas, con la intención de reformar las instituciones actuales, características también del comunitarismo.

La desconfianza se extiende hacia las autoridades, principalmente las diversas corporaciones policiacas que han mostrado un alto grado de corrupción. Esta situación se agrava al evidenciarse también en estas representaciones sociales, la sensación de indefensión y temor permanente en que vive la ciudadanía, ante la presencia real, latente y simbólica de los hechos violentos y la alta criminalidad que mantienen condiciones permanentes y de creciente inseguridad.

En este contexto, se presentaron afirmaciones que hacen referencia a la representación social de que las personas que delinquen y forman parte del crimen organizado, no pertenecen a la comunidad, sino que han llegado de otros estados de la república, principalmente. En tal

sentido, se manifiesta en la representación una división entre un *nosotros*, quienes pertenecemos a la comunidad y los *otros*, que no pertenecen a ella. Se hacen también alusiones a que en el pasado se podía confiar en la mayoría de las personas y se vivía con mayor seguridad, es decir que se alude otra vez, a las tradiciones y las costumbres.

Acerca de estas ideas, sostiene Santiago, que los comunitaristas proponen la importancia de una concepción común del bien y compartida por todos los ciudadanos con la intención de reducir la autonomía individual y de esa manera beneficiar el interés colectivo. “Los márgenes de estas comunidades tienen unos límites establecidos y el interés de mantener dicha diferenciación entre lo que está dentro y fuera de las mismas es de especial importancia.” (2010: 156)

Al respecto, Barber afirma que el comunitarismo concibe a la mayoría de las asociaciones humanas como atribuciones, es decir, como algo dado, que no se elige. Por ello, las comunidades antiguas tienen una base social que el tiempo y la tradición han legitimado, sus propósitos son concebidos primordialmente como naturales. A estas asociaciones se opone, en estas representaciones sociales, a todos aquellos que no pertenecen en forma “natural”. (2000: 42)

En relación con la pertenencia como elemento determinante de la ciudadanía, en estas representaciones sociales se hace referencia a temas como la amistad, la cooperación e integración, así como la solidaridad y las dimensiones en las que se arraiga y se expresa, son: la familia, los vecinos, la comunidad, la ciudad y en última instancia, el país. Es una pertenencia determinada por la territorialidad y a partir de ella, por la identidad cultural. Los aspectos identitarios que se generan por la pertenencia a una comunidad son priorizados por encima del estatus jurídico formal, en estas representaciones sociales.

Al dar mayor importancia a la comunidad, la identidad particular no viene dada en forma individual sino por la pertenencia a una colectividad, que para Charles Taylor, se elabora mediante el diálogo con los demás. Hemos mencionado el hecho de que los habitantes de la comunidad, se identifican con la cultura: el lenguaje, la vestimenta, los rasgos físicos, las costumbres y tradiciones, las normas y los hábitos que comparte con los demás miembros de la misma y desarrolla sentimientos hacia ella. Se ha analizado ya, la gran diversidad de significados que tiene el concepto de nación y que incluye al estado, al país, el territorio y los habitantes de ellos, etnia, pueblo y otros.

El comunitarismo parte de cierta autonomía personal, pero valora primordialmente el sentido de pertenencia y la identidad que desarrolla el individuo hacia la comunidad. Cada individuo desarrolla sus propios vínculos hacia la sociedad y hacia los grupos y comunidades a los que pertenece, aluden en estas representaciones a la nación cultural, que puede definirse como una comunidad humana que comparte determinadas características culturales comunes: la cultura, una etnia, lengua y/o territorio, a las que asigna un sentido ético-político. Diversos elementos conforman a la nación cultural, primordialmente la identidad, arraigada en la cultura: principios, ideales, valores, tradiciones; así como la identidad jurídico política: compartir derechos y obligaciones.

María García analiza la forma en que se ha desarrollado la ciudadanía en nuestro país y hace notar que en sus orígenes, durante la guerra de Independencia, se vinculó con el interés por ciudadanizar a la población y convertir a México en una nación.

“En esta época ambos factores estaban entrelazados y a pesar de ser lento y accidentado, el proceso fue gradual e inexorable, pues el país que se quería construir requería de ciudadanos que lo hicieran posible. Así fue como la categoría de ciudadanía tendría

durante el siglo XIX un alto sentido nacional y aunque no participó la mayoría en esa tarea, la minoría ilustrada habló en nombre de todos; a final de cuentas, fue el segmento de la sociedad que formuló y operó sus expectativas.” (García, M. 2006: 4)

Al ser un proceso de identificación, el ciudadano, integrante de la comunidad, desarrolla también vínculos de solidaridad. Según Barber (2000), el comunitarismo concibe a la sociedad civil como una mezcla confusa de relaciones sociales, un espacio de interacción, de asociación en comunidades, condición indispensable para la unión social. En estas representaciones sociales se plantea la importancia de la pertenencia como factor para la cooperación y la solidaridad, elemento que adquiere gran importancia, ya que es una manifestación del sentido de pertenencia que impulsa a la búsqueda del bien común.

Es interesante resaltar también que una gran mayoría de las respuestas que refirieron la importancia de la cooperación para el bien común, se acompañaron de la afirmación de la obediencia a las leyes. Asimismo, cuando se solicitó la determinación de las virtudes cívicas, jerarquizadas, la solidaridad fue considerada en el cuarto lugar, precedida del respeto en los dos primeros lugares y de la responsabilidad. Respeto y responsabilidad señalan también la importancia que se otorga al hecho de ajustar los comportamientos y las libertades personales a las necesidades e intereses sociales, es decir a la búsqueda del bien común, por convicción, más allá de obedecer a un mero contractualismo.

En el modelo comunitarista, la moral está fundamentada en marcos de referencia y distinciones cualitativas externos a los sujetos ya que provienen de la idea del bien, que comparte toda la comunidad. (Santiago, R. 2010: 157) El sujeto moral sólo puede realizarse como parte de la comunidad, al compartir valores y tradiciones.

Entre algunos de los rasgos que en estas representaciones sociales de la ciudadanía regiomontana se mantienen del liberalismo, son aquellos relativos a la igualdad y los derechos individuales. En estos aspectos, se hacen serios señalamientos a su incumplimiento, tanto por parte de las autoridades, como de la sociedad en general. Esto significa que se les aprecia como aspectos indispensables para la vida democrática.

Las representaciones sociales del buen ciudadano y los valores que se priorizan para su definición, así como las prácticas que realizan para ser buenos ciudadanos y ciudadanas, apuntan hacia el respeto u obediencia de las leyes y normas sociales, respeto a los demás miembros de la comunidad y a la patria y cumplimiento de sus obligaciones. En esta importancia reiterada de la obediencia a las leyes y autoridades, se captan rasgos del liberalismo, que durante la Independencia se interesó por dotar a los seres humanos de derechos y obligaciones.

Sin embargo, he señalado también que en estas representaciones sociales ocupan un lugar fundamental la titularidad y ejercicio de las obligaciones, mientras que los derechos quedan minimizados, referidos casi en forma exclusiva a una formalidad que no se ejerce y cuyo respeto no se exige a las autoridades. En relación con esta situación, ha quedado expresado también el desconocimiento de los derechos, por parte de la población que impide tanto su ejercicio como su exigencia. Asimismo, considero que se evidencia la gran afiliación y cohesión de los ciudadanos hacia la comunidad.

En mi opinión, la gran importancia que se asigna al ejercicio del sufragio, considerado tanto un derecho como una obligación, principalmente esta última, se puede explicar a partir de la concepción liberal de una democracia representativa. Para este sistema de gobierno, el estado de derecho otorga a los representantes electos la capacidad para tomar decisiones políticas, en el

marco constitucional que salvaguarda los derechos y libertades, tanto individuales como colectivos.

Además, estas representaciones sociales evidencian una ínfima participación política por parte de la ciudadanía. El mayor porcentaje de respuestas en relación con la participación política está relacionado de manera inmediata con el sufragio.

La escasa participación que se lleva a cabo está vinculada con actividades de esparcimiento, tales como asistir a clubes deportivos y sociales, con grupos de la iglesia, redes y comités vecinales y se orienta también hacia actividades de servicio comunitario y beneficencia pública. Se hizo evidente que la población no se auto organiza, no ha desarrollado capacidad de autogestión y requiere que se le indiquen las actividades a realizar, contar con objetivos establecidos y caminos previamente establecidos para seguirlos cuando hay motivación para su participación.

Es necesario resaltar, además, que las citadas organizaciones, a través de las cuales se canaliza la participación ciudadana, son asociaciones privadas. En todos estos aspectos, es posible captar también una inmadurez política, ya que la representación del buen ciudadano está fundamentada en el respeto a las leyes y la obediencia a las autoridades, que al estar relacionadas con una escasa participación política y al margen del ejercicio de los derechos y de su exigencia, colocan a la ciudadanía en una condición de sometimiento y obediencia acrítica.

También en materia de participación ciudadana, el desconocimiento de la existencia de instituciones que la promueven, casi es total y hay confusión al señalar algunas de ellas. Además, se manifiesta en forma bastante generalizada entre quienes plantean la existencia de instituciones democráticas, que para participar en ellas se requiere ser invitado, cito por ejemplo los partidos

políticos casi como la única institución que proponen para tales fines. La propia idea de los alcances de la participación ciudadana es también muy limitada a la militancia en algún partido y al ejercicio del sufragio; por todo lo anterior, es posible llegar a la conclusión de que la propia noción de participación ciudadana no está clara, no se sabe ni se entiende la forma en que los ciudadanos pueden participar políticamente.

Contribuye a este desconocimiento la falta de información y comprensión; también respecto a la noción de democracia. La representación social de la democracia es vaga, centrada primordialmente en el ejercicio del sufragio, considerado tanto como un derecho y una obligación. Se asocian a la noción de democracia como derechos, la igualdad y la libertad.

Forma parte importante de la representación de la democracia concebirla como un sistema de gobierno o forma de organización del poder. Los requisitos que son considerados necesarios para la participación democrática son eminentemente formales, ya que se propone el tener reconocimiento jurídico- político. Parte importante de la representación social sobre la participación ciudadana señala como condición necesaria la formación de una conciencia cívica y otro grupo hace alusión al buen gobierno, entendido como aquel que cumple sus funciones y obligaciones, satisface las necesidades de sus gobernados, respeta sus derechos y goza de credibilidad, aquí volvemos a apreciar los rasgos liberales de la democracia representativa que se propugna.

Otro elemento que me permite señalar la existencia de características de la corriente liberal en estas representaciones y prácticas sociales, consiste en la gran importancia que se asigna a trabajo y a los rasgos como laboriosidad y al ser emprendedores, en la identidad de los ciudadanos regiomontanos. Como analizamos en el apartado correspondiente, la caracterización de los propios ciudadanos, respecto a sus rasgos distintivos es el espíritu de trabajo y la

responsabilidad. Hemos mencionado que el modelo liberal da una gran importancia al trabajo y a la propiedad, como génesis del universalismo.

El modelo comunitarista de sociedad civil presenta diversos aspectos que pueden constituir un riesgo para la conformación de una ciudadanía democrática participativa, los cuales han recibido críticas por parte de diversos politólogos. A continuación presento algunos de dichos cuestionamientos.

Barber (2010) plantea que uno de los principales riesgos que representa el comunitarismo para el logro de la democracia, consiste en el hecho de que “absorbe, asimila y monopoliza todo el espacio público”. En el mismo tenor, la relación de los individuos con su comunidad, absorbe todas las relaciones y responsabilidades de las acciones individuales en relación con los demás. De ahí que los individuos no se sientan responsables de acciones y decisiones tomadas y realizadas en su comunidad y se diluye su posible participación y compromiso políticos.

La representación social que tiene sobre si misma la ciudadanía regiomontana, expresa por una parte rasgos positivos tales como la laboriosidad, la actitud emprendedora y su alto compromiso y como rasgos negativos una gran apatía para la participación política, desinformación y desinterés en relación con estos aspectos, coronadas por gran desconfianza hacia las autoridades. Se señalan también como rasgos negativos, el ser elitista, convenenciera, en el sentido de anteponer los intereses personales a los colectivos y elitista, ya que como sabemos es la sociedad que presenta mayores índices de discriminación.

Debido a que el comunitarismo se fundamenta en particularismos, a diferencia del universalismo que defiende el liberalismo, algunos teóricos como Carlos Thiebaut, consideran que el tipo de identificación fuerte que supone el comunitarismo impide los acuerdos y la

neutralidad que si pueden alcanzarse a partir de principios universales, debido principalmente a que las sociedades cada vez son más amplias, plurales y diversas. (Thiebaut, C. vid en Santiago, R. 2010: 167)

Una de las principales críticas que se hacen al comunitarismo es que puede derivar en nacionalismos, es decir, en actitudes fundamentalistas, totalitarias y cerradas.

Francisco Laporta plantea que existen diversas similitudes entre el comunitarismo y el nacionalismo. A continuación presento cinco aspectos en los cuales, el autor encuentra tales relaciones:

“El comunitarismo es una teoría que le suministra al nacionalismo argumentos en los que puede basarse. La idea de una comunidad preexistente se relaciona con la idea de «pueblo» en el sentido nacionalista de sacralizar la patria. El comunitarismo mantiene que las pautas de comportamiento social y político tienen una mejor justificación local, interna a la cultura, que universal, transcultural y suprahistórica. El comunitarismo ofrece una plataforma teórica óptima para apoyar la distinción entre «nosotros» y «ellos», utilizando la noción étnica de etnicidad tan característica del nacionalismo. El tipo de cohesión moral de carácter sentimental sobre el que se quiere edificar la comunidad, es similar al tipo de cohesión que trata de inducir el nacionalismo entre los ciudadanos”. (Laporta, F., vid en Santiago, R. 2010: 168)

Esta crítica fundamental que se realiza al comunitarismo, -que hemos apuntado líneas atrás-, señala su exaltación a vínculos particulares con grupos sociales como la familia o la nación, que pueden dar fundamento a actitudes tribalistas o nacionalistas subyacentes a una gran cantidad de conflictos humanos. Esto se debe a que los límites de la comunidad, tanto territoriales

como morales, se encuentran totalmente definidos y ello puede desembocar en exclusiones, étnicas, tribalistas o nacionalistas.

Uno de los problemas más grandes que se señala al comunitarismo es que la concepción de ciudadano está en riesgo de desaparecer ante la gran importancia que se asigna a la noción de pertenencia o membresía. Este riesgo se considera posible debido a que el comunitarismo impide elegir entre distintas identidades y pertenencias y en nuestras sociedades actuales, los seres humanos estamos en posibilidad de elegir nuestra pertenencia a diversos grupos y comunidades. El modelo comunitarista impide elegir diversas adscripciones o afiliaciones, al imponer una pertenencia única y absoluta, con lo cual anula la libertad y la posibilidad de constituirse como ciudadano en verdad.

Comparado con el liberalismo, en el que los individuos pueden ejercer sus derechos y actuar como ciudadanos en los límites de la comunidad política, que son más amplios que los que establece el comunitarismo, en éste último, la noción de ciudadano tiende a desaparecer porque la comunidad exige una identificación constante entre la idea del bien individual y el de la comunidad. Además, hoy en día, defender la existencia de comunidades cerradas, sin relación con otras comunidades es muy difícil de pensar si no es que imposible, debido a la globalización, a las nuevas tecnologías informáticas y computacionales y a la internet, que generan el encuentro multicultural.

“Las posibilidades de adquirir y ejercer ciertos derechos inherentes a toda concepción de ciudadano desaparecen bajo la idea de pertenencia absoluta a la comunidad definida por la búsqueda de un bien común que sólo cabe entender en términos restringidos.” (Taylor, Ch. vid en Santiago, R. 200: 164)

En estas representaciones sociales que analizamos se parte de la pertenencia como núcleo central para determinar la ciudadanía. Los valores como el respeto y la responsabilidad, además de la obediencia a las leyes constituyen los rasgos y las prácticas sociales distintivos de un buen ciudadano. Se menciona como aspectos de la pertenencia la búsqueda del bien común y he señalado que los aspectos relativos al ejercicio de los derechos y su exigencia, están prácticamente ausentes.

Tal como lo menciona Taylor, los derechos ciudadanos han sido supeditados a la búsqueda del bien común. La comunidad adscribe a sus miembros a una comunidad moral, delimitada primero por los grupos pequeños como la familia, el vecindario, los gremios, etc., para alcanzar mayores niveles como la comunidad, la nación, etc. Pertenecer a la comunidad permite la posibilidad de participar en la seguridad y la distribución de los bienes que la misma aporta. Esta delimitación fortalece los vínculos entre sus miembros y excluye a todos aquellos que no los comparten, debido a que no forman parte de tales grupos.

En estas comunidades, los individuos necesitan identificarse con el grupo y al mismo tiempo distinguir las particularidades de sus miembros respecto de las de otros sujetos y comunidades, lo que lleva a dejar fuera del rango de los deberes morales a quienes no pertenecen a la propia.

Según Michael Walzer, en el comunitarismo el ciudadano es quien tiene los requisitos suficientes para ser miembro y todos los demás son extraños. (Walzer, M. vid en Santiago, R. 2010: 169) Como puede deducirse, los modelos comunitaristas reducen mucho el margen de quienes pueden ser considerados ciudadanos.

A manera de cierre

A partir de estas representaciones y prácticas sociales que conciben una sociedad civil comunitarista, se aprecia lejana la posibilidad de alcanzar la democracia, debido a la exigencia hacia los ciudadanos de manifestar su acuerdo y sujeción a un mismo fundamento común. Por su parte, la democracia implica que los diversos agentes sociales acepten que sus reivindicaciones tienen un carácter particular y limitado y que en sus relaciones mutuas está implícito el poder. En términos de Chantal Mouffe:

“El ideal de la sociedad democrática –incluso como idea reguladora- no puede ser el de una sociedad que hubiera realizado el sueño de una armonía perfecta en las relaciones sociales. La democracia sólo puede existir cuando ningún agente social está en condiciones de aparecer como dueño del fundamento de la sociedad y representante de la totalidad.” (Mouffe, Ch., 1999: 19)

Aunque las representaciones sociales aceptan que disfrutamos de ciertas libertades, éstas son muy restringidas y no se encuentra vinculación entre las libertades que se considera que disfrutaran los ciudadanos regiomontanos y la sujeción a la ley y a la autoridad que anteponen como evidencia de su pertenencia a la comunidad y conformidad con su estatus.

Para efectos de la presente investigación me interesó además captar en las representaciones sociales de la ciudadanía, la relación con el medioambiente, con el propósito de analizarlas a la luz del modelo político de la democracia verde, que considera inherente a una vida democrática, el logro de la sustentabilidad en sentido amplio.

En estas representaciones sociales casi no hay menciones libres acerca de la relación entre la ciudadanía y el medioambiente; sin embargo, considero imprescindible hacer algunos

comentarios al respecto y analizar principalmente aquellas que sobre tales relaciones se pueden encontrar en las respuestas de los informantes.

El respeto al medioambiente apareció en un pequeño porcentaje en relación con las obligaciones de los ciudadanos, vinculado con el tema de la búsqueda del bien común. Ligados también con las contribuciones al bien común, en estas representaciones se plantea en el cuarto lugar de importancia entre las prácticas que realizan para ser buenos ciudadanos, el respeto y cuidado al medioambiente. En lo relativo a las prácticas de un buen ciudadano, es importante señalar que se presentan separadas del cumplimiento de las obligaciones, lo que me lleva a plantear que comienza a formarse una conciencia de la urgencia de cuidar el medioambiente.

No obstante, la misma representación evidencia como núcleo central que no cuidamos el medioambiente, nuestros recursos naturales ni especies animales y vegetales, particularmente. Los motivos principales por los cuales no tenemos cuidado por la naturaleza y sus recursos son la falta de una cultura y educación ambientales, que conlleva un desconocimiento de las formas adecuadas de relacionarnos con ellos y los problemas generados por la corrupción, la urbanización y la industrialización, así como la falta de legislación, supervisión y sanciones a la corrupción.

En algunas respuestas que afirmaron que sí cuidamos el medioambiente y a nuestras especies animales y vegetales, se indicaba mayoritariamente que hay personas que trabajan y se les paga para que los cuiden. Este tipo de respuestas denota que la naturaleza es concebida como ajena a nuestra esencia como seres humanos, tan sólo es una proveedora de los “bienes” que consumimos en nuestra vida, lo cual impide responsabilizarnos por nuestras propias acciones y por el tipo de relación que establecemos para con ella, considerando que es suficiente que se

encargue a otras personas su cuidado. Además de la falta de compromiso y la desinformación, las acciones que llegan a realizarse son muy elementales y de poco alcance.

La representación muestra que las autoridades tampoco se interesan por el cuidado del medioambiente y de nuestros recursos naturales y cuando manifiestan algún interés es porque les va a reportar algún beneficio político o económico.

En lo que respecta a la ciudadanía, la falta de una cultura ambiental ha generado problemas que afectan a la naturaleza, como la contaminación, la sobreexplotación y desperdicio de los recursos naturales. Tirar basura en cualquier parte denota falta de educación ambiental y es un factor de contaminación, de riesgo epidemiológico y de aumento de la probabilidad de sufrir inundaciones.

A lo largo de los últimos treinta años, México ha atravesado un proceso hacia la democratización, primordialmente a través de la realización de diversas reformas electorales, que han permitido la alternancia en el poder, los gobiernos compartidos y la transición de un régimen autoritario a otro menos autoritario. Sin embargo, las difíciles y muy particulares circunstancias políticas, sociales y económicas que conforman el contexto cotidiano en nuestro país, hacen muy difícil afirmar la viabilidad de la democracia plena. Aunque se han conquistado ciertos derechos civiles, políticos y sociales en la experiencia cotidiana, el respeto a los mismos no se cumple para la mayoría de la población y, mucho menos aun, en el caso de derechos que se conocen como de cuarta generación

De hecho, el análisis de diversos indicadores y de las conclusiones de una gran cantidad de estudios políticos, nos llevan a afirmar, de acuerdo con Alberto Aziz Nassif (fecha), que en México la democracia está vulnerada. Si no hemos alcanzado ni siquiera ciertos niveles de

democratización en el país que garanticen mínimas condiciones de bienestar socioeconómico y confianza y claridad en el rumbo de la política, la posibilidad de una democracia verde que como hemos señalado es un modelo radical, se muestra mucho más distante.

Pero, tal como lo mencioné al inicio de estas disertaciones, la democracia verde, en tanto proyección de una sociedad y un sistema político idóneos, constituye un buen marco de referencia para nuestra participación como integrantes de la sociedad civil, preocupados por buscar soluciones integrales a las graves condiciones problemáticas que vivimos día a día y las que se vislumbran en prospectiva si nos mantenemos ajenos a las mismas.

Por lo anterior, sabemos que hoy en día la democracia verde es un no lugar, una utopía para México, la idea de una sociedad en que las relaciones entre los seres humanos y para con la naturaleza sean de respeto, de colaboración, de mutuo beneficio, atravesadas por una dimensión ética. Sin embargo, tal como lo dice Eduardo Galeano (fecha), la utopía es un referente que nos mueve a la acción.

Las representaciones sociales muestran que Monterrey, particularmente, afronta grandes obstáculos para el logro de la democracia. Más aun, la distancia entre las condiciones socioeconómicas y políticas reales y la posibilidad de alcanzar una democracia verde se muestran todavía más lejanas por diversas razones, algunas de las cuales ya se han expuesto. A continuación presentaré en forma muy sintetizada, algunos de los principales obstáculos para lograr la construcción de tal modelo de democracia en nuestra ciudad e incluso, algunos de ellos se pueden generalizar a nuestro país.

- Actuales circunstancias ocasionadas por la grave crisis económica que generan pobreza, marginación, discriminación, falta de oportunidades educativas y laborales,

descomposición social, violencia, inseguridad, corrupción e impunidad, entre otros problemas.

- Desigualdad socioeconómica.
- Desconocimiento de los derechos y obligaciones ciudadanos, de las formas posibles de organización y participación política democrática, de las vías institucionales para canalizarla.
- Violaciones a los derechos ciudadanos por parte de autoridades e instituciones, primordialmente, por corrupción y abuso de poder.
- Falta de ejercicio y exigencia de los derechos por parte de los ciudadanos.
- Desigualdad social, injusticia, marginación y discriminación hacia ciertos sectores de la población.
- Inmadurez política, falta de formación cívica y de compromiso político ciudadano.
- Apatía, desinformación e inacción.
- Clientelismo en las relaciones entre los partidos políticos y la ciudadanía.
- Predominio del modelo comunitarista que absorbe al individuo en la comunidad y disminuye u obstaculiza la constitución de la ciudadanía.
- Desconocimiento por parte de la población, e incluso de las autoridades, de las formas adecuadas de relación con el medioambiente, falta de una educación y cultura ambiental en la población y las autoridades.
- Desinterés por parte de las autoridades en los problemas del medioambiente, que impiden contar con leyes que lo protejan, así como con la supervisión y sanción a quienes violen las que existen.

Hasta aquí dejaré el análisis de las relaciones entre las circunstancias reales y las representaciones y prácticas sociales sobre ciudadanía, democracia, valores cívicos, medioambiente, entre otros. Sin embargo, a partir de esta investigación se generan nuevas inquietudes, ya que el conocimiento de la condición de nuestra democracia y nuestra ciudadanía, resulta necesario realizar diversas acciones para el fortalecimiento y consolidación de la primera a través del fortalecimiento de la participación activa, crítica e informada de la sociedad civil, en el gobierno de su comunidad. Transformar la concepción de la ciudadanía hacia una auténticamente democrática, participativa, ecológica y con responsabilidad ética y respeto a la diversidad, es una prioridad para alcanzar dicha democratización radical que exige el respeto a los demás ciudadanos y seres humanos, así como a la naturaleza.

Por lo anterior, considero que a partir del conocimiento de estas representaciones y prácticas sociales y de las circunstancias en que transcurre nuestra incipiente y frágil democracia, es posible y fundamental, proponer algunas alternativas para consolidar la democracia y para favorecer una sociedad civil fuertemente democrática, una ciudadanía ecológica y una democracia verde. La forma en que, en mi opinión, podemos lograr tal modelo radical, es a través del diseño de propuestas de formación cívica y ética.

Es fundamental informar a la población, formarla en valores que propicien el respeto a sí mismos, a los demás seres humanos y a nuestros recursos naturales, fauna y flora. A partir de ello, es importante saber desde dónde partimos y hacia donde orientar la formación de la ciudadanía.

Referencias bibliográficas

Abric, Jean-Claude. (Coord.) (2001) *Prácticas sociales y representaciones*. México, D.F.: Ediciones Coyoacán.

Aguilera Portales, Rafael. (2007) *Ciudadanía democrática, educación política y comunidad en el pensamiento de John Dewey*. En *Humanitas*. Anuario del Centro de Estudios Humanísticos de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Aguilera Portales, Rafael Enrique. (2006) *El debate iusfilosófico contemporáneo entre comunitaristas y liberales en torno a la ciudadanía*. Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá de Henares (AFDUA) P. 6-27

Aguilera Portales, Rafael Enrique, (coord.) (2009) *La democracia en el Estado Constitucional*. México, D.F.: Porrúa.

Aguilera Portales, Rafael. (2009) *Pensamiento político contemporáneo. Una panorámica*. México, D.F.: Porrúa.

Aguilera Portales, Rafael Enrique. (2008) *Teoría política y jurídica contemporánea. Problemas actuales*. México, D.F.: Porrúa.

Amparán Chihú, Aquiles. (Coord.) (2002) *Sociología de la identidad*. México, D.F.: Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Iztapalapa-Porrúa.

Anguiano, Arturo (Coord.) (1989) *La transición democrática*. México, D.F.: Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco.

Antaki, Ikram. (2004) *El manual del ciudadano contemporáneo*. México, D.F.: Booket.

Arendt, Hannah. (1995) *De la historia a la acción*. Barcelona: Paidós.

Arendt, Hannah. (1974) *La condición humana*. Barcelona: Seix Barral.

Aristóteles. *Ética Nicomaquea*. (1977) *Política*. México, D.F.: Porrúa.

Aristóteles. (1977) *Política*. México, D.F.: Porrúa. (Col. Sepan Cuantos N° 70)

Aziz Nassif. (2009) *México una democracia vulnerada*. México, D.F.: Porrúa.

Ballesteros, Jesús. (1995) *Ecologismo personalista: cuidar la naturaleza, cuidar al hombre*. Madrid: Tecnos.

Bambirra, Vania. . (1978) *El capitalismo dependiente latinoamericano*. México, D.F.: Siglo XXI.

Barber, Benjamin. (2004) *Democracia Fuerte*. España: Almuzara.

Barber, R., Benjamin. . (1971) *Superman and common men. Freedom, anarchy and the revolution*. New York: Praeger.

Barber, R., Benjamin. (2000) Un lugar para todos. Cómo fortalecer la democracia y la sociedad civil. Barcelona: Paidós.

Bárcena, Fernando. (1997) El oficio de la ciudadanía. Introducción a la educación política. Barcelona: Paidós Ibérica.

Basave, Fernández del Valle, Agustín. (1997) Fundamentos filosóficos de los derechos humanos. Monterrey: Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León.

Bassols Ricardez, Mario. (Coord.) (2006) Explorando el régimen urbano en México. Un análisis metropolitano. México, D.F.: El Colegio de la Frontera Norte, Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Iztapalapa, Plaza y Valdés.

Baumann, Zygmunt. (1999) La globalización: consecuencias humanas. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica.

Baumann, Zygmunt. (2004) Ética posmoderna. México, D.F.: Siglo XXI.

Baumann, Zygmunt. (2002) La cultura como praxis. Paidós, Barcelona.

Bauman, Zygmunt. (2002) En busca de la política. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica.

Bauman, Zygmunt. (2005) Vidas desperdiciadas: la modernidad y sus parias. México, D.F.: Paidós, '

Beck, Ulrich (compilador). (1999) Hijos de la libertad. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Beck, Ulrich y Elizabeth Beck-Gernsheim (2003) La individualización: el individualismo institucionalizado y sus consecuencias sociales y políticas. México, D.F., Paidós.

Bobbio, Norberto. (1986) El futuro de la democracia. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica.

Buenrostro, César. (1989) “La Corriente Democrática y el proyecto de la revolución mexicana” en Anguiano Arturo (Coord.) La transición democrática. México, D.F.: Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco.

Camps, Victoria. (1993) “El derecho a la diferencia” en Ética y diversidad cultural. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica.

Carreño Carlón, José. (1988) “Las elecciones de 1988: más allá y más acá del presidencialismo.” En Cordera Campos, Rolando; Trejo Delarbre, Raúl y Vega, Juan Enrique (coords.) México: el reclamo democrático. México, D.F.: Siglo Veintiuno.

Casado, González Elisa y Calonge, Sary. (2002) Conocimiento social y sentido común. Caracas, Venezuela: Universidad Central de Venezuela. Fondo Editorial de Humanidades y Educación. Colección Estudios.

Casado Josefina y Agudiez Pinar (Comps.) (1991) *El sujeto europeo*. Madrid: Pablo Iglesias.

- Castells, Manuel. (2001) *La Era de la Información: economía, sociedad y cultura. La sociedad red*. Buenos Aires, Alianza
- Cicerón, Marco Tulio. (1973) *Tratado de la república*. México, D.F.: Porrúa. (Col. Sepan Cuantos N° 234)
- Cicerón, Marco Tulio. (1973) *Tratado de las Leyes*. México, D.F.: Porrúa. (Col. Sepan Cuantos N° 234)
- Cicerón, Marco Tulio. (1973) *Catilinarias*. México, D.F.: Porrúa. (Col. Sepan Cuantos N° 234)
- Cicerón, Marco Tulio; Novoa, Francisco; Menéndez y Pelayo, Marcelino; de Valbuena, Manuel; Gallegos Rocafull, Jos;e Manuel. *Tratados morales*. México: Cumbre.
- Cordera Campos, Rolando y González Tiburcio, Enrique. (1982) “Percances y damnificados de la crisis económica.” En Cordera Campos, Rolando; Trejo Delarbre, Raúl y Vega, Juan Enrique (coords.) México: *El reclamo democrático. Homenaje a Carlos Pereyra*. (1988) México: Siglo XXI.
- Cortina, Adela. (1996) *Ética mínima*. Madrid: Tecnos.
- Cortina, Adela. (1996) *El quehacer ético. Guía para la educación moral*. Madrid: Santillana.
- Cortina, Adela. (2007) *Ética de la razón cordial: educar en la ciudadanía en el siglo XXI*. Oviedo: Nobel.
- Cortina, Adela. (2001) *Alianza y contrato: política, ética y religión*. Madrid, Trotta.
- Cortina, Adela y García-Marzá, Domingo (editores). (2003) *Razón pública y éticas aplicadas: los caminos de la razón práctica en una sociedad pluralista*. Madrid: Tecnos.
- Cortina, Adela. (1998) *Los ciudadanos como protagonistas*. Barcelona: Galaxia Gutenberg/Círculo de lectores,
- Cortina, Adela. (1998) *Hasta un pueblo de demonios: ética pública y sociedad*. Madrid, Taurus.
- Cortina, Adela. (1997) *Ciudadanos del mundo: hacia una teoría de la ciudadanía*. Madrid, Alianza..
- Cortina, Adela. (1993) *Ética aplicada y democracia radical*. Madrid: Tecnos.
- Cortina, Adela. (1990) *Ética sin moral*. Madrid: Tecnos.
- Cortina, Adela. (1986) *Ética mínima. Introducción a la filosofía práctica*. Madrid: Tecnos.
- Cortina, Adela. (1985) *Razón comunicativa y responsabilidad solidaria: ética y política en K.O Apel*. Salamanca: Sígueme.
- Cullen, Carlos. (1996) *Autonomía moral, participación democrática y cuidado del otro*. Buenos Aires: Novedades Editoriales.

Cullen, Carlos (Comp.) (2007). El malestar en la ciudadanía. Buenos Aires: La Crujía. “Ciudadanía *urbi et orbi*. Desventuras de un concepto histórico y desafíos de un problema contemporáneo”.

Dansereau, Pierre. (1981) Interioridad y medio ambiente. México, D.F.: Nueva Imagen.

Delarbre, Raúl y Vega, Juan Enrique (coords.) (1988) México: el reclamo democrático. México, D.F.: Siglo Veintiuno.

De Tocqueville, Alexis. (1980) La democracia en América. Madrid: Alianza.

Dusell, Enrique. (2002) Ética de la liberación. Madrid: Trotta.

Esteva, Gustavo. (1996) “Desarrollo” en Sachs, W. (ed) Diccionario del desarrollo. Una guía del conocimiento como poder. Lima, Perú: PRATEC.

Etzioni, Amitai. (2001) La tercera vía hacia la buena sociedad: propuestas desde el comunitarismo. Madrid, Trotta.

Fernández Santillán, José. (2003) El despertar de la sociedad civil: una perspectiva histórica. México, D.F: Océano.

Fornet-Betancourt, Raúl. (1998) “Supuestos filosóficos del diálogo intercultural.” En Babel. Revista cultural, Morelia, Michoacán, Consejo Nacional para la Cultura y Las Artes,

Foster, Hal. (Comp.) (1988) La posmodernidad. Barcelona: Kairós.

Freinet, Celestin. (2001) La educación moral y cívica. México, D.F.: Fontamara.

Geertz, Clifford. La interpretación de las culturas. (2000) Barcelona: Gedisa.

Giddens, Anthony. (1994) Más allá de la izquierda y la derecha. El futuro de las políticas radicales. Madrid: Cátedra.

Giddens, Anthony. (1995) Modernidad e identidad del yo. Barcelona: Península.

González Casanova, Pablo. La democracia en México. (1975) 7ª ed. México: Serie Popular Era No 4.

González, Jorge Enrique (ed.). (2007) Ciudadanía y cultura. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas. Universidad del Valle. Instituto de Educación y Pedagogía. Tercer Mundo Editores.

González Pedrero, Enrique. (2006) La cuerda tensa. Apuntes sobre la democracia en México, 1990-2005. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica.

Guimelli, Christian. (2004) El pensamiento social. México, D.F.: UNAM/Ediciones Coyoacán.

Guisan, Esperanza. (1990) Razón y pasión en ética. Barcelona: Anthropos.

Gutmann, Amy. (2008) La identidad en democracia. Buenos Aires: Latingráfica.

Gutiérrez Garza, Esthela e Infante Bonfiglio, José María. Interés por la política e identificación partidaria. En Vázquez Ferrel, Carlos Javier, et al. Perfil del elector Neoleonés. (2009) Monterrey, Nuevo León: Comisión Estatal Electoral/ Universidad Autónoma de Nuevo León.

Habermas, J. (2002) Teoría de la acción comunicativa, I. México: Taurus.

Heater, Derek. (2007) Ciudadanía. Una breve historia. Madrid: Alianza.

Held, David. (2001) Modelos de democracia. Madrid: Alianza.

Hernández Sampieri, Roberto, Fernández Collado, Carlos y Baptista Lucio, Pilar. (2003) Metodología de la Investigación. México, D. F.: Mc Graw Hill/Interamericana Editores.

Hinkelammert, Franz J. (1997) "El huracán de la globalización: la exclusión y la destrucción del medio ambiente vistos desde la teoría de la dependencia". San José de Costa Rica: Pensamiento Crítico.

Hobbes, Thomas. (2000) De Cive. Madrid: Alianza.

Hobbes, Thomas. (1998) El Estado. México: FCE.

Hobbes, Thomas. (2009) Leviatán. Madrid: Alianza.

Hopwood, Bill, Mary Mellor y Geoff O'Brien. (2005) "Sustainable Development: Mapping Different Approaches" Newcastle on Tyne, UK: University of Northumbria. Published online in Wiley InterScience. www.interscience.wiley.com

Infante Bonfiglio, José María. El valor del voto: precios y castigos. (2000) Monterrey, N.L. Comisión Estatal Electoral.

Izcara Palacios, Simón Pedro. (2007) Introducción al muestreo. México, D.F.: Porrúa/Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)-CONACYT/Gobierno del estado de Tamaulipas.

Jodelet, Denise. La representación social: fenómenos, concepto y teoría. En Moscovici, Serge. Psicología Social, II. Pensamiento y vida social. Psicología y problemas sociales. (1984) Barcelona: Paidós.

Kant, Immanuel. (1985) Crítica de la razón práctica. México, D.F.: Porrúa. (Col. Austral 1589)

Kant, Immanuel. (1998) Sobre la paz perpetua. Madrid: Tecnos. (Col. Clásicos del pensamiento)

Klikberg, Bernardo. (2004) Más ética, más desarrollo. Buenos Aires: T. G. E.

Klikberg, Bernardo y otros. (2001) Ética y economía. La relación marginada. Revista Venezolana de Gerencia. Vol. 6, No 16. Octubre/diciembre. Venezuela: Universidad de Zulia.

Krauze, Enrique. (1998) La historia cuenta. Antología. México, D.F.: Tusquets.

- Krauze, Enrique. (1986) Por una democracia sin adjetivos. México, D.F.: Joaquín Mortiz.
- Kroes, Rob. (2002) Ciudadanía y globalización. Europa frente a Norteamérica. Valencia, España: Càtedra/Universidad de Valencia.
- Kymlicka, Will. (1996) Ciudadanía multicultural. Barcelon: Paidós.
- Kymlicka, Will. (2003) La política vernácula. Nacionalismo, multiculturalismo y ciudadanía. Barcelona: Paidós. (Colección Estado y sociedad, número 106)
- Laclau, Ernesto y Mouffe, Chantal. (1987) Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la democracia. Madrid: Siglo XXI.
- Lévinas, Emmanuel. (1987) De otro modo que ser o más allá de la esencia. Salamanca: Sígueme.
- Lévinas, Emmanuel. (1989) El tiempo y el otro. Barcelona: Paidós Ibérica.
- Lévinas, Emmanuel. (1992) Humanismo del otro hombre. México, D.F.: Siglo XXI.
- Lévinas, Emmanuel. (1987) Totalidad e infinito. Ensayo sobre la exterioridad. Salamanca: Sígueme.
- Lévinas, Emmanuel. (1989) “Ética”, vid en CAMPS, Victoria (compiladora) El sujeto Europeo. México: F.C.E.
- Locke, John. (2005) Ensayo sobre el gobierno civil. México, D.F.: Porrúa. (Col. Sepan Cuantos N° 671)
- Lummis, Douglas, C. (2002) Democracia radical. México, D.F.: Siglo XXI.
- Macionis, John y Plumier, Ken (1999) Sociología. Madrid: Prentice Hall.
- Marshall, Thomas Humphrey. (1998) Ciudadanía y clase social. México, D.F: Alianza.
- Marshall, Thomas Humphrey. (1971) The Right to Welfare and other essays. Londres: Heinemann Educational.
- Martínez, veloz, Juan. Estudios sobre Derecho Electoral y Derechos Humanos. (2001) México, D.F.: Laguna.
- Maquiavelo, Nicolás. (2004) Discursos sobre la primera década de Tito Livio. (1531) Buenos Aires: Losada.
- Maquiavelo, Nicolás. (2013) El Príncipe. Barcelona: Ariel Quintaesencia.
- Meyer, Lorenzo. “La debilidad histórica de la democracia mexicana”, en Cordera Campos, Rolando; Trejo Delarbre, Raúl y Vega, Juan Enrique (coords.) (1988) México: el reclamo democrático. México, D.F.: Siglo Veintiuno.
- Mill, J.S. (2001) *Consideraciones sobre el gobierno representativo*. Madrid: Alianza. Citado por Heater (2007: 165)

- Mongin, Olivier. (2006) La condición urbana. Barcelona: Paidós.
- Montaigne, Michel de. (1993) Ensayos I. México, D.F.: Red Editorial Iberoamericana (rei)
- Moscovici, Serge. (1984) Psicología Social I y II. Pensamiento y vida social. Psicología social y problemas sociales Barcelona: Paidós.
- Moscovici, Serge y Hewstone, Miles. De la ciencia al sentido común. En Moscovici, Serge. Psicología Social, II. Pensamiento y vida social. Psicología y problemas sociales. (1984) Barcelona: Paidós
- Mouffe, Chantal. (1997) Liberalismo, pluralismo y ciudadanía democrática. México, D.F.: IFE.
- Mouffe, Chantal. (1999) El retorno de lo político. Comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia radical. Barcelona: Paidós.
- Narváez Tijerina, Adolfo Benito. (2006) Ciudades difíciles. El futuro de la vida urbana frente a la globalización. México, D.F.: Plaza y Valdés.
- Nietzsche, Friedrich. (1996) La genealogía de la moral. Madrid: Alianza Editorial.
- Nussbaum, Martha Craven. Los límites del patriotismo: identidad, pertenencia y ciudadanía mundial. Barcelona: Paidós.
- Nussbaum, Martha Craven. (1999) Las fronteras de la justicia. Consideraciones sobre la exclusión. (2007) Barcelona: Paidós.
- Novak, Michael. (1999) El despertar de las sociedades democráticas. México, D.F.: Instituto Cultural Ludwig Von Mises.
- Olivé León (comp.) (1993) Ética y diversidad cultural. México, D.F., IIF-UANAM, FCE (Sección de Obras de Filosofía)
- Oraisón, Mercedes. (Coord.) (2005) La construcción de la ciudadanía en el siglo XXI. Barcelona: Octaedro/ Organización de Estados Iberoamericanos. (Colección educación en valores.
- Ortega Rubí, Estela. La educación, la escuela y la familia. En de Andrés Marín, Juan Ramón, et al (Coords.). Procesos y comportamientos en la construcción de México. México: Plaza y Valdez.
- Ortega Rubí, María Estela. La complejidad de un rostro. Representación social de la pobreza: un estudio comparativo intercultural. (2006) Trayectorias Núm. 8. Monterrey, N. L., UANL, en Moral José y Ortega Estela. Representación social de la sexualidad y actitudes en estudiantes universitarios mexicanos. Revista de Psicología Social. (2009) Núm. 24 (1) p. 65-79
- Ortega Rubí, María Estela. Social Representations of poverty in several mexican groups: The importance of social thinking. En García Cadena Cirilo Humberto (Ed.) Psychosocial and cultural research on poverty in México. (2006) New York: Nova Science Publishers Inc.
- Ortega Ruiz, Pedro y Mínguez Vallejos, Ramón. (2001) La educación moral del ciudadano de hoy. Barcelona, Paidós.

- Pardinas, Juan E. (2000) Tú y tu voto construyen la democracia. México, D.F.: Porrúa.
- Pereda Carlos. (1993) “Lógica del consentimiento.” En Olivé León (comp.) Ética y diversidad cultural. México, D.F.: IIF-UANAM (Sección de Obras de Filosofía)
- Pérez Ledesma, Manuel (Comp.) (2000) Ciudadanía y democracia. Madrid: Pablo Iglesias.
- Platón. La república o el estado. (1984) México, D.F.: Espasa Calpe Mexicana. (Col. Austral N° 220)
- Platón. (1999) Diálogos. Las leyes. Madrid: Gredos.
- Puffendorf, Samuel. (2002) Deberes del hombre y del ciudadano. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.
- Ramonet, Ignacio. (1999) Geopolítica del caos. Madrid: Debate.
- Rangel Hinojosa, Alejandra. (2006) La participación de las mujeres en un movimiento urbano de Nuevo León. México, D.F.: Plaza y Valdés/UANL
- Rawls, John. (2006) Teoría de la Justicia México, D.F: Fondo de Cultura Económica.
- Ricoeur, Paul. Avant la loi morale: l'éthique. (1985) Paris : Encyclopedie Universalis.
- Riechmann, Jorge, José Manuel Naredo, et al. (1995) De la economía a la ecología. Madrid: Trotta. Cap I. Riechmann, J. “Desarrollo sostenible: la lucha por la interpretación.” [recuperado en [http://www.ingenieroambiental.com/4023/desarrollo%20sustentable\(2\).pdf](http://www.ingenieroambiental.com/4023/desarrollo%20sustentable(2).pdf), el .. de .. de ..]
- Riechmann. Jorge. (Coord.) (2004) Ética ecológica. Propuestas para una reorientación. Barcelona: Icaria.
- Romano, Augusto en Cullen, Carlos (Comp.) (2007) El malestar en la ciudadanía. Buenos Aires: La Crujía. “Diseños del sujeto y evanescencias claras y distintas”. (p. 113-146)
- Rousseau, Juan Jacobo. (1971) El contrato social o principios de derecho político. México, D.F.: Porrúa. (Col. Sepan Cuantos N° 113)
- Rousseau, Juan Jacobo. (1971) Discurso sobre las ciencias y las artes. México, D.F.: Porrúa. (Col. Sepan Cuantos N° 113)
- Rousseau, Juan Jacobo. (1971) Discurso sobre el origen de la desigualdad. México, D.F.: Porrúa. (Col. Sepan Cuantos N° 113)
- Rubio Carracedo, José. (2000) Ciudadanía, nacionalismo y derechos humanos. Madrid: Trotta.
- Rubio Carracedo, José. (2008) Ciudadanos sin democracia: nuevos ensayos sobre la democracia. Granada, España, COMARES.
- Rubio Carracedo, José. (1987) El hombre y la ética: humanismo crítico y desarrollo. Barcelona, España: Anthropos.

- Rubio Carracedo, José. (2002.) Retos pendientes en ética y política. Madrid: Trotta.
- Rubio Carracedo, José. (2000) Educación moral, postmodernidad y democracia más allá del liberalismo y el comunitarismo. Madrid: Trotta.
- Sabine, George, H. (2007) Historia de la teoría política. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica.
- Salmerón Castro, Ana María (editora). (2011) Democracia y educación cívica. Lecturas y debates sobre la obra de John Dewey. México, D.F. : UNAM/Juan Pablos.
- Sartori, Giovanni. (1988) Teoría de la democracia. Madrid: Alianza.
- Savater, Fernando. (1999) Ética y ciudadanía Caracas: Monte Ávila.
- Savater, Fernando. (1998) Ética, política y ciudadanía. México, D.F.: Grijalbo.
- Sen, Amartya, Kumar. (1999) Nuevo examen de la desigualdad. México, D.F.: Alianza.
- Sen, Amartya, Kumar. (1982) Pobreza y hambruna: un ensayo sobre el derecho y la privación. Oxford, Clarendon Press,
- Sen, Amartya Kumar (2007) La argumentación india, Barcelona: Gedisa.
- Sen, Amartya Kumar (1997) Bienestar, justicia y mercado, Barcelona: Paidós Ibérica.
- Sen, Amartya Kumar (2000) Desarrollo y libertad, México, D.F.: Planeta.
- Sen, Amartya Kumar (1976) Elección colectiva y bienestar social, Madrid: Alianza
- Sen, Amartya Kumar (2007) Identidad y violencia: la ilusión del destino, Buenos Aires: Katz.
- Sen, Amartya Kumar (2001) El nivel de vida, Madrid: Editorial Complutense.
- Sen, Amartya Kumar(1995) Nueva economía del bienestar, Valencia, España: Universidad de Valencia. Servicio de Publicaciones.
- Sen, Amartya Kumar (1995) Nuevo examen de la desigualdad, Madrid: Alianza
- Sen, Amartya Kumar; Stiglitz, Joseph Eugene; Zubero Beascochea, Imanol. (2007) Se busca trabajo decente. Madrid: Ediciones Hoac.
- Sen, Amartya Kumar (2003) Sobre ética y economía, Madrid: Alianza.
- Sen, Amartya Kumar (1979) Sobre la desigualdad económica. México: Fondo de Cultura Económica.
- Sen, Amartya Kumar (2006) El valor de la democracia. Madrid: El Viejo Topo.

- Séneca, Lucio Anneo. (1980) Cartas a Lucilio. México, D.F.: UNAM. (Col. Nuestros clásicos N° 53)
- Séneca, Lucio Anneo. (1969) Consolación a Helvia. México, D.F.: Oasis (Col. Literaria Servet. El mundo antiguo. N° 53)
- Séneca, Lucio Anneo. (1969) De la clemencia. México, D.F.: Oasis (Col. Literaria Servet. El mundo antiguo. N° 53)
- Séneca, Lucio Anneo. (2005) Tratados Morales. Barcelona: Espasa-Calpe.
- Silva Herzog, Jesús. Nueve estudios mexicanos. (1953) México: Imprenta Universitaria. (Col. Cultura mexicana 8)
- Sobrevilla, David, (1993) en Olivé León (comp.) Ética y diversidad cultural. México, D.F., Fondo de Cultura Económica.
- Spinoza, Baruch. Ética. (1980) Buenos Aires: Aguilar.
- Spinoza, Baruch. (2004) Tratado político. Madrid: Alianza.
- Strauss, Leo. Historia de la filosofía política. (1993) México, D.F.: Fondo de Cultura Económica.
- Sunkel y Paz. (1981) El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo. México, D.F.: Siglo XXI..
- Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2007) Tribunales Constitucionales y consolidación de la democracia. México, D.F.: Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Taylor, Charles. (1993) El multiculturalismo y la política del reconocimiento. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica.
- Taylor, S. J. y Bogdan, R. (1987) Introducción a los métodos cualitativos de investigación. La búsqueda de significados. Barcelona: Paidós.
- Thiebaut, Carlos. (1998) Vindicación del ciudadano. Un sujeto reflexivo en una sociedad compleja. Barcelona: Paidós.
- Torres, Carlos Alberto. (2001) Democracia, educación y multiculturalismo. México: Siglo XXI.
- Touraine, Alain (1997) ¿Podremos vivir juntos? Iguales y diferentes. Madrid: PPC.
- Touraine, Alain (1999) Igualdad y diversidad. Barcelona: Paidós Iberica.
- Touraine, Alain. Crítica de la modernidad. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica.
- Una ética para la sustentabilidad. Manifiesto por la vida. Simposio sobre ética ambiental y desarrollo sustentable. Reunión del Foro de Ministros del Medio Ambiente de América Latina y el Caribe. (2004) Bogotá: Icaria Editorial.

Vasilachis de Gialdino, Irene. La construcción de representaciones sociales: discurso político y prensa escrita: un análisis sociológico, jurídico y lingüístico. (1997) Barcelona: Gedisa.

Villoro, Luis. Creer, saber, conocer. (1996) México, D.F.: Siglo XXI.

Woldenberg, José. La construcción de la democracia. (2002) México, D.F.: Plaza y Janés. “La transición: historia y resultados.”

Zapata Barrero, Ricard. Ciudadanía, democracia y pluralismo cultural: hacia un nuevo contrato social. (2001) Barcelona, Anthropos.

Documentos, estudios, índices e informes.

Relación de índices e indicadores revisados

1. PNUD. Nuestra democracia. (2010) Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo/Secretaría General de la Organización de Estados Americanos/Instituto Federal Electoral/Fondo de Cultura Económica/Canadian International Development Agency/Gobierno de España, Instituto de Asuntos Exteriores y de Gobernación.
2. PNUD. Explorando la democracia. Informe sobre Desarrollo Humano México 2004 (Pertenece a Informes Nacionales sobre Desarrollo Humano)
http://www.undp.org.mx/spip.php?page=area_interior&id_rubrique=120&id_article=885&id_parent=119
http://www.undp.org.mx/IMG/pdf/02_-_Resumen_ejecutivo.pdf
3. Cámara de Diputados. Indicadores de Gobernabilidad y democracia en México. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. Temas de la agenda legislativa en el debate público. N° 2. Abril de 2005
www.diputados.gob.mx/cesop/doctos.htm
4. Transparencia internacional. Índice de Percepción de la Corrupción para México 2008.
http://www.transparency.org/news_room/multimedia/cpi
http://www.transparency.org/publications/gcr/gcr_2009#6.2
5. Latinobarómetro. La democracia en América Latina.
<http://www.latinobarometro.org/>
6. Latinobarómetro. Informe Anual 2009.
<http://www.latinobarometro.org/>
7. El índice de gobernanza mundial. Renaud Francois. 2008. Foro por una Nueva Gobernanza Mundial.
http://www.world-governance.org/IMG/pdf_IGM_ES.pdf en

<http://www.world-governance.org/spip.php?article521&lang=es>

8. Indicadores de desarrollo de la democracia. PNUD. Bases empíricas del informe http://www.undp.org/spanish/proddal/idal_2a.pdf (indicadores de ciudadanía política, civil y social)

www.democracia.undp.org

9. Indicadores Sociales para la Ciudadanía. Quiroga Ana María <http://www.unicartagena.edu.co/PALOBRA%206/09%20-%20articulo%20-%20indicadores%20sociales%20-%20ana%20quiroga.pdf>

10. Índice Europeo de Ciudadanía Cívica e Inclusión. Anexo: indicadores y opciones. Fundación Centro de Estudios y Documentación Internacionales de Barcelona. (CIDOB) www.cidob.org
www.cidob.org/es/content/download/2917/26680/.../13_anexo.pdf -

11. Género y etnicidad: indicadores y el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres. Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Instituto de Desarrollo Agropecuario, Servicio Nacional de la Mujer, Universidad de la Frontera, Programa Araucanía Tierra Viva. Ecuador.
http://beta1.indap.cl/GestionPresupuesto/Documents/Equidad%20de%20G%C3%A9nero/genero_etnesidad_indicadores_ejercicios.pdf

12. La democracia en América Latina: Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos. Compendio estadístico. PNUD. 2004
www.educacion.es/.../Educacionciudadania/ArticuloCiudadaniayDiversidadCulturalMagda%20Gomez.doc -

A partir del 2011 (falta revisarlos)

13. Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas. INEGI/Secretaría de Gobernación. (ENCUP) Bases de Datos para el Análisis Social (BDSocial) Ver la encuesta en SEGOB
http://www.bdsocial.org/index.php?option=com_content&view=article&id=38&Itemid=88

14. Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS)

15. Encuesta Nacional a Presidentes Municipales sobre Desarrollo Social (ENAPREN)
16. Encuesta Nacional sobre Capital Social en el medio urbano (ENCASU)
17. Observatorio de Información Social
18. Encuesta Nacional sobre Creencias, Actitudes y Valores entre Maestros y Padres de Familia (Encrave)
19. Informe mundial de valores
1. Observatorio de Sustentabilidad. Nuevo León, México (UANL)** (Forma parte de la red de Observatorios de Sostenibilidad)
2. Observatorio de la Sostenibilidad en España. Parte de la Red de Observatorios de Sostenibilidad <http://www.sostenibilidad-es.org/es/prensa/la-red-de-observatorios-acuerda-elaborar-en-2011-un-informe-de-indicadores-de-sostenibilidad-local-aplicando-criterios>
3. Everde. <http://www.everde.cl/2011/03/huella-ecologica.html>
4. Índice de libertad económica 2011. Fomento de la oportunidad y la prosperidad económicas. Miller, Terry; Holmes, Kim. The Heritage Foundation, The Wall Street Journal, http://www.heritage.org/Index/PDF/2011/Index2011_highlights_Spanish.pdf
5. El **índice de pobreza multidimensional** - IPM o **índice multidimensional de pobreza** - IMP, (en inglés *Multidimensional Poverty Index*, MPI) es un [índice de pobreza](#) estadístico sobre la situación de las personas por países, elaborado desde [2010](#) que sustituye a [indicadores de pobreza](#) anteriores (IPH 1 e IPH 2).¹

Está elaborado por el [Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo](#) (PNUD-ONU) en colaboración con la [Oxford Poverty & Human Development Initiative](#) (OPHI) de la [Universidad de Oxford](#) y se presenta en el 20 aniversario del [Informe Anual Mundial sobre el Desarrollo Humano](#) del PNUD.²

- [Índice de bienestar económico sostenible](#) - (IBES) (basado en las ideas presentadas por [W. Nordhaus](#) y [James Tobin](#) en su *Measure of Economic Welfare*, el término fue acuñado en 1989 por [Herman Daly](#) y [John Cobb](#))
- [Índice de progreso real](#) - IPR o [índice de progreso genuino](#) IPG, este índice es como el IBES pero con más variables⁸
- [Índice Forham de salud social](#) - (IFSS) Mide 16 indicadores incluida la [tasa de mortalidad](#), el [abuso](#) y la [pobreza infantil](#), el [suicidio](#), el [consumo de drogas](#), [abandono escolar](#), [ganancias medias](#), [desempleo](#), [cobertura sanitaria](#), [pobreza en ancianos](#), [homicidios](#), [vivienda](#) y [desigualdad social](#).^{9 7 10}
- [Índice de bienestar económico](#) - IBE. Considera el índice de ahorro de las familias y la acumulación de capital tangible, como el valor de la vivienda, que mide la sensación de seguridad futura.^{7 11}

Encuesta nacional de valores. México 2010

Presidencia de la República. Plan Nacional de Desarrollo. México. 2007-2012.

Organización de las Naciones Unidas (ONU) Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Asamblea General de las Naciones Unidas. Informe de Desarrollo Humano. Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Ley General de Desarrollo Social.

Objetivos Estratégicos de Desarrollo Social 2007-2012. Secretaría de Desarrollo Social. (SEDESOL)

http://www.sedesol.gob.mx/archivos/1/file/Objetivos_Estrategicos_desarrollo_social.pdf

- Medición de la pobreza variantes metodológicas y estimación preliminar
- Evolución y características de la pobreza en México en la última década del siglo XX
- Evaluación Cualitativa del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades
- Estudio de la brecha salarial entre hombres y mujeres en México (1994-2001)
- Evaluación Cualitativa del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades
- Evaluación del impacto de Oportunidades sobre la inscripción escolar: primaria, secundaria y media superior
- El concepto de desarrollo humano, su importancia y aplicación en México
- Estimación del IDH estatal en México, análisis de sensibilidad a distintas decisiones metodológicas y comparaciones internacionales
- Evaluación del efecto de Oportunidades sobre la utilización de servicios de salud en el medio rural
- Origen de los cambios en la desigualdad salarial urbana, nacional y regional, en México
- Medición de la distribución del desarrollo humano: metodología y su aplicación al caso de México
- Inequidad de género en desarrollo humano: El caso de México
- Lo que dicen los pobres: una perspectiva de género
- Lo que dicen los pobres: evaluación del impacto de los programas sociales sobre la percepción de los beneficiarios
- México 2000-2002: Reducción de la Pobreza con Estabilidad y Expansión de Programas Sociales
- Cada quien habla de la feria: Características socioeconómicas de los hogares y percepciones sobre la pobreza y la política social
- Cálculo de una canasta básica no alimentaria para México
- Elaboración de una Canasta Alimentaria para México
- El ajuste del ingreso de la ENIGH con la contabilidad nacional y la medición de la pobreza en México
- Rostros, un solo espejo: restricciones para la medición multidimensional
- ¿Disminuyó la pobreza? México 2000-2002
- Ingreso y gasto en la medición de la pobreza
- Escalas de Equivalencias para México
- Pobreza y desigualdad en México entre 1950 y el 2004
- La focalización como estrategia de política pública
- La política social del Gobierno de México, resultados 1995-2000 y retos futuros
- México 2020; un enfoque territorial del desarrollo, vertiente urbana
- Programa Nacional de Desarrollo Social 2001-2006

- Manual Ciudadano
Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012

http://www.sedesol.gob.mx/archivos/1/file/Prog_Sectorial_WEB.pdf

UNESCO

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

- Estado de bienestar, desarrollo económico y ciudadanía: algunas lecciones de la literatura contemporánea. (2006)
 - Indicadores sociales básicos de la Subregión norte de América Latina y el Caribe (Edición 2004-2005)
 - La factibilidad política de las reformas del sector social en América Latina (noviembre 2005)
- OCDE

Hemerografía

Alonso, Jorge, Enrique Valencia Lomelí. “Ciudadanía mundial en el marco de la ciudadanía precaria. Una ciudadanía mundial anticipada.” En Espiral. Estudios sobre Estado y sociedad. Volumen 14 N° 41. Enero/abril 2008. P. 223- 239. Universidad de Guadalajara.

Arias Maldonado, Manuel. “Democracia Verde VS Democracia Liberal: ¿Hacia un nuevo modelo democrático?” Revista de Estudios Políticos. (Nueva Época) Julio-septiembre 1999.

Baumann, Zygmunt. Exclusión social y multiculturalismo. Revista claves de razón práctica Núm. 137 (noviembre 2003)

Cosío Villegas, Daniel “La crisis de México”. Cuadernos Americanos. XXXII, marzo-abril, 1947, pp. 29-51.

Graizbord Sánchez, Boris. Planeación urbana, participación ciudadana y cambio social. Economía, sociedad y territorio. Toluca, México: El Colegio Mexiquense, A. C. Volumen II, número 5. enero-junio 1999.

Metapolítica. La mirada limpia de la política. Dossier: ¿Qué ciudadanía para la democracia? Cultivando a la sociedad. Número 53. México: Centro de Estudios de Política Comparada, A. C. Volumen 11. Mayo-junio 2007

Mora, Martín. “La teoría de las representaciones sociales de Serge Moscovici.” Athenea Digital Num. 2, otoño 2002. Universidad de Guadalajara, México.

Ovelar Pereyra, Nora. (2005) Una aproximación empírica a significados y representaciones sociales sobre ciudadanía. Caso estudiantes de UCV. EUS Región Capital. Venezuela: Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Pp.285-316.

Paz, Octavio. “Las elecciones de 1994: Doble Mandato”, Nueva Política, sociedad y Democracia, México, núm 4, junio-agosto de 1998, p. 84.

Revista Trayectorias. Dossier: Representaciones sociales. Año VII. Núm. 18. Mayo-agosto 2005. Monterrey, Nuevo León: Universidad Autónoma de Nuevo León, Instituto de Investigaciones Sociales.

Sánchez Mazas, Margarita, Christian Staerklé y Bénédicte, Martin. Citoyenneté et représentations sociales: une étude pilote en Belgique et en Suisse. En Lavallée M, Vincent S, Ouellet C, Garnier C (eds.) *Les Représentations sociales : constructions nouvelles*. Université du Québec (Groupe d'étude sur l'interdisciplinarité et les représentations sociales), Montréal, pp. 183-206, 2003. [Document]

Sosa M., Nicolás. (2001) A vueltas con la sustentabilidad, esta vez desde la ética. Sistema Revista de Ciencias Sociales N° 162-163

Valencia Sáiz, Ángel. "Democracia, ciudadanía y ecologismo político". Revista de Estudios Políticos. Octubre-diciembre 1998. N° 102. Madrid.

Webgrafía

AECID. Gobernabilidad Democrática. <http://www.aecid.com/es/que-hacemos/gobernabilidad-democratica/> Octubre 2012

Aguirre Moreno, Judith. El primer liberalismo mexicano. Letras Jurídicas. Revista del Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad, de la Universidad Veracruzana. N° 19 Enero-junio 2009. <http://www.letrasjuridicas.com/Volumenes/19/jaguirre19.pdf>

Almagro Vázquez Francisco. "Medición del desarrollo sustentable, reto de las cuentas nacionales. La experiencia de México en el cálculo del producto interno bruto ecológico." Problemas del Desarrollo. Revista latinoamericana de economía. Vol. 35 núm. 139 octubre/diciembre 2004. <http://www.ejournal.unam.mx/pde/pde139/PDE13905.pdf>

Barber, R., Benjamin. Hasta qué punto son democráticas las nuevas tecnologías de telecomunicación? Segundo Congreso sobre internet, Derecho y Política: análisis y prospectiva. (2006) IDP. Revista de Internet, derecho y Política. Número 003. Universitat Oberta de Catalunya. Catalunya, España. www.uoc.edu/idp/3/dt/esp/barber.pdf

Bruno Bosteels. Democracia radical. Tesis sobre la filosofía del radicalismo

democrático. Konfines. Voces ante el tercer milenio. (2007) [Consulta 15-9-2009]

<http://www.metapolitica.com.mx/m18/dossier/dradical/pag2.htm>

Laura Collin Harguindeguy y Rafael Molina. Las Organizaciones de la Sociedad Civil en México: de la invisibilidad al protagonismo. En Nuevo Mundo Mundos Nuevos [17/01/2009] <http://nuevomundo.revues.org/47723> Recuperado 1-10-2012

Ciudadanía y clase social. Marshall, Th. <http://www.inau.gub.uy/biblioteca/ciudadan%EDa/marshall.pdf>

Comisión Económica Para América Latina. Globalización y desarrollo. UNESCO/CEPAL. Secretaría Ejecutiva. Vigésimonoveno período de sesiones de la Comisión. Brasilia, Mayo de 2002. www.eclac.org/id.asp?id=10026

Declaración de Independencia. 4 de julio de 1776. The National Archives. US National Archives and Records Administration <http://www.archives.gov/espanol/la-declaracion-de-independencia.html>

Decreto Constitucional para la libertad de la América Mexicana, sancionado en Apatzingán a 22 de octubre de 1814. (Constitución de Apatzingán) Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/04709630122636184199079/p0000001.htm#I_4

Ética y ciudadanía <http://www.misioncultura.gob.ve/descarga/01/desc19.pdf>

García Jacales, María. Apuntes sobre los orígenes de la ciudadanía mexicana: derechos civiles y políticos en la construcción de una sociedad laica. (Sistema político mexicano). Estudios Políticos. UNAM. Mayo 01, 2006. <http://www.accessmylibrary.com/article-1G1-162112950/apuntes-sobre-los-origenes.html>

Gómez Alcalá, Alberto. La economía en los gobiernos de la alternancia democrática. Revista Letras Libres. Dossier. Mayo 2012. <http://www.letraslibres.com/revista/dossier/la-economia-en-los-gobiernos-de-la-alternancia-democratica?page=0,1>

******<http://www.coparmex.org.mx/contenidos/publicaciones/entorno/2007/ene07/7ene07.pdf>

IDP. Revista de Internet, derecho y Política. Segundo Congreso sobre internet, Derecho y Política: análisis y prospectiva. Número 003. Universitat Oberta de Catalunya. Catalunya, España. Barber, R., Benjamin. 2006. “¿Hasta qué punto son democráticas las nuevas tecnologías de telecomunicación?” [En línea] www.uoc.edu/idp/3/dt/esp/barber.pdf [Consulta 13-4-2010]

Informe Brundtland (1998): Nuestro Futuro Común, Organización de las Naciones Unidas. [<http://worldinbalance.net/intagreements/1987-brundtland.php>]

<http://www.are.admin.ch/are/en/>

La Constitución de Apatzingán. En *Momentos Estelares del Ejército Mexicano*. http://www.archivohistorico2010.sedena.gob.mx/fasciculos/Momentos_estelares/3%20MOM.%20EST.pdf

Las metas y valores de los mexicanos: ¿qué nos une y qué nos divide? (2011) <http://estepais.com/site/?p=33097>

Mathus Robles, Marco Aurelio. "*La Lucha contra la Pobreza en México*" en *Observatorio de la Economía Latinoamericana*. Revista académica de economía., N° 109, 2009. Texto completo en <http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/mx/2009/mamr.htm>

Organización de Estados Iberoamericanos para la educación, la ciencia y la cultura. Semblanza histórica de México 1821-1999) (http://www.oei.es/cultura2/mexico/c_1_todo.htm)

Mayntz, Renate (2000) "Nuevos desafíos de la teoría de Governance", en *Instituciones y Desarrollo* N 7, noviembre, Instituto Internacional de Gobernabilidad <http://www.iigov.org>

Medellín Milán, Pedro. [Economía y ecología, El desarrollo sostenible intenta armonizarlas, 1999, México](#)

Organización de las Naciones Unidas. Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Informe Brundtland: "Nuestro futuro común." (1987) <http://www.un.org/depts/dhl/spanish/resguids/specenvsp.htm>

Osberg, Larry y Sharpe, Andrew. *Human Well-Being and Economic Well-Being: What Values are Implicit in Current Indices?*, Center for the Study of Living Standards, julio de 2003

Osto Gómez, Zaida Mireya. Los modelos contemporáneos de democracia y las teorías sociológicas del Estado, el poder y la sociedad civil. 2010. Uniroja. dialnet.uniroja.es/descarga/articulo/3739718.pdf

Peña González, Carlos. Democracia Liberal. Revista Derecho y Humanidades. N° 14, 2008. Universidad de Chile. Universidad Diego Portales. pp. 31-36 <http://www.derechoyhumanidades.uchile.cl/index.php/RDH/article/viewFile/16028/16543>

Pfeiffer, María Luisa. Volver a la dignidad. Revista Colombiana de Bioética. Vol 4 N° 2 Diciembre de 2009. P 117-130. <http://www.bioeticaunbosque.edu.co/publicaciones/Revista/Revista9/Articulo4.pdf>

PNUD. Centro Regional Panamá. [Gobernabilidad Democrática PNUD Centro Regional - Panamá](#) www.regionalcentrelac-undp.org/es/gobernabilidad-

Preciado Coronado, Jaime. La gobernabilidad democrática en el México post-prísita. UNESCO. Social and Human Sciences. Management of Social Transformations (Most) Phase I website (1994-2003) "Gestión de las transformaciones sociales- MOST" Documentos de Debate N° 60. Mesa redonda. Gobernanza y gobernabilidad democráticas en México. (2002) Javier Barros Valero, Jaime Preciado Coronado, María Isabel Blanco Velasco, Georges

Couffignal, Alberto Aziz Nassif, Guy Hermet, Carlos S. Milani.
<http://www.unesco.org/most/dp60mexico.htm>

Recibimiento del movimiento de la Ilustración en la Nueva España.
www.conevyt.org.mx/colaboracion/colabora/objetivos/.../sso3_u10lecc3.pdf

Silva, Juan Claudio. “Ciudadanía: civil, política y ambiental” en Diario de Concepción. Domingo 18 de enero de 2009. <http://www.diariodeconcepcion.cl>
<http://dgmagentedement.blogspot.com/2009/01/ciudadana-civil-politica-y-social.html>

Sojo, Carlos. La noción de ciudadanía en el debate Latinoamericano. En Revista de la CEPAL N° 76. Santiago, Abril de 2002 en
<http://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/La%20nacion%20de%20ciudadania.pdf>

Transparencia Internacional. Índice de Percepción de la Corrupción 2008.
http://www.transparency.org/publications/gcr/gcr_2009#6.2

Zanzucchi, Michelle. Ben Barber y la idea justa. Revista Ciudad Nueva. N° 458. 01, Noviembre de 2008. <http://www.ciudadnueva.com/new/revista/numero/numero2.asp?id=26>

Zárate Flores, Alfonso. ¿Cuándo se jodió el país? Agencia de Noticias. El Universal. Jueves 28 de octubre de 2010. 01:00 am <http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/50402.html>

Zárate Flores, Alfonso. La Mediocracia. Reflexión Informativa Oaxaca. Jueves 19 de noviembre de 2009.
http://www.rioaxaca.com/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=2260:alfonso-zarate-la-mediocracia&catid=71:de-analisis&Itemid=158

Anexo 1 Cuestionario

Cuestionario

El presente cuestionario tiene como objetivo conocer lo que significa para los habitantes de la ciudad de Monterrey, ser ciudadano y las formas en que vivimos esa experiencia.

I Le solicitamos conteste de acuerdo con las primeras ideas que vengan a su mente, ya que ésta información será utilizada en una investigación académica con el objetivo de completar una serie de datos.

1. ¿En qué piensa cuando escucha la palabra ciudadano?
2. ¿Qué hace a alguien ser ciudadano?
3. ¿Quiénes no son ciudadanos?
4. ¿Cuáles son los rasgos característicos de un **buen** ciudadano?
5. ¿Cuáles son los rasgos característicos de un **mal** ciudadano?
6. ¿Qué nos identifica como ciudadanos mexicanos?
7. ¿Cuáles son algunos de nuestros derechos como ciudadanos mexicanos?
8. ¿Cuáles son nuestras obligaciones como ciudadanos mexicanos?
9. ¿Qué distingue a un ciudadano mexicano respecto de un ciudadano de otro país?
10. ¿Qué hace usted para ser un **buen** ciudadano?
11. ¿Qué suele llamarse ciudadanía?
12. ¿Cuáles son los valores relacionados con la ciudadanía?
13. En su opinión ¿qué es la democracia?
14. ¿Cómo ciudadanos regiomontanos y mexicanos, cuáles son las condiciones fundamentales que necesitamos para participar en la vida democrática? ¿Qué necesitamos para poder participar en la vida democrática?
15. ¿Existen en Monterrey las condiciones fundamentales para la participación democrática de los ciudadanos?
16. ¿Cómo describiría a la ciudadanía regiomontana?

II Responda con las primeras cinco palabras que piense

1. Los principales valores o virtudes que caracterizan a un buen ciudadano son:

- a) ()
- b) ()
- c) ()
- d) ()
- e) ()

1.1 Señale en el paréntesis, el número que indica la importancia que tiene para usted cada una de las palabras. El número 1 corresponde a la más importante y así sucesivamente hasta el número 5 para la menos importante.

2. Los principales aspectos que caracterizan a un mal ciudadano, desde su punto de vista son:

- a) ()
- b) ()
- c) ()
- d) ()
- e) ()

2.1 señale en el paréntesis el número que indica la importancia que tiene para usted cada una de las palabras. El número 1 corresponde a la más importante y así sucesivamente hasta el número 5 para la menos importante.

III De la siguiente serie de preguntas, marque la opción que considere adecuada y especifique sus respuestas

1. ¿Realizó el servicio militar, en caso de ser requerido?

Si () No () ¿Por qué?

2. ¿Considera usted que en nuestra vida diaria nuestros derechos como ciudadanos son respetados?

Si () No () en ocasiones () ¿En qué circunstancias?

3. Si considera que en la vida diaria, en Monterrey no se respetan nuestros derechos , indique quienes no lo hacen:

Personas () Instituciones () Autoridades () Especifique:

4. Cuando nuestros derechos no son respetados, ¿los ciudadanos regiomontanos los exigimos?

Si () No () en ocasiones () ¿En qué circunstancias?

5. ¿Considera usted que todas las personas que vivimos en Monterrey gozamos de los mismos derechos?

Si () No () ¿Por qué?

6. ¿Considera que existen instituciones que permiten la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones en nuestro país? ¿sabe de algunas instituciones que promuevan la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones en nuestro país?

Si () ¿cuáles?:

No ()

7. ¿Con qué frecuencia se nos pide *mordida*?

Todos los días () Frecuentemente () Ocasionalmente () Nunca ()

8. Como ciudadanos, ¿nuestra actitud ante la mordida es:

Rechazarla () ofrecerla () darla () recibirla ()

9. Puede afirmarse que en Monterrey el Sistema de Justicia funciona adecuadamente.

Si () No () ¿Por qué?

- 9.1 ¿En qué nivel?: Municipal () Estatal () Federal ()

10. En la vida diaria en Monterrey ¿son respetadas las distintas creencias religiosas?

Si () No () ¿En qué circunstancias?

11. En su opinión ¿somos tolerantes con las personas que piensan, actúan o parecen ser diferentes?

Si () No () ¿En qué circunstancias?

12. En Monterrey, ¿se respeta el derecho a votar y a ser elegido para algún puesto público?

Si () No () ¿En qué circunstancias?

13. En su opinión, ¿la seguridad en Monterrey está garantizada?

Si () No () ¿En qué circunstancias?

14. La distribución de la riqueza ¿es justa en Monterrey?

Si () No () ¿En qué circunstancias?

15. De los siguientes servicios, señale aquellos que nos proporciona el gobierno para garantizar nuestro bienestar:

a) Oportunidades laborales ()

b) Servicios de salud ()

c) Vivienda ()

d) Educación ()

e) Seguridad personal ()

f) Protección de la propiedad privada ()

g) Protección al medio ambiente ()

16. En Monterrey, ¿es posible confiar en la mayoría de las personas?

Si () No () ¿En qué circunstancias?

17. En su opinión, ¿en Monterrey existe la corrupción?

Si () No () ¿En qué circunstancias?

18. ¿Considera usted que existe igualdad de oportunidades en Monterrey?

Si () No () ¿En qué circunstancias?

19. ¿Considera usted que existe igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en Monterrey?

Si () No () ¿En qué circunstancias?

20. ¿Cuidamos el medioambiente, nuestros recursos naturales, el aire, etc.?

Si () No () ¿En qué circunstancias?

21. Los regiomontanos evitamos tirar basura en la calle, lugares públicos y áreas naturales

Si () No () ¿En qué circunstancias?

22. En Monterrey, cuidamos nuestros recursos naturales y especies animales, como árboles, ríos, osos, aves, entre otros

Si () No () ¿En qué circunstancias?

23. Las autoridades se preocupan por garantizar la protección al medio ambiente

Si () No () ¿En qué circunstancias?

IV En las siguientes preguntas marque cuantas opciones considere adecuadas, señale las que correspondan en el cuadro de la derecha y especifique si lo considera necesario.

1. ¿Cuáles de las siguientes libertades disfrutamos los regiomontanos en nuestra vida diaria, en su opinión?

Libertades	Frecuencia
De expresión	Siempre () ocasionalmente () nunca ()

De pensamiento	Siempre () ocasionalmente () nunca ()
De asociación	Siempre () ocasionalmente () nunca ()
De tránsito	Siempre () ocasionalmente () nunca ()
De profesar cualquier religión	Siempre () ocasionalmente () nunca ()
Para elegir oficio o profesión	Siempre () ocasionalmente () nunca ()
Para participar en política	Siempre () ocasionalmente () nunca ()
De elegir lugar de residencia	Siempre () ocasionalmente () nunca ()
De elegir con autonomía	Siempre () ocasionalmente () nunca ()
Otras.	Especifique
Ninguna.	¿Por qué?

2. Señale, en el paréntesis, todos los tipos de organización en que participe e indique el tiempo que les dedica y la frecuencia con que lo hace (Ejemplo: 2 horas a la semana 1 vez por mes)

Organizaciones	Tiempo	Frecuencia
Vecinales comité () red ()		
Otros comités, consejos u organizaciones ciudadanas ()		
Clubes: deportivos() sociales ()		
Grupos de la Iglesia ()		
Asociación de padres de familia ()		
Asociaciones civiles (ONG's) ¿Cuál? _____ _____		
Partido político ()		
Cámaras empresariales ()		
Colegios profesionales ()		

Foros ()		
Organizaciones de asistencia social ()		
Otras () Especifique _____		
Ninguna () Especifique _____		

3. Indique la frecuencia con que realiza las siguientes actividades

	Siempre	Casi siempre	A veces	Nunca	¿Por qué?
Obedecer las leyes					
Obedecer a las autoridades					
Enviar a sus hijos a la					

escuela					
Votar					
Desempeñar cargos de elección popular					
Pagar impuestos					
Participar en el cuidado del ambiente Especifique_____					

Actividades de beneficio a su comunidad Especifique_____					

Exigir rendición de cuentas a los gobernantes					
Proponer iniciativas de leyes					

Diseñar y evaluar políticas públicas					
---	--	--	--	--	--

V. Sugerencias

1. ¿Podría sugerir algunas propuestas para la formación de los ciudadanos?
2. Describa algunas experiencias significativas de su participación ciudadana

Datos generales

1. Edad (Marque el rango que corresponda)

18-25 () 26-35 () 36-45 46-60 () más de 60 ()

2. Género: Mujer () Hombre ()

3. Lugar de nacimiento:

4. Lugar de residencia:

5. ¿Tiene usted acta de nacimiento? Si () No () ¿Por qué?

6. ¿Tiene usted CURP? Si () No () ¿Por qué?

7. ¿Tiene usted credencial de elector? Si () No () ¿Por qué?

8. Estado civil:

Soltero(a) () Casado(a) () Viudo(a) ()

Divorciado(a) y: a) vuelto a casar () b) vive sólo ()

Unión libre ()

Nº de hijos

Edades de sus hijos

Nivel de Escolaridad

Primaria:

a) concluida ()

b) sin concluir ()

Secundaria:

a) concluida ()

b) sin concluir ()

Preparatoria:

a) concluida ()

b) sin concluir ()

Carrera técnica:

a) concluida ()

b) sin concluir ()

Licenciatura:

a) concluida ()

b) sin concluir ()

Especialidad

a) concluida ()

b) sin concluir ()

Maestría

a) concluida ()

b) sin concluir ()

Doctorado

a) concluido ()

b) sin concluir ()

9. Actividad. Indique a qué se dedica (Señale cuántas opciones correspondan)

Estudia () Trabaja () Ama de casa ()

10.1 En caso de que usted trabaje, indique, cuál es la actividad o función en que se desempeña:

(Obrero a) calificado () sin calificar ()

Técnico ()

Profesionista () Especifique en que
área_____

Empleado de servicios (), especifique en que
área_____

Indique en qué rama del sector productivo trabaja:

Industria () Servicios: a) educación () b) salud () c) transporte,

d) telecomunicaciones (), e) turismo ()

11. Señale la opción correspondiente a los ingresos mensuales totales de su familia:

a) hasta \$1,740.00 () b) de \$1,741.00 a \$3,486.00 () c) de \$3,487.00 a \$5,229.00 ()

d) \$5,230.00 a \$8,715.00 () e) \$8,716.00 a \$13,944.00 f) \$13,945.00 a \$19,173.00 ()

g) \$19,174.00 a \$24,402.00 () h) \$24,403.00 a \$29,631.00 i) más de \$30,000.00 ()

Nombre del aplicador

Fecha y lugar de aplicación _____
